



HISTORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

DEL MISMO AUTOR

"LAS HUELGAS ANTE LA LEY" (colección de sentencias). Año 1918. 86 páginas.

"DEFENSA SOCIAL DE LA NACIÓN". Año 1919. 114 páginas.

EN PREPARACIÓN

"TUCUMÁN Y SUS HOMBRES EN LA HISTORIA NACIONAL".

HISTORIA

DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

EN RELACIÓN CON SU MODELO AMERICANO

CON BIOGRAFÍAS DE SUS MIEMBROS

•
POR

CLODOMIRO ZAVALÍA

JUEZ FEDERAL

PROFESOR SUPLENTE DE LA FACULTAD DE DERECHO DE BUENOS AIRES

•••

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE MÁS DE CIENTO FALLOS SOBRE DERECHO PÚBLICO
Y MATERIA CONSTITUCIONAL

Donación del Dr. ALBERTO M. JUSTO

BUENOS AIRES



A LA ILUSTRE MEMORIA
DE LOS
GRANDES JUECES DE LA REPÚBLIC.

PRIMERA PARTE

PREFACIO

El influjo de la Corte Suprema y, en general, de los tribunales federales en la vida institucional de los Estados Unidos, está ahora poniéndose de manifiesto, una vez más, con motivo de la derivación hacia el terreno judicial de diversas cuestiones suscitadas por la guerra. No hace muchos meses fué la necesidad de contener el avance de las exigencias proletarias, en franco designio subversivo, lo que determinó una inusitada actividad de los agentes de la justicia federal; no se economizaron procedimientos, de explicable rapidez y violencia algunos, ni se tuvo inconveniente en pasar por ciertas interpretaciones que un claro concepto de emergencia recomendaba. convencidos los jueces de que en horas turbulentas no caben las contemplaciones y formulismos habituales. La Corte, así, tan apegada a su tradición de no dar normas generales—negadas a Wáshington en su hora—no ha vacilado esta vez, con motivo de un caso de «habeas corpus», deducido para libertar a un anarquista, en formular un voto, una recomendación, en el sentido de que ha de mirarse como antipatriótica, como vituperable por la nación entera, la actitud de los que deduzcan recursos en favor de los perturbadores de la seguridad general.

→ En estos momentos es otro punto de sumo interés constitucional, pendiente del fallo de la Corte, lo que preocupa de manera preferente a la opinión pública, según las últimas noticias. Se trata de la situación creada por el contralor fede-

ral sobre todos los ferrocarriles de la nación, que, por razones de emergencia, ha necesitado fijar las tarifas en todo el país, con independencia de las autoridades de los estados particulares, sin distinguir entre las tarifas intraestadales o interestadales. Para los que conocen la casi secular controversia originada por la concurrencia de facultades en materia de comercio y transporte, no es necesario destacar la importancia de una cuestión semejante. Las autoridades locales reclaman el privilegio de contralorear la fijación de las tarifas dentro de su territorio, en ferrocarriles que no salen del mismo, pretensión que choca ahora con el criterio impuesto por la guerra, que ha tenido el poder de deformar, transitoriamente, sin duda, el federalismo clásico, trocado hoy en una rara mezcla de algo de las viejas normas con un poco de unitarismo — ¡oh extraño poder de las transformaciones sociales! — que se aviene de manera singular con la preponderante acción del presidente Wilson.

Habrà de poner a un lado la Corte, sin duda alguna, todo un siglo de jurisprudencia dirigida a afianzar el concepto de la exclusividad del contralor estadoal en materia de ferrocarriles que no salen de sus límites jurisdiccionales; pero lo ha de hacer convencida de que es indispensable en estos momentos el contralor federal por algunos años más. Porque así como antes de ahora, en los comienzos de la vida institucional del país, lo primordial fué afianzar el imperio de las instituciones federales, defendiendo las prerrogativas de los estados particulares, en la hora presente, ya logrado aquel alto fin, nada significa una desviación momentánea de la interpretación judicial. El interés de la nación estuvo en los primeros tiempos en prestigiar los textos de la constitución recién jurada; y la Corte sirvió ese interés con interpretaciones luminosas. Actualmente lo primordial es fortalecer el poder central, y de nuevo la Corte ha de servir esa causa con el claro concepto, en ella proverbial, de que su alta mi-

sión consiste precisamente en cambiar su jurisprudencia cuando un alto interés nacional lo exige.

Nuestra Corte Suprema no ha sabido aprovechar siempre, en la medida necesaria, las ocasiones que se presentaron propicias para exhibirla ante el concepto de la nación en su verdadero carácter de destacada y permanente preponderancia. Las transformaciones sociales, los nuevos métodos de comercio, las complicaciones inherentes a las mudanzas del cambio internacional, las inesperadas asechanzas al orden institucional, por medios desconocidos hasta hoy, no logran, con la frecuencia que fuera menester, conmover su señorío. Hace consistir su fuerza en la inmutabilidad. ¿Tiene razón?

De todas las instituciones tomadas del modelo americano ninguna arraigó tanto, entre nosotros, perfeccionándose en la práctica, como la del poder judicial que la Constitución crea en la Sección Tercera de su Segunda Parte. Expuestas, por su índole, las otras al contacto deformador de la política. — así la manera de elección de los senadores, como la facultad de intervenir las provincias, — los años que sobre ellas pasaron no fueron para acorazarlas en defensa de las mil asechanzas del ambiente. Todos los vientos malos de la baja politiquería, del ruin personalismo, de la desmedida ambición, durante cincuenta años soplaron sobre esas instituciones, torciéndolas, e impidiendo su afianzamiento. El sistema de justicia federal, por el contrario, arraigó definitivamente entre nosotros y ha llegado a ser árbol lozano; lo habíamos plantado de gajo, arrancado del tronco gallardo de Filadelfia. Alberdi había expresado ya que la civilización sólo prende así; y diríase que de otras instituciones, como el juicio por jurados, habíamos traído, envés, la semilla para sembrarla y

que fué infecunda en nuestro suelo, ya que ni un brote asomó en el surco. Lo mismo el juicio político y otros mecanismos institucionales de igual origen extranjero, las veces que se logró ponerlos en movimiento fueron sólo para dejar la impresión de que siguen siendo exóticos y sin la eficacia práctica que se tuvo en vista al implantarlos, por más que su importación se hizo, conforme a la frase de Sarmiento, con el adecuado formulario para su útil empleo (1).

El buen sentido criollo, malgrado el texto constitucional, sigue librando a la República de los inconvenientes del juicio por jurados. A lo más que se ha llegado, en la práctica, es a la construcción en el Palacio de Justicia de una gran sala apropiada para las aparatosas sesiones que son de la esencia del sistema. En 1873 Avellaneda, ministro entonces de Sarmiento, en su Memoria dirigida al Congreso decía: « No « estableceremos el jurado sin superar las dificultades que se « oponen a su existencia: la ignorancia y, sobre todo, la « minación de nuestras poblaciones que las incapacita casi « para la vida colectiva. *El jurado no pertenece a nuestra « tradición* y para establecerlo es necesario extirpar los antiguos procedimientos que forman nuestras costumbres « políticas.» ¿Y podría decirse que estos inconvenientes han desaparecido ya? No se ha proclamado, con todo, el deshauicio definitivo y categórico de una tan perturbadora manera de administrar justicia que puede llevar, v. gr., en Francia, a absolver a Mme. Caillaux, debido a que los *vir bonus* del tribunal dictaron su veredicto bajo la influencia de un discurso elocuentísimo del abogado defensor, que terminó refiriéndose a la presencia del enemigo en las fronteras de la patria, como un supremo recurso para llevar la atención y

(1) Se han copiado las instituciones americanas, ha dicho Sarmiento, al igual que se adquieren ciertos específicos extranjeros, envueltos en la receta de cómo hay que usarlos.

el interés hacia cuestiones necesariamente más vitales que el destino legal de una homicida. ¡Qué diferencia con nuestro sistema de jueces letrados, que examinan, fríamente, en la quietud de su bufete, las fehacientes constancias procesales! No caben aquí las malas artes de la elocuencia forense; y los mismos hábiles recursos de la dialéctica no toman desprevenido al juez, en aptitud como está de leer y releer la acusación y la defensa, allá donde no vea claro o crea descubrir, por el contrario, la base más seria de una y otra requisitoria.

> El artículo 94 y siguientes de la Constitución argentina, relativos al poder judicial, corresponden, sin variantes de fondo, al artículo 3 de la segunda parte de la Constitución de los Estados Unidos. Lo único que ambos textos mencionan concretamente es la Suprema Corte, dejando al Congreso la facultad, en la forma, el número y la oportunidad, de organizar los demás tribunales inferiores. No ha de ser ajeno, entonces, a semejante privilegiado origen el prestigio que en ambos países tienen los fallos de la Corte y el interés que para los estudiosos adquiere y, en especial para la gente de curia, todo lo que se relaciona con sus fuentes y desenvolvimiento, sin descuidar la propia biografía de los presidentes y ministros. (2)

Tal es la obra que en Estados Unidos publicó Mr. Hampton L. Carson, «attorney» general de Pensilvania, y tal, también, la que afronto, siguiendo tan excelente modelo.

En no pocas ocasiones, al igual de lo que sucede con otros libros consagrados a exaltar las glorias de la Suprema Corte

² (2) CHIEFS Y ASSOCIATE JUSTICES según la estricta nomenclatura americana.

americana y la grandeza de sus jueces, leyendo la obra de Carson la emoción embarga fácilmente, sobre todo cuando narra los días prístinos de Jay, la culminación con Marshall, — «the Golden Age of the Supreme Court», — la época luminosa de Taney y pareciera insensato afán querer hacer con nuestra Corte, sus jueces y sus fallos, algo capaz de conmover también por su grandeza y trascendencia. Creo, por el contrario, que habiendo sido menor entre nosotros el influjo de la Corte en el proceso institucional del país, relativamente a la sabiduría y rectitud de sus jueces muy poco tiene que envidiar a la del norte, que le lleva la ventaja de casi un siglo de existencia, a través del cual, por sugestión de la distancia, las figuras se agrandan y crecen las reputaciones.

Por otra parte, la propensión criolla a disminuir méritos a las cosas propias se particulariza frecuentemente con la administración de justicia, favoreciendo el comentario adverso que al respecto se hace, de tiempo en tiempo, en el extranjero, cada vez que un europeo radicado en la campaña resulta víctima de algún robo y no encuentra en el inexperto Juez de Paz rural el inmediato y eficaz amparo. A la distancia el episodio, baladí y universal, adquiere contornos pavorosos que sirven de índice revelador de nuestro salvajismo sudamericano. Y se vive en la creencia de que los países de mayor civilización no ofrecen también ejemplos de mala justicia. La imaginación popular se ha construido una leyenda acerca de la justicia inglesa, v. gr., cuyos prestigios se citan a menudo como exponente de la grandeza del pueblo británico. Sin embargo, una autoridad como la de lord Macaulay dice en su estudio sobre Warren Hastings: «Pocos ingleses habrá que nieguen la natural lentitud con que procede la justicia en la Gran Bretaña y los gastos excesivos que ocasiona. Fué la conducta sucesiva de sir Elías Impey (un juez inglés de Bengala) ajustada y conforme a estos «tratos» y de acuerdo con

todo lo demás de su historia que ha pasado a ser del dominio público; pudiendo afirmarse que ningún otro juez ha deshonrado tanto la toga inglesa desde que Jefferies murió ebrio en la torre de Londres». (3).

Nunca hubo motivo entre nosotros para emplear palabras tan duras respecto de la Justicia. Quizá no siempre los que llegaron a sus altos sitios tuvieron la necesaria vocación: casos hay, y no pocos, en los que se otorgó una magistratura como pudo haberse nombrado plenipotenciario al postulante. « jefe de una repartición administrativa, al solo fin de proporcionarle un medio de vida. Esto es, sin embargo, la excepción; lo normal y permanente es que la carrera se haga desde los puestos subalternos, en los que se va acreditando capacidad por unos, laboriosidad por otros, honradez por todos. Porque los dos únicos casos de jueces desposeídos de la investidura a raíz de un juicio político, durante cincuenta años de regularidad institucional, antes sirven para señalar la excelencia de la justicia argentina que para vilipendiarla y desacreditarla. Las otras tentativas, hijas del despecho o de la inconciencia, se estrellaron siempre ante la incuestionable reputación de los sindicatos. Mas, los que por su inconducta comprobada desprestigiaban la toga, fueron privados, como se ha dicho, de la investidura; y si la incapacidad notoria de otros no ha llegado, — salvo un caso extremo y muy reciente, — a ser bastante fundamento para la iniciación del juicio político, esos jueces viven condenados por el tribunal de la opinión, padeciendo humillados la alardeada exclusión que de ellos hacen los litigantes en el fuero civil.

En materia criminal, donde no existe esa posibilidad de elegir magistrado, están los intereses colectivos e individuales de tal manera garantidos por razones inherentes a la legislación y a las personas encargadas de aplicarla, que no

(3) ESTUDIOS HISTÓRICOS, pág. 257.

puede señalarse, sino por muy remarcable excepción, algún caso de efectiva demora o de condena injusta.

Es satisfactorio, sin duda, afirmar, — y descuenta el autor, desde ya, algunas sonrisas incrédulas y burlonas, — que en relación a la corta data de nuestras instituciones libres, pocos países como la República Argentina pueden enorgullecerse, con mayores motivos, de su justicia. Ninguno, por lo pronto, de los de Sud América. Y en cuanto a los de Europa, cuya vida institucional se cuenta por siglos, ya se ha visto como en algunos puede haber jueces que mueren ebrios en las prisiones.

El doctor Raymundo Wilmart dice en un estudio sobre la Justicia Argentina: «He conocido de cerca muchas provincias; he formado la convicción de que en ellas, como en la Nación, el Poder Judicial, en su conjunto, está más en su lugar que los otros y que cualquier gremio público. Tiene una idea más recta, más sincera de su misión y trata de llenarla con más labor y asiduidad. Algunos entran al Poder Judicial, es verdad, como medio de escalar después otra posición política. La culpa la tienen los Ejecutivos; pero aún así, cuando se trata de un hombre de buen sentido, es bastante común el hecho de que el solo contacto con lo que llamaré la masa judicial, haga de él un juez bueno o regular, por más que no tenga vocación natural y aún cuando haya sido antes un caudillo falsificador de elecciones. Inversamente, no vemos nunca a un juez malo convertirse en honrado gobernante o en sabio legislador. De allí infiero que el ambiente judicial es, sin duda alguna, el más sano entre nosotros.» (El autor cita el caso concreto de un ex-diputado, de tortuosa actuación, nombrado Juez Federal en una provincia y que fué después un magistrado bueno y digno). (4).

(4) REVISTA JURÍDICA, año 1899, pág. 276.

Conviene al plan de este libro, para una mejor comprensión de las afirmaciones que en él se hacen, expresar, desde ahora, que cuando se habla de la justicia nacional es con referencia, únicamente, a la justicia creada por la Constitución, prescindiéndose de la ordinaria del distrito federal y de la que existe en cada provincia. Es sólo aquella que está calcada en el modelo americano, al cual habrá de referirse el autor con frecuencia; y, de otra parte, sin que ello importe mengua para los funcionarios del fuero ordinario metropolitano y del local de cada provincia, la justicia federal,—tal vez por la sugestión de su origen y quizá, también, por ser de excepción su competencia y contados los casos en que es lícito acogerse a su amparo,—ha logrado encarnar en el alma popular, que la ve como depositaria de los prestigios institucionales de la nación, como un centinela, como una eficaz protección contra todos los desmanes (5). Y es claro que la Corte, no solo por razones de jerarquía, ocupa el primer lugar en la consideración pública. Siempre se nombró para formarla a las personas naturalmente señaladas por sus antecedentes públicos y privados. Aún los gobiernos más criticados desde otros puntos de vista cuidaron esas designaciones, y casi no hay ejemplo de que la opinión quedara insatisfecha y desagradada, con el sobresalto de ver en la Corte a quien no era digno de tal encumbramiento. Cabe, sin embargo, tener en cuenta que no es la sola capacidad jurídica del candidato

— (5) No fué otro el designio de los organizadores. Al informar el senador doctor Martín Zapata el proyecto de ley orgánica de la justicia nacional, expresó estos conceptos: « Ese rasgo característico consiste en haber hecho nuestros « legisladores constituyentes, a imitación de los americanos del Norte, de « la justicia federal, el guardián y mantenedor de la observancia de la Cons- « titución.....De este modo la justicia federal viene a ser la gran rueda « gubernamental del país, la garantía de todos los derechos, el moderador « poderoso y constante, pero modesto y oculto bajo el disfraz humilde de un « proceso particular, de los otros dos altos poderes constitucionales »

lo que puede hacer excelente un nombramiento de esta especie; y un buen criterio, a este respecto, debe fundarse en la apreciación de las cualidades distintivas de los miembros existentes del tribunal, en determinado momento, para realizar una acertada elección de la persona que ha de integrarlo. Así, si todos son juristas que han hecho completa la carrera judicial, habrá conveniencia en llenar la vacante que se produzca con algún hombre formado en el manejo administrativo, en la actividad parlamentaria y hasta en la lucha política, que no es ni puede ser un baldón cuando se sale de ella incontaminado. Antes por el contrario, cuando en la edad madura se abandona esas arenas movedizas y se llega al ambiente tranquilo del pretorio, es como un soplo de la realidad de la vida que se lleva a éste, para sacudir un tanto a los que están envejeciendo en la fria aplicación de la ley.

No son escasos en los Estados Unidos nombramientos de jueces hechos con este concepto, que es el más acorde con la naturaleza especial de la jurisdicción atribuida por la Constitución a la Corte y que, naturalmente, es la misma de la de nuestro tribunal similar. « Los jueces de la Corte — « dice un autor — deben ser hombres de estado tanto como « juristas. Sus decisiones no están limitadas a meras cuestiones de derecho comercial o a estrechos reglamentos « municipales, sino que envuelven principios que afectan « el bienestar de la Nación ».

Entre nosotros, de los treinta y tres jueces que han formado en diversas épocas la Corte, (6) son los menos

^ (6) Son los doctores Valentín Alsina, Francisco de las Carreras, Salvador M. del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pazos, José Benjamín Gorostiaga, Benito Carrasco, Marcelino Ugarte, José Domínguez, Saturnino M. Laspiur, Onésimo Leguizamón, Vladislao Frías, Manuel D. Pizarro, Federico Ibarguren, Calixto S. de la Torre, Benjamín Victoria, Salustiano J. Zavalla, Luis V. Varela, Abel Bazán, Luis Sáenz Peña, Benjamín Paz, Octavio Bunge,

los que se dedicaron exclusivamente al estudio del derecho; predominan los que sobresalieron en la política, como presidentes, ministros o legisladores, pero que, de una capacidad mental positiva en su mayoría, apenas llegados al Tribunal se connaturalizaron con la nueva disciplina, de la que solo habían estado apartados, sin ser en absoluto extraños a ella, ya que todos habían hecho el aprendizaje de la ley en los primeros años de su carrera.

Cuidado de esta suerte, en todas las épocas, el prestigio de la Corte, la confianza entera de la Nación la ha enaltecido aún más, arraigándose de continuo en ella el convencimiento de que ha de salir siempre de esos estrados la palabra serena y justa, ni más ni menos que lo que en ese momento sea necesario para servir el interés general. Salvo excepciones, sus fallos, — una vez pasado con el tiempo el escozor producido a los que por ellos resultan perjudicados, — se imponen siempre y la opinión concluye por encontrar que estaban inspirados en la buena doctrina, en un claro concepto patriótico.

~ En épocas como la que alcanzamos, ocasionada a transformaciones de todo orden, que obligan a seguir el ritmo de las diarias manifestaciones de un proceso del que no está excluida, ni con mucho, la violencia y los desgarramientos más intensos, no pocos espíritus impacientes desearían ver a la Corte más dúctil, menos apegada a la tradición de sus interpretaciones, dispuesta a modificarlas en armonía con las nuevas necesidades, con los aspectos nuevos que las mismas cuestiones presentan, como consecuencia de la evolución progresiva de la sociedad. La Corte, empero, no se deja seducir; y nada más respetable que una actitud seme-

Juan E. Torrent, Enrique Martínez, Nicanor González del Solar, Mauricio P. Daract, Antonio Bermejo, Cornelio Moyano Gacitúa, Dámaso E. Palacio, Lucas López Cabanillas, José Figueroa Aleorta y Ramón Méndez.

jante si, como es natural, ella se inspira en un sano propósito de bienestar colectivo, norte y guía de su altísimo rol en el concierto institucional de la República.

«La acción de nuestra Corte — dice un autor (7) — poco « estudiada todavía por los publicistas, ha sido fecunda en « lo que llevamos de vida libre para el desarrollo de las « instituciones y merece mayor atención de la que se le ha « prestado. Habría sido útil analizar, asimismo, la composi- « ción del tribunal a través de sus cincuenta años de exis- « tencia para indagar el secreto de su éxito; no sería difícil « que residiera en la circunstancia de que siempre lo for- « maron políticos, profundos conocedores de la vida argen- « tina en sus más complejas y múltiples manifestaciones y « no legistas de inteligencia apergaminada y rancia. » « La « acción eficiente de la Corte no se encuentra precisamente « en su colección de fallos, sino en su fuerza moderadora « inmanente y preventiva; pues, más de una vez, gobiernos, « partidos y ciudadanos han debido contenerse en los límites « de lo regular y de lo justo porque sabían de la existencia « de un poder supremo capaz de llamarlos al cumplimiento « del deber y de la ley. »

Es, así, con un sentimiento de profundo respeto, y convencido el autor de que contribuye a llenar un vacío, que acomete la gran tarea de este libro, sabiendo de antemano las dificultades que habrán de presentársele, pero dispuesto a afrontarlas y vencerlas como una contribución a la obra, que ya tarda, de hacer conocer de la Nación a los que, silenciosamente, trabajaron también su grandeza. Solo la gloria militar, con sus estrépitos y resplandores se cuida sola; los que triunfan en los parlamentos y en la destacada escena del gobierno pasan, también, con facilidad, a la historia. De los

(7) Tomás Jofre; prólogo del libro LA SUPREMA CORTE FEDERAL Y SU JURISDICCIÓN EXTRAORDINARIA, por Felipe A. Espil.

jueces, personalmente, nada queda para el futuro; solo los profesionales, cuando por las exigencias de su actividad cotidiana necesitan recorrer las colecciones de fallos, se encuentran con los nombres de sus autores, perdidos ya para el recuerdo de la generalidad.

No pasa eso en los Estados Unidos, donde en mucho se debe la gran fuerza del Poder Judicial y el respeto del pueblo por sus jueces famosos, a la difusión de una copiosa literatura destinada a enaltecerlos, como los primeros, en la gran tarea del afianzamiento de las instituciones.

Ahí va, pues, este libro; y bien entendido que cualquiera sea el juicio del autor acerca de determinadas actitudes de la Corte, — meras discrepancias doctrinarias, puntos de vista distintos, — siempre estará por sobre todos los conceptos la respetuosa consideración que siente por el más alto tribunal de su país, en especial por sus miembros actuales, modelo de jueces, consagrados como tales en el sentimiento unánime de la Nación.

Octubre de 1911.

— CAPÍTULO I

Antecedentes americanos

El origen de la Suprema Corte americana. — Rápido afianzamiento de su institución. — El enorme influjo de sus fallos en el perfeccionamiento institucional de la república. — El prestigio de sus grandes jueces. — Características del funcionamiento de la Corte.

Los « Artículos de Confederación » (9 de Julio de 1778) no crearon una administración de justicia acorde con el concepto centralista que se tuvo en vista al organizar el gobierno de la Unión de los trece estados signatarios; y no fueron pocos los inconvenientes, que la práctica evidenció, del sistema según el cual las Cortes de los estados eran las únicas llamadas a entender en toda clase de asuntos, con la sola excepción de las causas de almirantazgo (piraterías y felonías cometidas en alta mar) conforme a lo dispuesto en el artículo IX. Era el Congreso un tribunal de última instancia para cuando se suscitaban disputas entre los estados, sobre límites o sobre jurisdicción. Fué, sin embargo, una función que el Congreso ejerció débilmente, sin mayor entusiasmo en la defensa de sus prerrogativas sobre el particular. Harrison recuerda que en una ocasión la Corte de Pensilvania desconoció al Congreso su jurisdicción de apelación en un caso de presa, a raíz de lo cual, convencido de la ineficacia de sus

poderes judiciales, delegó en las Cortes de los estados la facultad de juzgar sobre aquella materia.

No era posible que la Confederación careciera de un tribunal con poderes para interpretar las leyes del Congreso. Y se hicieron en la ocasión argumentos tan fuertes como este: Hamilton dijo: «Las leyes son letra muerta sin Cortes
« para exponer y definir su verdadero significado y acción.
« Los tratados de los Estados Unidos, para tener alguna
« fuerza, deben ser considerados como parte de la ley del
« país. Su verdadero significado cuando se refieren a cosas
« individuales, debe como toda ley, estar asegurado por resolución judicial. Para que estas resoluciones sean uniformes, deberán ser sometidas, en última instancia, a un tribunal supremo, y este tribunal deberá ser instituido en consonancia con la autoridad que ha intervenido en la firma del tratado». « Los tratados de los Estados Unidos — agrega —
« según la actual Constitución, están sujetos a la interpretación de trece legislaturas distintas y a otras tantas diferentes cortes de jurisdicción final, actuando bajo la autoridad de esas legislaturas. La confianza, la reputación, la paz de toda la Unión están, así, continuamente a merced de los prejuicios, pasiones e intereses de los miembros de aquéllas. ¿Es esto posible? ¿Es posible que el pueblo americano consienta en confiar su honor, su felicidad, su seguridad a una entidad tan precaria? »

Y Madison, en carta dirigida a Wáshington — abril 16 de 1787 — expresaba: « La supremacía nacional debiera extenderse también, según yo lo concibo, al departamento judicial. Si aquellos que tienen que exponer y aplicar la ley están ligados por sus intereses y juramentos con los estados particulares y no con la Unión, la participación de ésta en la hechura de las leyes puede resultar inútil. Parece indispensable, al menos, que los juramentos de los jueces comprendan una fidelidad a la constitución general, tanto

« como a la local, y que una apelación exista ante tribunales
« nacionales en los casos en que los extranjeros y los habi-
« tantes de estados distintos sean parte ».

No había en la Confederación ningún tribunal con poderes para resolver en última instancia casos relativos a conflictos limítrofes o jurisdiccionales de los estados, así como tampoco a los de concesiones de tierras hechas por dos o más estados, asuntos todos estos que eran resueltos, antes de la independencia, por el Consejo del Rey (by de King in council). Era la alta función que estaba reservada a la Corte Suprema de los Estados Unidos, creada por la Constitución de 1787.

La Corte tiene jurisdicción ordinaria en los casos que afecten a embajadores, otros ministros públicos y cónsules y los en que un estado sea parte. En grado de apelación, por los hechos y el derecho, conoce la Corte de todos los asuntos enumerados en la Sección 2ª del artículo III. esto es, « to-
« dos los casos que ocurran bajo la Constitución, las leyes
« de los E. U. y los tratados hechos o que se hicieren bajo su
« autoridad; los casos de almirantazgo, y jurisdicción ma-
« ritima, las controversias en que los E. U. sean parte, las
« controversias entre dos o más Estados, entre un Estado
« y ciudadanos de otro Estado, entre ciudadanos de diferen-
« tes Estados, entre ciudadanos del mismo Estado que recla-
« men tierras en virtud de concesiones de diferentes Estados
« y entre un Estado o sus ciudadanos y Estados, ciudadanos
« o súbditos extranjeros ». Recién en 1789 se dictó la ley orgánica de la judicatura (con el mismo alcance que la nuestra de 1862) por la que se fijaba el número de miembros de la Corte, un Presidente y cinco Jueces.

La primera Corte, nombrada por Washington, estuvo compuesta por John Jay como presidente y por John Rutledge, James Wilson, William Cushing, Robert H. Harrison y John Blair. Edmund Randolph fué el primer procurador general. Washington tuvo el concepto, al hacer estos nombramientos,

de que era la consagración definitiva de aquellos hombres ante la opinión de la república, y les dirigió cartas en las que enaltecía, con verdadera unción, las tan altas funciones a que eran llamados. De Jay se dijo entonces que « era una « joya en el sagrado tesoro de la reputación nacional; y « cuando el immaculado armiño de la toga judicial cayó sobre « sus hombros, no tocó nada que no fuera tan immaculado « como él ». Y tan unidos están en el espíritu de la Nación la grandeza de Wáshington y las glorias de la Corte, que cuando en Richmond se levantó el monumento a los hijos preclaros del Estado de Virginia, se puso a aquél en una gran columna central, rodeado por las estatuas de Jay, Jefferson, Madison y Marshall.

El 1º de febrero de 1790 se constituyó el tribunal en Nueva York, que era entonces la sede del gobierno nacional. La ceremonia fué solemne; estuvieron presentes los jueces, las Cortes del estado, todos los miembros del foro y los ciudadanos más espectables.

Nadie habría sospechado, dice un autor, cuando al día siguiente se vió reunido el tribunal en la sala desierta, sin un litigio todavía para dirimir, vacía de papeles la mesa y vírgenes las carpetas, que estuviese destinado a desempeñar en el desarrollo institucional del país un rol tan importante como no había ejemplo hasta entonces en los países del viejo mundo. No fué sólo por la gran extensión de poderes que la Constitución atribuye a la Corte, sino también por el enorme prestigio de sus jueces, por su sabiduría y austeridad de vida, que, inmediatamente, sus resoluciones pesaron de manera decisiva en la orientación institucional, afirmándose el imperio de la Constitución, a la vez que se encarnaba en el espíritu público el convencimiento de que en la Corte estaba la garantía mayor de acierto, de ecuanimidad y firmeza, que era dable esperar en un país que recién se organizaba.

Horacio Binney (8) ha dicho: «¿Qué es la Suprema Corte de los Estados Unidos? Es la augusta representación de la sabiduría, de la justicia y de la conciencia de la colectividad en la exposición de su Constitución y de sus leyes. Es el árbitro venerable y pacificador de todas las cuestiones entre los ciudadanos y es la gran fuerza moral que resuelve las controversias entre el pueblo, los Estados y la Unión». No hay hipérbole en estas expresiones; son la realidad del convencimiento unánime de la nación. Esto en lo que se refiere al sentimiento popular; y, en un plano más elevado, todos los publicistas admiten, a su vez, el principio norteamericano en la omnipotencia judicial. «Conferir a la judicatura el voto decisivo en toda controversia relativa a la interpretación de la ley constitucional — dice un autor — es darle, en realidad, facultades de poder constituyente. Ahora bien, dicen los admiradores de la Constitución de los Estados Unidos, este poder conferido a la judicatura es una garantía para la libertad; porque los jueces, inamovibles, constituyen un elemento esencialmente neutral, que lejos de los disturbios políticos y sociales, contempla el bien común en el cumplimiento de la ley y en la justicia». (9).

El poder de declarar la inconstitucionalidad de una ley del Congreso es uno de los más extensos de la Corte y aquel que mayores peligros ofrece como generador de una supremacía malsana dentro de la democracia. «Esa atribución en los jueces — ha dicho Morris — es peligrosa; pero de no existir ella en alguien, el tiempo que se emplea en redactar una

(8) Horacio Binney, juriseconsulto norteamericano nacido y muerto en Filadelfia (1780-1875); adquirió gran renombre por su actuación en el foro de Pensilvania. Su recopilación de las sentencias del Tribunal Supremo de Pensilvania se considera como un verdadero modelo de exposición y doctrina.

(9) Carlos Pereyra. LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, COMO INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN PLUTOCRÁTICA, pág. 176.

« declaración de derechos y una forma de gobierno, es sencillamente tiempo perdido. » Es tan perfecto, sin embargo, el sistema, que las leyes del Congreso no están expuestas a un desahucio automático y general de la Corte; casi no debe preocuparse de que existe o han sido dictadas, sino cuando un « caso », una controversia efectiva entre dos personas se produce. Y como para que no quedara duda al respecto, diríase que con el designio de tranquilizar a los que pudieron temer un desequilibrio en las instituciones por virtud de una absorción de facultades de parte de uno de los poderes — la misma Corte, al contestar en 1793 las cartas famosas de Washington, que consultaba a los jueces sobre cuestiones abstractas que lo preocupaban grandemente, (10) afirmó la doctrina de que sólo opinaba cuando un caso concreto fuese trabado por partes ante sus estrados. Siempre ha procedido la Corte, en estas cuestiones, con una tendencia eminentemente conservadora que no está reñida, sin embargo, con una firmeza y decisión que hacen de sus fallos uno de los elementos más ponderados en la obra del engrandecimiento institucional de la Unión.

Por más sabios y previsores que fueron los autores de la Constitución, algo escapó a esa sabiduría y a esa previsión. Es así como en la práctica un número considerable de cuestiones fueron presentándose, algunas de tan fundamental interés y trascendencia, que a no ser tan extensos los poderes de la Corte, habría sido necesaria la gran tarea de una enmienda, a base de una convención constituyente. Como en todos los casos, empero, existen también los que tienen a la Corte como « el instrumento de tiranía más elástico que se

(10) Eran cuestiones de derecho internacional suscitadas por el representante de Francia. Washington concretó su consulta a la Corte en veintinueve preguntas relativas a los derechos de un país extranjero para alistar barcos de guerra en aguas americanas y a la condición de un barco neutral con cargamento que no lo es.

haya inventado jamás»; y hacen sus argumentos, como el mejicano Carlos Pereyra, ya citado, fundados en la imposibilidad de una independencia ideal, sin desviaciones. «La judicatura no está en el vacío;—dice—ocupa un puesto en la vida civil y respira el ambiente común. Tiene que participar necesariamente de las luchas sociales. Podrá ser neutral en política, y esto no siempre. Pero el conflicto económico solicitará su concurso, nominalmente, como árbitro, pero en realidad como aliado de una causa y adversario de otra. En la lucha de clases, sus interpretaciones favorecerán una clase; en la lucha de grupos de una misma clase, sus interpretaciones favorecerán a un grupo.» Es a las asechanzas de la política a las que está más expuesta la integridad moral de la Corte. Sabido es que el Congreso tiene facultades para aumentar el número de sus miembros; y las ocasiones en que ello ha ocurrido fueron, naturalmente, aquellas en que el gobierno, que tenía interés en determinada cuestión pendiente de un fallo, y sabía que el voto del mayor número de jueces lo era adverso, conseguía fácilmente de la mayoría congresional con que gobernaba, el aumento de dos nuevos miembros para destruir el núcleo adverso. (11). Pero, ni siquiera por esto, se consiguió disminuir el enorme influjo de las resoluciones judiciales, ni la decidida intervención del gobierno fué parte a corromper el ambiente del pretorio. Podrían salirse con la suya los presidentes que, en el desenfreno de alguna aventura política, electoral o financiera, hacían uso de la prerrogativa de aumentar el número de miembros de la Corte para deshacer una mayoría; pero cuando la calma vol-

(11) En esta forma el tribunal, que permanentemente se compone de seis miembros, llegó a contar en su seno nueve y hasta once jueces. Cuando esto ocurre, sólo la muerte cancela las investiduras sobrantes; no se llenan las vacantes de aquellos que excedían el número de seis. Actualmente la Corte se compone de ocho Jueces.

vía y las cosas quedaban, de nuevo, en su quicio, no era la Corte, por cierto, la que había sufrido desmedro; antes, por el contrario, parecía como si la opinión sana de la nación la rodeara solícita, significándole su confiada adhesión en la hora de prueba. Era, más bien, el Ejecutivo el que quedaba maltrecho en la emergencia. Con propósitos relacionados con exigencias políticas del momento se aumentó en 1837 a nueve el número de Jueces, es decir unó por cada circuito judicial; en 1863 se aumentó un Juez más; en 1866 el número fué reducido a seis y aumentado a ocho en 1869. Harrison, en su libro GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS (pág. 395) dice: «Si en una decisión hay intereses «políticos comprometidos y la decisión es adversa al partido «que está en el poder, la sugestión de que se puede asegurar una revocatoria aumentando el número de los jueces «es muy tentadora . . . etc».

Puede asegurarse que las reputaciones jurídicas más altas llegaban, como a una meta, al sillón de la Corte; y hubo ocasiones en que parecía providencial la aparición en escena de algún hombre singular, cuya capacidad e integridad moral eran indispensables en determinado momento de la vida cívica de la nación. Jay, Marshall y Taney son tres exponentes, las tres cumbres más altas en la historia de la Corte. Mr. Bryce ha podido decir así de Marshall: «Había un hombre tan singularmente dotado para el cargo de presidente de la Suprema Corte y que prestó tan incomparables servicios en él, que los americanos han adquirido el hábito de considerarlo como un don especial de la protección de la Providencia.»

Tanta grandeza contrasta, sin duda, con una de las cuestiones más pequeñas que se debatió en los primeros tiempos y que llegó a apasionar los ánimos de la curia. ¿Debían los jueces usar toga? Hamilton y Jefferson fueron los campeones de las dos tendencias contrarias. El primero quería la toga

y aun la peluca de los jueces ingleses; Jefferson extremaba, sobre todo, su oposición a la peluca. Se resolvió adoptar la toga, únicamente.

Y, por cierto, que no era una cuestión trivial lo que entonces se discutió. La majestad de la justicia exige cierta severidad en el ambiente, una solemnidad y decoro que fácilmente se logra con las amplias y ondeantes togas negras de los jueces; pero, sin duda, son costumbres esas que implican una especial manera de ser de los pueblos, un apego a la tradición y el convencimiento de que respetándola, aún en las cosas más pueriles, se conserva el vigor de las instituciones. Los antiguos jueces ingleses, los que durante la dependencia colonial administraron justicia en América, usaban toga y peluca; de modo que cuando la Unión organizó sus instituciones libres, fué sin solución de continuidad que los miembros de la Corte pudieron seguir y siguieron esa tradición; el pueblo estaba acostumbrado a ver los jueces de esa manera, y habríale chocado, más bien, mirarlos en el estrado vestidos como simples ciudadanos en traje de paseo. No ocurría lo propio entre nosotros. Los magistrados de la colonia española no eran togados; de modo que la innovación inherente al uso de un traje especial por los jueces, habría sido una cosa forzada y expuesta, dada la incontenible malicia criolla, a producir un efecto contrario al que se buscaba. La majestuosa severidad de la audiencia se habría trocado, no quepa duda, en un irreverente siseo si no en franca sonrisa, apenas la pobre figura o el poco donaire de algún magistrado enfundado en la toga y afrentado por la peluca, hiciese su aparición en la sala.

El presidente de la Corte de Estados Unidos tiene un sueldo anual de 15.000 dólares; los jueces ganan 14.500 dólares y son nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Por una ley del Congreso todo juez de la Corte o de los tribunales inferiores que llevando diez años

de ejercicio cumpla setenta años, puede retirarse, si así lo quiere, con sueldo íntegro «ad vitam»,

Desde 1789 han habido ocho presidentes de la Corte, dándose el caso de Marshall y de Tanney que ocuparon durante treinta y cuatro y veintiocho años, respectivamente, el encumbrado sitio. Marshall, sobre todo, llegó a ejercer una verdadera dictadura judicial, de tal manera se consolidó su inmensa fama de jurista sin par.

La historia de la Corte se divide comúnmente en épocas caracterizadas por el predominio de determinado presidente o miembro del tribunal. La primera época se singulariza por la faz constitucional de los más importantes casos que fueron resueltos; tienen la marca de Jay todas esas sentencias. La primera época de Marshall es absorbida por cuestiones en que estuvo interesada la supremacía federal, la necesidad de fortalecer el poder central. La segunda época de Marshall (1816-1835) llamada la edad de oro de la Corte, los asuntos adquieren una gran diversidad, sin que por ello disminuya el valor intrínseco de los fallos (12). Tanney llena, igualmente, con su nombre un largo período; se realiza con él un cambio en la interpretación de muchos textos

(12) Es de esta época el famosísimo caso *Mc Culloch v. The State of Maryland* en el que se discutió principalmente la facultad de un Estado particular para cobrar impuesto a una dependencia del Gobierno Federal. Una sucursal del Banco de los Estados Unidos había sido establecida en Baltimore y la legislatura del Estado impuso un tributo a la circulación de billetes de bancos no autorizados por ella; la sucursal rehusó el pago y el cajero Mc Culloch promovió una demanda judicial, la que después de ventilarse ante la Corte estadual, llegó a la Corte Federal, de la que Marshall era a la sazón el presidente. Los jueces Pinkney, Wirt y Webster se habían pronunciado en contra de las facultades del Estado de Maryland, las que fueron sustentadas por Martin, Hopkinson y Jones. La opinión luminosa de Marshall, al respecto, puede condensarse en estos conceptos fundamentales: «Admitimos, como todos deben admitir, que los poderes del gobierno están limitados y que esos límites no deben ser sobrepasados; pero pensamos que una sana interpretación constitucional debe llevar a permitir al Congreso Nacional esa discreción con respecto a los medios por los cuales los poderes que confiere la

constitucionales y tomó gran impulso el derecho comercial. Vino después la culminación del federalismo, la necesidad de encauzar con la palabra de los fallos judiciales el desfreno de las especulaciones industriales y comerciales, y, también, el deber de contener, en la misma forma, las incorrecciones a que daban ocasión las luchas electorales.

En todo momento creció el prestigio del tribunal, que ya lo traía desde su origen, y puede afirmarse que ningún factor ha contribuido tanto al engrandecimiento de los Estados Unidos como la acción de la Corte, con sus fallos luminosos y orientados siempre hacia la más pura y auspiciosa moralidad.

La interpretación de la Constitución es una de sus funciones más permanentes y delicadas, habiendo llegado ocasiones en que el público pudo creerse en presencia de una situación insoluble si la tarea previa de una enmienda constitucional no venía a remover el obstáculo. Pero la Corte en ningún momento dejó de lado la sabia doctrina, enunciada desde los primeros tiempos, según la cual una Constitución es un ins-

« Constitución deben ser ejecutados, legislando de la manera que beneficie más al pueblo. Que el designio sea legítimo; que quepa dentro de los márgenes de la Constitución y que todos los medios apropiados estén claramente adaptados a ese designio; que esos medios no estén expresamente prohibidos y, por el contrario, se armonicen con la letra y el espíritu de la Constitución... entonces se dirá que son constitucionales ». Como observa Carson, este lenguaje estaba en armonía con el que había sido usado unos años antes en el caso *United States v. Fisher*, pero esta vez se juzgó necesario puntualizar aún más la tesis sustentada por la mayoría de la Corte, y después de rechazar la imputación de que el Tribunal quería invadir el terreno legislativo, se expresa: « Que el poder de imponer implica el poder de destruir; que el poder de destruir puede hacer innecesario el poder de crear... Y si los Estados pueden imponer (cobrar impuesto) a un instrumento empleado por el gobierno central en la ejecución de su poder (correos, acuñación de moneda, etc.) se llegaría a aniquilar todos los fines del Estado. La cuestión es, en realidad, una cuestión de supremacía; y si el derecho de los Estados a imponer sobre los medios empleados por el Gobierno Central ha de ser concedido, la declaración de que la Constitución y las leyes han sido hechas en el concepto de que son la *ley suprema*, resulta sin significado y es una mera declamación ».

trumento de progreso, que debe ser interpretada siempre en concordancia con las necesidades de cada día. Si se hubiese aceptado que la Constitución de 1787 solo servía para regir la vida de la nación tal como se desenvolvía en esos años, tácitamente se estatúa la necesidad de periódicas y cada vez más frecuentes reformas.

Un caso, sucintamente expuesto, demostrará la permanente y sabia manera de proceder de la Corte. La Constitución habla de «postas» como del único sistema de comunicación que en 1787 se conocía; pues bien, habiéndole tocado dirimir en una ocasión a la Corte, con motivo de la extensión de una línea «telegráfica» del territorio de un estado a otro — objetada por no estar comprendida en el texto constitucional — aquella pudo decir con razón, al desechar el argumento, que si en 1787 se hubieran conocido los ferrocarriles y el telégrafo, de seguro, dado el *espíritu* que la informa, la Constitución los habría enumerado. Y al hacer extensiva a estos modernos sistemas de comunicación la cláusula mencionada, realizaba la Corte una interpretación dirigida a fomentar el progreso de los Estados Unidos, que es uno de los grandes fines de la Constitución.

El segundo lunes de octubre, todos los años, la Corte reabre sus audiencias en el Capitolio de Washington, en cuyo primer piso, próximo al Senado, tiene aquella su modesta instalación, que contrasta singularmente con la grandeza y prestigio del tribunal. En el fondo del salón, dispuesto en hemiciclo, simplemente pintado de blanco, detrás de una gran mesa, se alinean los sillones magistrales; al frente, la puerta de entrada coronada por el águila de oro que sujeta el escudo constelado de los Estados Unidos.

«A medio día, al reabrirse el segundo lunes de octubre «las sesiones anuales — dice un autor (13) — el Canciller

(13) Alf. Neriex. L'ORGANISATION JUDICIAIRE AUX ETATS UNIS, pag 10.

« de la Corte da un golpe de martillo sobre su mesa; todo
 « el mundo se pone de pie y un ugier anuncia: *El Hono-*
 « *rable Presidente y los Ministros de la Suprema Corte de*
 « *los Estados Unidos!* Los magistrados con el Presidente a
 « la cabeza, llegan de la antecámara contigua, atravesando
 « las filas compactas de curiosos en el corredor del Capi-
 « tolio, y por la pequeña galería del fondo, entran, uno a
 « uno, vestidos con una simple toga de seda negra, sin pelu-
 « ca ni ornamento de ninguna clase. Sin embargo, su edad,
 « la gravedad de su porte y el silencio respetuoso del público,
 « dan a su entrada una solemnidad que suple la ausencia de
 « todo aparato. Los magistrados toman colocación, según su
 « antigüedad, a derecha e izquierda del Presidente, sentán-
 « dose en los altos sillones de caoba. A un signo de aquél, el
 « *marshall* de la Corte Suprema (14) proclama la apertura
 « de las sesiones en estos terminos»: « *Escuchad! Escu-*
 « *chad! Escuchad! Todas las personas que tengan algún*
 « *asunto sometido a la H. Corte Suprema de los Estados*
 « *Unidos están advertidos de aproximarse y prestar aten-*
 « *ción, pues he aquí que la Corte se instala. ¡Dios salve*
 « *a los Estados Unidos y a esta H. Corte!*»

.....

« Las audiencias se abren regularmente a medio día; a
 « las dos se suspenden para tomar un *lunch*. Luego se rea-
 « nudan hasta las cuatro y media, cumpliéndose así veinte
 « horas de sesión por semana. Después de siete semanas
 « la Corte interrumpe su trabajo durante quince días, para
 « permitir a los jueces terminar la redacción de sus votos
 « y resoluciones».

(14) La Corte de Estados Unidos dispone para hacer cumplir sus resoluciones de una categoría especial de funcionarios, los *marshall*, distribuidos en todo el territorio de la Unión. En no pocas ocasiones se suscitaron ruidosos conflictos debido a que en la práctica sus poderes se confundían con los de la policía estadual.

Son frecuentes las audiencias en que los asuntos se discuten verbalmente ante la Corte, cuyos miembros tienen por delante pequeños cuadernos con los antecedentes respectivos, en los que van tomando notas mientras las partes exponen. Los Jueces escuchan con gran atención y de tiempo en tiempo alguno de ellos interrumpe al abogado para pedirle un dato o una mayor explicación de determinado punto, o para obtener una respuesta inmediata a una objeción. Después de la audiencia, los Jueces se reúnen en la antecámara — *Conference Room* — para emitir sumariamente sus vistas acerca del caso alegado; el Presidente encarga a algunos de ellos, o toma él personalmente la tarea de redactar la resolución, a la que se consagra varios días y hasta semanas enteras, no siendo raros los casos en que al redactor se le dispense, mientras tanto, de la obligación de asistir a otras audiencias; después se distribuye los proyectos a los demás Jueces, que se reúnen, todos los sábados, para discutirlos.

Actualmente la Corte se compone del Presidente y de ocho vocales, (15) pero en la mayoría de los casos con seis se hace número; hay ocasiones en que la importancia de la cuestión exige la presencia en Washington de todo el tribunal. Debido a que estas ocasiones son cada vez más frecuentes, se ha ido perdiendo la costumbre de los Jueces de ausentarse periódicamente para formar Corte de Circuito en los Estados. Hoy día se consagran, casi exclusivamente, a la tarea del Capitolio.

(15) Mr. Edward D. White es el Presidente y son vocales Mr. Oliver Wendell Holmes, Mr. Joseph Mc Kenna, Mr. William R. Day, Mr. Willis Van Devanter, Mr. Malhon Pitney, Mr. James C. Mc Reynolds, Mr. Luis D. Brandeis y Mr. John Hessin Clarke.

La designación de Mr. Brandeis tuvo gran repercusión por su origen judío y por sus antecedentes forenses en asuntos en que pudo estar interesada aquella cuestión de razas.

CAPÍTULO II

- La justicia pre-constitucional

El periodo colonial—La Audiencia de Buenos Aires hasta 1810—Su continuación con funcionarios criollos hasta la reglamentación de 1812—Las constituciones subsiguientes y la organización del Poder Judicial.

Hasta 1661 el territorio que hoy constituye la República Argentina dependía, en el orden judicial, de las Audiencias del Perú y de Chile. En aquella fecha Felipe IV, por cédula firmada en Madrid el 6 de abril, creó la Audiencia de la ciudad de la Trinidad y Puerto de Buenos Aires.

En España habían logrado las Audiencias un influjo preponderante, no sólo porque su creador el Rey D. Enrique II, dotólas de funciones y preeminencias casi ilimitadas, sino porque se cuidó siempre que el nombramiento de sus dignidades recayese en personas de tales antecedentes y empaque, que pudieran estar por encima de toda sospecha de soborno y en actitud de mantener erguida la investidura, aun frente a los poderosos, ya que la tarea de «juzgar» los identificaba con la persona del soberano. Agréguese a esto que, por razón de la enorme distancia, fueron ampliados aun más los poderes de las Audiencias de América y se tendrá recién una idea del papel que desempeñaron en la

obra de la conquista y gobierno del Nuevo Mundo. Fué la primera, cronológicamente, la de Santo Domingo, instituida en 1521. «Su órbita inmensa—dice un autor, refiriéndose, en general, a las Audiencias coloniales—esfumábase en la de la autoridad real, fundida en el mismo crisol, como que los virreyes y capitanes generales, delegados del monarca, debían en casos extraordinarios de gobierno, pedir consejo y dictámen a las Audiencias.» (16). Desde luego, entendían en segunda y a veces en tercera instancia, en todas las cuestiones ventiladas ante los jueces inferiores. en los recursos de fuerza provenientes de resoluciones de los tribunales eclesiásticos; originariamente conocían las Audiencias en los asuntos concernientes a personas con privilegio, retención de bulas apostólicas, etc. Esto desde el punto de vista estrictamente judicial, pues tenían funciones, que diríanse administrativas, tales como las relacionadas con el patrimonio real, formando consejo con el virrey y los contadores.

Fué recién en 1663 que la Audiencia de Buenos Aires quedó realmente instalada. Se componía de un presidente, tres oidores y un fiscal y «de los demás ministros que conforme a las ordenanzas debiere haber». D. José Martínez de Salazar desempeñó la primera presidencia; oidores fueron D. Pedro García de Ovalle, que venía de ser fiscal en Charcas y el Dr. Juan de Huerta Gutiérrez, oidor que había sido en Chile; para fiscal se nombró a D. Diego Portales.

Durante los ciento treinta y siete años que la Audiencia funcionó como dependiente de la metrópoli, casi no existió cuestión de gobierno en la que no hubiese intervenido, aparte de la tarea eminentemente judicial y de la de superintendencia sobre la judicatura inferior. Cuando la revolución de Mayo se produjo eran individuos de la Audiencia don

(16) LA MAGISTRATURA INDIANA, por Enrique Ruiz Guiñazú, pág. 14.

Antonio Caspe, D. Manuel Reyes, D. Lucas Muñoz Cubero y el famoso fiscal Villota, quienes no desmintieron, por cierto, su altanería proverbial cuando los acontecimientos pusieronlos frente a la autoridad naciente de la Junta. Notas iban y notas venían; pero el avenimiento era imposible, y sólo la actitud decidida y extrema de los patriotas logró cortar por lo sano la cuestión. En efecto, el 22 de junio de 1810, habiendo los de la Audiencia acudido en unión del virrey Cisneros a una cita con Castelli y Matheu, en el Fuerte, fueron apresados en nombre de la Junta y conducidos a bordo de una fragata inglesa que los trasladó a las Islas Canarias.

Así feneció, no obstante su poderío, en medio de su grandeza, de manera fulminante, la real Audiencia de la ciudad de la Trinidad y Puerto de Buenos Aires, que Felipe IV creara en 1661.

El mismo día, 22 de junio, la junta integró la Audiencia, en la que sólo subsistía Muñoz Cubero, avenido, en último momento, a prestar juramento de fidelidad al nuevo gobierno, sin las reticencias con que lo hiciera Caspe, días atrás, al proceder en nombre del tribunal. Fueron nombrados oidores los doctores José Darregueira, Vicente Anastasio Echevarría y Pedro Medrano; el doctor Simón de Cossio resultó designado fiscal. Y fué éste el primer tribunal genuinamente argentino, por lo menos desde el punto de vista de las personas y de la autoridad en nombre de la cual iba a administrar justicia.

Disponía el decreto que los nombrados gozarían de un sueldo de dos mil quinientos pesos, que no tendrían tratamiento especial y que no usarían otro traje que el de abogado. «El concepto público de estos individuos,— consigna «La Gaceta» de ese día,— será un nuevo vínculo a la confianza del pueblo; no son obra de un favorito que encuentra en los empleos el medio de satisfacer las pasiones; «la integridad y la pureza prepararon sus caminos y la

« magistratura no ha desconocido sus votos. El litigante que
« ve pendiente de sus manos la decisión de su suerte, no
« averiguará con ansia cuáles han sido sus principios; él
« esperará tranquilo la decisión de sus letrados a quienes
« antes entregaba con placer la defensa de sus derechos,
« y el foro no gemirá con la extrañeza de ver decidiendo
« ex tripode » a quienes nunca pisaron sus estrados ».

Así siguieron las cosas hasta que en 23 enero de 1812 la Real Audiencia se transformó en la « Cámara de Apelaciones » creada por el « Reglamento de institución y administración de justicia del gobierno superior provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata ». Según su artículo 13 debía aquel estar compuesto por cinco miembros, tres de ellos letrados y « dos vecinos sin esta calidad, pero con las precisas de buen juicio, costumbres y opinión ». El nombramiento debía ser hecho por el gobierno superior; personalmente los vocales no tendrían tratamiento alguno, pero si la cámara el de « señoría »; el sueldo era de un mil pesos si las personas vivían en Buenos Aires y de dos mil a dos mil quinientos pesos si procedían de Córdoba, Salta o Cochabamba. El artículo 25 define las funciones del tribunal de esta manera: « Serán comprendidas generalmente en las
« instancias de apelación, segunda suplicación, recursos ordinarios y extraordinarios por injusticia o nulidad notoria,
« fuerzas eclesiásticas y demás que por leyes y ordenanzas
« han debido y podido conocer las Audiencias y cancellerías
« de América ».

Fueron nombrados para el primer período de dos años que el reglamento establecía, los doctores Juan Luis de Aguirre, Tomás Valle y Gabino Blanco y los vecinos D. Hipólito Vieytes y D. Francisco del Zar; el doctor Teodoro Sánchez de Bustamante fué el primer fiscal. Poco tiempo después, al doctor Aguirre reemplazó en el cargo el doctor José Miguel Carballo.

La necesidad de una autoridad encargada de las causas de almirantazgo, determinó la creación (junio 20 de 1814) del tribunal «encargado de conocer y sentenciar, conforme a los principios generales del derecho de guerra y de gentes y a las disposiciones de nuestras ordenanzas de marina y corso, sobre los apresamientos y detenciones de las embarcaciones enemigas o neutrales, que hagan las fuerzas navales del estado». El tribunal estuvo compuesto por el Ministro de guerra y marina, como presidente, por el Consejero de Estado más antiguo y por el Auditor general de guerra.

➤ Destacaremos ahora de las diversas constituciones y proyectos de tales los textos relativos al poder judicial.

En orden cronológico corresponde examinar el «Proyecto de Constitución para las provincias del Río de la Plata» formado por la comisión especial nombrada en 4 de diciembre de 1812 (17). Según el artículo 10 habría una Corte Suprema de Justicia para todo el estado cuyos miembros serían «elegidos por el Congreso».

El «Estatuto provisional para la dirección y administración del estado formado por la junta de observación» en 5 de mayo de 1815, disponía en su sección cuarta, capítulo III que «el ejercicio del poder judicial, por ahora, y hasta la resolución del Congreso general residirá en el Tribunal de recursos extraordinarios de segunda suplicación, nulidad o injusticia notoria (creado por el reglamento de 1812), en las cámaras de apelaciones y demás juzgados inferiores».

(17) COLECCIÓN DE MEMORIAS Y DOCUMENTOS DEL RÍO DE LA PLATA, por don Andrés Bamas, T. I, pág. 150.

Reproduce el «Reglamento provisorio de 1817» los mismos términos transcritos del «Estatuto provisional» y abunda en pormenores relacionados con la tramitación judicial.

La «Constitución de las provincias unidas de Sud América, sancionada y mandada publicar por el soberano Congreso general Constituyente» de 1819 creaba, por su artículo 92 (sección IV, capítulo único) una alta Corte de Justicia, compuesta de siete jueces y dos fiscales, que ejercería el poder supremo judicial del Estado. Se exigía para ser nombrado tener cuarenta años de edad y ser letrado recibido con ocho de ejercicio público; debían ser designados por el Director del Estado con acuerdo del Senado, y el presidente tenía que elegirse entre sus miembros por periodos de cinco años. El artículo 97 establecía las atribuciones del tribunal. «Conocerá exclusivamente —dice— de todas las causas concernientes a enviados y cónsules de las naciones extranjeras; de aquellas en que sea parte una provincia, o pueblos de una misma provincia, sobre límites u otros derechos contenciosos; de las que tengan su origen en contratos entre el Gobierno Supremo y un particular». Por el artículo 98 conocía en último recurso de todos los casos que descendían de tratados hechos bajo la autoridad del gobierno; de los crímenes cometidos contra el derecho público de las naciones, y de todos aquellos en que según las leyes haya lugar a los recursos de segunda suplicación, nulidad o injusticia notoria.

→ Fácil es apercibirse de la influencia que ya ejerció en esos años en los individuos del Congreso la Constitución de los Estados Unidos.

— La Constitución de la República Argentina sancionada por el Congreso unitario de 1826 estableció (art. 110) una alta Corte de Justicia, compuesta de nueve jueces y dos fiscales, con las condiciones estatuidas por la Constitución de 1819. Como modificación substancial se preceptuaba que el pre-

sidente de la Corte sería nombrado «directamente» por el Ejecutivo. La jurisdicción originaria era fijada por el artículo 118 y siguientes, reproduciendo sin mayores variantes los artículos de 1819. Para el conocimiento de estos asuntos — dice el art. 122 — la Corte se dividirá en dos salas; la primera, compuesta de tres de sus miembros, conocerá de la primera instancia, y la otra, compuesta de los seis miembros restantes, conocerá de la segunda y última instancia.

En grado de apelación debía conocer en los recursos deducidos contra las resoluciones de los tribunales inferiores, en los casos que la ley designaba, en las causas de almirantazgo, en los negocios contenciosos de hacienda. Debía dirimir las contiendas de competencia entre los demás tribunales de la Nación y examinar los breves y bulas pontificias (artículos 124 y 125).

CAPÍTULO III

El interregno de la Confederación

El organismo judicial creado por la Constitución de 1853—Composición de la Corte—Nombramiento de los primeros titulares—Dificultades para instalar el tribunal—Su caducidad al producirse la reforma de 1860.

El 25 de mayo de 1853 fué promulgada la Constitución que el Congreso había sancionado en Santa Fe el 1º del mismo mes. En noviembre estuvieron ya instaladas en el Paraná las autoridades nacionales (18). Recién el 26 de agosto de 1854 se designaron las personas que compondrían la Corte Suprema.

Según el artículo 91 de la Constitución, la Corte debía componerse de nueve jueces y dos fiscales. Eran requisitos indispensables para desempeñar la función tener treinta años de edad y ser «abogado de la Confederación» (19), con

(18) Son conocidos los sucesos que impidieron la capitalización de Buenos Aires conforme a la ley que sobre el particular dictó el Congreso General Constituyente el 4 de mayo de 1853. El 24 de marzo de 1854 se designó capital provisoria al Paraná.

(19) Según el decreto de 15 de septiembre de 1854, se consideraban «abogados de la Confederación Argentina» en el territorio federalizado y a los efectos de la administración general, los recibidos en las cámaras de letrados de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta, aunque no tuviesen el grado universitario requerido por el derecho español; los habilitados por el P. E., autorizado por ley especial de su respectiva provincia, y los que hubiesen obtenido grado académico dentro o fuera del país.

ocho años de ejercicio. Debía entender originariamente el tribunal en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, en los que alguna provincia fuese parte y en la decisión de los conflictos entre los poderes públicos de una misma provincia. En grado de apelación conocía de todas las resoluciones dictadas por los tribunales inferiores de la Confederación en causas sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Confederación y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas de almirantazgo, de los recursos de fuerza, de los asuntos en que la Confederación era parte, de las causas que se susciten entre los vecinos de distintas provincias, entre una provincia y sus propios vecinos y entre una provincia y un estado o ciudadano extranjero.

Con muy pocas variantes, pero en el fondo respetando el carácter prominente del tribunal, es el texto de la Constitución americana relativo al poder judicial, que se reprodujo en la nuestra de 1853. Apartándose ésta de su modelo, determina el número de los miembros de la Corte, número excesivo, desde luego, que no tiene otro antecedente que la Constitución unitaria de 1826; pues si bien es cierto que algunas veces la Corte de los Estados Unidos había estado compuesta por nueve jueces, lo fué sólo de manera transitoria, conforme a la prerrogativa del Congreso para hacer nombramientos sin límite, sobre los seis miembros permanentes, un presidente y cinco vocales, que determina la ley de 1789 sobre organización de la Corte.

Los constituyentes no discutieron ningún punto relacionado con el Poder Judicial; recién en 1857 se hicieron consideraciones acerca de su carácter y verdadera extensión de sus poderes, con motivo de sancionarse la ley que creaba los tribunales inferiores a que alude el texto constitucional y que estuvieron constituidos, además de los Jueces de Sección, por las Cámaras de Circuito (suprimidas en 1860 y

creadas nuevamente con una distinta distribución geográfica por la Ley N°. 4055 de 1902). Estuvo a cargo del senador doctor Martín Zapata el informe de la Comisión que estudió el proyecto preparado por el Ejecutivo. (20) «La
 « mayor dificultad,—decía—la gran materia de estudio
 « y meditación consiste en fijar las clases y jerarquías de
 « los tribunales inferiores (pues la Constitución es explícita
 « sólo en lo que se refiere a la organización y atribucio-
 « nes de la Corte) que convenía establecer; repartir entre
 « ellos todos los casos de competencia federal, cuyo conoci-
 « miento no le estaba inhibido por la Constitución; señalar
 « a cada una de las clases establecidas en el proyecto los

(20) Son dignas de consignarse, además, las siguientes palabras del Senador Zapata que exaltan, como ninguna otra pronunciada hasta entonces, las funciones de la Justicia Federal y los prestigios doctrinarios con que nacia. « En suma, el país todo siente y deplora la ausencia de la Justicia Federal, — única fuente de nuestra futura jurisprudencia constitucional, y única autoridad competente por dirimir las cuestiones que bajo mil diversas faces — pueden presentarse entre la parte de soberanía no delegada por las provincias y la soberanía nacional, para resolver los conflictos que la falta de — hábitos constitucionales hace frecuentemente surgir entre los diferentes poderes públicos de una provincia (a) y, en fin, para proteger a todos los habitantes de la Confederación en el goce de las garantías que les acuerda — la Constitución, contra la pasión y extravío de las justicias provinciales cuando olvidan o infringen sus prescripciones. Los Jueces Federales están — revestidos por la Constitución de un gran poder político en el ejercicio de — sus funciones oficiales, cuyo poder emanaría del derecho que tienen de — fundar sus fallos en la Constitución con preferencia a las leyes, o, en otros términos, de no aplicar las leyes que les parezcan inconstitucionales; y de — juzgar también la constitucionalidad de los actos gubernativos, en tanto — que ellos den lugar a un fracaso, hiriendo algún interés. Ese inmenso poder — político que, a primera vista, podría parecer muy alarmante y peligroso, no — lo es en realidad desde que se tenga en cuenta que los Jueces Federales — se han de mover siempre dentro de la órbita en que está encerrado todo — poder judicial ».

(a) El artículo 97 de la Constitución de 1853 confería, en efecto, a la Corte y a los Tribunales inferiores de la Confederación el conocimiento y decisión, entre otros, de los « conflictos entre los diferentes poderes públicos de una misma provincia ».

« casos de jurisdicción originaria o por apelación, tanto relativamente entre sí como respecto de las Justicias comunes « de las provincias y de éstas para ante la Suprema Corte ». Según la ley que entonces se sancionó, promulgada el 6 de septiembre de 1858, se establecían cinco cortes federales de distrito, compuestas de tres jueces y un fiscal y que debían entender originariamente « en las causas concernientes a la conducta ministerial de sus empleados subalternos y de los jueces federales y fiscales de sección ». En los demás asuntos, que conocía en grado de apelación, los fallos de la Corte de Circuito no eran apelables ante la Corte Suprema, sino cuando el monto excedía de quinientos pesos. El primer distrito estaba compuesto por las provincias de Corrientes. Entre Ríos y Santa Fe; el segundo por las de Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santiago; el tercero por las de Mendoza. San Luis y San Juan; el cuarto por las de Tucumán, Salta y Jujuy y el quinto por la de Buenos Aires (luego de incorporada).

➔ Si se recuerda que la Corte Suprema no había aún podido instalarse, no obstante estar nombrados desde 1854 sus miembros, debido a que la escasez de abogados retenía a estos en otras actividades, lejos del Paraná, y si se tiene en cuenta, por lo que hace a las provincias, que, según datos de la época, los abogados eran escasos, salvo en Córdoba, se comprenderá en toda su extensión la desacertada sanción legislativa que creaba esas Cortes de Circuito, para cuyo desempeño no fué posible encontrar el número de letrados indispensable.

Las personas designadas por el decreto de 6 de agosto de 1854 para integrar la Corte Suprema fueron los doctores Gabriel Ocampo, José Roque Funes, Francisco Delgado, Martín Zapata, Facundo Zuviría, Bernabé López, José Benito Graña, Nicanor Molinas y Balamero García; para fiscales fueron designados los doctores Ramón Ferreyra y Pío Tedín.

Se señaló el día 27 de octubre para la instalación del tribunal, y por un decreto posterior se fijó el sueldo mensual de doscientos cincuenta pesos a cada juez y de doscientos a cada fiscal.

Casi todos los nombrados eran hombres importantes, a quienes la actividad febril que sobrevino después de Caseros retenía en Buenos Aires; de modo que el 27 de octubre de 1854, día señalado para la instalación de la Corte, sólo se hallaban en el Paraná, Funes (D. José Roque), Graña y Molinas. Es de advertir que el gobierno había dispuesto que en el territorio federalizado del Paraná funcionara, mientras la Corte se constituía en forma, una Cámara de Justicia, cuyas tareas desempeñaron los jueces nombrados para aquella, conforme iban llegando a la sede de las autoridades confederacionales. Funes, pues, Graña y Molinas — a quienes se unieron los doctores Baltasar Sánchez y Manuel Lucero, nombrados interinamente para suplir la falta de los jueces ausentes del Paraná — constituyeron la Cámara de Justicia. El 20 de febrero de 1855 se nombró miembro de la Corte al doctor Manuel Bonifacio Gallardo. En enero 13 de 1856, habiendo llegado el doctor Baldomero García (es decir, un año y medio después de su nombramiento), se dispuso su incorporación al tribunal. En agosto de 1856 pudo hacerse cargo de su puesto el fiscal doctor Ramón Ferreyra, esto es, a los dos años justos de haber sido designado. Tampoco se incorporó nunca el doctor Juan Francisco Seguí, nombrado en septiembre de 1857, y quien poco tiempo después fué ministro de estado.

Semejantes designaciones no pasaban, como se dice, del papel; el propio gobierno se hizo cargo de las dificultades de toda índole con que en la práctica se tropezaba para el pleno funcionamiento de la Corte, y teniendo en cuenta la situación de algunas de las personas nombradas — que, por tal motivo, no podían ejercer ya la profesión — dispuso, por

decreto de junio 21 de 1859, que percibirían aquéllas la mitad del sueldo establecido.

Fué muy loable el designio del gobierno de llevar al alto tribunal que había creado la Constitución a las personas más ponderadas por su ciencia y hombría de bien. Y tanto lo fueron, que su no incorporación a la Corte obedecía a que sus servicios resultaban por el momento más indispensables en labores tan importantes como las del gabinete nacional. D. Facundo Zuviria, en efecto, D. Baldomero García y D. Bernabé López fueron ministros de Urquiza y de Derqui, postergando así, mientras tanto, su incorporación a la Corte, para la que estaban nombrados. No todos, como se ve, por una razón u otra, respondieron al llamado de Themis, a pesar de las seducciones del cargo y a pesar, también, de que eran épocas aquellas en que se rivalizaba por poner al servicio del país todo lo que, como esfuerzo individual, pudiese significar el logro del más pronto y definitivo bienestar colectivo. Buenos Aires retenía en su seno, todavía, a las figuras más destacadas de los sucesos que se venían precipitando después de la caída de la tiranía. No era, precisamente, que estuviesen desempeñando todos alguna otra función pública — que los había, sin embargo; — sino que el nuevo orden de cosas creado de manera tan violenta, así en lo social como en lo político y económico, — la vuelta de todo su quicio, — exigía la atención constante de los que, recién regresados del destierro, en su mayoría, necesitaban reponer su hacienda, normalizar una vida agitada por veinte años de zozobras y desconcierto. Era así que se padecía de una verdadera carencia de hombres (21) en aptitud de entregar

➤ (21) De ello es una prueba irrefutable el hecho de que el Dr. José María Zuviria, nombrado subsecretario del interior el 12 de enero de 1861, fuese designado veintiocho días después, el 9 de febrero, auditor interino de guerra y posteriormente, el 11 de marzo, apenas transcurrido un mes, asesor general de gobierno, con retención del cargo anterior.

sus actividades, en seguida, a la función pública, y menos, cuando, como en el caso de los jueces de la Corte, debían trasladarse al Paraná para fijar allí su residencia. Por otra parte, los hombres que acababan de poner a prueba, brillantemente, una inesperada sabiduría en los debates del Congreso constituyente, apenas sancionada la Constitución volvieron todos, ungidos por el éxito, a sus provincias, que más que nunca necesitaban de ellos, empeñadas como estaban en la tarea de redactar sus constituciones particulares y de prepararse en todos los terrenos para la era nueva que se prometían de progreso y tranquilidad, de bonanzas infinitas, después de los años aciagos del desbarajuste y la montonera. Todos esos hombres que habían suscripto el acta memorable de Santa Fe, gobernaban ya de vuelta sus provincias o habían sido elegidos para representarlas en el Congreso, de acuerdo con la nueva Constitución, o acababan de ser nombrados plenipotenciarios en el extranjero (22).

Y así pasaron los años, vacíos y deslucidos, para el alto tribunal de la Confederación. La actuación de sus miembros como vocales de la Cámara de Justicia del territorio federalizado, no ha dejado rastros que recomienden ni su erudición ni su laboriosidad. Debían sentirse de paso en la función, sin el aliciente que significa la actividad ya estabilizada, metódica y provechosa. El 30 de octubre, finalmente, des-

^ (22) Aparte de D. Facundo Zuvirla, de D. Juan María Gutiérrez, de D. Salvador M. del Carril, de D. Santiago Derqui, de D. José B. Gorostiaga, que del Congreso pasaron a los ministerios nacionales, estuvieron en los primeros tiempos imposibilitados de prestar servicios en la Administración, cuando más se necesitaban hombres aptos para los cargos del nuevo gobierno. D. Luciano Torrent, elegido diputado por Corrientes, D. Pedro Ferré, D. Salustiano Zavalla, gobernador de Tucumán y después diputado, D. Delfín Huergo, nombrado ministro en Portugal, Cerdeña y Prusia, D. Juan del Campillo, ministro en Roma, D. José M. Zuvirla, secretario de la legación en Roma. D. Juan Llerena, diputado por San Luis, etc.

pués de seis años de nombrados los primeros miembros de la Corte, el presidente Derqui, «teniendo en vista la modificación del artículo 91 de la Constitución, que fijaba el « número de jueces que deben componer la Corte Suprema « de Justicia, dejando al poder legislativo la atribución de « establecerlo, y considerando que aun no han tomado posesión del cargo los anteriormente nombrados » los dejó sin efecto, difiriendo para cuando la ley determinase el número de jueces que debían componer la Corte, la designación de las personas que habrían de ocupar las elevadas magistraturas.

CAPÍTULO IV

> La organización definitiva

Reforma constitucional de 1860—Discusión en la Convención preliminar de Buenos Aires acerca del carácter de la Corte—Sarmiento propicia el sistema ambulante de los Estados Unidos—La Convención nacional no acepta la innovación—Ley orgánica de la Justicia Federal—Nombramiento de los primeros ministros—La facultad del Ejecutivo para nombrar directamente Presidente de la Corte—Los doctores, FRANCISCO DE LAS CARRERAS, SALVADOR MARÍA DEL CARRIL, JOSÉ BARROS PAZOS, FRANCISCO DELGADO Y FRANCISCO PICO.—Antecedentes y prestigios de los nombrados.—El Presidente Mitre y la organización judicial.

La Constitución, reformada como prenda de unión con Buenos Aires, se promulgó el 1º de octubre de 1860.

El artículo 94 crea la Corte Suprema de Justicia, dejando al Congreso la facultad de determinar el número de sus miembros así como el carácter y número de los demás tribunales inferiores de la Nación. Exige el texto constitucional, para ser ministro de la Corte, tener treinta años y ser abogado con ocho de ejercicio profesional.

Las atribuciones de la Corte son, salvo pequeñas variantes, iguales a las que confería la Constitución de 1853. Se suprime, así, el conocimiento en grado de apelación de los recursos de fuerza y algunos otros asuntos conforme a la reserva del inciso 11 del artículo 67.

No fué sin una laboriosa discusión, sobre todo en la Convención preliminar de Buenos Aires, que se llegó a organizar definitivamente, en la forma señalada, la Justicia Nacional. Sarmiento, imbuido de las prácticas institucionales norteamericanas, intervino en el debate para criticar la residencia de la Corte Suprema en la Capital Federal, según lo había establecido la Constitución de 1853. « Los Jueces « de la Suprema Corte — dijo — no residen en Wáshington, « donde solo permanecen ocho semanas. El Presidente residía « en Baltimore (se refería a Taney — año 1860) y era, a la « vez, Juez del Circuito de Delaware, Maryland y Virginia; « un vocal residía en Cincinnati y juzgaba en Corte de Cir- « cuito con jurisdicción en Ohio, Indiana, Illinois y Michi- « gan; en Wáshington solo residía el Fiscal. » (23) Se afirmaba que la Corte, tal como había sido establecida por la Constitución de 1853, no tendría funciones. Sarmiento expresó que « un cuerpo nacional de jueces llevaría la luz « a estos rincones oscuros en que las nociones de la jus-

(23) Es indispensable puntualizar cual era en ese tiempo, prácticamente, el desempeño judicial de la Corte de Estados Unidos. « Cuando las Cortes de Distrito — dice Harrison — se inauguraron en 1789 no habían sino trece distritos; en 1801 se sancionó una ley por la cual se dividieron los distritos y se ordenaba el nombramiento de tres jueces de circuito para cinco de estos. Al año siguiente esta ley fué derogada sancionándose otra por la cual se establecían seis circuitos (igual número que los Jueces de la Corte Suprema) en los que debían formar el Tribunal, uno de los Jueces de la Corte Suprema y el Juez del Distrito ». A esto se refería Sarmiento. Los Jueces, como se vé, tenían asignado cada uno un puesto en las Cortes de Circuito y solo se reunían en Wáshington durante las últimas ocho semanas de cada año. En 1891 se crearon recién las Cortes de Apelación de Circuito (con el mismo criterio con que se crearon nuestras Cámaras Federales, esto es, para aliviar a la Corte Suprema) compuestas de tres Jueces. El Juez de la Suprema Corte designado para cada circuito y los jueces del circuito y del distrito de cada circuito forman, por derecho propio, dicho Tribunal de Apelación, que el Juez de la Corte Suprema preside, con la salvedad de que si alguno ha intervenido en la instancia anterior se le declara incompetente para entender en la apelación.

« ticia se pervierten y donde prevalecen la violencia y el
« poder de la fortuna. » Y propiciando la división de la Re-
« pública en circuitos, como, al uso de los Estados Unidos,
se estableció en la ley sancionada por el Congreso del Paraná
en 1858, aquel agregaba: « ¿Por qué las provincias argen-
« tinas no se agregarían en Distritos Judiciales para que
« anualmente viniesen jueces probos y llenos de ciencia,
« extraños a la influencia del lugar, superiores a toda intimi-
« dación, a enderezar los entuertos de una Justicia de aldea
« y los extravíos de las pasiones o los errores de la igno-
« rancia? » (24).

La Convención preliminar se dejó seducir y a raíz del informe de la comisión respectiva estableció que la Corte Suprema se compondría de cuatro Jueces y un Fiscal, que celebraría una sola sesión anual en la Capital Federal, teniendo para ello en cuenta que la Justicia Nacional debía ser activa y no pasiva, es decir, que debía el alto tribunal *ir a buscarlas causas* en el lugar de su origen, « como se practica en Estados Unidos —decía el informe— donde existe « el único modelo de esta máquina política, y por este medio « poner la Justicia al alcance del pueblo, convirtiendo en « realidad lo que solo es una ficción ».

—La Convención Nacional reunida después, con mejor criterio, no aceptó el régimen ambulante de la Corte y la creó en los términos del artículo 94 de la Constitución vigente, esto es, con residencia en la Capital Federal. Es que era un criterio generalmente aceptado por los hombres de esa época que el organismo judicial no se implantaría de golpe, debiendo contentarse con echar los fundamentos y dejar al tiempo la tarea de cimentar lo bueno y provechoso que todas las instituciones tienen. Nada se dijo, por lo demás, en las sesiones de 1860 acerca de una modificación tan funda-

mental; y el mismo Sarmiento, convencional también esta vez, aceptó en silencio la residencia de la Corte en la Capital de la República.

En 1862 el Congreso sancionó, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, la Ley Orgánica de la Justicia Federal. Dispone que la Corte ha de componerse de cinco ministros y un procurador general y puntualiza los preceptos constitucionales acerca de la jurisdicción de aquella y de los demás tribunales inferiores, que se redujeron por la ley a los jueces de sección unipersonales y distribuidos en todo el territorio de la República. (25)

La comisión especial del Senado, formado por los doctores Alsina, de la Vega y Navarro, expresó que «después de atribuir a la Suprema Corte el conocimiento de aquellas causas que la Constitución le ha señalado, reparte entre ella y los jueces seccionales el conocimiento de todas las demás que corresponden a la jurisdicción nacional. El tiempo y la experiencia señalarán el momento en que sea útil y posible crear las Cortes de Distrito. *Por ahora no debemos entrar en el quimérico empeño de andarlo todo de una vez. El Poder Judicial Nacional completado, debe ser la obra de varias leyes sucesivas. Hoy em-*

(25) El primer decreto designando jueces nacionales de sección, fechado el 4 de julio de 1863, destina uno a cada provincia, y fueron:

D. José Domínguez, para la provincia de Buenos Aires; D. José M. Zuviria, para la de Santa Fe; D. Vicente Saravia, para la de Entre Ríos; D. Amancio Pardo para la de Corrientes; D. Saturnino M. Laspiur, para la de Córdoba; D. Félix M. Olmedo, para la de San Luis; D. Juan Palma para la de Mendoza; D. Filemón Posse, para la de San Juan; D. Próspero García, para la de Santiago; Agustín J. de la Vega, para la de Tucumán; D. José M. Arias, para la de Salta; D. Benigno Vallejo, para la de Catamarca; D. Abel Bazán, para la de La Rioja; D. Macedonio Cruz, para la de Jujuy.

« *pezamos colocando las grandes bases de este edificio.* »

Según el artículo 6º de la ley sancionada en 1862, y que lleva el número 27, la Corte Suprema se compone de cinco ministros y un procurador general.

El 18 de octubre de 1862 el presidente Mitre nombró ministros de la Corte Suprema a los doctores Valentín Alsina, Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado y José Barros Pazos. Procurador general fué nombrado el doctor Francisco Pico.

El Senado había prestado la víspera el acuerdo correspondiente; y es de notarse que, según comunicación de fecha 17 de octubre, aquel se prestó « para que el Presidente de la República nombre magistrados de la Corte Suprema »; y el senador Uriburu que informó el despacho de la Comisión de Peticiones (26) no hace referencia a que se entendiera prestar un acuerdo especial para nombrar presidente de aquélla. Es que el mismo Ejecutivo, sin duda, no debía de considerar muy clara su facultad al respecto. si se tiene en cuenta que por el artículo 1º del decreto se nombran cinco *miembros* de la Corte y solo en el artículo 2º, como incidentalmente, se dice que queda designado Presidente el doctor Alsina. Recién al aceptarse la renuncia presentada por este y designarse, con fecha 6 de enero de 1863, el reemplazante, se nombró directamente por el P. E. « *Presidente de la Suprema Corte de Justicia* al ministro de la misma doctor Francisco de las Carreras. » Desde entonces hasta el presente no ha variado esta práctica, totalmente desprovista de fundamento legal. No es desacertado conjeturar que se tuviera en esa época por una deficiencia

(26) Actualmente hay una comisión de acuerdos y en el Boletín de las sesiones del Senado no queda constancia de sus informes ni de las deliberaciones del cuerpo.

involuntaria de la ley la falta de una disposición expresa relativa al Presidente de la Corte y a la facultad del P. E. para designarlo como tal, no solo porque así es el sistema americano — existiendo, además, entre nosotros, los antecedentes de la Constitución de 1819 y 1826, — sino y principalmente, porque no quedan rastros de que se objetara en el Senado la extralimitación del Ejecutivo, si es que realmente existió. (27) Y cuenta que se sentaban en él no pocos de los autores de la Constitución y, desde luego, de la ley orgánica de la Corte, que habrían criticado la designación directa de Presidente de la misma, si ella hubiese significado alguna trasgresión de importancia.

Es que semejante trasgresión no existe. Antes por el contrario, parece encuadrar mejor dentro de nuestras prácticas institucionales, conforme han ido cimentándose con el tiempo, que sea el Presidente de la Corte un funcionario de especial categoría, expresamente nombrado, con un punto más de jerarquía, si es posible, que sus compañeros de Tribunal. Es así como se nombró siempre a personas que, llegado el caso, pudieran avenirse con la función eventual de Presidente de la República.

7 Se objeta, sin embargo, que la práctica es que los cuerpos colegiados elijan de entre sus miembros el presidente. El profesor Carlos Melo, (28) después de recordar la ley orgánica de 1858 en la cual se establece implícitamente aquel principio, agrega: «El Senado, la C. de Diputados,

(27) Solo de una manera incidental, al tratarse en la Convención de 1853 sobre el juicio político al Presidente de la República y de la presidencia del Senado, en esos casos, por el Presidente de la Corte, entre los doctores Seguí y Gorostiaga hubo un cambio de ideas que revela que se encontraba ventajoso el sistema, por estar aquel funcionario fuera del alcance de los designios del Presidente de la República, elegido como iba a estar por sus compañeros y no nombrado directamente por éste.

— (28) Carlos F. Melo — EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (opúsculo) pág. 17.

« eligen de entre sus miembros el Presidente. Las mismas
« Cámaras Federales eligen su Presidente. ¿Por qué, pues, la
« Corte Suprema, encargada de controlar los actos de los
« demás poderes del Gobierno Federal, juzgando en cada
« caso su constitucionalidad, había de ser privada de auto-
« nomía para darse la dirección autorizada que necesita? »
Y agrega que « por un acto precipitado y quiero creer que
« indeliberado, se introdujo esta forma de designar Presi-
« dente de la Corte, por decreto del Presidente de la Re-
« pública, contraria al pensamiento de la Constitución.
« usurpadora de las funciones propias de la Suprema Corte
« y que coloca al más digno de consideración de todos los
« funcionarios de esta democracia en situación de dependen-
« cia del Poder Ejecutivo. »

Desde luego, para rebatir esta doctrina, no debe olvidarse
→ que habíamos copiado el sistema americano que acepta la
designación directa del Presidente de la Corte; además, se-
gún el mismo doctor Melo lo consigna, la designación que
hace el Senado es para el caso de ausencia del Vice Presi-
dente de la República, que es el Presidente nato del cuerpo.
esto es, que la Constitución se lo impone. En cuanto a la
Cámara de Diputados, basta recordar su carácter eminente-
mente político para darse cuenta de que son las exigen-
cias transitorias de la lucha de partidos lo que informa la
designación. Por lo demás, salvo algún caso — en el que la
significación del nombrado cubría ampliamente todas las
exigencias. — siempre el Ejecutivo ha designado Presidente
de la Corte al vocal más antiguo de la misma, siendo de
señalarse casos, como los de Barros Pazos y Gorostiaga, en
que los respectivos decretos consignan expresa e intencio-
nalmente aquella circunstancia.

El doctor Valentín Alsina no aceptó su designación para
formar parte de la Corte. Se dijo entonces que por en-
tender que el P. E. no podía nombrarlo directamente Pre-

sidente de la misma; pero otra versión atribuía la renuncia al deseo de seguir actuando en política. El doctor Alsina era, a la sazón, senador nacional.

En 15 de diciembre de 1862 el P. E., por decreto, señaló el día 15 de enero de 1863 para que la Corte quedara instalada, previo el juramento que sus miembros debían prestar ante el Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 38 de la Constitución.

El general Mitre, rodeado de sus ministros, de numerosos legisladores y de algunos funcionarios de la administración, esperó, a los jueces de la Corte en el Salón del Ministerio de Relaciones Exteriores. El doctor de las Carreras fué el primero en jurar, haciéndolo después reunidos los doctores del Carril, Barros Pazos y Delgado. El Procurador General doctor Pico juró el último. El escribano de gobierno labró el acta respectiva.

— *La Nación Argentina* de ese día, al anunciar la ceremonia expresaba: «Hoy debe instalarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este hecho importante para la organización del país y para la regularidad de su marcha, tiene en las circunstancias actuales una doble importancia. « La Corte Suprema Federal, dotada de atribuciones políticas por nuestra Constitución, tiene entre otras la de « dirimir las dificultades que puedan nacer en el roce de « los poderes públicos, juzgando, por ejemplo, los casos de « competencia entre la jurisdicción nacional y la provincial. Ahora bien, cuando el deslinde de atribuciones que « acaba de hacerse entre el gobierno nacional y el gobierno « no de provincia que reside en la capital, pudiera dar origen « a dudas cuya solución sería peligroso buscar de otra « manera; cuando las próximas elecciones de que ha de « surgir un nuevo gobernador de Buenos Aires pueden, « talvez, traer a la arena un candidato hostil, acaso la paz « pública está interesada en que se lleven al terreno tran-

« quilo de las sentencias jurídicas las cuestiones entre los
« poderes que están obligados a conformarse con la reso-
« lución que recaiga en los casos particulares sometidos a
« la Corte Suprema. Nos felicitamos, pues, de la instalación
« de ese tribunal verdaderamente augusto y deseamos que
« él pueda inspirarse siempre en la solemnidad de las fun-
« ciones que está llamado a desempeñar. »

La pasión política de la época trasciende de este pequeño comentario con que *La Tribuna* — el diario rival — del 16 de enero, hacía la crónica del juramento. «Nosotros al felicitarlos por la instalación del Poder Judicial de la Nación, no lo hacemos pensando, como el diario oficial, en que él ha de ser necesario para dirimir cuestiones que surjan del gobierno de Buenos Aires que se elija en mayo.»

En su mensaje de mayo de 1863, el general Mitre, al inaugurar las sesiones legislativas, manifestó que el gobierno «se había penetrado de la necesidad de completar nuestro sistema político e instaló la Corte Suprema de Justicia Federal, que tan grande y benéfica influencia está destinada a ejecutar en el desenvolvimiento de las instituciones, como un poder moderador». Luego se refirió a los inconvenientes con que se había tropezado hasta ese momento para el funcionamiento del tribunal, por cuyo motivo el nombramiento de los jueces de sección había ido postergándose, ya que no funcionando el tribunal de segunda instancia ninguna acción podían aquéllos desarrollarse.

En efecto, no obstante la teórica instalación efectuada en enero, todavía en mayo de 1863 la Corte no había entrado públicamente en funciones, pues debido, en parte, a falta de local apropiado y, sobre todo, a que se carecía de las leyes indispensables, sus puertas no se habían abierto aún al público, podría decirse. Precisamente, los Ministros, en

privado, preparaban los antecedentes de las leyes que después se dictaron, N^{ros}. 48, 49 y 50 de 14 de septiembre de 1863.

Parece indispensable poner de manifiesto la propiedad con que el Presidente Mitre se expresaba al anunciar que la Corte Suprema había sido, ¡por fin! instalada definitivamente (29).

Los idólatras de la obra de Urquiza, en su afán, muy noble por lo demás, de atribuirle toda, absolutamente toda la gloria de la organización de la República, (30) no hacen el distinguo entre lo mucho que se proyectó por el Gobierno de la Confederación, y aún se sancionó por el Congreso, y lo poco que las circunstancias permitieron llevar a la práctica. Precisamente la Administración de Justicia está en este caso. Como que el vencedor de Caseros se había rodeado en el Paraná de los hombres más preparados y laboriosos de la época, se pudieron dictar leyes en armonía con las nuevas necesidades de la vida constitucional; de esta suerte se organizó la judicatura, dictándose en 1854 una ley que declaró cuales habían de considerarse «abogados de la Confederación», y en 1858 se promulgó la ley

(29) Como una prueba del claro concepto que el general Mitre tenía de la Administración de Justicia, cabe destacar de su discurso en la tumba del doctor Francisco de las Carreras, estas palabras: «El doctor de las Carreras fué nombrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia Nacional, cuando apenas disipada la tempestad, era necesario hacer prevalecer las fuerzas morales «sobre las fuerzas materiales que se habían chocado y sobre las que podían «entorpecer la marcha de la sociedad. Pero era necesario consolidar a la «par del P. E. y del Legislativo, que son siempre las primeras manifestaciones de la sociabilidad política, el supremo poder Judicial que impera sobre «las pasiones, que corrige sus extravíos, que garante la paz de los pueblos y «de los ciudadanos, y que gobierna a todos en nombre de la razón, con la «fuerza invencible de la ley».

(30) En el libro URQUIZA y MITRE por Julio Victoria, se critica un discurso del doctor Antonio Bermejo por haber afirmado que el Presidente Mitre fué el fundador de la judicatura nacional (pág. 17).

orgánica de la Justicia Federal, preparada por el Ministro doctor Juan del Campillo, en la que, aparte de la Corte y de los Juzgados seccionales, se establecían cinco Cámaras de Distrito. Esto era la teoría, la buena inspiración del Gobierno; pero la realidad era otra, según un historiador urquista: «La Administración de Justicia—dice Ruiz Moreno—no pudo establecerse completamente con arreglo a la Constitución por falta de personal y por falta de recursos. En las provincias no había suficiente número de abogados para establecer los Juzgados de Sección y no podía contar el gobierno con los abogados de Buenos Aires a no ser con cinco o seis que habían emigrado al Paraná. Entre Ríos no contaba con más de dos abogados y Córdoba no tenía más de veinte abogados» (31).

Una era de paz y de progreso se iniciaba con la presidencia del General Mitre; un deseo efectivo de tranquilidad, una aspiración de concordia se advertía en todas partes, y el propio Presidente, al organizar la primera Corte Suprema con hombres que, en su mayoría, habían estado al servicio de la Confederación y hasta sido, como del Carril, de la íntima relación de Urquiza, venía de esta suerte a reconocer los prestigios del campo adverso, las altas cualidades de sus figuras más destacadas, tan altas, que debió poner en sus manos la función suprema de administrar justicia. Una buena parte, en efecto, de los designados,—sobre todo del Carril y Gorostiaga, nombrado poco después, y salvo desviaciones momentáneas de algún otro,—pueden ser comprendidos en el dictado prestigioso de «hombres del Paraná» con que se perpetúa en la historia la obra gubernativa más ponderada y patriótica, relativamente a las circunstancias de que estuvo rodeada, que registran los anales argentinos.

(31) Martín Ruiz Moreno—LA ORGANIZACIÓN NACIONAL. Tomo 2º, página 349.

El doctor Francisco de las Carreras había nacido en Buenos Aires en 1809; continuó en Córdoba sus estudios iniciados en la ciudad natal, pero fué de la Universidad bonerense que obtuvo su diploma de abogado, después de haber sido discípulo aventajado del curso de filosofía que dictaba don Luis J. de la Peña. Desempeñó, mientras tanto, la secretaría de la Academia de Jurisprudencia, a la vez que practicaba en el estudio del doctor Vélez Sársfield. Durante la tiranía, si bien no actuaba en favor ni en contra de Rozas, debió permanecer una larga temporada recluso en el campo. Después de Caseros fué nombrado Fiscal General de la Provincia de Buenos Aires; pero bien pronto el gobierno de Urquiza lo destituyó teniendo en cuenta «que los principios sostenidos por el Fiscal en repetidas ocasiones contrarían abiertamente los que han sido proclamados como base de la organización nacional, tienden a exitar de nuevo la división entre las provincias confederadas y aún entre los individuos en particular, y que la tolerancia de tales principios, muy especialmente en un alto funcionario público, sería autorizar las tendencias anárquicas que ellas encierran». Solo el ardimiento de la pasión política en esa época tan agitada que sobrevino a Caseros, puede explicar las palabras de ese decreto en que se habla de desorganización y de anarquía, dirigidos a una persona como de las Carreras, de quien pudo decir el Presidente Sarmiento, en ocasión de su muerte, que fué el hombre que más se aproximó al concepto ideal del Juez, «un hombre de virtud y de ciencia que pasa su existencia en el retiro, fuera de la corriente de los intereses mundanos, perfeccionando sus calidades morales y cultivando permanentemente su inteligencia por el estudio. Era proverbial su vida austera y no tenían casi otro ejemplo sus hábitos silenciosos y recogidos». Después del 11 de septiembre ocupó un ministerio en el Gobierno de D. Pastor Obligado, pasando

de allí a la presidencia de la Cámara de Justicia; antes había sido diputado y senador a la legislatura provincial, así como también miembro del Consejo Consultivo de Gobierno, creado en 1855.

El doctor de las Carreras, que solo por ocasión y contrariando sus inclinaciones, fué hombre político, destacábase por sus aptitudes sobresalientes para la tarea excelsa — casi divina, según la expresión de Cicerón — de administrar justicia. Más de treinta años estuvo haciéndolo sin desviarse nunca de la senda recta y prestigiando en todos los instantes de su incansable actividad, junto con su nombre, que es ya imperecedero, el del tribunal que presidió con tanto acierto, contribuyendo poderosamente a cimentar el imperio de las instituciones. Bien pudo decir el general Mitre que cuando el doctor de las Carreras fué nombrado para tan alto puesto, estaba señalado por el índice de la opinión y los poderes públicos al confirmarlo, no hicieron sino servir el designio que se habían impuesto de « consolidar la situación de la República sobre las bases del derecho ». « Sobre « el suelo ardiente de la lucha — agrega el general Mitre — « teñido aún con la sangre de los hermanos, se levantó « entonces aquel inextinguible fanal de la Justicia que alum- « bra a los pueblos en el camino de la salvación, y el doctor « de las Carreras fué el encargado de encenderlo y de man- « tener viva la llama que le había dado vida. El poder judi- « cial en el orden federativo estaba bosquejado en la Consti- « tución; pero era una letra muerta, un símbolo de la verdad « que necesitaba verse animado por el fuego sagrado de la « conciencia. El poder judicial era una teoría, el programa « de un derecho: necesitaba ser un hecho. Faltaban hom- « bres adecuados para constituir ese alto poder regulador y, « sobre todo, un hombre para presidirlo. El doctor de las « Carreras fué el elegido y desde entonces la ley teórica, « la ley muda, la letra muerta, se hizo sangre y carne, habló

« por labios vivos, tuvo acción en los hombres, dominó sobre los pueblos. La figura serena y austera del doctor de las Carreras coronó así el monumento de la Constitución ». Fué un juez modelo que se levantó sobre sus contemporáneos, no sólo por sus virtudes, sino por su austeridad moral nacida del carácter y por la fuerza poderosa que el hombre público puede sacar de su conciencia, cuando es recta y honrada, y aplicarla al mejor gobierno de sus conciudadanos.

Es la figura del doctor Salvador María del Carril, una de las más representativas de nuestra manera de ser política y social; su vida, que son varios capítulos de la historia nacional (era ya gobernador de San Juan en 1823 y presidía la Corte Suprema en 1877!) ofrece un interés grandísimo al investigador, pues aparte de ser tan múltiples y variados los acontecimientos en que intervino durante sesenta años, era tan poderosa su inteligencia y de tal manera vivo y hasta impetuoso su carácter, que se irradian en aquellos acontecimientos, dándoles un sello personalísimo. « El vigor « de su temperamento físico — dice un contemporáneo — empujándole a la violencia, y sus pasiones vehementísimas, « predisponiéndole a la ira y a una altivez y orgullo que no « disimuló jamás ni ocultó al través de la falsa modestia « que suele servir a otros de escudo impenetrable, fueron « siempre sus malos consejeros en la vida y especialmente « en los primeros tiempos de su briosa juventud » (32). Veinticinco años tenía apenas cuando en 1823 el Cabildo de San Juan, su ciudad natal, lo designó gobernador provisorio, siendo después reelegido. Caracterizó su administración

(32) José M. Zuviria — LOS HOMBRES DEL PARANÁ.

por lo progresista de sus iniciativas y lo avanzado de sus ideas, condensadas entonces en la famosa *Carta de Mayo*, que puede considerarse como la primera Constitución de la Provincia; se le debe la instalación de la primera imprenta. Poco tiempo después fué ministro del Presidente Rivadavia, emigrando a Montevideo a raíz de los desgraciados sucesos que sobrevinieron a la caída del régimen unitario, en algunos de los cuales, quizá el más lamentable y trágico, se le asigna un rol preponderante. En 1852 llegó a Santa Fe con la representación de San Juan en el Congreso Constituyente. Tuvo una destacada intervención en los debates, en los que puso a prueba sus condiciones sobresalientes de hombre de gobierno; promulgada la Constitución, la tarea de ponerla en práctica lo contó entre los obreros más infatigables. Desde el ejercicio del poder, en unión de Zuviara y Fraguero, delegado en ellos por Urquiza, pasando por varios ministerios, llegó a ocupar la Vice Presidencia de la Confederación. «Era alto — dice un autor — de aire «grave, los ojos encapotados y pequeños, las cejas pobladas y largas, carnuda la cara y surcada por arrugas profundas. Sentencioso para hablar, enfático en la acción y «de aspecto imponente; tenía la figura de un creyente de «los viejos tiempos de Rivadavia; parecía un *yankee*, gozaba de la fama de conocer el derecho constitucional federal y los tratadistas norteamericanos. El aspecto, la voz y la acción le servían de mucho: eran una reclame «en favor de su mérito. Caminaba con aire pretencioso, «como agobiado por la profundidad de su pensamiento. Era, «indudablemente, el que sabía más, y por ello fué uno de «los inspiradores en el Congreso de Santa Fe».

Es evidente que del Carril, a fuerza de estar tan cerca políticamente de Rivadavia, a quien acompañó hasta su caída, se impregnó de las ideas liberales del gran estadista, levándole su natural vehemente hasta exagerarlas en tér-

minos tales, que cayó en el más acentuado volterianismo. Para algunos era hasta un ateo; pero los años influyeron después en tal forma que al morir se había convertido en un sincero creyente. Tal era el hombre, que se andaba siempre por los extremos; así pudo ser unitario con Rivadavia y federal con Urquiza. Era el mayor de los hijos de don Pedro del Carril; se había graduado en Córdoba, donde fué discípulo aventajado del Deán Funes. Ejerció en San Juan tal influencia, según cuenta Sarmiento, que llegaba hasta la fascinación, no siendo difícil que influyera en ello, aparte de su talento, el prestigio de su abolengo.

Tenia sesenta y cuatro años del Carril cuando fué nombrado para integrar la Corte. Lejanos ya los días de la borrasca, serenado el ambiente del país, su espíritu impresionable se serenó también; y con la experiencia recogida en tan larga y agitada existencia, a base de su fuerte mentalidad y nutrido bagaje jurídico, era indudable que ninguno había como él para tomar a su cargo la árdua tarea de dar a cada uno lo suyo, de castigar los desmanes de la subversión, de interpretar desde el alto sitio de la Corte, los textos constitucionales que él en el Congreso contribuyó a sancionar.

Sarmiento, sin silenciar las disidencias que en diversas ocasiones lo separaron de del Carril, se complace, en el fondo, en hablar de él como de uno de sus comprovincianos ilustres. « Hace sesenta años, dice, se hacían en San Juan « fiestas de inauguración tales como las de hoy, y en ellas « el joven del Carril, con la majestad de su rango de familia, como un Jefferson o un Madison, con el tono dogmático y sentencioso que era el de la época, logró popularizar los principios liberales y crear el entusiasmo en su « defensa y propagación, que fué uno de los rasgos característicos de la población de San Juan ».

Otra larga y fecunda existencia es la del doctor Francisco Delgado. Sin el brillo de la actuación de del Carril, sin prestigios intelectuales tan marcados como los de de las Carreras, cruzó más silenciosamente la escena, desde el Congreso famoso de 1826, en cuyas bancas se sentó, hasta su muerte en 1875. Cincuenta años en constante actividad, sirviendo a su país como diputado por Mendoza, como senador después, como miembro de la Corte Suprema de la Confederación, nombrado en 1854 y designado, por fin, con el núcleo fundador, para instalar el alto tribunal federal, creado por la organización constitucional de 1860. Había hecho sus estudios preparatorios en Mendoza, provincia de su nacimiento, viniendo después al Colegio de Monserrat, en Córdoba, en 1818; por gracia especial, « en mérito de su conducta moral y afanosa consagración al estudio » — según dijo de él el doctor del Carril, — se le computaron sus clases seguidas en Mendoza, fuera de los claustros de la Universidad, lo que en aquella época no era común. Ejerció la abogacía en Córdoba y solo a instancias reiteradas aceptó desempeñar un juzgado.

« Nacido a fines del siglo pasado (1795) — dijo el Ministro doctor Onésimo Leguizamón, en ocasión de la muerte del doctor Delgado — tocóle ser actor en el drama inmortal de nuestra emancipación política, al mismo tiempo que se preparaba por medio del estudio para servir con brillo a su país, concurriendo a las mismas aulas a que asistían Vélez Sársfield, del Carril y otros de nuestros hombres ilustres. En 1826 era diputado por Mendoza; en 1830 era magistrado en Córdoba, bajo la administración del general Paz, y salió perseguido de aquella provincia cuando su amigo y protector caía prisionero. En 1840 el doctor Delgado emigró a Chile por haberse hecho sospechoso al dictador y en tierra extranjera quedó desempeñando puestos honoríficos hasta 1854, en que regresó a su patria

« para ocupar el puesto de senador en el Congreso Nacional. En el mismo año recibió el honroso nombramiento de « Ministro de la Suprema Corte de la Confederación, siendo « en 1862 nuevamente electo senador por Mendoza, cargo « que abandonó para integrar la Corte Suprema de Justicia, « destino que ha servido ilustrada y honradamente hasta su « muerte. Moderado en la lucha, paciente y abnegado en « la adversidad, generoso en la victoria, la vida del doctor Delgado podría servir para vaciar el molde del tipo « del varón justo, del varón prudente. Del doctor Delgado puede decirse lo que de muy pocos que le sobreviven, esto es, que nació a la vida pública en los grandes « días de temores y de esperanzas para la patria, que en « vejeció en la época luctuosa de la tiranía y del destierro « y que murió cuando la Nación, libre ya de sus infortunios pasados, necesitaba más que nunca del consejo honrado de sus viejos y preclaros servidores ».

El doctor José Barros Pazos había nacido en Buenos Aires en 1807. Muy joven se graduó de abogado, pues en 1831 aparece ya inscripto en el libro de matrícula que se llevaba en el Superior Tribunal de Justicia. Era hombre de una gran erudición, no solamente jurídica, sino también literaria; poseía perfectamente el latín (33) y lo enseñó en la Universidad de Buenos Aires, de la cual fué rector.

Hasta que emigró a Chile, donde alternó con los argentinos más importantes, expatriados como él, para ponerse a

(33) El autor tiene en su poder, adquirida en una librería de viejo, una rarísima edición latina del «Antonii Fabri. Sebusiani» (año 1630. Colonia), con el ex-libris y la firma del doctor Barros Pazos, puesta en Santiago de Chile el año 1847, y con notas que revelan una compulsu frecuente.

salvo de los desmanes de la tiranía, no había desempeñado fuera de los cargos docentes, ninguna función pública de primera fila. En 1852 aparece integrando el Consejo de Hacienda; a mediados del mismo año, cuando la renuncia del gobernador doctor Vicente López y Planes se produjo, el general Urquiza organizó un Consejo de Estado, en el que figura el doctor Barros Pazos. Formó parte también de la «Comisión Codificadora» en materia civil, penal, comercial y de procedimientos. Posteriormente fué Ministro de Gobierno. Era, sobre todo, un hombre digno y muy virtuoso, de una rectitud sin sombras. De modo que cuando se le vió nombrado para integrar la Corte, no solamente hubo una sensación muy explicable de tranquilidad y confianza por las altas dotes del que iba a ser uno de los administradores de la justicia más alta, sino que también se celebró por todos el acierto del gobierno por lo que en la designación había de premio y recompensa a una fecunda existencia consagrada por entero al bien público.

Durante algún tiempo, la vacante producida en el tribunal por la renuncia del doctor Alsina no fué llenada, estando, por esta causa, reducido aquel a los doctores de las Carreras, del Carril, Delgado y Barros Pazos.

El Procurador General doctor Francisco Pico era «hombre de Buenos Aires», no solo por su nacimiento, ocurrido en 1803, sino por la orientación de su vida pública que lo tuvo, casi siempre, cuadrado frente a la tendencia encabezada por los «hombres del Paraná». Como la mayoría de sus contemporáneos, templó su espíritu en el destierro. Fué en Monte-

video donde transcurrieron para él los años de la tiranía. Bajo la presidencia de Rivadavia había sido oficial 1º del Ministerio de Relaciones Exteriores, desempeñándose después como oficial mayor de varias otras administraciones; y es fama que el día en que llegó a Buenos Aires el parte de la ejecución de Dorrego, consultado por el Gobernador interino acerca de lo que debía hacerse con ese documento, se concretó a escribir de su puño y letra, al pie de la firma, *archivese*, «como una protesta muda—dice un comentario «de la época—de un acto que no aprobaba y cuyas consecuencias previó. tal vez; con ese *archivese*, de letra del «doctor Pico, ha pasado aquel documento a la historia, sin «firma de Gobernador ni de Ministro».

Con Rivadavia llegó a tener después una comunicación espiritual muy estrecha, en la época en que ambos residieron primero en Montevideo y después en el Brasil. Gustábase al primero provocar la disertación siempre elocuente, agradable y nutrida de Pico, a quien eran ya familiares, por ese entonces, los tratadistas americanos. Cuando el sitio grande de Montevideo, fué uno de sus defensores, espada en mano; y capitán de una compañía de la Legión Argentina, al poco tiempo, acreditó no solo su serenidad y su valor en diversos hechos de armas, sino también su capacidad intelectual, revelándose uno de los oficiales más tácticos de su cuerpo.

Tuvo una actuación de primera fila en las negociaciones tan azarosas del acuerdo de San Nicolás, habiéndose recién después conocido la verdadera importancia de su intervención. «Cuando el triunfo de Caseros me permitió volver a «mi patria, después de veintidós años de destierro—dice en «carta dirigida a Miguel Cané en 1858, (34)—mi gran deseo

(34) Publicada por Ramón J. Cárcano en su libro *DE CASEROS AL 11 DE SEPTIEMBRE*, pág. 291.

«era ver afianzarse en instituciones permanentes los principios porque se había combatido. . . . Las disposiciones del General Urquiza respondían a mis ardientes aspiraciones y resolví contribuir a su realización por cuantos medios pudiera, sin que un solo momento llegara a mi espíritu la sospecha que afligía a algunos de mis amigos, de que tuviera la intención de hacerse un tirano . . . ».

Poseía una clara inteligencia, muy sagaz y penetrante, al par que era de una extrema moderación en sus juicios, todo lo cual le permitía lograr el mayor acierto en sus actitudes y producciones.

Tales eran los hombres con que la buena inspiración del Gobierno organizó la primera Corte de Justicia. Además de la ponderación mental, del nutrido bagaje jurídico, poseían todos ellos el caudal de la experiencia adquirida en la adversidad. Iban a ser buenos jueces, pues, no solo porque dominaban la ley, sino porque conocían la vida por sus cuatro costados y sabían de las pasiones de los hombres,—a ellos mismos, en otros tiempos, los habían perturbado y eneguecido;—de modo que, junto con la sabiduría, serían también, la moderación y la transigencia, compatibles con la firmeza, lo que informara sus resoluciones.

Desde del Carril hasta Pico—casi los antípodas de un momento de la política argentina—pasando por las figuras menos impetuosas de las Carreras, Barros Pazos y Delgado, estaban en la Corte—obligados a tratarse diariamente y a contemporizar en nombre de la ley, cuya interpretación iría afianzando las instituciones y dejando cada vez más atrás las horas luctuosas de la confusión y del despotismo—los hombres venidos de campos más adversos, de

las actividades más distintas; pero unidos todos en la sola aspiración de promover el bienestar general.

¡Felices ellos, que habiendo visto a su patria desquiciada y consumidas sus mejores energías, cuando no en el entrevero de la montonera, en las discordias doctrinarias, encendidas por la pasión, pudieron morir con la ilusión de que la República había entrado, por fin, en la senda definitiva!

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO V

1862-1865

La Corte inicia sus tareas. — Su primitiva instalación. — Las leyes de 14 de septiembre de 1863. — Reglamento para el orden interno. — El primer fallo: un caso de recurso extraordinario. — La Corte no puede hacer declaraciones generales. — Una denuncia de plagio. — Las facultades judiciales del P. E. — Causas de almirantazgo. — Los poderes nacionales y la jurisdicción en materia de imprenta. — *Jefe de Policía v. Manuel G. Argerich*. — Procedimiento para el pase de bulas pontificias. — Las facultades de los delegados apostólicos. — La inmunidad de los congresales. — *Senador Martín Piñero v. Coronel Calveté*. — Demandas contra la Nación. — Nombramiento del doctor JOSÉ BENJAMÍN GOROSTIAGA. — Incompetencia de la Corte en materia de elecciones. — Las Aduanas interiores. — Características de los fallos de esta primera época.

En octubre de 1863 la Suprema Corte estuvo ya instalada en el local que ocupó la comisaría de guerra, hoy calle Bolívar entre las de Moreno y Belgrano, haciendo parte del gran edificio que fué «casa de Rosas.»

El 11 del mismo mes el tribunal dictó su reglamento interno, y el primer fallo que se registra en la colección oficial es de 15 de octubre; pero no estuvieron ociosos sus titulares, como pudiera creerse, durante el año que había corrido desde el 18 de octubre de 1862 en que fueron nombrados, es decir dos días después de sancionada la ley nú-

mero 27 que fijaba el número de miembros de la Corte y enumeraba los casos de su competencia, como así también la de los Jueces de Sección. Como quiera, sin embargo, que era indispensable dictar las leyes que la nueva judicatura debía aplicar, además de que fué necesario también determinar con mayor precisión los casos de competencia federal, los doctores de las Carreras, Delgado, del Carril, Barros Pazos y Pico prepararon los proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que se aprobaron en los términos de las leyes números 48, 49 y 50.

La primera deslinda la jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales, ampliando y rectificando los términos de la ley número 27 (35). La segunda designa los crímenes cuyo juzgamiento corresponde a los Tribunales Nacionales, es decir, todos aquellos actos que vayan contra la seguridad institucional, la dignidad de la Nación, la integridad de sus caudales, el secreto de la correspondencia, la seguridad de los presos, la conservación de documentos públicos, la buena conducta de los empleados etc., etc. Esta ley fué calcada, casi íntegramente, en la legislación española.

La ley número 50 fija los procedimientos en materia civil y criminal. (36)

La Corte resolvió en un principio reunirse todos los días para ocuparse de los asuntos del despacho; pero conforme

(35) A su vez la ley número 49 está ampliada y rectificada por las leyes número 927 y número 4055.

(36) La ley número 3381 modifica la número 50 y, en general dispone que el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Capital Federal es supletorio en todo aquello que no esté previsto por las mismas.

este fué creciendo sintieron los jueces la necesidad de estudiar los expedientes aisladamente, reuniéndose solo determinados días de la semana (37) para acordar las resoluciones. Según el reglamento, la Corte interrumpiría anualmente sus tareas por un mes, comprendido entre el 7 de diciembre y el 7 de enero.

El primitivo personal estuvo compuesto por un secretario, un uger y un ordenanza. El primer secretario fué el doctor José M. Guastavino, pues el doctor Rafael Pereyra, desempeñó interinamente el cargo durante tres meses. Por muchos años fué uger don Juan Gache. El personal subalterno era designado y pagado por el secretario.

Los primeros conjueces nombrados para reemplazar en caso de impedimento ó recusación a los jueces de la Corte fueron los doctores: Lorenzo Torres, Marcelino Ugarte, Baldomero García, Miguel Esteves Sagui, Carlos Eguía, Alejandro Heredia, Federico Pinedo, Víctor Martínez, Manuel M. Escalada, Daniel Cazón, José Roque Pérez, Luis Sáenz Peña, José Antonio Ocantos, Octavio Garrigós, Ezequiel Pereyra, Eduardo Lahite, Sabiniano Kier, Eduardo Carranza, Miguel Navarro Viola, Félix Sánchez de Zelis, Eduardo Basavilbaso, Ceferino Araujo y Manuel Obarrio.

El 15 de octubre de 1863 la Corte dictó su primer fallo. Don Miguel Otero había interpuesto los recursos de apelación, nulidad e injusticia notoria de un auto pronunciado por la Sala en lo Criminal del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires. Otero litigaba ante el Tribunal

(37) En la actualidad los días de acuerdo son los martes, jueves y sábado, datando esta práctica desde julio de 1965.

de Comercio con don José M. Nadal, fallido; considerando que no se habían cumplido en la sustanciación del juicio la Constitución y leyes nacionales (el Código de Comercio) pidió a la Corte la nulidad de los procedimientos. «Y sin « hacer la citación—decía en su alegato Otero—ni dar « lugar a la oposición, ni conceder los días del encargado, « ni dar sentencia de remate, se dió un salto por sobre « todo y se mandó nombrar tasadores. Reclamé la obser- « vancia de los trámites esenciales, cuya omisión induce « nulidad *ipso facto* no solo por las leyes generales, sino « también por la nueva del 30 de octubre de 1860; pero « todo fué inútil. Se dijo que aunque no se había hecho la « citación, se tuviese por hecha; que aunque no se habían « concedido los diez días de la ley, se tuviesen por pasa- « dos; que aunque no se había pronunciado la sentencia « de remate, se tuviese por tal el auto que manda nom- « brar tasadores. ¡Parece esto increíble; pero ahí están « los autos para su comprobación!»

Esta es la sustancia, se puede decir, de la presentación de Otero, pero el escrito era muy largo, en armonía con la aflictiva situación que las resoluciones de los jueces provinciales le habían creado. La Corte, empero, solo empleó cuatro palabras para rechazar el recurso. «Y consideran- « do—dice—que la Ley de 14 de septiembre del presente año, « declara en su artículo 15 que la aplicación que los Tri- « bunales de Provincia hiciesen de los Códigos Civil, Penal « y Comercial y de Minería no dará lugar al recurso de « apelación, no ha lugar y archívese.» Sin duda, no hacían falta otros razonamientos si se tiene a la vista la categórica disposición de la ley número 48, citada por la Corte, la cual, ni por que se trataba de la primera vez que debía interpretar un texto legal recién sancionado, creyó necesario. desde que ella veía tan clara la cuestión, tan intergiver- « sales sus términos, abundar en largos considerandos. ¡Bien

mostraban ya en la ocasión los firmantes sus aptitudes y designios, al proclamar con el ejemplo que cuando una cuestión no admite sino una sola interpretación, las palabras de más solo sirven para complicarla, y que la primera virtud del juez es el laconismo y el encanto mayor del lenguaje judicial la concisión reveladora de la claridad del pensamiento!

Es explicable, con todo, la actitud del apelante. Inaugurada la Corte, con el prestigio de ser el más alto Tribunal de la República, precisamente en los días en que él resultaba víctima de un verdadero desaguado judicial — a estar a los términos de su alegato — se comprende que no vacilara en alcanzar de aquélla el remedio a su situación.

Es de vieja data, pues, que la Corte cierra sus puertas a todo aquello que no esté enumerado de una manera muy clara entre las cuestiones que pueden ser llevadas a sus estrados. Es más importante, sin duda, que el Tribunal, por lo mismo que son tan altas sus funciones, no se salga del rol estricto que tiene establecido, a que un particular soporte las consecuencias de una resolución definitiva, por más equivocada que esté.

Un diario del Rosario de Santa Fe publicó una resolución del Poder Ejecutivo de la Provincia aceptando la renuncia presentada por el Juez de Comercio doctor Agustín Matienzo; y temeroso el comercio de que quedaran sujetas sus reclamaciones al solo fallq del Juez de Alzada en lo tocante a la intervención forzosa de letrados en los juicios comerciales, al nombramiento de síndicos o Jueces Comisarios y a la facultad del Juez titular de comercio para abogar, se dirigieron al Poder Ejecutivo Nacional pidiendo una declaración que señalara de un modo claro y preciso el espíritu y

la letra de las leyes generales de comercio y muy especialmente de los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional que sanciona el uso libre de la propiedad y « la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos que constituyen parte de esa propiedad ». El Gobierno Nacional pasó esa solicitud a la Corte, pagando así como Wáshington, un primer tributo a la imprecisa idea que todavía se tenía de la naturaleza de los poderes de la justicia nacional. « A la Suprema Corte—dice la resolución—no corresponde hacer declaraciones generales en ningún caso, y menos dictar reglas de procedimiento a las Justicias Provinciales..... » Semejante doctrina tiene, como se sabe, el antecedente clásico y ya recordado, de las consultas del primer presidente americano, y se basa en que un tribunal no puede juzgar si no hay un proceso, una *contienda* de partes. Mientras una ley no da lugar a un reclamo el Poder Judicial no puede ocuparse de ella, por que esto sería salir de su esfera para penetrar en la del Poder Legislativo.

Algún tiempo después la Corte, al serle sometida, en general, la cuestión de si la contribución directa correspondiente al Municipio de Buenos Aires, debía o no pagarse al Gobierno de la Nación, reiteró su pronunciamiento, el cual no ha sido nunca modificado. El interés de este segundo caso estaba en que la persona perjudicada por un fallo de primera instancia que resolvía en su contra aquella cuestión, no podía apelar por el monto del litigio, y buscaba arrancar a la Corte una declaración abstracta que resolviera la situación para el futuro.

Ante el Juez Federal de la Provincia de Buenos Aires se presentó D. Juan José Méndez, representante legal de la

Provincia de Corrientes, denunciando el delito de plagio. (38). Se tenía noticias de que se efectuaba un tráfico muy activo de individuos y hasta de familias, celebrándose contratos de arrendamiento de servicios, con facultad de *endosarlos*, mediante los cuales esos servicios contratados a ínfimos precios con engaños y seducciones, se transferían a terceros por precios elevadísimos y condiciones que importaban una enajenación de la libertad humana. Como quiera que de esa manera se infringía el artículo 15 de la Constitución Nacional, resultaba para el denunciante un caso típico de competencia de la Justicia Federal. Por cierto que no se designaban en la presentación de Méndez ni las víctimas ni los delinquentes y solo se pedía, *en nombre del Gobierno de Corrientes*, que se averiguara el crimen y sus autores y «se descargue sobre ellos el peso de la Ley». El Juez Federal sostuvo la buena doctrina, desde el punto de vista del procedimiento; pues siendo el plagio y la reducción a servidumbre delitos previstos y penados por la ley común, su acusación solo corresponde a las personas ofendidas o a las que la ley da personería, personería que en manera alguna puede asumirla una provincia, porque el delito no la afecta esencialmente, y porque de no ser así se constituiría aquella en procurador de todos los derechos de los particulares, lo que es contrario a los principios más elementales. No se avino, naturalmente, el denunciante con este fallo, y forzaba su argumentación haciendo pie en el artículo 15 de la Constitución que *declara* ser un crimen todo contrato de compra-venta de personas; de modo que disponiendo la ley N° 27 (arts. 3 y 4) que la Justicia Federal se establezca para «sostener la observancia de la Constitución Nacional», ella y no otra debía acoger su denuncia, tanto más

(38) Es sensible que haya caído en desuso esta palabra, tan comprensiva de repugnante crimen que hoy se designa con el nombre de «trata de blancos».

cuanto que era inadmisibile la teoría de que solo los ofendidos podían acusar, desde que el plagiato es un delito público porque viola la Constitución.

Se equivocaba, sin duda, el representante de Corrientes en todas sus afirmaciones. Si, pues, la Constitución *declara* que ha de reputarse crimen todo contrato de compra-venta de personas, debe entenderse que solo declara; pero quien define, clasifica y *castiga* es la ley común, ni siquiera la ley Federal N° 49, desde que el plagiato no es de la categoría de delitos públicos en esa ley enumerados. No es pues la Constitución la que estaba en juego, sino una ley que trae de ella, es cierto, su origen. Y en cuanto a que se trate de un delito que afectaba los intereses generales de la Provincia y como tal susceptible de ser denunciado no solo por los particulares ofendidos, debía tenerse en cuenta que casi todos los delitos son en el fondo violaciones de derechos consagrados en la Constitución—así el homicidio va contra el derecho a la vida, el robo contra el derecho a la propiedad;—y si bien es cierto que v. gr. a una provincia le interesa realmente que en su campaña la hacienda no sea robada, desarrollando para ello la condigna acción policial preventiva, no por eso ha de decirse que tenga personería para acusar ante la justicia sin designación de víctima y de delincuente, en los casos de abigeato. Así, también, cuando se trata de plagiato; pues naturalmente se concibe que una Provincia desee que en su territorio no se realice el tráfico de personas, pero para lograrlo no tiene otro medio que desarrollar una acción administrativa, dejando la judicial a cargo del particular perjudicado por uno de esos contratos.

Veamos ahora cual fué el criterio de la Corte. «Dando «por cierto—dijo—que los hechos denunciados constituyen «un verdadero delito, este no consistiría en la violación del «artículo 15 de la Constitución Nacional que condena (?) la

« compra-venta de personas, no el abuso en la locación de
« servicios contratados con menores o personas miserables,
« ni las demás que puedan cometerse contra la libertad de
« los ciudadanos, que deben buscar su protección en las
« leyes y autoridades provinciales, a quienes compete exclu-
« sivamente ejercer la parte de jurisdicción, tanto en lo civil
« como en lo criminal, que no ha sido cedida a la Nación;
« porque no es cierto que del inciso 11º del art. 67 de la
« Constitución se infiera que todo poder de castigar los deli-
« tos haya pasado a las autoridades nacionales, como lo
« sostuvo el abogado de Méndez en su informe oral, pues
« aunque en aquél se da al Congreso la facultad de dictar
« el Código Penal que haya de regir en las provincias, se
« salvan expresamente las jurisdicciones locales ».

Los comerciantes Tomás Tomkinson y Compañía llevaron ante la Corte la apelación de un fallo del Poder Ejecutivo Nacional, confirmatorio, a su vez, de uno de la Junta de Comisos que condenaba a los apelantes a pagar el exceso de valor de una mercadería. Aquéllos pedían la nulidad de la resolución administrativa, el reintegro de la suma oblada como multa y el envío de los autos al Juez Federal, único que podía legitimamente resolver, pues el Ejecutivo carecía de jurisdicción para hacerlo, habiendo pues, al avocarse la cuestión, violado prescripciones constitucionales expresas.

El Procurador General, doctor Pico, hizo mérito al producir su dictamen, de que los Juzgados de Sección no habían sido todavía instalados cuando se pronunció la resolución recurrida; pero la Corte, de una manera terminante y enérgica expresó: que ni por aquella circunstancia pudo el Ejecutivo considerarse facultado para asumir temporariamente

una atribución dada por la Constitución al Poder Judicial; el artículo 95 expresamente le prohíbe desempeñar funciones judiciales. La Corte anuló todo lo actuado, ordenando que los autos pasasen al Juez Federal.

Es tan vasta la materia aduanera y tan complicados sus trámites, que ni aún en la actualidad, después de más de cincuenta años de práctica institucional, pueden considerarse claros algunos casos que pueden presentarse y que, en más de una ocasión, han obligado a los tribunales federales a contemplar detenidamente y con gran acopio de doctrina, las cuestiones planteadas, casi siempre por particulares perjudicados por la tendencia absorbente del poder administrador, en materia aduanera.

La primera causa de almirantazgo se llevó a la Corte en febrero de 1864 con motivo de haberse presentado los consignatarios de la barca inglesa *Golden Eagle* solicitando del juez de sección de Buenos Aires que dirigiese oficio al Juez de Comercio para que se inhibiera y le remitiese las actuaciones relativas al salvataje de varios efectos realizado por Casares y Garay. Accedió a ello el juez doctor Heredia y en el oficio hacía mérito de que la jurisdicción marítima no resulta por razón de las personas, sino de la cosa misma, esto es, de la navegación y del comercio marítimo. «Tan cierto es que la ley — agregaba — no ha querido extender esa limitación a las causas marítimas, que « no teniendo lugar éstas, casi siempre, sino entre extranjeros solamente, las que por la ley no corresponden a « la jurisdicción nacional, ha establecido en términos generales, y sin hablar de las personas, que lo marítimo compete a la justicia nacional. Si no fuera así, hubiera in-

« cluido o distinguido los casos marítimos en que intervinieran extranjeros o ciudadanos solamente, o uno y otros a la vez, como lo ha hecho en las causas civiles. Y *todo esto depende de que en los puertos, ríos e islas de la República solo tienen jurisdicción los poderes nacionales.* »

El Juez de Comercio, doctor Juan E. Barra, sostuvo su jurisdicción, fundado en que la prórroga de la misma es permitida en casos como el que motivaba la contienda.

La Corte fundó, ante todo, su resolución en que entre las excepciones enumeradas por el artículo 12 de la ley de jurisdicción y competencia no se encuentran las de almirantazgo; de modo que deben considerarse excluidas del conocimiento de los tribunales provinciales, por las razones tan claramente expuestas en el auto del Juez de Sección. Era comprensible, con todo, que el Juez de Comercio incurriese en error, pues el inciso 4º habla de los casos que caen bajo la jurisdicción nacional por razón de la materia. Admitía en su auto el magistrado provincial que todo lo concerniente al comercio marítimo es del resorte de la Justicia Federal, pero la ley no excluye—agregaba— a los juzgados de provincias del conocimiento de aquellas causas cuando concurren elementos de juicio relativos a la nacionalidad de las personas o a su vecindad, en forma tal que el fuero federal resulte a todas luces improcedente.

Parece ahora elemental insistir en que la competencia de los Tribunales Nacionales se determina por la materia, por la nacionalidad de las personas y por la vecindad de las mismas. Estos dos últimos elementos pueden combinarse y determinar o excluir el fuero federal; pero la *ratione materiae* es independiente y obra sin relación alguna, ni con la nacionalidad de las personas ni con su domicilio; es el motivo fundamental, aquel al cual la ley asigna la mayor importancia en lo tocante a la determinación de los

magistrados que deben entender. Quiero expresamente la ley que haya cuestiones sobre las que el poder jurisdiccional de la Nación sea tan exclusivo e inmediato, que, en ningún momento, un funcionario o tribunal que no tenga carácter federal pueda intervenir. Y de entre esas cuestiones, ninguna tan típicamente representativas de ese concepto como las que se refieren a la navegación marítima; pues susceptibles como son, por su índole, de provocar reclamaciones de súbditos o de naciones extranjeras, no sería posible prevenir los conflictos ni solucionarlos con unidad de criterio, si se dejara ello librado a las diversas justicias de provincia. Puede ocurrir, — y esto era precisamente lo que confundía al Juez de Comercio doctor Barra — que los que reclamaban el precio del salvataje fuesen extranjeros y que también lo fuese la casa consignataria demandada, o que siendo argentinos los primeros, tuviesen distinto domicilio que los consignatarios extranjeros demandados, casos ambos en que el fuero federal no procedería si se tratase de un *pleito civil*, de una demanda de orden general. Pero cuando la acción se base en algo que se relaciona con la navegación, esto solo — la *ratione materie* — basta para determinar el fuero.

Pocas cuestiones tan arduas y que más haya ocupado la atención de la Corte en las diversas épocas como la que se refiere a la incompetencia de los tribunales de la Nación para conocer en los llamados, no siempre con propiedad, *delitos de imprenta*. Pocas cuestiones, también, encontró más propicias la Corte para afianzar el concepto de que aquellos delitos sólo dañan y conciernen a la soberanía provincial, cuyo poder judicial es el único habilitado, en consecuencia, para reprimirlos.

Es el caso que en «El Nacional» de esa época venían apareciendo unos artículos firmados por el doctor Manuel G. Argerich contra el Jefe de Policía de Buenos Aires; el Ministro de Justicia ordenó al Fiscal General que promoviera la acusación correspondiente, la que se dedujo ante el Juez Federal de Buenos Aires, solicitándose, por pronta providencia, que Argerich fuese citado a reconocer la paternidad de los artículos incriminados. El demandado reconocióse autor, pero objetó la falta de jurisdicción del Juez, haciendo mérito, sobre todo, de que debían ser jurados especiales y no Tribunales Judiciales los que conocieran de la acusación. Haciendo Argerich el elogio de este sistema o, mejor dicho, abominando de la costumbre de ventilar los delitos de imprenta ante los jueces ordinarios, expresó en la ocasión: «De ahí la organización del juri « en todas partes; del juri que siendo el más popular y el « más democrático de todos los tribunales, es a la vez la « garantía más preciosa de los derechos del hombre, por- « que el pueblo, cuando juzga por medio de los magistra- « dos que nombra, está exento de las pasiones, de los odios « y de la influencia que oscurecen algunas veces el espíritu de los jueces, para no hacerles ver la justicia y la « verdad.» (De esta fuerza son todos los argumentos de los sostenedores del jurado: el odio y la pasión pueden enceguecer a los jueces de derecho, a los que consagran su vida, en la frialdad de su bufete, a castigar los desmanes que perturban la tranquilidad social; pero los «hombres buenos» sorteados para formar el tribunal *ad-hoc*, así sean de una distinta religión que el acusado, o de una comunión política adversa, han de estar siempre a cubierto de proceder impelidos por el odio o por la pasión!) Para el excepcionante nada importaba que el injuriado por sus artículos fuese un funcionario federal; se aferraba a que él escribía en un diario que se publicaba en la Provincia

de Buenos Aires la cual tenía establecidos sus jurados de imprenta. Pero el gran argumento del doctor Argerich era la transcripción impresionante de la letra constitucional: — *Artículo 32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.*

El Fiscal doctor Ramón Ferreyra rebatió estos argumentos, puntualizando razones tan evidentes como estas: 1º) Que unos mismos delitos de injurias, calumnias etc., cometidos verbalmente o por escrito corresponden a la justicia nacional; y si esos mismos delitos se cometen usando para ello la prensa — diarios o pasquines — corresponde su juzgamiento a la justicia provincial. 2º) Que el Gobierno Nacional, el Presidente de la República mismo, tendría que ocurrir a los tribunales de Provincia para enjuiciar a los que, por la prensa, se desatan contra él, o proclamen la sedición y la revolución (39). Con oportunidad evidente traía el doctor

(39) No es sin gran satisfacción que el autor hace notar un antecedente tan respetable como es el dictamen transcrito, de la teoría constitucional sostenida por él, como Juez Federal de la Provincia de Buenos Aires, en una cuestión de competencia suscitada con un magistrado del fuero ordinario de la provincia, a propósito del procesamiento de los editores y redactores del diario anarquista *La Bandera Roja*.

Sos uvo el Juez Federal de La Plata :

«Que para afianzar la tesis de que debe ser la justicia federal la que enfrenta en los hechos que vayan contra el orden constitucional establecido debe tenerse en cuenta que la propaganda ideológica (discursos, diarios, folletos, carteles) no se circunscribe en su acción, ni se circunscribe en sus efectos, dentro de los límites de un municipio ni de una provincia. Es contra la existencia misma de la Nación que se conspira. De modo que deben ser los jueces de la Nación los que intervengan en el procesamiento de sus autores. Tómese, si no, cualquiera de los impresos de la índole de los secuestrados.... «La Bandera Roja», por ejemplo, y se verá que su prédica se dirige a aniquilar las instituciones «nacionales»; nadie concreta ese afán destructor y anárquico a las instituciones provinciales, único caso en que correspondería a los jueces locales intervenir».

«Que la acción de la justicia en esta hora de tan intensas reacciones colectivas debe estar por encima de los distinguos a veces sutiles de la hermenéu-

Forreyra la cita de un pasaje de Story. «Sostener que esta «disposición (la de no poder dictar el Congreso leyes «que restrinjan la libertad de prensa) garantiza a todo «ciudadano el derecho absoluto de decir, de escribir o de «imprimir lo que quiera, sin responsabilidad pública ni

tica procesal; y lo que en épocas normales puede constituir un simple caso de «uso abusivo del derecho de publicar ideas por la prensa sin censura previa» según la opinión del procurador general de la Nación, doctor Botet, citada por el señor juez contendor, en épocas como la presente, caracterizada por un desenfreno absoluto y «tendencioso» de las ideas, los jueces deben estar convencidos de que hay algo que no es únicamente un desahogo de escritor más o menos rebelde, sino toda una vasta empresa de aniquilamiento gubernativo, social, y económico. Una interpretación judicial, así, que pudo responder hace un año a las reales necesidades de la Nación, no puede invocarse en estos momentos en que esas necesidades asumen otro aspecto, en que los artículos de la prensa subversiva no son un hecho aislado, sino que forman parte del plan antes mencionado de destruir las instituciones. No debe confundirse, entonces, un delito contra la seguridad interior de la Nación, claramente especificado en el título IV de la ley federal número 41, con un delito de imprenta, calificación improcedente en el «sub iudice», ya que tendría como consecuencia, dentro del concepto de la jurisprudencia de la Suprema Corte, sustraer de la Justicia Federal el conocimiento de los hechos denunciados. Lo que la ley número 49 castiga es el atentado contra las instituciones: y no es posible aceptar que por el solo hecho de usarse la prensa para cometer ese atentado, es decir, para estimular una conspiración contra las instituciones nacionales, hayan de quedar sustraídos sus autores de la jurisdicción de los jueces nacionales. Debe ser otro necesariamente el concepto de los «delitos de imprenta». Es la rencilla local, baja, subalterna; el insulto del periodista asalariado al mandón ensoberbecido; la crítica que el interés partidista encona; es decir, lo que no interesa sino al reducido escenario donde todo eso ocurre, de modo que no pueden ser sino los jueces locales los que apliquen el castigo».

—; Pero llamar «delitos de imprenta», por el hecho solo de usarse una prensa, a la prédica uniforme, constante y cada vez más agria y desenfrenada contra las instituciones nacionales, es cosa que no se aviene con la realidad de la hora presente! No son demasías de lenguaje, «delitos de imprenta». lo que la Justicia Federal debe perseguir y castigar, ya que para eso está la justicia ordinaria local; su función es más alta, pues interviene cuando está de por medio la estabilidad institucional».

• Que en cuanto a que la propaganda subversiva que contienen los impresos de la índole de los secuestrados pueda encuadrar en la calificación legal del

« privada, es una pretensión tan extraña, que ni aún puede
 « ser discutida seriamente. Tanto valdria decir que todo
 « ciudadano tiene el derecho de difamar al Congreso y de
 « comprometer la reputación, la tranquilidad y la seguridad
 « de los ciudadanos..... La ley no autoriza tal licencia,
 « sino que todo ciudadano tendrá el derecho de decir, de
 « escribir o de imprimir su opinión sobre cualquier asunto
 « bajo las restricciones únicas de no herir a nadie en sus
 « derechos, ni en sus bienes, ni en su reputación, de no
 « turbar la tranquilidad pública y de no intentar el derro-
 « camiento del gobierno. » Y cita, además, el Fiscal opiniones
 concordantes y tan terminantes de Kent y Blackstone para
 fundar el rechazo de la excepción y el castigo del acusado.

El fallo del Juez Federal, es de considerable extensión y se sostiene en él la incompetencia de la Justicia Nacional. La Corte lo hizo suyo, confirmando sin agregar una sola palabra más, « por sus fundamentos », según era frecuente en ese tiempo que la Corte lo hiciera. De modo, entonces, que puedo decirse con propiedad que aquella sancionó estos principios fundamentales: — a) Que el artículo 32 de la Constitución no se presta a interpretación alguna, pues es bien claro y terminante y se funda en principios cuya justicia y conveniencia no pueden desconocerse. *(Por lo pronto, todo texto legal y, más aún, constitucional se presta y debe ser interpretado de acuerdo con las necesidades de cada*

titulo IV de la ley número 49, debe tenerse en cuenta que Garraud enseña que « la provocación a la rebelión, sea por discursos pronunciados en reuniones públicas, sea por «affiches», sea por escritos impresos, está castigada como la rebelión misma » (T. 4 pág. 227). Cualquier exteriorización de voluntad en este terreno, el más mínimo acto preliminar importa ya el « alzamiento » que la ley quiere castigar; nada más se necesita para el perfeccionamiento del delito, que lo mismo se comete de palabra que de obra, a condición de que en ambos casos exista el designio en el agente de desorganizar institucionalmente la República, de perturbar su seguridad interior, en salvaguarda de la cual ha establecido sanciones penales la ley núm. 412. (Junio de 1919).

época; si una Constitución no pudiese interpretarse de esta manera no llenaría sus grandes fines, no sería un instrumento de progreso. En cuanto a que los principios en que el artículo 32 se funda son «de justicia y convenientes», basta poner de manifiesto que el abuso de un derecho, la licencia en la publicidad de las ideas conspiran contra el «bienestar general» que la Constitución consagra de una manera más fundamental y necesaria que la protección a los que insultan, difaman o incitan a la rebelión por medio de la prensa. Y he ahí una posibilidad de interpretar dicho artículo 32 concordándolo con aquella otra declaración.)—b) Que de la discusión habida en la Convención de Buenos Aires,—es otro argumento de la Corte,—resulta que fué un designio expreso que los abusos de la palabra escrita no podían caer bajo la jurisdicción nacional, como no caen los delitos comunes, porque la represión de esos abusos es privativa de la sociedad en que el abuso se comete, a la cual se la daña, es decir a la sociedad provincial. (Es indudable que ello debe ser así; pero cuando por medio de los diarios se insulta v. gr. al Presidente de la República o se incita a destruir las instituciones nacionales ¿han de ser las autoridades de la provincia donde ello se publique y no las de la Nación, que es la perjudicada, las que juzguen e impongan el castigo?)—c) Que no existiendo ley de imprenta en el orden nacional la que, por lo demás, no puede dictarse, no se puede aplicar penas por el órgano de la Justicia Federal a los que difamen por la prensa, y que cuando los artículos de la ley citados por el Fiscal hablan de injurias y desacato contra autoridades nacionales, no se refieren a las injurias y desacatos hechos por la prensa, los que tienen un carácter especial. (Peregrina interpretación, por cierto. Supóngase que el Presidente de la República se traslada un día, con su investidura, a presidir, en una capital de provincia deter-

minada celebración oficial, y que se le insulta o se comete con él un desacato. Pues bien, según la doctrina de la Corte, si la injuria o el desacato son verbales, directamente recibidos por el Presidente, debe ser juzgado el autor por la Justicia Nacional, y si lo fué por medio de un diario, corresponde el juzgamiento a los Tribunales Provinciales, por más que antes había expresado la Corte que la represión es privativa de la sociedad en que el abuso se comete. Y, acaso, ¿no fué también en el seno de la sociedad de la capital provincial que la injuria y el desacato de palabra se produjeron? ¿A qué queda reducido semejante postulado de que la represión es privativa de la sociedad en cuyo seno el abuso se comete, si no ha de poder reprimirlo cuando el abusador lo haga de palabra y no por la prensa?)

Tal es el concepto que informa el primer fallo interpretativo del artículo 32 de la Constitución; y pocos como él han logrado perpetuarse, a través de toda la vida de la Corte, afianzándose cada vez más, sin que nunca haya podido influir para variarlo ningún género de consideraciones, ni siquiera aquella, que parece elemental, de que si en 1864, apenas salido el país del despotismo, era indispensable, para asegurar el imperio de la libertad recién lograda, proclamar en absoluto las franquicias periodísticas, a la vuelta de cincuenta años, cuando ya la libertad de pensamiento no corre peligro, ni hay mandones que la amordacen, es sin riesgo para las instituciones que puede hacerse el distingo entre lo que es libertad de imprenta y licencia periodística, entre lo que es uso y abuso de la facultad de publicar libremente las ideas, sobre todo en épocas en que se emplea la prensa para predicar la disolución social y el desquicio del organismo político.

Con esa energía avasalladora que Sarmiento empleaba cuando había llegado a convencerse de que estaba en la ver-

dad, sostuvo en su mensaje inaugural de las sesiones del Congreso en 1974, que «el Congreso tiene el derecho de «legislar sobre los abusos y delitos de la palabra impresa, «a no ser que el abuso sea sinónimo de uso legítimo, o «la licencia sea la libertad por excelencia. *Mi opinión es «que los tribunales federales son los jueces naturales de «los abusos y delitos de imprenta»; «y puesto que la ley «de justicia federal define claramente lo que es sedición e «insurrección, y designa las penas en que incurren los «criminales, su deber es aplicarla en los casos en que la «palabra impresa provoque o aconseje la insurrección o la «sedición».*

«Otra jurisprudencia traería por resultado quitar al crimen «su requisito legal y esencial, que es la intención del que «lo comete, y colocaría solamente en el brazo que ejecuta, «la responsabilidad que corresponde en su mayor parte al «que inspira y provoca el crimen».

Sobre el concepto general de lo que ha de entenderse por libertad de imprenta, Sarmiento expresó en la misma ocasión:

«Nuestra Constitución prohíbe al Congreso restringir la «libertad de imprenta. Pero esta libertad no está como «ninguna otra libertad humana, en oposición y fuera de los «límites de las leyes, de manera que todo lo que condenan «las leyes ordinarias, no entra en la libertad de imprenta, «que no es restringida en el caso en que las leyes res- «tringen y condenan acciones y palabras».

«Nosotros no hemos inventado la lengua que hablamos, «ni creado la libertad de la prensa, de manera que por «libertad de imprenta hemos de entender y practicar lo que «entienden y practican todas las naciones de la tierra que «usan aquellas palabras o tienen aquella libertad».

En julio de 1864 pronunció la Corte la última palabra, haciendo suyas las del Procurador General, en una larga tramitación—siete años—originada por el nombramiento del Delegado Pontificio ante las autoridades argentinas.

« A nuestro querido hijo, Ilustre y Honorable Varón Justo « José de Urquiza, Presidente de la República Argentina, « Salud y bendición apostólica: » —le dice el Papa Pío IX. en 10 de septiembre de 1857, al hacerle saber que el Venerable Hermano Marino Marini, Arzobispo de Palmira, « preclaro en piedad, prudencia y doctrina », ha sido nombrado Delegado Apostólico.

En la credencial extendida al Delegado, la Curia Romana expresa sus teorías acerca de la extensión de sus atribuciones para el gobierno de las almas, en concordancia con los patronatos locales. « En primer lugar —dice el breve — *te damos facultad*, para que en todas las expresadas regiones puedas visitar las Iglesias Metropolitanas, Monasterios, « Preposituras, Hospitales inquiriendo el estado de esos « establecimientos, sus reglas, sus prácticas, su disciplina. « su vida y costumbres y dando después cuenta detallada « de cada una de estas cosas a la Apostólica Sede ». Es considerable la extensión del documento y, por lo tanto, de las facultades que en él se otorgan.

El Gobierno de la Confederación pidió informe al Tribunal de Justicia del Paraná (formado, como se sabe, por los magistrados que se nombraron para la Corte Suprema). El informe se produjo en febrero de 1858. Se hace constar en él que las facultades que otorga el breve son idénticas a las que en todo tiempo se confirieron a los Obispos de América sobre las que el Tribunal no encuentra necesario expedirse, concretándose a las cláusulas que pueden afectar la estabilidad del derecho vigente, sin perjuicio de establecer para aquellas otras « las reservas necesarias y conducentes a evitar las competencias y complicaciones a que

«podría dar lugar el libre ejercicio de ellas.» Se señala especialmente la facultad que se otorga al Delegado para conocer de todas las causas matrimoniales, siendo que ello está reservada por el derecho vigente al Metropolitano o al ordinario sufragáneo más inmediato. «El Tribunal se abs— tiene—dice—de entrar en consideraciones sobre la facultad «de dispensar el uso de huevos y lacticinios en los días de «cuaresma, porque las provincias de América disfrutaban de «los privilegios concedidos por las bulas de las Cruzadas». Firman los doctores José R. Funes, Baldomero García, José Benito Graña y Nicanor Molinas.

El 13 de febrero de 1858 el Gobierno de la Confederación reconoció al Delegado Apostólico y los años pasaron sin que se produjese en la práctica ninguna dificultad; hasta que en mayo de 1863, a raíz de haber pronunciado en el Congreso su mensaje de apertura el Presidente Mitre, el Delegado Apostólico se creyó obligado a señalar al Ministerio del Culto su extrañeza por una afirmación contenida en aquel documento, según la cual «en la elección hecha por el Cabildo Eclesiástico del Paraná de Vicario Capitular, sin recabar el permiso previo para declarar la Sede vacante, no existió desconocimiento del Patronato, sino un simple error». Expresaba el Delegado que el Cabildo no había faltado a ninguna obligación, pues no tenía la de recabar ese permiso al Gobierno «desde que era contraria a la libertad e independencia de la Iglesia». El Gobierno pidió la opinión del Fiscal General, quien la dió extensa y eruditamente, anticipando que ha de concretarse a saber si la cuestión entraba entre las prerrogativas del Patronato, ya que la existencia de este no había sido puesta en tela de juicio, discretamente, por el Delegado. Las conclusiones del Fiscal fueron que en caso de muerte de un Obispo el Cabildo debe comunicarlo inmediatamente al Gobierno y podrá proceder a elegir Vicario Capitular y que el nombrado

no podrá tomar posesión del cargo sin la aprobación del Gobierno.

Con fecha noviembre 20 de 1863 el Poder Ejecutivo en un decreto que contempla la situación creada por los términos en que el Gobierno del Paraná reconoció en 1858 al Delegado Apostólico, resolvió pasar el breve originario y los documentos posteriores a la Suprema Corte a los efectos del inciso 9 del art. 89 de la Constitución, esto es, que se reveían los procedimientos de las autoridades de la Confederación. El Procurador General, doctor Pico, a quien el Tribunal solicitó opinión, sostuvo la inalienabilidad del derecho de la Curia Romana para nombrar sus delegados, tanto más cuanto que en este caso las autoridades argentinas habíánlo solicitado, más que como enviado diplomático, «sino « invistiendo la delegación de facultades pontificias necesarias para arregar la disciplina de la Iglesia ». En estas condiciones, agregaba, el ejercicio de semejantes facultades por el Delegado Pontificio no podría dejar de producir competencias y perturbaciones que el Concilio de Trento quiso evitar cuando prohibió expresamente que un Obispo (y el Delegado lo es) ejerciera autoridad episcopal en la Diócesis de otro, *cualquiera que fuera la comisión o privilegio que alegara para hacerlo*.

Examinó el doctor Pico todos los alcances del breve y terminó dictaminando: que todas las cédulas y decretos que el Delegado expida, con excepción de los que otorgan indulgencias o dispensas matrimoniales, deben obtener previamente el pase del Gobierno; que el Delegado debe suspender el ejercicio de las facultades que puedan ir en detrimento de las de los Obispos Diocesanos; que debe abstenerse de levantar informaciones sobre las personas a quienes la Santa Sede pueda designar para Arzobispo u Obispos: y que, finalmente, debe suspender el Delegado el ejercicio de facultades judiciales, reservadas íntegramente a la potestad civil.

La Corte adoptó este dictamen como resolución y el gobierno conformó a él su conducta.

El senador don Martín Piñero fué injuriado y amenazado con torpeza por el mayor Benjamín Calvete mediante un artículo publicado en el diario *El Pueblo* y en ocasión de opiniones vertidas por aquel desde su banca legislativa. El Senado ordenó al fiscal que promoviera acusación contra Calvete; fundándose en el artículo 32 de la ley número 49 de 14 de septiembre de 1863 el doctor Salustiano J. Zavala que desempeñaba en la Capital aquel Ministerio Público, se presentó al juez de sección, el cual juzgó el caso como un abuso de la libertad de imprenta, sobre los que no legisla el artículo 30 de la ley número 49. Reedita el juez los fundamentos del fallo pronunciado en la causa seguida contra Argerich y termina declarándose incompetente. La Corte revocó esta resolución, fundando la suya en que la disposición del artículo 60 de la Constitución que dispone que los miembros del Congreso no pueden ser acusados, interrogados ni molestados por las opiniones que emitan en desempeño de su mandato legislativo, debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto; « porque « si hubiera un medio de violarla impunemente — agrega — « él se aplicaría con frecuencia por los que intentasen coartar « la libertad de los legisladores, dejando burlado su privilegio y frustrada la Constitución en una de sus más « tanciales disposiciones; que este sería, efectivamente, « el resultado si los libelos e impresos contra los Representantes por las opiniones que emitan en el Congreso « no pudieran ser acusados ante los tribunales de la Nación. » Y como una rectificación a los principios tan gene-

rales y categóricos expuestos por la Corte en el caso Argerich, debió puntualizar ahora «que la abstención que por « el artículo 32 de la Constitución se impone a la jurisdicción federal está circunscripta a aquellas infracciones « de las leyes comunes que pueden ser castigadas por « los Tribunales de Provincia, como son las ofensas a la « moral y demás que se cometan abusando del derecho « garantido a la prensa de poder discutirse libremente todas las materias religiosas, filosóficas y políticas; las injurias y calumnias inferidas a personas privadas o a empleados cuyas faltas es permitido denunciar e inculpar. « porque la Constitución no les ha concedido inmunidad, « pero que de ningún modo se extiende a aquellos delitos « que, *aunque cometidos por medio de la prensa*, son violaciones de la Constitución Nacional, o atentados contra « el orden establecido por ella y puesto bajo el amparo de « las autoridades que ha creado para su defensa.» (*Parece innecesario decir que el Jefe de Policía de la Capital es uno de los funcionarios creados para defender el orden establecido por la Constitución; y, sin embargo, la Corte encontró que el proceder de Argerich era un delito de imprenta*).

Como consecuencia de esta resolución de la Corte, el Juez Federal citó a Calvete para que reconociera la publicación incriminada; declinó el reo de la jurisdicción nacional, a lo que no se hizo lugar, por lo que interpuso los recursos de apelación y nulidad, alegando, entre otras cosas, que el fallo de la Corte en que el juez se basaba, había sido dictado sin dársele audiencia. No se concedieron los recursos, insistiéndose en la comparencia de Calvete, quien interpuso el recurso de queja ante la Corte.

Estuvo a cargo del doctor Juan Carlos Gómez el informe *in voce*, ante la Corte, pero sus razones no fueron valederas ni tuvieron eco en el seno del Tribunal, el cual las

rebatíó fácilmente en su fallo. Así, en primer término, al argumento del defensor de que las Cortes federales de los Estados Unidos no conocen de causas sobre libelos contra la Nación, opone la Corte este razonamiento: «Es cierto; «pero la razón de esta doctrina no es, como se supone, «la prohibición constitucional de legislar sobre la prensa, «sino la de que, vencido el término de la ley de 1798 que «imponía penas a los libelos contra el gobierno, contra el «Presidente de la Nación y contra los miembros del Congreso, y no habiéndose renovado posteriormente estas «disposiciones, no existe allí una ley nacional que confiera «a los tribunales federales jurisdicción para castigar esos «delitos, sin hacerse diferencia entre el libelo manuscrito «y el impreso.» Aprovecha después la oportunidad la Corte para reabrir el debate sobre el caso Jefe de Policía v. Argerich y decir lo que entonces calló, estimulada esta vez por el recuerdo que el doctor Gómez, defendiendo a Calvete, hizo de aquel antecedente. «Se objeta — dice el fallo — que «en el auto del juez de sección de esta provincia, confirmado por la Suprema Corte, en la causa promovida al doctor Argerich por injurias al Jefe de Policía en un escrito impreso, *se resolvió que los tribunales nacionales «eran incompetentes para juzgar sobre los abusos de la «libertad de la prensa.* En esta causa se trataba de un «simple abuso de la libertad de la prensa, pues ni el Jefe «de Policía, ni ningún otro empleado nacional, excepto «los miembros del Congreso, goza la inmunidad conferida «por la Constitución exclusivamente a éstos.» Finalmente consigna la Corte que hay error al interpretar su resolución en el caso Argerich como comprensiva de todos los delitos que pueden cometerse por medio de la prensa. Pero cuando se recuerda que en el mencionado caso Argerich la Corte sostuvo, por el órgano del Juez Federal, que el artículo 32 de la Constitución que prohíbe la jurisdicción

federal en materia de imprenta *no se presta a interpretación alguna*, pues es bien claro, y que esa prohibición es sin excepción de ninguna clase, según Vélez Sársfield lo hizo notar en 1860,—se comprende que tuviera empeño en aprovechar la primera oportunidad que se presentara,—y esa oportunidad fué el caso Calvete,—sino para rectificar su juicio, para reducir, por lo menos, la doctrina de su primer fallo a sus verdaderas proporciones. Pero, según antes se ha dicho, una especial predisposición ha llevado siempre a la Corte a calificar de «delito de imprenta» a toda infracción que se comete por los diarios. La doctrina sustentada en el caso Calvete es una excepción muy notable. Debido a que se trataba en realidad de una infracción al artículo 30 de la ley número 49, que protege la inmunidad de los legisladores, cometida ocasionalmente por medio de un diario, la Corte declaró la competencia de la justicia nacional; pero la teoría que ha prosperado, la que ha ido afianzándose con el tiempo es la de que no debe hacerse aquel distingo, y que basta que se trate de una publicación periodística para que la incompetencia se fulmine. (40)

Con motivo de que la Nación había sido demandada por dos soldados enganchados, que alegaban perjuicios emergentes del hecho de no haber sido licenciados cuando el plazo establecido caducó, la Corte sentó el principio de que el Poder Ejecutivo es soberano en su esfera y que es uno

(40) En el caso de la *Bandera Roja*, mencionado en la nota 39 se trataba en realidad de una infracción al artículo 14 de la misma ley número 49, es decir se incitaba «contra la seguridad interior de la Nación»; pero la Corte (agosto de 1919) declaró que se trataba de un delito de imprenta y revocó el auto del Juzgado Federal.

de los atributos de la Soberanía que el que la inviste no puede ser arrastrado ante los Tribunales sin su expreso consentimiento, por particulares, a responder de sus actos; pues «la facultad de juzgar supone la de emplear los medios «de hacer obedecer las resoluciones que se dicten; y los «Tribunales Nacionales ningunos tienen eficaces para someter al Jefe de la Nación a la obediencia de sus mandatos».

Concordante con estos principios se dictó en 1900 la ley número 3952, cuyo artículo 7º contiene un precepto que es la exageración de aquella teoría, pues dice que «las decisiones que se pronuncien cuando sean condenatorias contra «la Nación, tendrán carácter meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretende». (41).

En junio 10 de 1865 la Corte fué por fin integrada, con el nombramiento del doctor José Benjamín Gorostiaga.

He aquí otro de los «hombres del Paraná», tan representativo como del Carril de las modalidades y excelencias

(41) El autor publicó en la REVISTA JURÍDICA (junio de 1917) el siguiente artículo sobre esta cuestión.

«No fué sin librarse largas contiendas doctrinarias que se logró vencer el prejuicio secular de que el Estado no podía ser demandado; la «corona», en lenguaje del antiguo derecho español, no podía estar en juicio. El concepto absolutista del poder, que fundamentaba de manera tan sólida el gobierno, no se avenía con las corrientes liberales que tan en boga empezaban a estar cuando los Estados Unidos construyeron su organismo institucional. Así se explica que no daten de los primeros tiempos de la libertad americana, como pudiera creerse, dado el liberalismo de su Constitución, las actuales disposiciones relativas a los juicios en que la Nación es parte. Hasta no hace mucho tiempo, eminentes tratadistas sostuvieron que la nación sólo podía ser «parte actora» en los juicios.

«Imbuidos como estaban en la ciencia constitucional americana los autores

de esa política constructiva,—más ponderable por las buenas inspiraciones de sus actores, que por la obra efectiva que lograron realizar, — que ha hecho imperecedera la memoria de Urquiza.

Habían nacido Gorostiaga en Santiago del Estero el año 1823,

de nuestra organización, no era fácil, que en punto tan capital, se apartaran del modelo. Así se ve, en efecto, que la Suprema Corte Nacional no tuvo reparo de ningún género para interpretar el artículo 100 de la Constitución en el sentido de que cuando él se refiere a los juicios en que la Nación sea parte debe entenderse «part: *actora*». Se levantaron voces de protesta en el seno del Congreso,—que dictaba en esos momentos la ley de organización de los Tribunales Federales,—entre otras la de Quintana, que atacó la teoría de la Corte, sosteniendo que ella significaba hacer un distinguo que la Constitución había estado muy lejos de hacer.

«A semejante concepto obedeció, asimismo, la jurisprudencia sentada por la Corte de que era necesaria la venia legislativa para demandar a la Nación. A toda costa se deseaba obstaculizar la vía judicial en contra de ella; y si se logró, al fin, encauzarla y establecerla, fué sólo con restricciones tan exageradas que puede muy bien resultar burlado, en la práctica, el derecho del particular litigante. Es que, aun cuando ahora parezca inverosímil, tratadistas hubo, así americanos como argentinos, que extremaron tanto la teoría de la indemabilidad del Estado, que hasta creyeron ver comprometido el juego armónico de los poderes si uno de ellos pudiese reveer lo hecho por otro en ejercicio de sus propias atribuciones. Son dignas de destacarse, como prueba de ello, las siguientes palabras del diputado doctor Elizalde rebatiendo la opinión del diputado Zavalla, por Tucumán: «El señor diputado sostiene—dijo—que la Nación puede ser demandada; es decir que tanto el Congreso, cuando niegue el pago de una deuda, por ejemplo, como el gobierno, cuando niegue el cumplimiento de un contrato, pueden ser llevados ante la Justicia... yo le digo, entonces, que hará imposible el ejercicio de un poder público... el equilibrio de los poderes se rompería». Bien se ve leyendo semejantes palabras, hasta qué punto flotaban en el ambiente las enseñanzas del «Federalista».... Quintana logró, empero, imponer el criterio verdaderamente científico, rebatiendo el despacho de la comisión en el debate de 1833. «Se dice que nosotros tratamos de abrir una puerta—expresaba—que no se quiere absolutamente pagar aquello a que se ha comprometido con un particular ¿a dónde iríamos a parar? El Congreso no es Juez en ninguna parte del mundo; si un particular ha celebrado un contrato con el gobierno y ha adquirido derechos legítimos mediante ese contrato; si ha cumplido con la parte que a él le corresponde, no tiene porqué venir al Congreso a mendigar una limosna, sino que pide justicia»—es decir, demanda a la Nación ante los Tribunales.

en el seno de una de las familias de mayor arraigo del interior. No hay rastro de su actuación pública antes a 1852; es a la caída de la tiranía, en la más lozana juventud, cuando inicia su carrera de manera tan destacada y brillante, que bien pronto fué una figura prominentísima. Producida la

• Actualmente no se discute la procedencia de una demanda contra la Nación. En Estados Unidos existe la Corte de Reclamaciones que se reúne una vez por año y sólo clausura sus deliberaciones cuando ha sustanciado y resuelto todos los juicios entablados contra la Nación.

• Entre nosotros se dictó en 1900 la ley número 3952 que suprime la exigencia de la venia legislativa para los casos en que se deduzcan demandas contra la Nación en su carácter de persona jurídica. Ya antes, en 1893, una iniciativa semejante no logró la sanción parlamentaria. Mucho significa como conquista jurídica semejante ley, — cuya reforma acaba de proponerse en la Cámara de Diputados, siendo esta circunstancia lo que determina este trabajo; — y si no tenemos, como en Estados Unidos, una Corte de Reclamaciones es porque existe el temor de que su creación importaría trasgredir el artículo 100 de la Constitución.

• La ley número 3352 permite las demandas contra la Nación, sin venia legislativa, cuando procede en su carácter de persona jurídica, pero bajo ciertas condiciones, de las cuales la primera es haber mediado reclamación ante el Poder Ejecutivo, y que éste la haya denegado. «Si la resolución de la administración — dice el artículo 2º — demora más de seis meses, el interesado requerirá el pronto despacho, y si transcurriesen otros tres meses sin producirse dicha resolución, la acción podrá llevarse directamente ante los Tribunales, acreditándose el transcurso de dichos plazos», es decir un lapso de nueve meses, en total, que la modificación últimamente propuesta por el diputado Escobar reduce a tres meses. Desde luego, no tiene otro fundamento la reforma que la conveniencia, común a toda gestión, de lograr su solución lo más pronto posible. Por más impersonal que sea el interés del Estado, cuando discute derechos, apelan sus gestores a los mismos medios encaminados a lograr las mayores ventajas, como lo haría un particular; y, naturalmente, ocurre con frecuencia que el P. E., aunque desde el principio tenga el designio de rechazar la reclamación, exterioriza recién esa voluntad al finalizar el segundo plazo de la ley, esto es, nueve meses después de iniciada la gestión, durante cuyo tiempo, no pocas veces, y por múltiples circunstancias, los intereses del particular litigante sufren considerables perjuicios, aún logrando un fallo judicial favorable.

• La disposición del artículo 7º de la ley N° 3952 relativa a que los fallos que se dicten contra la Nación solo tienen carácter declaratorio, contraria abiertamente los más elementales principios jurídicos. ¿A qué quedaría reducido, en efecto, el de la igualdad ante la ley? Porque, de más está decirlo.

renuncia del gobernador de Buenos Aires, doctor Vicente Fidel López, el General Urquiza organizó el Consejo de Estado, del que Gorostiaga formó parte, al igual que Barros Pazos; fué designado poco después para integrar la comisión redactora del Código de Comercio: reemplazó en septiembre de 1852 al doctor Francisco Pico en la Asesoría de Gobierno y Auditoría General de Guerra y Marina.

cundo la Nación litiga en su carácter de persona jurídica lo hace en un pie de absoluta igualdad con el particular demandante. ¿Cómo ha de pretenderse, entonces, que este particular demandante, vencedor en el juicio, vaya a pedir a la parte vencida que cumpla el fallo? ¿A qué queda reducido el «imperio», la facultad inherente de hacer cumplir el juez sus sentencias?

• Pues bien, con traer aparejadas el citado artículo y un arduas cuestiones, fué votado sin discusión en la Cámara de Diputados. En el Senado sólo el senador de la Torre observó la redacción del artículo para que se hiciera extensiva a los casos en que la Nación fuese demandante, quedando satisfecho al manifestarle el miembro informante «que el artículo no exceptuaba el caso en que la Nación fuese demandante y que debía entenderse que era para todos los casos».

• Quiere la doctrina que no llegue nunca para el P. E., el caso de tener que negar a un juez el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus fallos y como, naturalmente, el P. E., no facilitaría esa fuerza para hacer cumplir una sentencia dictada en su contra, se cree que es preferible aniquilar, para esos casos, la facultad más preciosa que tiene un juez: el poder para hacer cumplir sus resoluciones. Francamente, es menos pernicioso, puestos a elegir entre los dos males, no amenguar de esa manera las facultades de la justicia, que prever la producción de un conflicto, que bien puede no sobrevenir, apenas las personas del gobierno se penetrasen de la ecuanimidad del fallo dictado en su contra.

• No hay en la ley disposición alguna que indique el camino a tomar si el gobierno de la Nación se negara a cumplir la sentencia judicial. ¿Sería, acaso, el de una nueva gestión administrativa, seguida de una nueva demanda judicial, para llegar, otra vez, hasta la sentencia incumplible, híbrida, desairada? El solo enunciado de ello basta para desear la suposición, por desatinada e ilegal, toda vez que el precepto de la cosa juzgada haría fracasar el intento.

• Resuelto el conflicto doctrinario a que se alude al principio, desechados los escrúpulos y colocada la Nación en condiciones de ser demandada, — que era, realmente, lo arduo de la cuestión — no tiene ya razón de ser la limitación que establece el artículo 7.º

• Es lástima que la reforma no comprenda, también, esta parte de la ley. •

En 1853 llegó a Santa Fe con la investidura de convencional por la provincia de Santiago del Estero. No necesita destacarse su participación de primera línea en la tarea constituyente, pues es harto conocida. Reveló allí una versación completa en derecho público y puso, sobre todo, a contribución una gran altura de miras; y su serenidad de espíritu, — en que se había trocado la briosa e impaciente juventud, — no fué, sino por excepción, perturbada en esas sesiones memorables donde llegaban todavía, de vez en cuando, los resplandores del incendio no del todo apagado. Debíó considerar que no era suficiente escribir la ley, redactar, con más o menos acierto, las cláusulas constitucionales, sino que debía contribuir a ponerlas en práctica, dando animación y vida a la letra muerta. Su identificación con la obra de Urquiza señalábalo para ser de los primeros en aquella tarea, al lado siempre del grupo más ponderado, compuesto por Zuviria, Gutierrez, Fragueiro, Zavalia, Zapata, etc., inspiradores desinteresados y probos, a base del inalterable respeto y admiración profunda que sentían por la cabeza directriz, el militar-estadista, que unia a todos. Fué, así, Gorostiaga delegado primero, junto con Zuviria y Fragueiro, para desempeñar el Poder Ejecutivo: Ministro del Interior después y también de Hacienda.

Como la mayoría de sus contemporáneos actuantes, y más aún si la filiación unitaria andaba de por medio, era Gorostiaga hombre grave y altivo, a veces áspero, y su afeblidad parecía estudiada, según anota una crónica de la época, la misma que nos cuenta que « tenía la barba negra, « el cabello ensortijado y compacto, la mirada ardiente y « expresiva, rasgos muy acentuados en su fisonomía que « le daban el aspecto de un hombre resuelto; su voz clara « y sonora era notable. »

Cuando renunció el Ministerio alejóse del Paraná, sin duda atraído por la vida de Buenos Aires, donde se radicó y ejer-

ció con éxito su profesión, labrándose una regular fortuna. No se conocen las causas de su repentino alejamiento de la vida pública; pero hay razones para suponer que llegara a cansarse de la política, al par que a serle poco llevadera la vida solitaria que hacía en la Capital de la Confederación. No era dado, según parece, — Zuviria nos dice que hasta era un misántropo, — a los placeres de la «causerie» familiar a que fueron tan inclinados los hombres de la época, algunos de los cuales se hicieron famosos sobre todo por ese aguante reciproco en que rivalizaban don Domingo de Oro, don Manuel Lucero, don Mariano Fraguero y don Facundo Zuviria. (42) Gustábale más a Gorostiaga el ambiente apacible del hogar, al extremo de que, por algún tiempo, los suyos residieron, sin asentarse, en el Paraná.

En 1862 era Diputado Nacional y desempeñaba la Vice Presidencia de la Cámara. Estaba en la plenitud de la vida y en la mayor sazón de su mentalidad poderosa. Su fama de jurista era indiscutible y la ponderación de su rectitud y hombría de bien excedía a toda medida; de modo que cuando en 1865 — el 10 de junio — fué nombrado Ministro de la Corte, se celebró en todos los círculos la buena elección hecha por el Presidente.

En noviembre de 1865 a la Corte le tocó resolver un caso de suma trascendencia institucional. No resulta del laconismo de su fallo la real importancia de la cuestión, expuesta con acierto en el dictamen del Procurador General.

El Senado Nacional, en mayo de 1865, había desaprobado

(42) Es famosa la aventura del primero, que Mansilla narra en sus «Memorias»; y de Zuviria se dice que fué elegido presidente de la Convención, por expreso y reservado convenio de sus colegas, que buscaban así lograr la brevedad de los debates.

la elección de un senador por la Provincia de Mendoza, lo que comunicó al Poder Ejecutivo para que, a su turno, lo hiciera saber al gobierno provincial con el objeto de que la Legislatura fuese nuevamente convocada. Así se hizo, pero los legisladores mendocinos encontraron que el Senado Nacional no podía declarar que la Legislatura, constitucionalmente formada, debía proceder a una nueva elección, pues ello implicaría que la primera había sido contraria a la Constitución Nacional o a la de la Provincia y que en el primer caso era solo la Suprema Corte de Justicia la que podría resolver y en el segundo debía considerarse extraña su solución al Senado Nacional, por ser repugnante al artículo 102 de la Constitución. Como consecuencia de ello se dirigió oficio al Ejecutivo provincial para que éste hiciera llegar al de la Nación los antecedentes del caso, a fin de que la Corte Suprema se pronunciase sobre la legitimidad de los poderes de la Legislatura. Como el gobierno observase este proceder, aquella insistió, agregando a su primer pronunciamiento una cláusula por la que se autorizaba el nombramiento de un gestor especial para llevar el asunto a la Corte. Este gestor fué el doctor Roque Pérez, quien se presentó en julio de 1865.

El Procurador General, doctor Pico, sostuvo que debía entenderse que más que una «demanda» se trataba de una «consulta» hecha por el Gobierno de Mendoza sobre si la Legislatura era o no constitucional. Pero como quiera que estaba de por medio la desaprobación hecha por el Senado de la elección de uno de sus miembros, la consulta podría, tal vez, trocarse en demanda, en la cual el demandado fuese el Senado Nacional, situación incompatible con nuestro sistema institucional, ya que de admitirse implicaría que puede llevarse ante la Corte, en grado de apelación, un reclamo contra los actos de otro poder relacionado con la elección de sus miembros.

La incompetencia judicial era evidente y la Corte así lo resolvió.

Hoy nos asombra que se pretendiera lograr del alto Tribunal un pronunciamiento como el que se solicitaba en nombre del Gobierno de Mendoza. Se ha afianzado en tal forma el concepto de la división de los poderes y, más todavía, el de que las ramas del Congreso son el juez único de la elección de sus miembros, que encontramos sin dificultad totalmente desprovista de fundamento legal una pretensión semejante. Pero, debe tenerse en cuenta que la Constitución estaba recién aplicándose y que para muchos todas sus trasgresiones debían ser sometidas a la decisión del Tribunal creado por ella para velar por su cumplimiento. Parecía ser esta la concepción que la masa tenía de los fines de la Corte, y menos mal que se aviniera a aceptar la existencia de un poder semejante al cual nada debía escapar. Y no es esto, por cierto, su característica menos interesante. Podían, en efecto, los hombres de ley hacer distingos y poner trabas fundadas en los textos para ellos tan claros y terminantes; pero lo cierto es que en los primeros tiempos, el concepto vulgar de la Corte era de algo así como de una panacea para todos los males institucionales.

Fué este caso de Mendoza el primero que la Corte tuvo sobre cuestiones en que más o menos estaba interesada la política; y si bien, estirando la lógica, se podría hacer caber un pronunciamiento judicial en caso como el narrado, en que, al fin y al cabo, existía de por medio la interpretación de textos legales, se guardó muy bien aquélla de hacerlo, con gran sabiduría y previsión, pues que ya vendrían las épocas en que la política sería la entraña oculta de no pocas cuestiones que habrían de llegar a sus estrados. Podría estar alterada la Constitución por tal o cual intervención mandada sin guardar las formas y conceptos que marcan los artículos 5º y 6º famosos; pero, ¡allá ellos!, deformados

siempre por el criterio ocasional de la exigencia partidista o de la ambición personal.

Con muy poca contribución de razones, — como que el caso ora claro e intergiversables los textos legales pertinentes, — la Corte estableció en diciembre de 1865 que en el interior de la República es libre de derechos la circulación de los productos nacionales y que una ley de la Legislatura de San Luis que impone derechos a los productos de la Provincia que salen fuera de ella, importa el establecimiento de Aduanas interiores que solo pueden crearse por el Gobierno Federal, en cuyo caso aquella ley es contraria a la Constitución.

Don Domingo Mendoza se había presentado ante la Corte pidiendo un pronunciamiento que salvaguardara sus derechos perjudicados por el impuesto que había sido obligado a pagar. El Tribunal, — integrado por el doctor Bernardo de Yrigoyen, debido a la enfermedad del doctor Delgado, — sancionó la doctrina de que los actos de las legislaturas provinciales pueden ser invalidados cuando la Constitución concede al Congreso en términos expresos un poder exclusivo y no obstante lo cual aquellas legislan sobre puntos comprendidos en esta exclusividad.

Este fallo es el punto de partida de una jurisprudencia que ha ido con el tiempo acentuándose hasta culminar en los casos presentados a la Corte con motivo del impuesto de « guías » sancionado por la Legislatura de Buenos Aires y que tanta repercusión tuvo en su hora, debido a la magnitud del recurso fiscal que por él se creaba.

Tales son las cuestiones de mayor trascendencia que la Corte resolvió hasta diciembre de 1865. El total de pronunciamientos asciende a ciento trece. No se registra una sola disidencia. Todos los fallos están suscritos por la unanimidad de los jueces; fallos admirables no pocos de ellos por el gran sentido jurídico que los inspira, deben pasar, sin embargo, a la posteridad anónimamente, es decir, sin la marca personal de su autor. Sabido es que el procedimiento nuestro, al revés del de Estados Unidos, no preceptúa la obligación de que cada miembro del Tribunal exprese las razones de su voto. En los acuerdos semanales se discute el asunto y se resuelve la redacción del fallo, del que uno solo se encarga o es el producto de la colaboración de varios, pero que todos firman, como dueños y autores de las ideas y doctrinas que lo fundamentan. Es un fallo de la Corte, se dice, entre nosotros; mientras que en el *Repertorio Americano*, sobre cualquier cuestión, puede saberse quien fué el inspirador de la sentencia. En la Colección de nuestra Suprema Corte solo se conocen las opiniones individuales en los casos en que hay disidencias.

No figuran en este Capítulo sino las causas que sirven para poner de manifiesto el criterio de la Corte sobre cuestiones constitucionales y de derecho público. La interpretación del derecho común, en los casos en que por razones de vecindad o nacionalidad corresponden a la Justicia Federal, no ofrece interés, desde que venía haciéndose normalmente por los tribunales anteriores, sobre la base de la legislación española todavía en vigor. Naturalmente, son cuestiones de competencia las que afluyen en mayor número a la Corte, durante este primer período. No existe sino entre

algunos profesionales un claro concepto de la Justicia Nacional; la idea de lo excepcional de su jurisdicción no ha de generalizarse y arraigarse sino con el tiempo, — y eso no del todo. Mientras tanto, en esos años de 1862 a 1865, en que no reposaba todavía la autoridad en bases muy firmes y en que la alteración del orden dependía de un accidente cualquiera, en que la vida no estaba suficientemente garantida, ni lo estaba la propiedad en la campaña, debido, sobre todo, a la falta de los necesarios organismos del Estado, la implantación de un poder judicial creado por la Constitución, que había nacido con tantos prestigios, trajo como una sensación de alivio; y todos los que habían sufrido las consecuencias de la mala organización anterior,—desde el particular que pretendía que la Corte reviera un fallo de la justicia provincial por mala aplicación de la ley, hasta la Legislatura de Mendoza empeñada en que la Corte dijese si el Senado Nacional había estado en lo justo anulando una elección,—volvieron los ojos hacia el alto tribunal de quien el pueblo parecía esperar lo todo.

Es así, entonces, que durante los primeros años fué casi una tarea permanente de la Corte,—mucho más que ahora,—la de rechazar improcedentes recursos, al par que iba dando las normas que habrían de reducir a sus verdaderas proporciones las facultades de la Judicatura Nacional.

Mucho se ha andado en este camino; pero no al extremo de conseguirse que los *recursos extraordinarios* improcedentes no sean el material mayor de la colección de fallos.



CAPÍTULO VI

1866-1870

Los abusos cometidos por las autoridades de una provincia contra un extranjero pueden determinar la intervención de los poderes nacionales. — *Manuel Aguilar v. Provincia de Corrientes*. — La Justicia Federal no es competente en materia criminal por razón de la nacionalidad de los interesados. — De nuevo los delitos de imprenta. — *Procurador fiscal v. D. W. Laforest*. — La libertad individual y las facultades del P. E. bajo el estado de sitio. — El ejercicio de la acción pública. — La rebelión de Cuyo en 1867. — Los sucesos de Córdoba en el mismo año. — Prisión del juez federal. — El doctor BENITO CARRASCO es nombrado Ministro de la Corte. — Los derechos garantidos por la Constitución. — El respeto a los jueces. — Entra en vigencia el Código Civil. — Los delitos electorales. — Nombramiento del doctor MARCELINO UGARTE. — La Corte y el doctor Rawson.

Para sustraerse a una citación policial, recibida mientras estaba enfermo en cama, el súbdito español Manuel Aguilar y Sevilla, radicado en la ciudad de Corrientes, abandonó su casa y se asiló en la del vice-cónsul italiano; tampoco se consideró seguro y se escapó de noche, burlando la vigilancia establecida, hasta lograr embarcarse en el «Triunfante», surto en el puerto. Por intermedio del jefe de la escuadrilla italiana, a la que aquel barco pertenecía, Aguilar hizo preguntar al gobernador de la provincia, don Manuel Ignacio Lagraña, la causa de la orden de prisión dada

en su contra. Se aludió, en respuesta, a algo que se relacionaba con la violación del bloqueo; pero el perseguido destruyó fácilmente la imputación, exhibiendo los documentos del caso, por lo que, en su concepto, se trataba solo de resentimientos particulares, todo lo cual se puso pronto de manifiesto. En efecto, una *india*, menor de edad, que Aguilar tenía en su casa como pupila, «fué enlazada « como una bestia y llevada por la fuerza, en pleno día y « públicamente, sin que ninguna autoridad remediara el « brutal despojo » (43). Además, la policía obstaculizó la venta de sus muebles, que aquel quería efectuar por medio de su esposa, para poder ausentarse.

El 11 de enero de 1866 Aguilar se presentó ante la Corte, relatando estos hechos y formulando protestas contra la provincia de Corrientes, por haber ordenado su prisión, ultrajándolo y vejándolo, a él y a su familia, hasta el extremo de obligarlo a abandonar la patria de sus hijos y tirar sus intereses. Demandaba por daños y perjuicios, fundándose en la Constitución Nacional, violada en sus artículos 18, 20 y 31 por el gobierno de ese Estado, que pretendió penarlo sin juicio previo, sacándolo de sus jueces naturales. Solicitaba, en consecuencia, que la Corte declarase que el gobierno de Corrientes había violado la Constitución Nacional y de la Provincia y que se la condenase al pago de los daños, *reparación de su honra, padecimientos morales* y gastos originados.

La Corte pidió dictamen al Procurador General y éste, al expedirse, sostuvo las siguientes teorías que fueron después los fundamentos del laconico fallo: Cuando el oficial de policía, — dice — se presentó a casa de Aguilar para ci-

(43) Tal fué la denuncia de Aguilar; pero el doctor J. M. Guastavino, Secretario de la Corte, hace constar que en su presencia aquél le confesó que había exagerado los hechos.

tarlo, éste, que ese día estaba en cama, prometió presentarse apenas se mejorara, lo que no hizo, sino que, por el contrario, de noche, abandonó su casa y se refugió en un buque extranjero. En estas condiciones, «cualesquiera « que fueran las intenciones del gobierno, al citar a Aguilar al departamento de policía, no habiéndose verificado « la prisión *presumida*, por la rebeldía de éste, *no hay « hecho alguno* a que pueda darse el nombre de violencia, « aunque hubiera habido primitivamente un mandamiento « a prisión y esta prisión fuese arbitraria e injusta.» De haber existido perjuicios, pues, no eran estos ocasionados por la orden de prisión sino por un acto *voluntario* de Aguilar al desobedecer a la autoridad y ausentarse para Buenos Aires.

Lo verdaderamente importante de la opinión del doctor Pico está en este pasaje del dictamen: «La Corte tiene, sin « duda, jurisdicción bastante para conocer de la acción de « un extranjero contra una provincia, cuando se pide el « cumplimiento de una obligación convencional, o los perjuicios que resulten de una violencia consumada. Si el « poder judicial de la Nación no tuviese la facultad de decidir estos casos, dando a las partes las garantías que ofrece « un procedimiento judicial, ellas tendrían necesariamente « que ser decididas por el Presidente de la República en la « forma de un reclamo diplomático. De uno u otro modo « la intervención del Gobierno Nacional es necesaria.» Pero para ello es indispensable que la violencia esté consumada, pues de no ser así las autoridades nacionales no tienen facultad para interrumpir a los gobiernos provinciales en el ejercicio de las funciones que por la Constitución les competen.

En efecto, si las autoridades provinciales tenían motivo para prender a Aguilar, fundadas en que este había introducido efectos robados, es indudable que procedían en

ejercicio de legítimas prerrogativas, de lo cual no puede emerger una acción de daños y perjuicios, salvo el caso de que existiera una violencia consumada. Ya en trance Aguilar de ponerse a salvo de las autoridades provinciales, las circunstancias fueron determinando las diversas peripecias de su odisea, la cual a través de cincuenta años, toma los caracteres típicos de los casos cuya producción posible determinó, entre otras cosas, la necesidad de crear una justicia especial ajena a las malquerencias locales, a la cual pudieran los extranjeros acudir en demanda de protección de sus intereses, esto es, al solo efecto de lograr reparaciones *civiles*. Parece aquí innecesario decir que en materia *criminal* los extranjeros no gozan de la prerrogativa de un fuero especial, como lo tienen para los asuntos puramente patrimoniales, ya que los inherentes al régimen de la familia son de la competencia de la justicia local. No resulta por ningún concepto justificada aquella diferencia, esto es, no hay razón para dar mayor importancia a los intereses pecuniarios que a los relacionados con la libertad y la vida de los extranjeros como para que no fueran estos casos también sometidos á los jueces instituidos para dar una mayor garantía a aquéllos. Más expuestas estaban por ese tiempo la libertad y la vida que la propiedad y la bolsa; más fácil era que estas últimas se perdiesen después de secuestrar o de matar a su dueño.

Este precepto fué consagrado por la Corte al confirmar un auto del Juez Federal de Córdoba, quien sostuvo « que « la Justicia Nacional no tiene jurisdicción sobre *delitos* « comunes, aunque sea un extranjero el paciente y el que « los acuse, y aunque solo entable la acción civil que nace « del delito, pues por el artículo 2º inciso 2º de la ley de « jurisdicción de los Tribunales Nacionales, solo la tiene en « las *causas civiles* en que sean parte un ciudadano argen- « tino y un extranjero. » Ahora bien, si el delito es de los

enumerados en la ley federal número 49 o una infracción del Código Penal, cometida en lugar donde la Nación tiene jurisdicción exclusiva, como una estafa al Banco de la Nación, entonces la Justicia Federal es competente, pero sin tener para nada en cuenta la nacionalidad de las personas.

Fué el caso que don Santiago Giacometti se presentó ante el Juez de sección denunciando que una partida armada le intimó prisión, sin motivo y lo condujo a presencia del jefe del cuartel «Córdoba Libre», don Rumualdo Pizarro, quien después de haberlo insultado, lo mandó incomunicado, luego de amenazarlo con *escupirlo en el rostro*, todo esto por atribuirle participación en una revuelta de que jamás tuvo la menor noticia; «que después entró el doctor Manuel D. Pizarro y ordenó que se le llevara a la cárcel pública con prevención expresa de *meterle bala* en el «acto que hablase una palabra.» Son los términos textuales del afligido Giacometti, cuyo domicilio y casa de negocio se allanaron con violencia, rompiéndose a balazos las puertas. Se hacía mérito en la presentación al Juez de la prisión efectuada sin orden escrita de autoridad competente y de los destrozos materiales que daban lugar a una acción por daños y perjuicios, demandables ante la justicia nacional por tratarse de un extranjero y de un argentino. Giacometti no fué oído. El Juez tuvo en cuenta que se trataba de un delito común y que ante la Justicia Nacional no podían demandarse las acciones *civiles* nacidas de él.

Podrían exagerar, tal vez, un poco la tinta de sus relatos Aguilar de Corrientes y Giacometti de Córdoba; pero existía, seguramente, en ambos casos, una gran parte de verdad, ya que tal era la vida en las provincias por esos años en que la fuerza y lo arbitrario, fueron la razón de muchos predomios locales. Todavía en 1879 el doctor Rafael García, de memorable actuación como Juez Federal de Córdoba,

debía resolver, casi a diario, recursos de *habeas corpus* deducidos por personas contrarias a la opinión política de los hombres del Gobierno provincial, que atemorizaban así a los que no se sometían a las exigencias de dicho círculo. En una ocasión, era día de elecciones, veinte votantes fueron detenidos y enviados a un batallón de enganchados — no se llamaba ya «Córdoba Libre» como en el caso de Giacometti, en 1866. — Deducido el recurso, el Juez Federal ordenó la inmediata libertad de aquéllos; el gobernador no se avino de buen grado a cumplirla, pero debió hacerlo ante la enérgica actitud del Juez. Subieron de punto en tal forma los abusos contra la libertad de las personas, por móviles políticos, que llegó un momento en que el Juzgado Federal fué el único baluarte institucional, al cual acudían los ciudadanos, deduciendo recursos para obtener la soltura de los que, contra su voluntad, habían sido incorporados a la tropa de línea.

En mayo de 1866 la Corte, al confirmar un fallo del Juez de Sección que condenaba a un peón de Aduana a tres años de trabajos forzados por haber robado una botella de aceite en los Depósitos Fiscales, resolvió remitir los antecedentes al Poder Ejecutivo « invitándolo a ejercer en el presente caso « el derecho de indulto que le acuerda la Constitución Nacional ». Encontraba la Corte que la pena mencionada no estaba en proporción con el valor de lo hurtado.

Sin embargo, la ley en que el fallo se fundaba (Nº 49 de 14 de septiembre de 1863) está aún en vigencia; y si bien sus penas parecen a simple vista excesivas, se justifican porque están establecidas para aplicarse solo a los empleados de la Administración, la cual necesita garantizarse de la honra-

dez de sus dependientes y ejemplarizar con un castigo grave, impuesto al que resulta infiel en la tarea encomendada de ser guardianes de los efectos confiados a la custodia del fisco. Los empleados de Correos que se apoderan de una carta o sustraen los valores son también condenados a trabajos forzados. Nada más insignificante, a simple vista, que una carta; pero si la ley fuera benigna para con los que las roban, no sería posible afianzar los negocios que se hacen sobre la base del secreto postal.

No es la botella de aceite; es el peón de Aduana que roba.

Se recordará que la Corte, al pronunciarse en el caso del Mayor Calvete, parecía haber reaccionado contra su primer fallo sobre la misma materia, dictado en la demanda contra el doctor Manuel G. Argerich.

En el primer caso sostuvo, confirmando la sentencia del doctor Heredia, que el artículo 32 de la Constitución, que prohíbe la jurisdicción federal en materia de imprenta, *no se presta a interpretación alguna*, pues es bien claro y la prohibición que contiene es sin excepción de ninguna clase. Lo interpretó, sin embargo, la Corte cuando tuvo que resolver el caso Calvete; y lo interpretó en el sentido de que tratándose en él de una infracción del artículo 30 de la ley número 49, que protege la inmunidad de los legisladores, *cometida ocasionalmente por medio de un diario*, la Justicia Federal era competente. Sin embargo, poco tiempo después, (octubre de 1866) la Corte volvió a su primitiva teoría de que el artículo 32 prohíbe la jurisdicción federal en materia de imprenta, con el agravante de que en este tercer caso no se trataba de insultos personales, como los inferidos por Argerich al Jefe de Policía, (1^{er} caso) sino de la viola-

ción de la misma ley N° 49, violada antes por Calvete; pues en el periódico *La Estafeta*, dirigida por don W. Laforest, se cometía un delito contra la seguridad interior de la Nación, tal como Calvete lo había cometido contra la inmunidad parlamentaria, mediante la prensa en ambos casos. ¿Qué diferencia hay entre la infracción de la ley N° 49 cometida en las columnas de *El Pueblo* por Calvete y la infracción de la ley N° 49 cometida por Laforest en las columnas de *La Estafeta*? Absolutamente ninguna. Pues bien,—nunca contradicción más flagrante—en el primer caso (año 1864) la Corte declaró que la Justicia Federal era competente y en el segundo caso (año 1866) declaró que aquella era incompetente.

Son dignos de consignarse los argumentos irrefutables del Procurador Fiscal, doctor Salustiano Zavallia, acusador también en el caso Calvete. La Corte no los refutó, por cierto, sino que al confirmar «por sus fundamentos» el fallo del Juez de Sección, aceptó como buena la teoría recordada por este, sentada en el caso Argerich, según la cual el art. 32 es «ininterpretable». (44)

En julio de 1866 habían sido suspendidas las garantías constitucionales en todo el territorio de la República. Por orden directa del P. E., la policía redujo a prisión a don

(44) Dijo el Fiscal Federal, doctor Zavallia:

Es un error general creer que la Justicia Nacional carece absolutamente de jurisdicción sobre delitos de esta clase; sin embargo nada es más erróneo, y era tiempo ya de que la verdadera doctrina fuese consagrada por una decisión del Poder a quien corresponde la interpretación definitiva de la Constitución y de las leyes.

¿De dónde nace ese error? ¿Acaso no se puede delinquir por medio de la prensa? ¿Y la libertad de imprenta no es susceptible de abusos? ¿Y sus

Juan José Soto, quien se presentó ante el Juzgado de Sección deduciendo un recurso de amparo a su libertad, al par que hacia consideraciones acerca de la improcedencia del estado de sitio hecho extensivo a todo el país, siendo que, teniendo en cuenta las razones determinantes—la Guerra con el Para-

abusos no pueden herir derechos ajenos, de la sociedad como de los individuos? Semejante doctrina es insostenible: *scribere est agere*, es un axioma de derecho, la palabra es algo más que el pensamiento, es el pensamiento en acción, es un acto exterior tan susceptible de dañar como otro cualquiera de la vida humana. El honor que vale tanto como la vida y la paz del hogar doméstico que es uno de los bienes más apreciables, ¿no pueden ser heridos de muerte por la calumnia que es un delito de la palabra? ¿El orden público, las instituciones, la seguridad y la integridad del Estado, no pueden ser amenazados por el abuso de la libertad de la palabra que incita a la sedición, a la rebelión y a la traición? Si pues la palabra puede convertirse en delito contra la sociedad o los individuos, no puede menos de estar en el mismo caso la prensa, que es la multiplicación de la palabra y que así como puede llevar la luz de la verdad por todas partes, puede también pregonar la infamia, la calumnia y la traición por las cien trompetas de la fama.

El error no nace pues de que la palabra sea siempre inofensiva y de que no pueda delinquirse por medio de la prensa; nace de la falsa interpretación que se da al artículo 32 de la Constitución: «El Congreso Nacional no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la Jurisdicción Federal.» ¿Puede desprenderse de esta prescripción que el Congreso no puede dictar ley alguna sobre imprenta, que los delitos que se cometan por medio de la imprenta jamás pueden caer bajo la jurisdicción federal? Indudablemente no: lo que no puede hacer el Congreso es dictar leyes que *restringan* la libertad de imprenta; pero puede dictar leyes que no la restrinjan, que reglamenten su ejercicio y que definan sus delitos; declarar delito de imprenta la injuria, la calumnia y la incitación a la traición, no es restringir la libertad de imprenta, como no es restringir la libertad individual declarar delito el robo o el adulterio; porque la libertad que es un derecho tiene su límite natural en los derechos de las demás, límite que no puede traspasar sin convertirse en licencia, en abuso o en delito. Respecto a la jurisdicción sobre delitos cometidos por medio de la prensa, lo que no puede hacer el Congreso en virtud de la citada restricción, es someter los delitos comunes de imprenta a la jurisdicción federal, no los delitos contra la Nación que se cometen por la prensa. Sostener lo contrario es suponer que por medio de la prensa no se puede cometer delito contra la Nación y sí contra la Provincia, o que si puede cometerse contra aquélla carece de los medios de represión necesarios. Pero una y otra suposición es

guay—bastaba con que lo hubiera sido en la parte del país amenazada por la invasión.

El Juez ofició al P. E. para que se dejara sin efecto la orden de traslación de Soto mientras se resolvía la constitucionalidad de la medida. Rawson, Ministro del Interior, firma la enérgica respuesta del Gobierno, «Tengo orden del señor «Vice Presidente—dice—para contestar a V. S., que el «Gobierno está dispuesto a llevar adelante la ejecución de la «medida mencionada, que fué adoptada en ejercicio de un «derecho propio y perfecto del P. E. Nacional.» Agrega que mientras la justicia, resolviendo un caso *entre partes*, no

insostenible: si se puede atentar al orden público en la Provincia, se puede igualmente en la Nación; la incitación a la revuelta es un delito contra el cual se defiende la Provincia por medio de sus leyes y de sus tribunales. ¿y la incitación a la rebelión y a la traición podrían ser actos inocentes por ser contra la Nación? Las instituciones provinciales están garantidas por la Nación y todavía se defienden contra los abusos de la libertad de imprenta que pudieran amenazarlas; y la Nación que tiene que cuidar de su propia conservación y que tiene además a su cargo la conservación de las Provincias, ¿no puede contar con medios de defensa? Sería un ser incompleto o imperfecto, incapaz de bastarse a sí mismo y de prestar la protección debida a los demás.

La interpretación absoluta que se da al artículo 32 de la Constitución, conduce a estas consecuencias a cual más absurda: contra la Nación es lícito incitar al pueblo a la rebelión; es lícito en estado de guerra forjar noticias y documentos falsos que favorezcan al enemigo con el propósito de facilitar su triunfo, infundiendo el desaliento en nuestras filas; es lícito dar al enemigo avisos importantes, con tal de ser por la prensa, indicarle los medios de atacar a nuestro ejército con ventaja, los puntos por donde puede penetrar en nuestro territorio y los medios de apoderarse de una plaza importante; es lícito aconsejar a nuestros jefes y soldados que deserten de sus filas, que traicionen a la patria y se pasen a las filas del enemigo; es lícito en fin todo abuso contra la Nación, hasta el de predicar el asesinato del Presidente de la República y de sus Ministros, como un medio de operar un cambio del Gobierno o de trastornar el orden público. O todos estos son reales y verdaderos delitos, los más graves tal vez que pueden cometerse contra una sociedad, y la Nación carece de los medios de reprimirlos, tiene que sufrírselos en silencio y sancionarlos con la impunidad. Una interpretación que conduce a tales absurdos no puede menos de ser equivocada.

declarase que el estado de sitio estaba mal dictado, no podía discutirse la procedencia de las medidas tomadas por el Poder Administrador. Rebatíó el Juez las expresiones ministeriales, por cuanto sin declarar todavía ninguna inconstitucionalidad se había limitado a pedir la suspensión de la medida dictada contra Soto, « y lo pidió sin ordenarlo—dice— en la « creencia de que con ello no se desvirtuaba las facultades « del P. E., ni se oponía al fin que este se había propuesto.» Pero, teniendo en cuenta el Juez que ya Soto concretaba su pedido, de una manera categórica, en el sentido de que se oficiara directamente al Jefe de Policía para que fuese puesto en libertad, y considerando que ello pugnaba con el principio de la independencia de poderes, no hizo lugar, mandando que aquel esperase la resolución definitiva.

Llevado el asunto a la Corte, el Procurador General lo concretó en esta forma: « Si el Juez tenía facultad para « contrariar los procedimientos del P. E., por un auto inter-« locutorio, pendiente la cuestión principal.» El Tribunal confirmó el auto apelado, esto es, no se hizo lugar al recurso de amparo de la libertad que se había deducido.

¿ Cabe un recurso de amparo a la libertad bajo el estado de sitio? De este distingo emerge el interés del caso de Soto, cuya presentación ante el Juez Federal no importaba un *hábeas corpus* puro y simple. Sí, pues, el estado de sitio significa la suspensión de las garantías constitucionales y una de estas garantías es la de la libertad personal, ¿ cómo habría de ser esta violada si momentáneamente estaba suprimida? Pero no por eso quedan sin funciones, bajo el estado de sitio, los Jueces encargados de amparar los derechos ciudadanos. De la propia comunicación del Ministro, en el caso de que nos ocupamos, se desprende que cabe la posibilidad de un pronunciamiento judicial que tuviera la virtud de declarar inconstitucional la ley que establece el estado de sitio, a raíz de cuyo pronunciamiento el Go-

bierno no podría hacer objeción a la orden de poner en libertad al promotor del recurso.

En 1866 el estado de sitio había sido dictado por el Congreso para todo el territorio de la República, fundándose en que existía peligro del *ataque exterior* que menciona el artículo 23 de la Constitución. Soto rebatía en su escrito la generalización de la medida a todo el país, por encontrar que aquel peligro no existía con respecto a la Capital Federal, en cuyo caso la ley contrariaba el precepto del artículo 23; y siéndolo así, la declaración de inconstitucionalidad que impetraba debería traer por implicancia necesaria la procedencia del *habeas corpus*.

Ya he dicho en otra parte de este libro que en los primeros tiempos era general la creencia de que no existía ningún caso de interpretación de un texto constitucional que no fuese del resorte de la Justicia Nacional. La pretensión de Soto era un caso típico de esa tendencia. Sancionada por el Congreso la ley que suspendía las garantías constitucionales en todo el país, por haberlo así solicitado el P. E., que es quien conocía las reales exigencias del momento ¿habría de poder la Corte analizar estas cuestiones de hecho y declarar que por no existir peligro de *ataque exterior*, el estado de sitio era innecesario en la capital y la ley que lo establecía resultaba por ello inconstitucional?

Soto fué puesto en libertad; de modo que se perdió la oportunidad de que la Corte se pronunciara sobre tan ardua cuestión. No la aprovechó tampoco cuando algún tiempo después resolvió un caso análogo, planteado por don Agustín de Vedia, también detenido bajo el estado de sitio, quien de una manera más expresa que Soto articuló la improcedencia e inconstitucionalidad de la suspensión de las garantías. Se fundó la Corte para no conocer en el recurso interpuesto por Vedia de la sentencia denegatoria del Juez, en

que la causa «no tenía el carácter que exige el artículo «218 de la ley de procedimientos para que se permita *escribir en derecho*.»

Acusado don Félix Egusquiza del delito de traición,—cometido en su carácter de agente confidencial del Paraguay, a donde remitió, desde Buenos Aires, armas y otros efectos para el gobierno,—fué absuelto por el Juez Federal en vista de que solo los ciudadanos argentinos y los que deben obediencia a la Nación, pueden cometer aquel delito. El Procurador Fiscal apeló de esta absolución; pero el Procurador General dijo «que no *insistía* en la acusación deducida.» La Corte expresó, entonces, que ello importaba separar de su conocimiento el punto relativo a la culpabilidad de Egusquiza, y que no podía el Tribunal proceder de oficio, esto es, pronunciarse sobre el alcance del delito de traición sin que exista una causa, una contienda de partes, desaparecida en este caso por el desistimiento del Procurador General.

Algunos años después la Corte, en un caso más o menos parecido, sostuvo que no podía sustraérsele de esa manera, por la voluntad de un solo funcionario, el conocimiento de determinado asunto. Con este motivo, entonces y después, se ha discutido mucho acerca de la propiedad exclusiva que el Ministerio Fiscal se atribuye de la acción pública, al extremo de que pueda usarla o no usarla, renunciarla o mantenerla, según sea el designio personal de los respectivos funcionarios. Se ha traído al debate el origen de nuestro Ministerio Público, haciéndose atinadamente la diferenciación entre el modelo americano y el francés; pero, con todo, el hecho real es que, según nuestro sistema procesal—vigente también para la Justicia Federal—si el Agente

Fiscal de primera instancia pide el sobreseimiento en un juicio correccional, el Juez *está obligado* a dictarlo, y no tiene la facultad que la ley acuerda, para cuando se trata de delito cuya pena exceda de un año de arresto, de elevar el expediente al Fiscal de Segunda Instancia, quien puede ordenar al inferior que promueva acusación. Puede afirmarse que no existe una facultad más amplia y discrecional entregada al arbitrio de un solo funcionario, de quien depende, *sin control*, paralizar un proceso. Un Juez, con ser mayor su categoría, no podría hacerlo; y si las Cámaras de Apelación, en último término, pueden dictar resoluciones inapelables, ello es solo como resultado de una deliberación de sus miembros, es decir, del control que en aquel caso falta.

Respecto de la facultad del Fiscal de Segunda Instancia para desistir de una apelación—*en caso de absolución*,—interpuesta por el de Primera Instancia, no ha sido uniforme y permanente la doctrina. Pero lo que no cabe discutir es que si en Primera Instancia el Agente Fiscal ha acusado y el Juez ha dictado sentencia condenatoria, no entra en las atribuciones del Fiscal de Cámara desistir de la acusación, renunciar a la acción puesta ya en movimiento, acogida por el Juzgado y que ha servido de fundamento a una sentencia *condenatoria*. (45)

(45) Un caso hay, sin embargo, y muy reciente. Acusado por el Procurador Fiscal de la Capital el doctor Benito Nazar Anchorena, por haber enviado padrinos a un diputado nacional con motivo de manifestaciones hechas por éste en la Cámara, el Juez Federal lo condenó a la pena establecida en la Ley N° 49. Apelada la sentencia, el Fiscal de Segunda Instancia, a quien la Cámara dió vista sobre la competencia, renunció a la acción (no pudo desistir porque no habla, naturalmente, apelación del Procurador Fiscal) y la Cámara, que habría podido absolver al condenado, no entró al fondo de la cuestión, por cuanto admitió la doctrina del Fiscal, lo que le sirvió para declarar que el Tribunal no tenía asunto sobre el cual pronunciarse.

En 1867 estalló una rebelión en Mendoza, triunfando en los primeros momentos y apoderándose sus jefes de la autoridad. Se incautaron, así, de la Aduana y la *desnacionalizaron* por decreto, y procedieron a percibir los derechos de importación. Llegó el General Paunero con las tropas de la Nación y después de restablecer el antiguo orden de cosas, dispuso que la Aduana procediera a liquidar y cobrar los derechos que debieron percibirse desde el día en que los rebeldes se apoderaron de ella. Naturalmente, los que ya habían abonado a éstos las sumas exigidas, se negaron a hacerlo nuevamente, produciéndose el caso judicial que dió ocasión a la Corte para decir: «que no existiendo una disposición legislativa que comprenda directamente este caso, debe ocurrirse para resolverlo a los principios de justicia y equidad que son los fundamentos del derecho. Que es un hecho aceptado que los introductores fueron requeridos para el pago por los rebeldes que tenían en su poder los depósitos y que atenta la idea que el propio Fiscal ha formado de su rapacidad y crueles procedimientos, debe creerse que toda resistencia a sus intimaciones, no solo hubiese sido ineficaz para evadirlos, sino que habría sido ocasión de un despojo de las mercaderías, acompañado de persecuciones personales que hubieran comprometido gravemente su seguridad y la de sus familias, que, por consiguiente, pagando a los rebeldes los derechos que les exigían, cedieron a una necesidad en que los colocaba la impotencia temporal del gobierno para protegerlos.»

Otro caso es este, como se ve, demostrativo de que la tranquilidad y el orden, el respeto a las instituciones, iban lográndose a duras penas, no sin episodios tan típicamente representativos, como este de Cuyo, de lo azarosa que era en esos años la vida en el interior y lo precario de las protecciones con que la propiedad podía contar. Véase sino

lo que en la provincia vecina de San Juan pasaba, por esos mismos días, dando lugar también a un fallo de la Corte en que, como en el caso de Mendoza, se reconoce la imposibilidad de ponerse en contra de la autoridad triunfante de la rebelión. El acusado fué José Sotero Iturgay, a quien se sindicaba de haber aceptado y desempeñado los cargos de Juez de Paz, Comisario de Policía y Tesorero de la Provincia, discernidos por los gobiernos inconstitucionales y rebeldes de Videla y Molina. Se defendió aquel de la imputación que se le hacía de ser cómplice de la rebelión, diciendo que había aceptado aquellos cargos para garantizar su persona e intereses, así como la persona e intereses de los vecinos de su departamento, *no obstante reconocer que su nombramiento era ilegal*. «Que había « oído—dice—que durante esos gobiernos asesinaban y « robaban, imponían contribuciones forzosas, saqueaban casas de comercio, y se resolvió a prestar sus servicios « inducido por el temor y *por el deseo de hacer, hasta « cierto punto, un bien a su Departamento.*» Peregrino razonamiento, por cierto, y susceptible de hacer ilusorias las condenaciones de la ley sobre los que se alzan contra el orden y participan de los desmanes que los rebeldes, convertidos en autoridad, efectúan. Pero no es el caso, seguramente. Estuvo en lo justo la Corte Suprema. Porque si bien puede ahora parecer extraño que ésta aceptara la explicación dada por Iturgay, no debe olvidarse que la mayoría de los jueces del tribunal, por sobre los distinguos de la ley, tenían esta vez en cuenta la realidad de las cosas, que ellos, también, hasta pocos años antes, habían soportado, cada uno en su provincia y en la medida también cada uno de su participación en la lucha de partidos y tendencias. Es así, entonces, que la Corte pudo decir—revocando la sentencia del juez que había condenado al reo a dos años de fronteras,—«que cuando el procesado

« aceptó los empleos, San Juan se hallaba completamente « subyugada por los rebeldes, quienes ejercían todo género « de violencias contra los habitantes que no se les incor- « poraban o que, por cualquier otro motivo se hacían sos- « pechosos de ser adictos al Gobierno Legítimo. » ¡Cómo no habían de saber lo que significa el subyugamiento por la violencia de los que mandan fuera de la ley, si de entre ellos, el más pacífico y tranquilo, Delgado, había sido obligado por Oribe en 1840 a abandonar Córdoba de apuro, con su familia y emigrar a Chile!

La situación de fuerza existente en Córdoba, revelada ya por la detención de don Santiago Giacometti, en 1866, tuvo una violenta exteriorización en agosto de 1867, llegándose a extremos verdaderamente inauditos. Fué apresado, en efecto, el Ministro de la Guerra y lo fué también el Juez Federal doctor Saturnino M. Laspiur! Debió trasladarse a Córdoba, el Juez Federal de Santa Fe, doctor José María Zuviría. Si bien los jefes de la sedición podían ser determinados, en el proceso aparecían prevenidos simples individuos de tropa, que habían sido arrastrados al movimiento por sus jefes constituidos. Ante este hecho, el doctor Zuviría se apresuró a sobreseer sin mayor investigación respecto de los soldados, teniendo para ello en cuenta « que para que « la justicia sea eficaz y moralizadora es preciso que sea « pronta y no puede alcanzarse este fin cuando los proce- « sados son en tal número que la hacen muy tardía y « quizá imposible *si se trata de responsabilidades políticas* « *por acciones militares* en que haya de juzgarse un « ejército. » Por una parte el Procurador Fiscal apeló del auto de sobreseimiento y el defensor interpuso como artí-

culo previo, entre otros, la incompetencia del juez por ser improrrogable la Justicia Federal y « no hay ley expresa — « agregaba el defensor, — que autorice la traslación de V. S. « al territorio seccional de Córdoba y ejercer en él una jurisdicción que la ley sólo le acuerda sobre el territorio de que « es juez titular. Por consiguiente, no veo en V. S. sino un « comisionado *ad-hoc* que contradice el precepto del artículo « 18 de la Constitución de la República.» De paso, el defensor atribuye la sedición « a los diversos ataques traídos a la soberanía provincial por el Ministro de la Guerra « y el Juez Seccional doctor Laspiur.» No se hizo lugar a las excepciones, y llevada la apelación ante la Corte, ésta pidió dictamen al Procurador General quien, desde luego, opinó que el sobreseimiento dictado era nulo y en cuanto a la falta de personería dijo: « Parece que el defensor creyera o aparentara creer que la jurisdicción de los jueces « no se ejerciera sobre los habitantes sino sobre la tierra; « pues reconociendo que el doctor Zuviría tiene en este « caso jurisdicción sobre vecinos de Córdoba, le niega el « poder de ejercerla estando en Córdoba.» En efecto, según la ley era el Juez Federal más próximo el que debía entender en caso de impedimento, pudiendo hacerlo sin moverse de su sede.

La Corte anuló el auto de sobreseimiento y declaró que el Juez de Santa Fe era el competente para juzgar a los sediciosos de Córdoba.

El doctor Gorostiaga renunció en octubre de 1868 para formar parte del ministerio inaugural de la Presidencia de Sarmiento. Fué nombrado para reemplazarlo en la Suprema Corte el doctor Benito Carrasco.

Era éste otra víctima de la tiranía. Había nacido en 1815, hijo del doctor Pedro Carrasco, médico que fué del Ejército Libertador; de modo que era muy joven cuando las persecuciones de la época lo obligaron a emigrar, no sin antes haber permanecido más de un año engrillado en la prisión. Vivió en Montevideo, donde ejerció la profesión de abogado, y posteriormente en Santa Catalina. Después de Caseros ocupó varios cargos de la administración pública, entre otros los de asesor del Tribunal de Comercio, Juez de 1ª Instancia, Miembro del Tribunal de Justicia y Vice Presidente de la Convención de Buenos Aires en 1860.

El apoderado de una empresa constituida para explotar corridas de toros se presentó ante el Juzgado Nacional de Buenos Aires pidiendo la inconstitucionalidad de una ley provincial que prohibía aquel espectáculo. Se argumentaba en la requisitoria que semejante ley era contraria a la Constitución Nacional, cuyo artículo 14 acuerda el libre ejercicio de la industria; de manera que, conforme al artículo 100, debía ser la Justicia Nacional la que prestara su amparo.

El Juez puso un « ocurra donde corresponda » rotundo. Sin embargo, pedida la reposición y la apelación en subsidio, esta se concedió y la Corte dijo que los gobiernos locales pueden lícitamente dictar leyes y reglamentos tendientes a asegurar la seguridad, salubridad y moralidad de los habitantes, por cuanto es un principio aceptado el de que todo aquello—esto es la policía—debe estar a cargo de un poder que se han reservado, no habiéndose garantido por el artículo 14 de la Constitución a los habitantes de la República « el derecho absoluto de ejercer su industria o profesión, sino con sujeción a las leyes que reglamentan su

« ejercicio; que siendo esto así la Justicia Nacional sería
« incompetente para obligar a una provincia que ha prohi-
« bido la corrida de toros, a soportar la construcción de una
« plaza para dar al pueblo ese espectáculo, aún cuando pudie-
« ra ella calificarse de establecimiento industrial, como se
« pretende, y el ejercicio de esa industria no ofendiera el
« decoro, la cultura y la moralidad de las costumbres públi-
« cas. »

Dos conceptos fundamentales informan este pronunciamiento. Primero el de que en todo lo concerniente a velar por la seguridad y buenas costumbres de la población debe verse un caso de facultades no delegadas al gobierno central, y segundo que los derechos que consagra al artículo 14 de la Constitución no son de una amplitud absoluta. El primer punto no ofrece dificultad mayor y en la práctica casi no se han suscitado inconvenientes.

En cuanto a la verdadera extensión de las franquicias concedidas por aquel texto constitucional, casi podría decirse que existe a su alrededor un debate permanente, nunca agotado hasta ahora, y que se reanuda cada vez con mayor frecuencia, en razón directa con las diarias exteriorizaciones de los progresos materiales del país, que traen consigo nuevas relaciones de derecho que deben contemplarse desde estos puntos de vista inmutables:— 1º) que los derechos han de ejercerse conforme a las leyes que las reglamenten, y — 2º) que estas leyes no pueden alterar aquellos derechos, ni los demás principios y garantías reconocidos por la Constitución. Y es de la acertada y no siempre fácil combinación de esos términos, en apariencia antagónicos, que ha de resultar el bienestar general y lograrse la prosperidad del país.

En el caso de la corrida de toros se silenciaba, al articularse el pedido de inconstitucionalidad presentado al Juez, un requisito esencialísimo; se omitió decir que la Constitu-

ción consagra el derecho de ejercer industrias *lícitas*, palabra que no figura en los términos del escrito. Pues bien, semejante licitud es lo que solo la ley y los reglamentos pueden definir, teniendo para ello en cuenta conceptos que ni son universales ni son eternos, sino que, relacionados como están con la moral ambiente, varían de un país a otro y de una a otra época. En España sería un contrasentido prohibir el toreo con un criterio de favorecer las buenas costumbres; entre nosotros se lo juzga atentatorio a la moral, dañino a los buenos sentimientos y la *ilicitud* es consagrada por nuestros reglamentos municipales con una rara unanimidad.

Es difícil, en general, dar con la adecuada reglamentación de un derecho consagrado que no importe la restricción del mismo, desde los distintos puntos de vista posibles. Así, siendo, por implicancia, el de holgar un derecho legítimo, quieren las leyes de algunos países que estén excluidos los servicios públicos, esto es, que los empleados y obreros afectados a la tracción ferroviaria, a las comunicaciones, a la producción de luz etc., no puedan abandonar colectivamente el trabajo. ¿Ha de decirse, en este caso, que la reglamentación ha *restringido* el derecho? Desde que restringir quiere decir *limitar*, *circunscribir*, debe entenderse que, precisamente, es esta la función de la autoridad, por lo mismo que estando por sobre todo y procediendo en mira de la mayor felicidad general, está en condiciones de medir la verdadera extensión de las franquicias, ni más menos que las que se necesitan para conseguir aquel fin y para que no resulte comprometido el texto constitucional.

La Constitución consagra también la libertad a « todos los hombres del mundo » de habitar el suelo de la República; pero debe considerarse limitado, circunscrito, este derecho a los que vengan trayendo el contingente de su brazo, su capital o sus iniciativas útiles. Durante mucho tiempo se ha abusa-

do del concepto de que nuestro país se señalaba a la consideración universal por la ilimitada liberalidad de sus instituciones, y se ha blasonado de ello, sin detenerse a pensar que entre el derecho de « todo los hombres del mundo » de habitar nuestro suelo y el derecho de la República para defender sus instituciones y afianzar la seguridad colectiva, no puede caber duda de que la solución ha de estar allí donde se consulte un interés más general.

A raíz de un fallo dictado por el Juez Federal de Santa Fe, agravante para los derechos sustentados por don Ezequiel Paz, hizo este una publicación periodística ofensiva para el Juez. El Fiscal, entonces, solicitó la prisión de Paz y el propio Juez ofendido la dictó, declarándose recién después inhibido de entender en los procedimientos ulteriores tendientes a castigar el desacato. Se pidió a la Corte la nulidad de una secuela semejante, al par que se impetraba la libertad del detenido. Requerido el informe del Juez, dijo este: « Que en un pleito seguido por don Salvador Carbó « contra don Ezequiel Paz en que había dictado sentencia « definitiva, en uno de los considerandos había puesto estas « palabras *momentos difíciles para la casa* (de Paz) ». Notificado éste, se presentó en la casa del Juez don Fermín Laprade diciéndole a nombre de aquél « que si no retractaba « tales palabras de la sentencia, suscribiendo una carta escrita que llevaba al efecto, lo provocaba a duelo a nombre « de Paz ». Naturalmente, a ninguna retractación se prestó el doctor Zuviría. Paz amenazó con descargar su látigo donde lo encontrase y al día siguiente, en *La Capital*, repetía la amenaza.

Al resolver la cuestión, la Corte expresó estos conceptos: « Que de los informes remitidos resulta que la acusa-

« cion fiscal no tuvo por objeto el castigo de las ofensas
« que Paz le hacía en el artículo impreso, sino la provoca-
« ción al duelo de que fué conductor don Fermin Laprade
« y las gravísimas amenazas a la dignidad y a la seguridad
« personal del Juez; que la provocación a duelo y las ame-
« nazas a los magistrados con ocasión de sus funciones,
« son crímenes previstos por los artículos 30 y 32 de la
« Ley N° 49; que en el presente caso el castigo se hacía
« indispensable para la defensa de la persona y del honor
« del Juez, atendidas las amenazas que contiene el citado
« impreso y muy particularmente la que se expresa con las
« siguientes palabras : *un latigazo en ese rostro hipócrita*
« *y hermafrodita va a ser la iniciativa de nuestras nuevas*
« *relaciones.*» Hace mérito después la Corte de que no había
otro Juez Nacional en Santa Fe y de la opinión de algunos
tratadistas que sostienen que el Juez injuriado puede ini-
ciar procedimientos y remitir después los autos al Juez
Federal más inmediato.

No podía ser más grave el punto a que el fallo de la
Corte se refiere. Por ventura no es corriente que los que
pierden los pleitos desencadenen su furia contra el Juez,
el cual no puede tener nunca el propósito de zaherir cuando
escribe sus sentencias; el análisis que es indispensable hacer
de las circunstancias de una causa no debe encerrar de nin-
gún modo un designio de ofensa personal, único caso en
que se explicaría una interpelación airada, la cual en mane-
ra alguna, podría importar una ofensa a la majestad de la
Justicia cuando el mismo Juez la ofenda y la degrade deján-
dose llevar del impulso de aprovecharse de su misión
augusta para desahogar sus pasiones. La ley no defiende
a estos jueces. Pero dá poderes expresos y muy extensos
a los que serenamente llenan su tarea, como así también
para las veces en que sus órdenes no se cumplan con la
debida diligencia.

Durante los primeros tiempos se mencionan algunos casos en que los Jueces Federales no encontraron en las autoridades locales la ayuda necesaria para desempeñar su misión; y debieron llegar al extremo de pedir el auxilio de la fuerza armada de la Nación, no siendo pocas las ocasiones en que bastó el simple enunciado de una medida tan grave, para que las autoridades provinciales se pusieran en la razón. Ahora no tanto, pero en la época á que viene haciéndose mención,—todavía de incipiente institucional, más en el orden provincial que en el de la Nación,—fueron los Jueces Federales como avanzadas en regiones no del todo incorporadas todavía a la plenitud de la vida organizada y tranquila; fueron esos jueces, precisamente en estos años de 1865 a 1870, los que salvaban a diario las instituciones comprometidas por la sedición y la revuelta. Era esto el plato de cada día; y los jueces nacionales hicieron su prestigio y dieron fuerza y vida al mecanismo judicial creado por la Constitución de 1853, reduciendo y castigando a los rebeldes. De modo que cuando era la autoridad legítima provincial la que tenía el mal acuerdo de contrariarlos, se erguían en toda la plenitud de sus poderes enormes y llegaban, como en el caso de San Luis, famoso, a encarcelar a un Juez Provincial que había contrariado las órdenes del Juez de Sección. (46). En 1867 un oficial del Ejército, que en desempeño de una comisión

(46) En 21 de diciembre de 1877 el Poder Ejecutivo de la Provincia de San Luis se dirigió al Ministerio de Justicia poniendo en su conocimiento que el Juez Federal de aquella, había reducido a prisión un Juez Provincial por infracciones a la Ley Electoral y manifestando que era tiempo de evitar un conflicto que a este respecto podía producirse.

El Procurador General de la Nación, a quien se remitió el asunto en consulta, dió su dictamen, fundándolo como sigue:

Señor Ministro:

Una prisión puede ser impuesta, o indebidamente ejecutada.

De estos abusos hay reclamo ante el Superior que los enmienda y castiga,

nacional — prender un soldado desertor — había penetrado a un café de la ciudad de Córdoba, donde éste quiso refugiarse, fué detenido y procesado por violación de domicilio; el Juez Federal ordenó la soltura del oficial, la que fué objetada por el Gobierno Provincial con la pretensión de que debía dilucidarse previamente una cuestión de competencia entre el Juez Nacional y el del Crimen de la Provincia. Pidió entonces el doctor Laspiur el auxilio de la fuerza nacional, dirigiéndose para ello al Ministro de Justicia, quien requirió el consejo del Procurador General de la Nación. «Cualquiera que fuese la autoridad —dijo el « doctor Pico — que mantenía en prisión al oficial, desde « que el Juez de Sección había ordenado su soltura en uso « de sus atribuciones, los agentes del Poder Nacional es- « taban obligados a hacer cumplir su sentencia. Se trata « solo de ejecutar la sentencia de soltura y como sobre « este punto ni se disputa, ni puede disputarse la juris- « dicción del Juez de Sección, no hay competencia posible. « El medio legal de resolver el conflicto sería *ordenar* al « gobierno de Córdoba, como agente natural del Poder Na- « cional, que haga cumplir inmediatamente la sentencia del « Juez Federal, y en el inesperado caso de resistencia; « *ordenar que tropas nacionales la ejecuten directamente.* « *La Justicia Nacional no podría funcionar si sus fallos « no se cumplen.*» De más está decir que la prudencia

y los interesados tienen además acción de daños y perjuicios contra sus autores.

Entre nosotros, por otra parte, los fueros personales no existen. El militar como el funcionario, son demandables y acusables. La ley solo ha exceptuado, por razones de alta política, ciertos mandatos populares. El aviso mismo que se acostumbra, no es un acto de rigor sino de buena administración.

La nota anterior del Gobierno de San Luis, ha olvidado todo esto.

El Poder Ejecutivo nada puede ni debe hacer en estos casos, porque la Justicia Federal que se extiende por la ley a toda la República, nunca ofenden la Soberanía Provincial. — Carlos Tejedor.

aconsejó al gobierno de Córdoba y la orden fué acatada sin mayores desgarramientos.

En una ocasión el gobernador Gómez de Catamarca se quejó de los procedimientos del Juez de Sección y airadamente anunció que sino revocaba sus fallos «tendría Cata-
« marca que ponerse de pie y garantizar con la Constitución
« en la mano etc.» Un diario de la época, comentando el hecho, se expresa de este modo que revela el concepto real que, —salvo aquel «capataz de los Taboada», como Sarmiento llama al gobernador Gómez,— se tenía de la Justicia Nacional: «Sublevarse contra el Ejecutivo, pase; « pero alzarse contra la Justicia Federal, *c'est trop fort*. » Se trataba de procesos seguidos contra sediciosos y rebeldes, complicados en las andanzas que por esos años hacía en el Norte el General Rivas, en combinación con tendencias políticas metropolitanas, a las cuales Gómez servía, y cuyos planes, —sin designio partidista, con fundamentos puramente legales,—el Juez Federal desbarató.

Uno de los puntos en que la Constitución de 1853 se diferencia de la de Estados Unidos es en lo que se refiere a la legislación civil, la cual, lo mismo que la de comercio, penal y de minería, tiene entre nosotros carácter nacional, mientras allí cada Estado dicta la suya. Pero no fué sino a la vuelta de algunos años que se logró cumplir el precepto de la Constitución. La primera iniciativa está en un decreto del General Urquiza nombrando una comisión de quince miembros, encargada de preparar todos los códigos de carácter nacional; al doctor Lorenzo Torres correspondió la tarea de proyectar el civil, pero no habiendo aceptado el encargo, se nombró al doctor Vélez Sársfield. Nada se hizo,

entonces, sin embargo. Recién en junio de 1863, a raíz de sancionar el Congreso una ley que autorizaba el nombramiento de una comisión, el Presidente Mitre designó únicamente al doctor Vélez Sársfield, convencido de que la redacción de un código debe ser la obra de una sola persona, sobre todo cuando las circunstancias permitían disponer de una tan singularmente dotada como aquel. En 1869 la tarea estaba concluida y Sarmiento envió el proyecto de Código al Congreso, solicitando se aprobara a libro cerrado; y, por cierto, que no fué sino a raíz de un prolongado debate que se impuso este designio. Oroño, sobre todo, bregó porque una comisión examinara la obra de Vélez, a quien no quería dar la prueba de confianza con que casi todos deseaban premiar el magno esfuerzo, la indiscutible sabiduría del prestigioso jurisconsulto. Pudo así el General Mitre, ya senador, expresar estas palabras definitivas: « En « cuanto al voto de confianza que repugna al señor senador « como legislador, lo hemos dado ya al adoptar las leyes « de partida, escritas por un rey absoluto, las leyes dadas « por las Cortes de Toro y las Recopiladas que nos legó la « madre patria. Efectivamente, esas leyes son el código « que rige las relaciones civiles en las provincias, mientras « no rija el código que hemos encomendado al doctor « Vélez.»

La buena doctrina se impuso y el Código Civil fué sancionado en septiembre de 1869.

Mientras tanto ¿qué leyes habían regido hasta entonces? Veamos lo que sobre el particular expresa Martínez Paz, el erudito profesor de Córdoba: «La tradición colonial nos « había legado un material jurídico inmenso, reunido en vas- « tas recopilaciones, tan extensas y prolijas que nada es- « capaba a su previsión, desde las formas del ceremonial « hasta los actos más menudos de la vida diaria. Además, « los códigos se sucedían dejando en vigor a los que les

« habían precedido, sin cuidar la coordinación de sus
« disposiciones, que iban aumentando en sumas intermina-
« bles, que acababan de privar a los derechos de toda
« suerte de seguridad. Puede representarse la angustia do-
« lorosa que había de asaltar a aquellos hombres, obligados
« a buscar en ese amontonamiento informe, indigesto y
« tenebroso, la disposición que en cada caso debiera am-
« parar su derecho. Sólo un largo estudio, una profunda
« meditación, un claro sentido de la realidad, podía abrir
« las puertas del conocimiento de esta legislación confusa y
« anárquica, y permitir descender hasta su íntimo espíritu
« para coordinar y revivir el movimiento que la creara. Esta
« obra inmensa, que bien podríamos calificar con las pa-
« labras de Justiniano relativas al digesto: «Opus despera-
« tum», debió ser el prólogo obligado de nuestra codificación,
« ¿cómo emprenderla sin el pleno dominio de las insti-
« tuciones que se pretendía derogar? »

« Pero codificar no era fundir en un solo cuerpo las anti-
« guas leyes; la sociedad se había modificado profunda-
« mente, la ciencia desenvuelto y crecido, las instituciones
« políticas transformado; era preciso manejar por igual
« estos nuevos resortes; que no se sacrificara en home-
« naje al presente la ley de la continuidad histórica, ni que
« la fuerza de la rutina o el prestigio de la tradición
« ahogaran la ciencia. Vélez Sársfield fué la mente extraor-
« dinaria, única en su tiempo con capacidad para realizar
« esta magna obra; él había enseñado y expuesto el de-
« recho colonial con maestría y profundidad, y en las
« largas horas de sus meditaciones y lecturas, se había
« familiarizado con la ciencia de los sabios comentaris-
« tas franceses y de los nuevos romanistas de la escuela
« alemana. »

Ha sido considerable la influencia del Código Civil en el perfeccionamiento general del país. El mismo Martínez Paz,

en su trabajo ya mencionado (47) y Joaquín V. González, (48) han destacado este hecho, señalando como uno de los méritos mayores de la obra de Vélez el de haber logrado la pacificación civil, en una forma tan amplia y definitiva, que bien puede achacarse a ello el que no se consiga todavía la completa pacificación política, la cimentación definitiva de las instituciones. Si, pues, por virtud del Código se ha organizado la familia, asegurándose el régimen inmobiliario, protegiéndose las transacciones,—el bienestar social, en una palabra,—todo lo demás, hasta la misma organización política, pasa a segundo plano; y no es para afligirse mayormente cuando se ve la inestabilidad de algunos gobiernos. el poco respeto por la representación popular etc. Otra cosa sería si la familia fuese expuesta a la relajación por leyes que permitieran la ruptura definitiva del vínculo o se desquiciara el régimen hipotecario.

En su trabajo casi póstumo (49) dice el doctor Victorino de la Plaza refiriéndose a la terminación de la tarea por el codificador: «Aquí el código llegó a su fin lógico y «definitivo. Ha seguido al ser humano en su orden natural «desde la concepción en el seno materno, amparándolo, aun «antes de nacer, con todas las garantías, cuidados y protección que el derecho civil ha creado, de modo que, aun sin «tener un principio de existencia visible, goza de la capacidad de derecho para cuanto pueda beneficiarle; y su existencia es tan respetable y tutelada por la ley, como cuando «está ya nacido; lo ha seguido en todos sus pasos, sea que «haya recorrido el sendero del bien o el del mal; y lo acom-

(47) «El Código Civil en su cincuentenario», *La Nación* de octubre 20 de 1919.

(48) Conferencia en la Junta de Historia y Numismática, noviembre de 1919.

(49) Mientras se publicaba en *La Nación* la conferencia pronunciada en Córdoba con motivo de la celebración del cincuentenario, dejó de existir el autor en viaje a Buenos Aires, el 2 de octubre de 1919.

« paña hasta más allá de la muerte, cuando impone que las
« disposiciones de su última voluntad, sean respetadas y ejecu-
« tadas; y cuando éstas no existen porque la muerte lo sor-
« prendió sin dejar un acto de última voluntad revestido
« de las formalidades jurídicas, aplica las reglas estable-
« cidas en los títulos que tratan de las sucesiones intesta-
« das, para que sus bienes, derechos y acciones pasen en
« propiedad a título de herencia a todos aquellos que,
« ligados por vínculos de sangre se supone que el causante
« los hubiera instituido sus herederos, prefiriendo los más
« próximos a los más remotos, según el orden y graduación
« que las leyes establecen. »

En enero de 1870 se acusó ante el Juez Nacional de Mendoza a Angel Ortiz, — bien merece consignarse su nombre siendo como es un precursor — por haber votado con nombre supuesto en unas elecciones. Ortiz confesó su delito, manifestando que fué inducido por don Gabino Rivarola, quien le dió, a la vez, la boleta de otro elector. Naturalmente Rivarola — también ha hecho escuela — al ser interrogado por el Juez, negó el hecho diciendo que no conocía al procesado.

Se encontró el Procurador Fiscal con que no tenía ley a mano, de carácter nacional, en que fundar su acusación, pues la ley de elecciones castigaba únicamente a los que presidían las mesas receptoras y la N° 49 solo tiene penas para las *autoridades* que falsifican elecciones, inscriben o hacen inscribir con nombres apócrifos. Pero no estaba dispuesto a dejar impune el delito cometido por Ortiz, y haciendo mérito de las leyes 2ª y 6ª, Título VII, Partida VII, pidió la aplicación de una multa de veinticinco pesos fuertes.

Rebatíó el Juez este dictamen, sosteniendo al fallar que la prescripción de la Ley Federal N° 49 comprendía la infracción cometida por Ortiz, al que condenó a seis meses de arresto o multa de ciento cincuenta pesos fuertes. Se apeló ante la Corte y al expresar agravios el defensor sostuvo: « Que en « los delitos que provienen de actos electorales, *la ley tiene « que ser blanda*, porque los abusos que se han cometido en « todas las provincias, incluso Buenos Aires, *vienen de tan « atrás*, han sido tan escandalosos y han partido muchas « veces de *hombres tan altamente colocados*, que la generalidad ha llegado a extraviarse hasta el grado de creer que « todo es lícito y permitido tratándose de elecciones. » Dificilmente se podía hacer una síntesis más comprensiva de nuestra historia política hasta la total regeneración que hoy impera en materia de elecciones. En efecto, como el ejemplo de las incorrecciones venía de hombres tan altamente colocados, los demás llegaron a extraviarse hasta parecerles lícito todo procedimiento destinado a ganar una elección.

La Corte confirmó el fallo, esto es, estableció que en la Ley 49 del 14 de septiembre de 1863 está el remedio para todos los delitos electorales, pues cuando se habla de « falsificar elecciones » se alude a todos, funcionarios y ciudadanos, y comprende todos los procedimientos torcidos habituales, desde el empleado que falsifica registros, hace presión a sus subordinados o interviene en asambleas políticas, hasta el votante que usurpa nombre para acercarse a la urna, o concurre armado al comicio:—todo esto en el sentir de la Corte es « falsificar elecciones. » Sin embargo, cuando la corrupción subió de punto y se quiso reaccionar, se creyó indispensable dictar la Ley vigente N° 8871, excesivamente detallista y, tal vez, por ello, poco eficaz en la práctica.

En abril de 1870 falleció el Presidente de la Corte doctor de las Carreras. Se le rindieron excepcionales honores; concurrió al sepelio el Presidente de la República y el Gobernador de la Provincia, acompañados de sus ministros. Sarmiento, del Carril y el General Mitre hicieron el elogio del extinto poniendo de relieve sus grandes condiciones morales y la sobresaliente capacidad jurídica que lo distinguía.

El doctor del Carril fué nombrado Presidente del Tribunal y para integrarlo se designó al doctor Marcelino Ugarte, espíritu selecto, mentalidad brillante de consagrada reputación como jurista, que iba así, con justo título, a formar entre los «Justicias mayores» de la República. «Los consejos del doctor Ugarte—ha dicho el doctor Bernardo de Irigoyen—fueron siempre sanos y desinteresados; fueron realmente la expresión de la equidad y de la justicia. Sus escritos eran profundos estudios de derecho y la rectitud de sus opiniones era tan notoria y respetada, que bastaba su firma en una causa para que la opinión le discerniese las presunciones de la razón y del derecho.»

Fuó en diversas ocasiones legislador provincial y nacional, así como también Ministro de Relaciones Exteriores; pero sus reales aficiones fueron las tareas más silenciosas y proficuas del bufete, ora cuando desempeñó alguna magistratura, ora cuando ejerció la profesión de abogado. Fueron notables la fuerza de su lógica y la claridad de su estilo. Han quedado de él importantes estudios sobre puntos de Derecho Constitucional, señalándose, además, por su mérito inquestionable un «Comentario a la Ley 10 de Toro» presentado a la academia de Jurisprudencia.

Recuerda también el doctor Irigoyen que estaban de tal manera arraigados en el doctor Ugarte los principios de orden, que rechazó indignado en una ocasión la opinión de los que creían que ante las exigencias de una época difícil

debía enmudecer la Constitución; y cuando le recordaban que las garantías individuales no se habían contemplado en la primera época de nuestra revolución, pudo él contestar con estas palabras solemnes: «La Constitución se ha dictado para dar a los ciudadanos garantías; se ha dictado para poner un término a la revolución, y en nombre de la Constitución no puede hacerse lo que se hacía en nombre de la Revolución que la Constitución ha querido terminar.»

Tal era el hombre y tales los conceptos fundamentales que siempre informaron sus actividades de juez. La Corte iba logrando, así, el concurso de las primeras figuras del país; y debía ser notable la sensación de alivio y tranquilidad que producían sus pronunciamientos, en esa época de tantas rebeliones, todavía, y desórdenes armados. Lo expresó así, el doctor Rawson, dicen, en ocasión de haber concurrido un día a la Corte, por esos años, a despedirse en vísperas de embarcarse para Europa. Tiene el autor solo por referencia oral las palabras pronunciadas, dirigidas a profetizar que sería en ese rincón sereno de la Corte, aislada como en un oasis de tranquilidad, en medio de la agitación ambiente, que las instituciones se salvarían, cuando los vientos del porvenir soplaran recio contra ellas.

Mas no fueron, por cierto, estos cinco años de la vida de la Corte, que acabamos de estudiar, como para recomendarla por su labor visible. Si fuera a juzgarse por lo que ha quedado en la colección de fallos, se vería que son dos las características principales de este período: la enorme cantidad de sediciones y rebeliones que determinaron la intervención de la Justicia Nacional,—algunas de las cuales únicamente, las más típicas, han sido estudiadas en el presente capítulo,—y la poca tarea aparente del Tribunal, ya que la gran mayoría de sus fallos se reducen a confirmar «por sus fundamentos» las sentencias de primera instancia. Bien es cierto que esos *fundamentos* son muy buenos,

algunos de un mérito jurídico excepcional. La colección de fallos está llena por estos años de los que llevan la firma del doctor Alejandro Heredia, principalmente, del Juez de Mendoza doctor Juan Palma, del de Salta doctor Ormaechea y del de Corrientes doctor Carlos Luna.

Refiriéndose a esta época dice Sarmiento: «La Corte « Suprema, no obstante su incansable actividad, no alcanza « en 1869 a despachar los centenares de causas criminales « por insurrección, sedición y traición que le vienen en ape- « lación de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y San « Luis, a consecuencia de los movimientos de 1866, en que « fueron envueltas ciudades enteras porque coadyuvaron « directa o indirectamente en la revuelta.»

CAPÍTULO VII

1871 - 1875

Las instituciones expuestas todavía a las contingencias de la política— Jurisdicción de la Corte cuando una provincia es demandada por un particular — *Chanfreau v. Prov. de Corrientes* — Primer caso de disidencia entre los miembros del Tribunal — Facultades concurrentes en materia impositiva — Alcance de los artículos 10 y 11 de la Constitución Nacional — *Anzotegui v. Tedi* — De nuevo el doctor JOSÉ BENJAMÍN GOROSTIAGA en la Corte — Otra vez los delitos de imprenta — Nueva faz de la cuestión — El ejercicio del sub-patronato eclesiástico — Los bienes de las corporaciones religiosas — Facultad de las Legislaturas Provinciales para declarar el estado de sitio — La «ley de sospechosos» dictada en San Juan — *Zavalla v. Astorga* — Nombramiento del doctor JOSÉ DOMINGUEZ — Falta de jurisdicción de los Tribunales Federales para juzgar un caso de atentado contra el Presidente de la República — Los privilegios parlamentarios; sus límites y los poderes de la Justicia Federal para procesar a un legislador — El caso del Senador Oroño — La actuación del Presidente Sarmiento — Participación de los Jueces Federales en política — Recusación del Juez Molina de la Rioja — Las autoridades de provincia no pueden ser juzgadas por los Jueces de Sección — *Rodríguez v. Gallino* — La revolución de 1874 ante la Justicia — El carácter militar de sus autores y la competencia de los Tribunales Federales para juzgarlos — Concepto de la ley marcial — La fuga del General Arredondo — Efectos de una ley de amnistía sobre un proceso en tramitación.

Durante todo el período que abarca este capítulo ha de seguir la Corte interviniendo, muy a pesar suyo, en el juzgamiento de sucesos cuya entraña es la política, tan agitada por ese entonces. ¿Acaso no lo es, también, en los días

que corren? Es claro que no podría afirmarse lo contrario; solo que a través de los años el relato del alzamiento de un gobernador contra la Legislatura, ganando el campo para reclutar gente y llevar la guerra al que le ha derribado, cobra contornos de verdadera hazaña épica en la que figuran nombres que son ya de leyenda, sinónimos de sangre y arbitrariedad: los Taboada, Peñaloza, *Lanza Seca*. . . . ¿Cuáles pasarán de los de ahora a la historia? ¿Qué nombres repetirán nuestros nietos unidos a la idea de despotismo y de desorden? — que tal ha de ser para ellos la característica de esta época que vivimos, apacible más bien y tranquila, a fuerza de compararla, con el *año veinte* legendario y con las crueldades de Oribe en su cruzada famosa.

Como consecuencia de una revolución, en mayo de 1868, el Gobernador de Corrientes don Evaristo López renunció el mando, siéndole aceptada la dimisión por la Legislatura, cuyo presidente se hizo cargo del poder. López reaccionó bien pronto, y pretendiendo que su renuncia era nula por haberla presentado cediendo a violencias materiales, salió a campaña y se puso en armas para recuperar el cargo. Tal era la situación de López cuando contrató con José María Chanfreau y Cia., la proveduría de su ejército, la que se efectuó por valor de varios miles de pesos. Naturalmente, el Gobierno Provincial, cuando en enero de 1869 se presentó el proveedor a hacer efectivo su crédito, se negó a pagar, alegando el Gobernador Guastavino que se trataba de un gasto no autorizado por la Legislatura; y que el hecho de haber reconocido el Gobierno Nacional a López como Gobernador de la Provincia, no podía tener la virtud de legitimar su

situación, dado que, dentro de nuestro sistema institucional, las autoridades provinciales no están sujetas al *exequator* del Ejecutivo Nacional, « pues son independientes de él en el origen y cesación de su mandato. » De modo que el proveedor no ha podido guiarse y atenerse a la palabra del Gobierno Central, pues ella estaba en pugna con la soberanía del pueblo de la Provincia, cuya representación legítima, la Legislatura, había aceptado la renuncia de López.

En octubre de 1870 Chanfreau se presentó ante la Corte demandando a la Provincia de Corrientes por cobro de pesos, haciendo mérito de un modo primordial para justificar la procedencia de su acción, de que los revolucionarios de 1868 se apoderaron del Gobernador López, encarcelándolo hasta que firmó su renuncia; de modo que esta fué coacta y en cuanto aquél se vió libre levantó un ejército *para sofocar la rebelión* y desde Paraná pidió la intervención federal para ser repuesto en su cargo; y « que—agregaba « el actor—si los hechos consumados quedaron consagrados « en el orden político con menosprecio de la Constitución, « *los derechos particulares que protegen las leyes civiles no « podían correr la misma suerte* ». López era, en concepto del demandante, Gobernador legal de Corrientes y pudo, por lo tanto, contratar válidamente en su nombre; que por la Constitución de la Provincia un Gobernador legal, como era aquél, tiene facultades para decretar en los casos de sedición todas las medidas tendientes al restablecimiento del orden.

Rebatiendo estas conclusiones, el apoderado de la Provincia ante la Corte dijo que López cuando contrató con Chanfreau no era ya Gobernador, porque, *espontáneamente o no*, había renunciado y otra persona ocupaba el cargo, y « que era cierto que una revolución popular puso a López en el caso de renunciar, *pero que las revoluciones « se legalizan por el asentimiento de los pueblos y el orden*

« *que de ellas surge, cuando se consolidan, es legal.* » Que en cuanto, por lo demás, a la nulidad de la renuncia solo la Legislatura podía pronunciarse al respecto

La Suprema Corte pronunció su fallo en febrero de 1871; y por los votos de los doctores Delgado, Barros Pazos y Carrasco resolvió, sin tener para nada en cuenta la competencia o incompetencia del Tribunal, y entrando al fondo de la cuestión, que si no bastara para rechazar la demanda la circunstancia de no haber vuelto López *al libre ejercicio de su autoridad legítima*, condición puesta en el contrato para hacer exigible el pago, se tendría que el mandatario renunciante reconoció la legalidad de la Legislatura para elevar su renuncia y una vez aceptada ésta, cualesquiera sean los motivos que lo impulsaron, dejó de ser Gobernador y entró a desempeñar el cargo la persona a quien por la Constitución le correspondía hacerlo.

Los doctores del Carril y Ugarte votaron en disidencia, — la primera que se registra en la colección de Fallos, — expresando: « Que no siendo prorrogable la jurisdicción nacional sobre personas y cosas que le sean extrañas, aunque « las partes litigantes convengan en la prorrogación, y « debiendo la incompetencia declararse *de oficio y en cualquier estado de la causa*, la Suprema Corte debía « declararse sin jurisdicción para decidir en esta causa, « prescindiendo, por tanto, de juzgar en cuanto a lo principal. » En el voto, que aparece redactado por el doctor Ugarte, se hace alusión a la jurisprudencia americana, según la cual la cláusula constitucional que da jurisdicción a la Corte en las causas en que sea parte un Estado debe limitarse a los casos en que éste sea actor y la acción se dirija contra individuos residentes en otros Estados. « Y « resultando — agrega — que al copiar en la Constitución Argentina la parte relativa al Poder Judicial de la Unión, « se ha querido adoptar completa y, en esa parte, especial-

« mente, la jurisprudencia de los Estados Unidos, según
« la cual *un Estado no puede ser demandado por simples*
« *particulares*, como lo ha demostrado extensamente, ci-
« tando las palabras de Hamilton en el *Federalista*, las de
« George Masson, Madison y Marshall en la Convención de
« Virginia, las de Campbell en el caso *Florida v. Georgia*,
« en 1854, las opiniones y documentos registrados en el
« Diario de Sesiones de la Convención Nacional reunida
« en Santa Fe en 1860 — la Corte carece de jurisdicción. »

No necesita decirse que la buena doctrina era la sustentada por la mayoría. Mas no fué antojadiza, ni mucho menos, la que informa el voto en disidencia; pues se estaba saliendo recién, precisamente, del antiguo prejuicio, — contenido no sólo en la legislación española, sino también en la inglesa, quizá de un modo más explícito y categórico, — de que el Fisco, la « Corona » no podía ser demandada y solo estaba en juicio cuando era ella la promotora de la demanda. Solo que la Constitución había reaccionado contra esto y el artículo 100, así como las disposiciones ampliatorias de las Leyes Federales, contienen disposiciones terminantes en el sentido de que una provincia puede ser demandada ante la Corte por un particular. Desde entonces nunca más se ha sostenido lo contrario en ningún fallo judicial.

Pocas cuestiones, sin embargo, — según ya se dice en el capítulo anterior, — han sido más largamente discutidas. En una ocasión el Juez Wilson (*Chisolm v. Georgia*) afirmó categóricamente que bajo el régimen de la Constitución americana no había persona o conjunto de personas que no pudieran ser objeto de una demanda.

« Del contexto general de la Constitución, — agregó —
« siempre resultará que el pueblo de los Estados Unidos
« entendió formar por medio de ella una Nación, para pro-
« pósitos nacionales, instituyendo un Gobierno Nacional con

« poderes legislativo, ejecutivo y judicial, extendiendo *todos* esos poderes sobre el *todo* de la Nación. ¿Y sería posible que un hombre o un conjunto de hombres o una persona natural o artificial (léase una Provincia) puede creerse con derecho a estar fuera de la jurisdicción del Gobierno Nacional? » — esto es, del Poder Judicial, que es uno de los componentes del todo que se llama Gobierno Nacional.

La Legislatura de la Provincia de Salta había dictado en 1866 una ley que fijaba un impuesto de cuatro reales por barril de vino y un peso por el de aguardiente, pagadero por las casas *en que se consignen* o expendieran por mayor esos artículos. Don Ramón Anzoátegui debió pagar, así, una suma de dinero por el aguardiente elaborado en su hacienda *de Jujuy e introducido* en la Provincia de Salta. Se presentó después ante el Juez Federal demandando a don Zacarías Tedín, Jefe de la Oficina Provincial de Hacienda, por la devolución de lo pagado, en vista de que la ley provincial contrariaba el artículo 10 de la Constitución Nacional que declara libre de derechos la circulación de los productos nacionales. Contestó Tedín la demanda arguyendo que la ley impugnada no gravaba la *circulación* de productos sino el *consumo* de ellos.

Falló el Juez Ormoachea en junio de 1870. Es digna de recomendarse la sentencia como una prueba de la gran versación de su autor en materia constitucional y derecho americano. De entrada sienta una regla que ya había sido con anterioridad expresada en un fallo de la Corte: « es a los principios consignados en la Constitución de los Estados Unidos y a la jurisprudencia de esa Nación que debe

« recurrirse para conocer el alcance de la jurisdicción nacional, sin precedente legítimo, todavía, entre nosotros. » Es así, entonces, que el fallo del juez va a basarse en la jurisprudencia de los Tribunales de la Unión. Desde luego, se resuelve que Tedin, como Jefe de la Oficina de Hacienda, podía ser demandado ante la Justicia Nacional. Recuerda el fallo los casos clásicos de la jurisprudencia americana: *Olney v. Arnold*; el de *Malbury v. Madison*, en que el segundo, Ministro de Estado, fué demandado para que entregara al primero su título de Juez de Paz, expedido en toda regla por el Presidente de la República, y en cuya ocasión la Corte emplazó al Ministro como a un demandado cualquiera; el de *Wise v. Withers* en que el primero por no haber cumplido sus deberes militares, fundándose en que era Juez de Paz, fué ejecutado por el segundo que era colector de multas de infracciones militares. Demandado posteriormente éste por Wise sobre daños y perjuicios, la Corte hizo lugar, por cuanto el colector y la misma Corte marcial que había impuesto la multa resultaban infringiendo la ley.

Ahora bien, resuelto por el Juez que Tedin podía ser demandado ante la Justicia Nacional, quedaba por averiguar si debía serlo ante la Corte o ante el Juzgado de Sección. Pero como en el juicio no se había constituido en parte nominal la Provincia de Salta, como tal, la jurisdicción del juzgado resultó indiscutible.

En cuanto a la constitucionalidad del impuesto y en presencia de los términos del artículo 10 que deja a las provincias la facultad absoluta de gravar su comercio interior, cabe preguntar, — dice el fallo, — ¿cuál es la línea hasta donde llega el derecho de la Nación y comienza el de las Provincias? « La misma jurisprudencia americana — agrega — « responderá satisfactoriamente a esta ardua cuestión. En « el caso de *Brown contra el Estado de Maryland*, el Pre-

« sidente Marshall exponiendo la opinión de la Corte se ex-
« presó en estos términos: La prohibición constitucional a
« los Estados de gravar con derechos las importaciones
« puede ciertamente llegar a ponerse en conflicto con su
« reconocido poder de imponer derechos sobre las personas
« y la propiedad, que se hallen dentro de su territorio. El
« Poder y su restricción aún pueden ser distinguidos per-
« fectamente y mientras no se aproximen, son capaces, con
« todo, como los colores intermedios entre el blanco y el
« negro de acercarse tanto reciprocamente que confunda al
« que quiera distinguirlos. Al presente es sufi-
« ciente decir, en sentido general, que cuando el importador,
« disponiendo de la cosa importada la ha incorporado y
« mezclado con la masa de la propiedad del país, ella ha
« perdido quizá, su carácter distintivo de importación, pa-
« sando a quedar sujeta al poder del Estado para imponer
« derechos; *pero mientras permanece siendo propiedad del*
« *importador, en su almacén, un derecho sobre ella es*
« *demasiado claramente un derecho sobre importaciones*
« *para que pueda escapar a la prohibición de la Cons-*
« *titución.*» Deducía de aquí el Juez Federal de Salta que
si los artículos importados de un Estado a otro, como el
aguardiente de Anzoátegui, permanecían en su forma ori-
ginaria, esto es, en fardo o barril, *en el almacén del intro-*
ductor, no podían ser gravados con un impuesto provincial.
Así lo resolvió la sentencia, que, por lo demás, hizo el dis-
tingo prudente de que al obligarse a Tedin a devolver la
suma cobrada no se reveía por la Justicia Nacional una re-
solución de autoridad provincial que tuviese carácter de
cosa juzgada, sino una simple resolución administrativa que
traía su origen de una autorización del Ejecutivo Provincial,
que jamás pudo otorgarle poderes judiciales.

Llevada la apelación ante la Corte, el apoderado de la
provincia articuló su agravio y concretó así sus argumentos:

« Si el artículo 10 de la Constitución tuviese la inteligencia
« que quería darle el Juez de Sección, no quedaría materia
« imponible para las Provincias en los casos de los pro-
« ductos del país, y, por ejemplo: una carpintería en Buenos
« Aires que trabajase con maderas de Tucumán no podría
« ser obligada a pagar patente, porque se diría gravada la
« circulación de las maderas de la República. »

Falló la Corte en febrero de 1871 revocando el pronunciamiento de primera instancia, por tener en cuenta que la ley provincial grava con una patente las casas donde se venden licores sin distinción alguna sobre el lugar de su fabricación; de modo que lo que se gravaba era el *consumo* local y no la *introducción*, tránsito y circulación de las mercaderías, en cuyo caso la ley no contraría los preceptos constitucionales. Sobre todo, si no pudiera una provincia imponer sobre el consumo de mercadería elaborada fuera de ella, debiendo hacerlo sobre la que se fabricara dentro de su territorio, — ya que debía arbitrar recursos para sus necesidades, — se crearía una competencia favorable en absoluto para la industria ajena y ruinosa para la propia.

Si se tiene en cuenta que Marshall en el voto antes transcrito, afirma también que « no debe hacerse distinción entre
« los impuestos sobre los artículos extranjeros y los sobre
« los nacionales; y que los principios sostenidos son aplica-
« bles igualmente al de las importaciones de un Estado
« hermano » (50) — se verá el abismo que existe entre la jurisprudencia americana y la que informa el fallo analizado. Pero, apresurémonos a decirlo, la disparidad es más aparente que real; todo es cuestión de palabras y de momento. No dice Marshall que la introducción de un producto elaborado en Virginia deba pagar derechos en Chicago; y no podía decirlo porque el N° 5 de la Sección 9ª del Artículo

(50) Curtis; Report, Tomo 7º, pág. 262.

1º de la Constitución de Estados Unidos lo prohíbe en los siguientes términos: «Ningún impuesto o derecho se impondrá sobre los artículos exportados (que se exporten) de «un Estado.» —precepto este que se puntualiza aún más en el Nº 2 de la Sección 10ª del mismo Artículo 1º. De modo que, penetrando la verdadera intención de las palabras de Marshall se ve que todo es cuestión de saber la forma en que el importador conserve o expendá el producto importado:—si abre, v. gr. los fardos y su contenido se mezcla con las existencias del almacén, el producto ha perdido su carácter de importado, forma la masa del negocio y puede ser gravado; —pero el impuesto no puede hacerse efectivo mientras permanece el producto siendo propiedad del importador, en su almacén, en la forma originaria de fardo o barril en que ha sido importado; diríase fuera del comercio, todavía; no ofrecido aún al público.

Durante la epidemia de fiebre amarilla, de tan ingrata memoria, murió, mientras estaba consagrado a auxiliar a los enfermos, el Ministro doctor Benito Carrasco (agosto de 1871). Gorostiaga lo reemplazó, abandonando su puesto en el gabinete nacional, ya trabajado seguramente en su cohesión y estabilidad por las perspectivas de la siguiente lucha presidencial.

En agosto de 1871 la Corte falló un caso de los llamados por «delito de imprenta», en el cual llevó a extremos imprevistos su santo temor de dar intervención a los jueces nacio-

nales cuando se cometen *delitos comunes* por medio de la prensa.

En *El Nacional* de 14 de junio de 1870 don Baltasar Moreno publicó, con su firma, un artículo zahiriendo con desmesurada irrespetuosidad al Juez de Sección doctor Manuel Zavaleta. Moreno, llamado a reconocer la publicación, articuló la incompetencia de marras, con la retahila del artículo 32 de la Constitución, etc. Requerida la opinión indispensable del Ministerio Fiscal, ya que se trataba de una cuestión de competencia, sostuvo la buena doctrina de siempre, esto es, que habiéndose amenazado a un magistrado nacional, se estaba en presencia de una infracción al artículo 30 inciso 3º de la Ley de 14 de septiembre de 1863 y debía imponerse al autor del artículo en que se contenían las amenazas la multa establecida en el artículo 32. El Juez Ugarriza no hizo lugar a la declinatoria de jurisdicción; apelado el fallo, la Corte dió vista al Procurador General y este pidió el sobreseimiento de la causa por entender que en el artículo incriminado no había insultos al Juez; pero — agregaba — «que si se hubiesen realmente dirigido insultos contra el Juez de Sección, por el modo de desempeñar sus funciones, *sostendría ser de la competencia de la Justicia Nacional corregirlos*».

La Corte, olvidando que había declarado la competencia del Juez Federal para juzgar al mayor Calvete por una infracción a la misma Ley de 14 de septiembre de 1863, e invocando los precedentes de Argerich y Laforest, declaró la incompetencia de la Justicia Nacional. ¿Cómo explicar esta contradicción? Porque si se fundó la Corte para declarar la competencia de la Justicia Federal en el caso Calvete, en el hecho de haber injuriado éste a un Senador Nacional (inciso 2º del artículo 30 Ley Nº 49) — para ser consecuente con su interpretación debió haberlo hecho también en el caso de Moreno, ya que este infringía el mismo

artículo de la misma ley, siendo diferente solo el inciso, por simple exigencia de enumeración.

Por una ley provincial promulgada en San Juan con fecha agosto 16 de 1870 se declaraba perdida la capacidad jurídica de los conventos de Santo Domingo y San Agustín y se autorizó al P. E. para realizar los bienes que a estos pertenecían, cuyo producto se invertiría en otras fundaciones religiosas. Fácilmente se concibe toda la serie de cuestiones constitucionales que una ley semejante planteaba. En efecto, concretada una contienda judicial, acerca de la percepción del precio de unas propiedades vendidas en ese momento por los padres de Santo Domingo, en cuya ocasión Fray Paulino Albarracín sostuvo que no era el indicado por el representante del Fisco el modo de apoderarse de las temporalidades del convento, sino que debía iniciarse juicio por rendición de cuentas, etc.,—se resolvió por el Juez provincial que el producto de aquella venta ingresara al erario de San Juan.

Apeló el P. Albarracín para ante el Superior Tribunal de Justicia, articulando, al expresar su agravio, la inconstitucionalidad de la ley de agosto de 1870, por cuanto solo la Nación rige el culto en la parte temporal, además de que los conventos existentes al tiempo de dictarse aquella no podían ser suprimidos, ni aún por el Gobierno Nacional. El representante de la Provincia argumentó en el sentido de que se trataba de facultades no delegadas en la Nación, en cuyo caso la Legislatura pudo dictar la ley, la cual, por otra parte, no suprimía los conventos, sino que los declaraba caducos por desaparición de los frailes. El Tribunal confirmó la sentencia por encontrar que «siendo un convento

« una persona jurídica, está sometido en cuanto a su capacidad y bienes a las leyes de su domicilio y, por tanto la ley de 16 de agosto, en nada contraría el artículo 67 inciso 20 de la Constitución Nacional ».

Ante la Corte Suprema se planteó de un modo expreso la cuestión de que las provincias no tienen facultad para suprimir conventos. Y se trajo a colación el derecho español y los precedentes más relacionados con el caso. Es el Gobierno General el que ha sucedido en su derecho patrimonial a la corona.

La palabra definitiva, pronunciada por la Corte en septiembre de 1871, declaró que la ley provincial de referencia era contraria a la Constitución Nacional. El fallo se fundaba en que las provincias no pueden ejercer las facultades delegadas, « ni aquéllas cuyo ejercicio por los poderes provinciales obstaría o haría ineficaz el ejercicio de las que corresponden a la Nación. » Que *todas* las relaciones de la Iglesia con el Estado han sido puestas bajo la *sola* jurisdicción e imperio del Poder Central, sin que las provincias, por ningún concepto, puedan ejercer actos de jurisdicción de manera que se altere o modifique las relaciones ya existentes, que reconociendo a las provincias la facultad de suprimir las órdenes existentes se les reconocería implícitamente la de suprimir las nuevas órdenes que admitiese el Congreso.

En rigor de verdad, la ley provincial no suprimía las órdenes religiosas de Santo Domingo y San Agustín. Tal lo habría hecho si en la plenitud de su existencia, numerosas y florecientes, hubiesen sido impedidas de subsistir; pero si resultaba que disminuyó tanto el número de frailes, al extremo de no haber sino uno en cada convento, la ley no venía sino a legalizar una situación de hecho, esto es, a declarar extinguida y caduca una corporación imposibilitada ya de llenar sus fines. Solo que la ley, en vez de ser

de carácter provincial, debió haber sido dictada por el Congreso de la Nación, si es que no bastaba un simple decreto en uso de atribuciones permanentes del Ejecutivo Nacional.

Resolviendo en el fondo la misma cuestión, pero con variaciones de detalle relativas al modo de presentarse aquélla, produjo al poco tiempo la Corte otro fallo (julio de 1875). Fray Lorenzo Morales, Provincial de la Orden Mercedaria, se presentó al Gobierno de Catamarca reclamando la devolución del convento y bienes que pertenecieran a dicha orden y que se hallaban ocupados a la sazón por el Colegio Nacional. Desviado el reclamo hacia el Gobierno de la Nación, este requirió el dictamen del Procurador General. Sostuvo el doctor Pico la improcedencia de la solicitud por cuanto la orden mercedaria se había extinguido en Catamarca el año 1826 con la muerte del último fraile, Fray Hilarión Correa, y para restablecer la orden, y ser recién atendible el pedido, era necesario un permiso del Congreso. El gobierno no hizo lugar al reclamo, y esta negativa puso en condiciones al peticionante para accionar judicialmente.

Se presentó, pues, ante la Corte demandando por reivindicación y pago de frutos. Se hacía mérito en la presentación de los orígenes de la orden,—fundada en España hacia el año 1828,—y de los derechos, reconocidos por la corona, con que se estableció en América. Que la orden no estaba *extinguida* en la República, pues existían conventos en Córdoba, La Rioja y Mendoza y como todos los conventos de una misma nación forman «una sola provincia religiosa», el Provincial de la orden tiene derecho y personería para reclamar el convento y bienes que le pertenecen.

Discutió el representante de Catamarca,—que era la demandada,—al contestar el traslado, que la orden de la Merced no se estableció en América con los mismos derechos que tenía en España, pues se había omitido la autorización real, que era requisito tan esencial que, según cuenta Solór-

zano, un convento de la Merced fué mandado demoler a costa del Virrey por haber permitido éste su fundación sin la cédula real (51); esta regalía y otras que pertenecieron a la Corona pasaron después a los poderes públicos de la República, cuyas instituciones no permiten que los conventos dependan de superiores residentes en el extranjero, ni que aquéllos tengan personería jurídica, sin la correspondiente autorización; el convento, pues, no tiene personería porque no existe y el Padre Morales, que para accionar se titula Provincial de la orden, tiene el nombramiento de una autoridad residente en Roma. Objetó semejante nombramiento el Procurador General,—cuando de nuevo le tocó expedirse sobre este asunto,—por carecer de autenticidad y no poder hacérselo valer en juicio por que no había sido oportunamente presentado al Gobierno, ni obtenido el *pase* indispensable para darle valor, sin que sea parte a modificar este criterio, como pretende el actor, el hecho de que se refiera al régimen interno de la orden, ya que un Provincial, por tener jurisdicción en toda la República, no puede ejercerla sin permiso del Gobierno. Además, se trata de hacer valer derechos de un convento que no existe, pues todo aquel que tenga menos de ocho frailes queda extinguido *ipso jure*. Termina el doctor Pico solicitando la imposición de una multa al Provincial litigante por estar ejerciendo sus funciones sin haber obtenido su nombramiento el *pase* respectivo.

La Corte rechazó la demanda, sin otros fundamentos que los tan suscitadamente expuestos por el Procurador General. Esto no obsta, sin embargo, para que pueda señalarse el

(51) Vélez Sársfield, en su obra «Derecho Público Eclesiástico» alude a este caso que se refiere al convento de Mercedarios Recoletos de Lima (12 de febrero de 1803) demolido, como se dice, a costa del Virrey. Conde de Materey, y de los Oidores que habían autorizado su construcción. Lo propio ocurrió con el convento de San Francisco de Mendoza.

pronunciamiento del Tribunal como inspirado en la verdadera doctrina jurídica y en los antecedentes más típicos del derecho canónico.

Desde luego, y según lo hace notar Vélez Sársfield en su libro de *Derecho Público Eclesiástico*, « los poderes singulares que los Reyes de España ejercieron en el Gobierno de las Iglesias del Nuevo Mundo, tuvieron su origen en las grandes y extraordinarias circunstancias que el descubrimiento de las Américas creó para la cabeza de la Iglesia y para el Jefe del Estado. Los monarcas de España tomaron posesión de la América invocando el título del Pontífice Romano y reconociendo como su primer deber y su principal objeto en la Conquista la propagación de la Religión Católica en el Nuevo Mundo ». Esto debe tenerse en cuenta para justificar la absorbente intervención del poder civil en la fundación de conventos y régimen de su existencia y exterminación, y, por lo tanto, para demostrar la bondad del argumento hecho en el juicio de que la Orden Mercedaria no tenía una existencia legal en la República, cuyas autoridades habían reemplazado en sus derechos a la Corona.

Sobre este último punto no debe haber duda, pues el patronato es un derecho inherente a la soberanía, y si antes lo tuvo el Rey, por ser soberano de América, ahora el Patrono no puede ser otro que el Gobierno que reemplazó a aquel en las tierras que forman la República, y es bueno hacer constar que la primera opinión sobre el particular emitida después de la caída de la dominación española pertenece a un eclesiástico, el Deán Funes. · Requerido, al efecto, por la Junta de 1810 sostuvo de un modo categórico que ésta, y en lo sucesivo los gobiernos que se organizaran en el Río de la Plata, había reemplazado al Rey en el ejercicio patronal de la Iglesia. « Autorizada la Junta por la voluntad de las provincias—dijo—se halla legítimamente subrogada en lu-

«gar de ese representante equívoco (el virrey) cuya existencia es muy dudosa. Somos hombres, vivimos en sociedad: preciso es que haya entre nosotros todo lo que constituye esencialmente el orden social. Los elementos de este orden no son otros que la soberanía individual o colectiva. ¿Quién podrá, pues, dudar por un momento que a falta de ese representante cierto *de nuestro Rey católico* (?) debe la Junta ejercer todas las funciones de su «cargo?»»

De modo, entonces, que no siendo legal la existencia de la orden, no podía hablarse de «*provincia religiosa*», sino que se trataba de fundaciones aisladas que se extinguían por la muerte de sus miembros sin que, por lo tanto, el convento mercedario de Córdoba pudiese tener derechos a los bienes del de Catamarca, extinguido.

Lo de siempre. A fines de 1870 una partida de paisanos armados se apoderó de la Villa de Caucete, dando *mueras* al Gobierno y *vivas* a Zaballa (D. Manuel José) a quien se atribuía la dirección de un movimiento subversivo. De más está decir que las cosas eran en San Juan. Un viento de rebelión soplabá por esos años en toda la región de Cuyo. La Legislatura, entonces, puso en vigencia por noventa días una ley de mayo de 1869 que autorizaba al P. E., «para arrestar por tres meses o trasladar fuera de la provincia a los individuos que, a su juicio, fuesen *sospechosos*.» En cumplimiento de órdenes expresas del Gobierno el Jefe de Policía, don José Domingo Astorga, arrestó a Zaballa y lo condujo hasta la frontera de La Rioja. (52).

(52) Siquiera esa vez el Gobernador invocó una ley para desterrar a su enemigo; cincuenta años después, en Mendoza — ¡siempre Cuyo! — se desterrara lo mismo, es decir peor, porque se hace sin ley.

Vueltas las cosas, un poco, a su quicio y de regreso Zaballa a San Juan se presentó ante el Juez Federal demandando criminal y civilmente a Astorga, lo primero por haber ejecutado una ley que importaba la traición a la patria, con arreglo al artículo 29 de la Constitución Nacional que califica de traidores a los que ejecuten o consientan actos por los cuales la vida, el honor o las fortunas de los argentinos, quedan a merced del gobierno o persona alguna; y la ley de marras tenía esta virtud. La demanda civil se dirigía a cobrar daños y perjuicios sufridos por Zaballa en sus negocios durante los once meses de su prisión y destierro. El Juez de Sección no hizo lugar a la demanda. Tampoco hizo lugar la Corte y, a su vez, el Procurador General fué categórico al expedirse aconsejando su rechazo. Para todo esto se tuvo en cuenta: Que la «ley de *sospechosos*» no implicaba la concesión de facultades extraordinarias, dadas las circunstancias y limitaciones con que fué dictada, es decir con vistas a mantener la paz pública, y destinada solo al arresto y traslación de las personas sospechosas, medidas estas compatibles con el estado de sitio que era, en realidad, lo que la ley creaba; de modo que si al ejecutarla el Jefe de Policía se había excedido, su conducta solamente podía ser juzgada por las leyes y justicia de la Provincia.

Pero la cuestión más fundamental y de mayor trascendencia, esto es, la de saber si las legislaturas provinciales pueden declarar el estado de sitio, apenas fué tratada en el fallo. «En este proceso es independiente,—dice el Juez «Morcillo,—la cuestión de si la Legislatura tiene poder de «*declarar el estado de sitio*, en uno o varios puntos de su «territorio; pues la *usurpación* de atribuciones del Con-«greso que se alega, en caso de existir, no constituye un «*delito nacional* definido y penado por la Constitución Na-«cional, ni ley alguna, no siendo, por lo mismo, materia de «acusación criminal.» A la Corte no la tentó el estudio y

solución de un punto de tanto interés. Y, cabe preguntar ¿de qué otro modo habrá de plantearse la cuestión para que aquella pueda resolver que una ley provincial declaratoria del estado de sitio es contraria a la Constitución, si cuando se le llevó una contienda *entre partes* evitó pronunciarse?

Se dijo que una ley provincial semejante sería una usurpación de facultades del Congreso, pero nunca un delito enumerado en la Ley Penal Federal N° 49. De nada valió, naturalmente, que se le recordara a la Corte que el artículo 93 de aquella ley preveía el caso. Tampoco se logró conmoverla diciéndole que ella misma había declarado ya que la Ley N° 49 no era un Código incompleto etc.

Tiene hondas raíces esta cuestión atinente a los poderes provinciales para suprimir las garantías de la Constitución. Al estallar la Revolución de 1810 cada provincia asumió su soberanía local; la Constitución de 1853 reconoció, es cierto, este hecho que había sido discutido largamente y sirvió de base al «tratado cuadrilátero» y al acuerdo de San Nicolás. Pues bien, recordando estos antecedentes, el defensor de Astorga sostenía que tales pactos preexistentes deben explicar los derechos de las Provincias y fundar la interpretación leal de la Constitución. Que los artículos 108 y 109, entre las prohibiciones a las provincias, no expresa la de la declaración del estado de sitio y que esta facultad no se atribuye *exclusivamente* al Congreso por el artículo 23.

El doctor Pico solo de paso aventura esta afirmación en su dictamen al referirse al estado de sitio: «facultad—dice—«que en realidad compete a todo gobierno organizado.» Desde luego, en la Constitución, aparte del precepto del artículo 23 que dá al Congreso la facultad de suspender las garantías en todo el territorio de la República, no hay disposición alguna ni facultando a las legislaturas para decretar el estado de sitio, ni prohibiéndoles *expresamente* hacerlo.

Pero, si se tiene en cuenta que el artículo 5º dá las normas generales que las provincias han de observar para dictar sus constituciones particulares,—no sujetas a revisión ni aprobación del Gobierno Central;—y que entre las prohibiciones expresas que se enumeran en el artículo 108 no figura la referente al estado de sitio, habrá que convenir en que una ley como la de la Legislatura de San Juan de 1870 no contraría, por lo pronto, ningún precepto de la Constitución, quedando por averiguar si estaba en contra de su espíritu y finalidades.

Desde luego, debe ante todo, tenerse en cuenta que la suspensión de las garantías constitucionales es una medida que, en la mayoría de los casos, debe tomarse de apuro para conjurar peligros inminentes o para facilitar la represión de desmanes ya cometidos, en cuyo caso no se concibe un pedido de las autoridades provinciales al Congreso Nacional que puede, por lo demás, estar en ese momento clausurado. Por otra parte, nadie más habilitados para declarar la suspensión de garantías que los propios poderes provinciales; y si la medida no ha de abarcar sino el territorio donde esos poderes son la representación legítima de la soberanía popular, en nombre de la cual la Constitución se dictó, ningún inconveniente puede haber para que las garantías que ésta consagra se suspendan momentáneamente.

El doctor Marcelino Ugarte murió en septiembre de 1872. Fué nombrado para reemplazarlo el doctor José Domínguez que tenía hecha ya, en ese tiempo, a justo título, la reputación de jurista que el desempeño de la magistratura no hizo sino cimentar. Su nombre era sinónimo de honorabilidad y de labor. Perteneció a aquel grupo de la juventud argen-

tina que obligada a buscar en el extranjero su seguridad personal, luchó desde lejos para que la libertad volviera de nuevo a reinar en la República. Fué así que vivió en Montevideo durante la época de Rozas; allí abrió su estudio logrando destacar su actuación siempre acertada y correcta. «Reposado y sereno—se dijo de él—su argumentación tenía «la firmeza de la convicción y ella campea en todos sus «artículos de la prensa y en sus estudios jurídicos.» Fué uno de los más decididos sostenedores del juicio por jurados en materia criminal y sobre ello ha dejado concienzudos trabajos de indiscutible mérito.

Su nombramiento para Ministro de la Corte tiene fecha octubre 14 de 1872.

En agosto de 1873 se llevó a cabo contra el Presidente de la República, don Domingo Faustino Sarmiento, un atentado criminal, descerrajándose varios tiros contra el coche en que era conducido. El Procurador Fiscal se presentó ante el Juez Federal alegando que se había cometido con ello un delito contra la seguridad de la Nación, cuyo conocimiento correspondía a la Justicia Nacional.

Dijo el Juez que el atentado cometido no constituía ninguno de los crímenes a que se refiere el artículo 3º inciso 3º de la ley número 48, invocada por el Fiscal, por cuanto sólo se refiere ésta a los crímenes que hayan sido definidos y penados por una ley especial del Congreso; «que por «criminal y atentatorio—agrega—que sea el hecho a que «se refiere la precedente vista fiscal, él no constituye en «el sentido jurídico de esta palabra *un delito contra la «seguridad interior de la Nación*, por cuanto si bien pueden «tener este alcance los términos generales de la primera

« parte del inciso citado, ellos se hayan circunscriptos por
« los subsiguientes a los delitos comprendidos en la otra ley
« de la misma fecha dictada para designar los de compe-
« tencia nacional.» En efecto, entre los crímenes a que se
refiere la ley número 49 no enumera como de juzgamiento
exclusivo por la Justicia Nacional el atentado contra la vida
del Presidente, se entiende que como hecho aislado,—tal
el de marras,—ya que si aquel fuese muerto en una sedi-
ción o rebelión, la competencia del Juez Federal sería in-
discutible.

No fué, sin embargo, de esta opinión el Procurador Ge-
neral, doctor Pico, quien sostuvo que si el hecho no resultaba
especialmente designado en las leyes 48 y 49, lo estaba
en términos generales. «El artículo 14 de la Ley Penal dice
« que son reos de rebelión — agrega el dictamen — los que
« intentan deponer al Presidente de la Nación despoján-
« dolo de su autoridad constitucional. ¿Y qué medio más
« eficaz hay de deponer un Presidente y despojarlo de su
« autoridad, que matarlo? El más eficaz y el más criminal
« y atroz. El Juez ha creído que si los asesinos se hubiesen
« limitado a gritar *muer a el Presidente*, él hubiera tenido
« facultad para juzgarlos; pero desde que le dispararon un
« trabucazo, esa facultad ha cesado. A estas absurdas con-
« clusiones conduco la doctrina establecida en la sentencia
« que V. E. no puede dejar pasar sin corregirla.»

Pero es el caso que, en esa época, en Buenos Aires tenían
jurisdicción todavía las autoridades provinciales, y habiendo
éstas prevenido en el hecho, el juez local era el compe-
tente, ya que se trataba de un «crimen particular;» pero,
en definitiva, el Procurador General dejaba claramente es-
tablecido que, si no fuera la prevención del Juez de la
Provincia, no habría duda, doctrinariamente, acerca de la
competencia de los Tribunales Nacionales.

La Corte, en su fallo, sostuvo que el atentado no podía

considerarse un crimen definido y penado por la Constitución y leyes del Congreso, que son las fuentes de donde emana la jurisdicción de los Tribunales Nacionales. No era posible admitir la aplicación del artículo 3º inciso 3º de la Ley 48 y tampoco podía aplicarse la disposición de la Ley 49, relativa a la rebelión, por cuanto no había habido *alzamiento público, ni abierta hostilidad contra el Gobierno*. « Habría gran dificultad y *sumo peligro* — agrega la Corte — « en dejar a los Tribunales Nacionales la facultad de establecer lo que constituye un delito *contra la Nación*, « cuando la ley no lo ha definido expresamente; y que, « como dice Kent, es más seguro limitar la jurisdicción de « ellos en materia criminal a los delitos definidos y penados « por la ley nacional y a los casos que están comprendidos « dentro de la jurisdicción *expresamente* concedida por la « Constitución.» Encontraba, así, preferible la Corte que atentados como el de referencia, contra la vida o la persona del Jefe Supremo de la Nación, que debieran estar bajo la protección de los Tribunales Nacionales, quedaran sujetos, por falta de una disposición legal *expresa*, a la jurisdicción ordinaria de los jueces provinciales, en cuyo territorio se hubiese cometido el hecho, « antes que sentir que los Jueces Nacionales asuman el poder legislativo, usurpación que traería más males en sí mismo « que los actos criminales que tuviese por objeto reprimir, « y que sería más perjudicial a los intereses nacionales « que el acto de respetar el derecho y el deber del Congreso, para incluir en los términos de la ley penal los crímenes contra la Nación que deben ser castigados y sujetos a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales.» El fallo de primera instancia fué, pues, confirmado.

Esta situación legal no se ha modificado hasta el presente. En las leyes federales 48 y 49 sigue sin penalidad un atentado en la forma del que nos ocupa, cuyo castigo,—

sin una definición específica inherente al carácter oficial de la víctima— está articulado en el Código Penal, que los Tribunales Nacionales solo aplican cuando se trata de infracciones al mismo cometidas en sitios donde la jurisdicción nacional es exclusiva. En síntesis, pues, no tiene entre nosotros una calificación especial el atentado contra la persona o la vida del Presidente de la República, cuando como en el caso de Sarmiento, se realiza sin alzamiento público. Si bien el hecho no queda sin castigo, resulta librado a una autoridad que no es la de la Nación, a jueces que no dependen de ella, y que, en determinado momento, pueden ser remisos en la represión de una vía de hecho contra el Presidente. Supóngase, por ejemplo, que en 1880 se hubiese atentado contra Avellaneda en las calles de Buenos Aires, tal como se hizo contra Sarmiento, ¿habría sido seguro que los jueces provinciales, dependientes de un gobierno que luego se alzó en armas contra aquel Presidente, se apresuraran a castigar al autor del atentado? La situación no puede ahora presentarse porque en la Capital la justicia depende de la Nación; pero en 1873 aquel peligro existía, y no debieron ser pocos los apuros de los austeros jueces de la Corte cuando estuvieron en el trance de declarar que la vida del Presidente de la Nación era ajena a la Justicia de la Nación. Por sobre esto estaba, sin embargo, la necesidad de respetar el principio de la división de poderes. El Congreso había sido deficiente al dictar las leyes federales; pero el Poder Judicial no podía legislar, ya que tal habría sido la aplicación por analogía de los artículos señalados en su acusación por el Fiscal.

Va a resolver la Corte, parcamente, con sus pocas palabras habituales, una de las causas más típicamente re-

presentativas del apasionamiento político, — que era a veces malquerencia personal, — característico de la época que estudiamos: el proceso contra el senador Nicasio Oroño por sedición y rebelión, cuyo accidentado desarrollo constituye una de las páginas más interesantes de la crónica judicial argentina.

Era Oroño hombre de fuertísimos enconos, de soberbio empaque y de una excesiva combatividad. Representaba en el Senado a la Provincia de Santa Fe en cuyo escenario político, por mucho tiempo, fué figura prepotente y temida. Mas no se crea que era el caudillo inculto y desquiciante, sin ley ni bagaje jurídico, — tipo Estanislao López o Manuel Taboada, — como pudiera creerse, por vérselo siempre cuadrado frente a las figuras más representativas de Vélez o de Sarmiento, con los cuales contendió permanentemente, con fiera acritud, mientras fué legislador.

Veamos el caso. Hacia mediados de 1872 las fuerzas de la Nación sofocaron un movimiento rebelde en Entre Ríos, uno de cuyos cabecillas, don Roberto Brochero, fué aprehendido en La Paz; secuestróse de su poder una carta firmada por Oroño cuyos términos es necesario consignar:

« Estimado amigo: He recibido sus dos cartas. Hoy mando al
« portador para que hable con usted, vea cuales son los elementos
« de que se puede disponer para recomensar nuestro propósito
« y se ponga de acuerdo sobre los medios y oportunidad de eje-
« cutarlo con éxito seguro. Vd. lo conoce y sabe que es amigo
« de completa confianza. Digale por consiguiente su parecer,
« el estado de su ánimo y la disposición en que se encuentra.
« No hay que hacerse ilusiones, ni proceder con irreflexión. La
« experiencia y los golpes deben haberlo aleccionado para no fiar
« sino en los elementos de que se puede disponer con seguridad.
« Yo, desde aquí, para dirigirlos con acierto necesito dos cosas:
« 1° que me digan siempre la verdad; 2° que cumplan puntual-
« mente mis indicaciones. Por no haberlo hecho así, ha sucedido

« lo que usted ha visto el 29. Si hubieran esperado ustedes a que
« yo les indicara que ya era tiempo no habrían sufrido lo que
« sufrieron. Como el portador es carta viva, excuso entrar en otros
« detalles, pero sí debo prevenirle que cuando quiera escribirme
« se dirija a don Manuel Díaz poniendo un doble sobre para don
« Juan Manuel Barcano, calle Victoria 726. Si me hace telegra-
« mas, que sea bajo la misma dirección. Lo saluda su affmo. amigo
« y S. S. Nicasio Oroño.—P. D. Rompa ésta cuando la lea.»

Pero Brochero, como se ha visto, no rompió la carta y cayó en manos del gobierno. Sarmiento, — ¡cuántas se iba a cobrar a un tiempo! — en 27 de septiembre de 1873 suscribió un decreto mandando pasar la fementida epístola al Fiscal para que entablara la acción correspondiente. No fué, sin embargo, esta actitud un impulso irreflexivo del Presidente. Antes por el contrario, convencido de la trascendencia del paso que iba a dar, sobre todo en razón de la encumbrada situación del culpable, trató de rodear los procedimientos preliminares de todas las garantías de acierto e imparcialidad que fuese posible. Fué así que convocó a su casa a sus ex-ministros Vélez Sársfield, Avellaneda y Varela, a los cuales exhibió la carta de Oroño, cuyo contenido fué materia de una larga discusión de la que resultó por unanimidad de pareceres la remisión del documento al Fiscal. A fin de que los fundamentos de semejante actitud del Presidente, desde el punto de vista legal, estuvieran convenientemente expuestos, se pidió al doctor Carlos Tejedor, — que en ese momento estaba ocupado en la tarea de redactar el Código Penal, — diera forma al oficio con que se remitiría la carta al representante del Ministerio Público. Sarmiento recibió el borrador de Tejedor, más no hizo uso de él, ni se apresuraba, por otra parte, a cumplir el consejo de sus ex-ministros y amigos. Llamó todavía, para tener una seguridad más, al Procurador General, doctor Pico, quien manifestó su opinión favorable a la legitimidad del proce-

dimiento a iniciarse, agregando, que nada más que la carta se necesitaba para que el Juez solicitara el allanamiento del fuero.

Así estaban las cosas cuando el Ministro de Hacienda le hizo saber al Presidente que en antecala del Senado, Oroño le había dicho que conocía la existencia de una carta en poder del Gobierno, cuya publicación no lo inquietaba, pues, al fin y al cabo, no había de contener sino lo que a diario repetía desde su banca. Así era, en efecto, y todavía subieron de punto los desplantes de Oroño después que supo el secuestro de la carta. Su combatividad estaba puesta a prueba. Había presentado un proyecto de ley firmado por él solo excluyendo a Santa Fe del estado de sitio, con designios que los del campo adicto al Presidente se encargaban de revelar y que el propio gobierno conocía, ya que en la Oficina de Telégrafo se encontró una clave que servía a Oroño para comunicarse con los revolucionarios de aquella provincia.

Por fin el Presidente, viendo que todo contribuía a poner de manifiesto la comisión de un delito común, instigado por su implacable adversario, resolvió enviar la carta al Fiscal para que pidiera inmediatamente al juez respectivo se dirija al H. Senado solicitando el allanamiento del fuero del expresado Senador. Se hace mérito en los fundamentos del decreto del continuado propósito de Oroño de perturbar el orden de la República, y se recomendaba especialmente al Procurador Fiscal suma actividad en la prosecución del sumario. Con posterioridad se agregó a las piezas de convicción otra carta firmada por « un sargento » que arrojaba más luces sobre los hechos que se preparaban.

El Fiscal promovió la acción conforme a las instrucciones del gobierno, recomendando se activaran los procedimientos no solo por la gravedad del delito sino porque el Senado debía pronto entrar en receso. Proveyó a todo de conformidad el Juzgado y a fines de septiembre se libro

oficio al Senado solicitando el desafuero del doctor Oroño. Por unanimidad el cuerpo se pronunció en contra y el último día del período ordinario se hizo saber la resolución al Juez, quien dió vista al acusador público.

«No habiendo el H. Senado—dice el dictamen—encontrado «mérito suficiente para conceder el allanamiento del fuero, «debe creerse que no ha encontrado en el sumario prueba suficiente de la complicidad de dicho senador en los «delitos de rebelión y sedición en que aparece complicado; «*pues no es admisible la suposición de que habiendo, «cuando menos, graves presunciones de complicidad en «dichos delitos, no hubiera accedido al desafuero.*» (Aquí es donde se equivocaba el Fiscal.) Era, pues, necesario adelantar el sumario, llamándose a declarar a Brochero sobre sus relaciones con Oroño y demás circunstancias conducentes a dejar expedita la acción de la Justicia. No hizo lugar a esto el Juzgado, incurriendo en el error de concepto de que no podía *formarse causa* a un miembro del Congreso Nacional sin el previo allanamiento del privilegio parlamentario, el cual,—según el Fiscal argumentaba al pedir revocatoria del auto,—no es tan vasto ni absoluto como el Juez lo supone, pues se limita, según el artículo 61 de la Constitución, a impedir el *arresto* de un legislador, pero nunca obstaculiza la *formación de causa*, para averiguar delitos comunes cometidos por aquéllos. Y tan puede formarse causa que el artículo 62 dice que al solicitarse el desafuero de un Diputado o Senador, la Cámara respectiva «examinará el mérito del sumario (remitido al efecto por el Juez) en juicio público.» Luego el sumario puede instruirse. Ha de verse, sin embargo, más adelante, que la cuestión no es tan clara.

No hizo lugar el Juez a la reposición y concedió la apelación para ante la Corte. Requerido el dictamen del Procurador General, este aconsejó la revocatoria de la sentencia.

« Para establecer—dijo—los verdaderos principios que, según la Constitución rigen en esta materia. » Los privilegios acordados a los legisladores, recordaba el doctor Pico, se reducen a no poder ser molestados por las opiniones que emitan en las sesiones y a no poder ser *arrestados*, salvo el caso de « infraganti » delito; fuera de esto, los senadores y diputados tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano, *están sometidos a las leyes del país y a la jurisdicción de los tribunales*. « La resolución del Senado de 30 de septiembre — termina diciendo el Procurador General—importa solo que esta Cámara no consideró que la carta presentada era suficiente prueba para seguir una causa criminal y arrestar a un Senador, pero de ningún modo importa que los senadores pueden impunemente trastornar el orden público y cambiar por la fuerza los gobiernos de provincia; si estas conspiraciones se prueban al Senador Oroño, es indudable que el Senado, por su propia dignidad, consentirá en que se le arreste y se le juzgue. »

La Corte revocó el auto, en tres renglones que dicen, sin embargo, muchas cosas:—1º) Que el privilegio parlamentario no alcanza sino a impedir el arresto de un legislador; —2º) Que puede formársele causa, sin previo allanamiento del fuero.

Esto último no siempre es posible o está ocasionado, por lo menos, a que sobrevengan situaciones delicadas en que se pone de manifiesto lo difícil que es *procesar* a un legislador. Supóngase el caso del Senador Oroño; sin necesidad de arrestarlo (para lo cual es indispensable que el fuero haya sido allanado) pudo el Juez, en la prosecución de la tarea de instruir el sumario, citarlo, v. gr., para que reconociera la firma de la carta generadora del delito o bien para carearlo con Brochero, a raíz de cuyas diligencias recién podría estar en condiciones aquel de apreciar el grado de

culpabilidad del acusado, ya que antes solo se trataría de una mera denuncia basada en un documento que puede ser apócrifo y cuya autenticidad depende del reconocimiento mencionado. Pues bien, normalmente, cuando se trata de procesados sin privilegio, el Juez puede, en caso de negarse aquel a comparecer, ordenar su detención, ya sea para reconocimiento de la firma o para carearlo con un testigo; pero como para hacer arrestar a un legislador es necesario que haya sido desaforado, para lo cual debe remitirse el sumario a la Cámara respectiva, se crea la posibilidad de que no se acuerde el allanamiento desde que los autos no han de arrojar mérito bastante, ya que de fortalecer la prueba se trataba precisamente, al requerirse el reconocimiento de la firma y el careo.

Es, como se ve, una situación sin salida. El Juez no puede adelantar el sumario porque necesita arrestar al prevenido como único medio de practicar medidas indispensables; y la Cámara no acuerda el desafuero porque de las actuaciones que se le envían—donde hay una carta cuya firma no ha sido reconocida,—no surgen probanzas bastantes del delito. Es que, sobre todo, en casos como el que nos ocupa es cuando más en evidencia se pone lo que se llama el «espíritu de cuerpo», que lleva a los miembros de una Cámara a estrechar filas en defensa de un compañero en trance de juicio criminal.... lo de las barbas en remojo. ¿Qué más prueba de culpabilidad se deseaba, en el caso del Senador Oroño, que la carta secuestrada? Quizá no para condenarlo, si se quiere, pero sí para determinar al Senado a que facilitara el esclarecimiento del hecho que a todos interesaba y más que a nadie al Senado. Y nose diga que todos los miembros de éste, en 1873, eran enemigos de Sarmiento; había varios adictos a su política y, sin embargo, se opusieron a una medida que dejaba expedito el camino a los Tribunales al más encarnizado de sus enemigos.

No era hombre Sarmiento, ni la índole del asunto lo permitía, de quedarse satisfecho con la solución dada a la cuestión. Creyó necesario explicar por medio de un manifiesto al pueblo las razones que asistían al Gobierno, al par que denunciaba la complicidad del Senado. Debíó ser tanto más perentoria, en el ánimo de aquel, la necesidad de publicar el documento, cuanto que, según el comentario popular, aparecía siendo blanco de recriminaciones e imputaciones muy graves. « El Presidente de la República — dice — no « entrará a juzgar el acto del Senado (la negativa del des- « afuero); pero tiene derecho de vindicarse de imputacio- « nes odiosas, hechas sin razón alguna y abusando de que « no hay entre nosotros la práctica de llamar al orden al « orador que se sale de los límites de lo prometido en el « debate. Ninguna pasión, ni personal, ni de partido ha « guiado la conducta del Presidente; y para probarlo bastará « el recuerdo de las fechas y los actos preliminares ».

Refiere luego las incidencias y consultas que ya dejamos referidas, y termina de esta manera:

« Conciudadanos: si hay maldad, pasión e injusticia en la « acusación promovida por el Fiscal, sépase al menos que « son cómplices del delito del Presidente, los señores Vélez « Sársfield, Tejedor, Pico, Zavalia como criminalistas y juris- « peritos: los ministros Domínguez, Frías, Avellaneda y Va- « rela; y ante esa falange de reputaciones, el Presidente « puede reposar tranquilo sobre su rectitud y su conciencia, « dando el valor que tengan las decisiones que lo condenan a « él, que no ha cometido falta alguna en este asunto, para pro- « digar elogios y una corona cívica al autor de la carta que « seguirá a esta franca y sencilla exposición de actos adminis- « trativos en que la apreciación individual no entra por nada. »

« La República Argentina puede presentarse orgullosa « con la opinión de los jurisconsultos citados ante cualquier « tribunal del mundo. »

« Ciudadanos: El Presidente apela a la conciencia pública, protestando de estar animado de pasiones menos censurables de las que animan al Senador don Nicasio Oro-
« no en este asunto.»

La azarosa campaña política que terminó con el triunfo de la candidatura presidencial de Avellaneda, había exigido una tan expresa definición de opiniones a los hombres de esa época, que entre los amigos y los adversarios de aquel existía un abismo, hacia fines de 1874, (y ya se verá después qué violentas exteriorizaciones tuvo este estado de ánimo). El doctor Mardoqueo Molina, a la sazón Juez Federal de La Rioja, había sido un decidido partidario de Avellaneda. Tocóle entender por entonces en una denuncia formulada contra las personas designadas para formar la mesa receptora de Guandacol, y que, seguramente por razones inconfesables de baja politiquería, no concurrieron, el día del comicio, a constituirla. Comparecieron al juicio verbal los acusados,—eran don José B. Soage, don Desiderio Nieva y don Nicolás Llano,—y recusaron al Juez fundándose en que « como Jefe del partido Avellanedista tenía un « verdadero interés, *como partidario ardiente*, en aniquilar « a sus opositores.» El Procurador Fiscal objetó la recusación diciendo que aún cuando fuera cierta la actuación que se atribuía al Juez, después de pasada la lucha electoral, no podía suponerse que solo por afección de partido llegara a ser parcial, máxime cuando no constaba en autos a qué partido pertenecían los acusados.

Al resolver la cuestión el Juez hace mérito de que no se había probado en el expediente que los recusantes tomaran participación en favor de uno u otro partido político;

y que en lo que a él se refería, suponiendo que fuera cierta la afinidad política imputada, no podría deducirse de ahí, en orden a lo que dispone el artículo 43 inciso 8º de la Ley de Procedimientos, que tuviese un interés directo o indirecto en la resolución de la causa, desde que la lucha política había terminado y en la cual solo podía reputársele interesado como simple partidario de una de las candidaturas a la Presidencia. « Que la causal de odio o resentimiento—agrega—que al parecer fué lo que pretendieron justificar « los procesados como existente entre estos y el Juez, « nacido del desacuerdo en ideas políticas, es inadmisibles « desde que no ha existido antes ni ahora una sola de las « circunstancias que expresa el inciso 5º del artículo citado, para que el Juez pudiera considerarse inhabilitado en « el conocimiento de esta causa, pues que no ha conocido « ni los nombres de los recusantes antes de haber sido emplazados de comparendo. »

Llevado el caso a la Corte, dijo en la ocasión el Procurador General que el haber sido el Juez ardiente partidario de una candidatura constituía, sin duda, una gran falta en una persona encargada de administrar justicia, « pero esto no puede impedirle juzgar rectamente si hicieron bien o mal los miembros de una mesa electoral en faltar a su puesto ». La Corte fué de esta opinión, que, por cierto, está informada en muy atinados principios:—Que un Juez llegue a ser « ardiente partidario » de una candidatura presidencial significa la exteriorización permanente de la opinión personal al respecto, acompañada de la lógica detracción de la candidatura adversa, todo ello sin el recato ya,—porque el entusiasmo es una pendiente,—de manifestarse solo en el seno de la intimidad. La « gran falta » a que aludía el doctor Pico en su dictamen consiste en confundirse con la masa exaltada de los partidarios; llegado este momento, puede decirse que el Juez está al borde de una situación que

solo tiene que resolverse con la total desconfianza del público en su gestión. Ha descendido de la altura moral de su puesto, la línea se ha perdido, la apostura majestuosa no es ya posible: es uno de tantos, igual a todos, cuando debiera estar por sobre todos.

Sin embargo, esto no es sino la apariencia; la ofuscación que lleva a un Juez a embanderarse políticamente es momentánea, no dura sino mientras no debe poner a prueba su imparcialidad y rectitud; cuando un caso llevado a sus estrados lo vuelve a la realidad, el Juez está de nuevo en su puesto, íntegramente, en aptitud de dar a cada uno lo suyo, o de castigar a un culpable, así sea su amigo o su enemigo. La Corte así lo entendió entonces; y puede asegurarse que los intereses políticos no inclinaron nunca la balanza en las esferas de la Justicia Nacional.

Actualmente, debido a disposiciones de la legislación electoral en vigencia, los Jueces de Sección tienen en sus manos, —de una manera omnimoda, pues sus resoluciones sobre el particular no son apelables,—la tarea de depurar cada dos años los registros electorales de la Nación. Ninguna función, sin duda, en que más pudiera ponerse de manifiesto el entusiasmo partidario de un Juez. Sin embargo, nadie ha señalado hasta ahora, la más mínima desviación.

El Juez Federal de Corrientes, doctor Carlos Luna, en julio de 1874, condenó por el delito de sedición al Gobernador de la misma provincia don Miguel V. Gelabert, al Ministro don José María Cabral y Melo y al Jefe de Policía don Sebastián Alegre, imponiéndoles una multa de cincuenta pesos fuertes a cada uno. De más está decir que la Corte no estuvo de acuerdo con el Juez, cuyos proce-

dimientos anuló; pero son de mucho interés las consideraciones que éste hizo para llegar a condenar y las que formuló la Corte para declarar incompetente a la Justicia Nacional.

Veamos, entre tanto, de que se acusaba a las autoridades provinciales. Don Rafael Gallino (hijo) era Juez de Paz de Mercedes, y en tal carácter redujo a prisión al Jefe del Correo local, mientras se encontraba al frente de la oficina; demandado por éste aquel, ordenó el Juez Federal la detención del de Paz y pidió informes al Gobernador de la Provincia, pues era por órdenes de éste que el Jefe de Correos había sido encarcelado, a lo que se respondió que el Juez de Paz no había hecho sino cumplir órdenes superiores, y que se había procedido a ponerlo en libertad desconociéndose autoridad al Juez Federal para procesar a un empleado de la Provincia, que se había limitado a ejecutar instrucciones de las autoridades legítimas de la misma. Exigió el Juez que Gallino fuese nuevamente detenido y como no se accediera a ello, solicitó y obtuvo del Gobierno Nacional el auxilio de la fuerza militar, en presencia de lo cual el Gobernador cedió y al comunicar que el Juez de Paz estaba nuevamente preso expresaba « los mayores deseos de proceder en « armonía con las autoridades nacionales ».

Pasados estos antecedentes al Procurador Fiscal. fué éste quien calificó de sedicioso el proceder del Gobernador conforme a las disposiciones de la Ley Federal N° 49 de 14 de septiembre de 1863. Encontraba el Juez—al dictar su fallo — « que los Gobernadores de provincia y sus ministros « no gozan del juicio político cuando son acusados por violación de las leyes penales de la Nación ». Tal es la piedra angular de los razonamientos del doctor Luna. Violada una ley nacional — agregaba — y estando los Jueces Federales para hacerlas cumplir, no debían detenerse ante la elevada jerarquía de los infractores, pues de lo contrario sería ilusorio aquello de que la Constitución Nacional y las leyes

que en su consecuencia se dicten, son la *Ley Suprema de la Nación*, ya que podía ser muy bien que la Legislatura encargada del juicio político, por razones ajenas a la ley, dejase de enjuiciar al Gobernador. « Que aunque es verdad « que las Provincias son soberanas e independientes, se dan « sus propias instituciones y eligen sus Gobernadores sin « intervención del Gobierno Nacional, no lo es menos que « no conservan el poder delegado a la Nación, y uno de « *los poderes delegados es el establecimiento de los Tribu- « nales Nacionales con jurisdicción para entender en las « causas que nacen de la Constitución y leyes del Congre- « so* ». En realidad, no hay una disposición constitucional expresa que sustraiga a los Gobernadores de Provincia de la jurisdicción de los Jueces Nacionales en caso de infracción de las leyes del Congreso. Solo al Presidente y Vice-Presidente de la República, Jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales inferiores de la Nación enumera la Constitución como exceptuados de aquel procesamiento común, pero es que la unión nacional, el federalismo, se habría hecho sobre bases muy precarias si los Gobernadores de Provincia estuviesen al alcance de los Jueces de Sección.

El Procurador General sostuvo que ni aún el Congreso Nacional podía enjuiciar a un Gobernador de Provincia, pues ella significaría violar su independencia; y en este principio se fundó la enmienda que se hizo a la Constitución de 1853, que quitó a la Cámara de Diputados la facultad de acusar a los Gobernadores ante el Senado.

Encuentra la Corte en su fallo (marzo 9 de 1875) que el Gobernador de Corrientes no procedió justificadamente al poner en libertad una persona presa por orden del Juez de Sección, en cuyo caso no había otro camino que dejar que el procesado articulara su defensa. Pero fué, después, una mala aplicación de la ley la que el Juez Federal hizo al declararse competente y condenar al Goberna-

dor, el cual « no se alzó *públicamente* — dice el fallo — en el « sentido del artículo 30, para impedir la ejecución y cumplimiento de las providencias del juez. Todo, bien considerado, no hubo otra cosa que una cuestión de jurisdicción, por negar aquel gobierno la competencia del « Juez para procesar a un empleado provincial, que había « obrado bajo las órdenes de ese gobierno y cuya conducta « había merecido su aprobación; y la facilidad con que se « prestó a abandonar el camino que había adoptado muestra que, si estaba en error y equivocaba los medios, su « intención no era hostil a la Autoridad Nacional.»

Acerca de la teoría del Juez de que la ley, al someter a su conocimiento las causas por sedición, no había hecho distingos de personas, por más encumbradas que fuesen, — expresaba la Corte que « la distinción está en la naturaleza de las instituciones federales, en las cuales es de « esencia la independencia de los Gobiernos Provinciales y « la seguridad e inviolabilidad de sus poderes públicos; y « todo eso dejaría de existir desde que esos poderes fuesen « responsables criminalmente por sus actos oficiales, en la « misma forma que los individuos particulares.» No es otra, sin duda, la cuestión; así expuesta, sucintamente, en los términos escuetos de un pronunciamiento judicial, basta para poder imaginar, en toda su extensión, los trastornos innumerables que habrían de producirse si las cosas no fueran como las define la Corte, esto es, si hubiesen prosperado la hermenéutica del Juez de Sección, explicable, por lo demás, en esos años, ya otra vez señalados en este libro, de incipiente institucional, en que se quería por sobre todo el predominio de la Nación.

Las elecciones presidenciales de 1874 no dejaron satisfechos a los vencidos. Arrastraron éstos al General Mitre a una aventura guerrera en que se ponían a prueba la impaciencia y el despecho de las figuras secundarias de su partido; militares, en su mayor parte, sin el concepto claro todavía de las prácticas institucionales, que enseñan a conformarse con el veredicto de las urnas, si a ellas se había librado la solución de la contienda. «Escéptico y abnegado — dice Groussac — en holocausto a su partido,» Mitre, al frente de sus parciales, levantó bandera de rebelión contra la autoridad legítima, — que no lo era para él, es claro, y por eso, sin duda, accedió, (sin entusiasmo, por lo demás) a las solicitudes de sus partidarios.

La revolución terminó con la capitulación de Junín; pero ésta no tenía la virtud de eximir a sus autores de las responsabilidades legales en que habían incurrido. Fueron, así, citados a comparecer ante un Consejo de Guerra *ad-hoc* el General Ignacio Rivas y los Coroneles Benjamín Calvete, Emilio Vidal, Julián Murga, Martiniano Charras, Jacinto González y Benito Machado. En abril de 1875 el defensor de éstos se presentó ante el Juzgado Federal, arguyendo que ese Consejo era inconstitucional o, por los menos, incompetente para conocer del delito atribuido a los procesados, por lo que planteaba una cuestión de competencia contra aquél, debiendo librarse oficio de inhibitoria. Desde luego se trajo a colación la inexistencia de los fueros especiales y la imposibilidad de crear una justicia particular para una clase determinada de ciudadanos.

Además, la causa, por razón de la materia, pertenecía a la Justicia Nacional, sin que el carácter militar de los inculcados pueda variar este criterio, ya que «el militar, entre «nosotros, que sirve al pueblo y no al príncipe, puede afiliarse a un partido político» y ser juzgado juntamente con los ciudadanos con quienes ha participado en una em-

presa. No obsta a esto la imputación que se hace del delito militar de *deserción*, el cual desaparece para dar lugar a la calificación del de rebelión. «El presente juicio—decía «el defensor—es de materia exclusivamente política y esta «prima sobre todas las razones de personas y excepciones; «la materia política es de orden público para determinar la «competencia, siendo el juicio político un juicio universal «que atrae todos los accesorios del hecho principal y que «dicho juicio es de competencia exclusiva de los Tribunales Federales. Para saber si un delito es puramente militar debe tenerse en cuenta si el hecho es punible solo «respecto del militar; que salvo estos delitos, que solo son «tales porque son cometidos por militares, la jurisdicción «militar es incompetente.» Finalmente se arguía que la Ley número 49 al castigar la rebelión no distingue las personas no militares de las militares.

El Juez Federal se declaró incompetente para procesar al General Rivas y al Coronel Murga, y competente respecto de los demás procesados. Veamos las razones.

Por lo pronto, dejaba buena constancia el juez de que «el «estado de guerra, o sea el imperio de la ley marcial, pro- «vocado por el levantamiento en armas de uno de los partidos contendientes en la lucha electoral, manifestando «públicamente sus propósitos de derrocar las autoridades «creadas por la Constitución, quedó terminado de hecho «por el sometimiento de los revolucionarios, habiendo sido «sometidos a prisión sus autores y cómplices *por el ejercicio tranquilo de la justicia y no en nombre de las «necesidades de la guerra*, terminada por el triunfo.» Daba, después, mucha importancia el Juez a este distinguo, ya que se trataba de dejar bien establecido que lo que se iba a aplicar a los militares acusados no era la ley marcial sino la ordenanza *permanente* del Ejército; la primera es el régimen que existe en tiempo de la guerra, en relación

a las personas y cosas, bajo la acción y dentro del objeto de las operaciones militares; «extingue y suspende los derechos civiles —dice un profesor de la Universidad de Harvard, citado por el Juez— y los remedios fundados en ellos, «mientras existan y aparezcan ser necesarios para el completo cumplimiento de los propósitos de la guerra, siendo «el que lo ejerce responsable de cualquier abuso de la «autoridad que inviste. Es la aplicación del gobierno militar, «el gobierno de la fuerza, a las personas y a las cosas.» No era, pues, aplicable en la ocasión la ley marcial y debía resolverse la cuestión de competencia planteada solo en mira de las disposiciones permanentes de la ley de Justicia Militar frente a los preceptos de la Ley Federal de 14 de setiembre de 1863.

A este respecto debía tenerse en cuenta que la revolución de setiembre de 1874 encuadraba dentro del concepto de rebelión definido por aquella Ley Federal, pues eran de notoriedad evidente los propósitos y tendencias, expresadas públicamente en los manifiestos, *de derrocar a las autoridades nacionales*, que es lo que caracteriza y determina el delito, correspondiendo, por lo tanto, su conocimiento a la Justicia Nacional, con la sola limitación del artículo 7º de la ley que se refiere a las infracciones de carácter militar, que era lo que podía imputarse a Rivas y Murga, ya que, al estallar la revolución, se encontraban al frente de sus fuerzas con comisión directa del Gobierno Nacional, y en servicio activo, en cuyo caso adquieren el carácter de militar los delitos que serían comunes cometidos por particulares. Tal la rebelión.

Los inculpados no tenían mando militar y su proceder debía ser juzgado por los Tribunales Federales, por la naturaleza del delito y sin consideración a su calidad de militares.

Los defensores de Rivas y Murga apelaron para ante la Corte.

El Procurador General encontraba impropio el Consejo de Guerra mandado formar por el Gobierno, desde que en modo alguno ese consejo podía imponer las penas que señalaba la Ordenanza Militar, única que él podía aplicar: no podía aplicar la pena de muerte porque la Constitución la prohíbe para crímenes políticos y porque el pacto de Junín había garantido la vida de los sometidos; no podía, tampoco, degradar a los procesados porque se había establecido respetar su decoro. Creía el doctor Pico que el juicio militar no debió haberse iniciado, porque para defenderse necesitaban los reos traer de nuevo a colación las razones que tuvieron para rebelarse, razones a las cuales ellos mismos habían renunciado al reconocer como legítima la autoridad del Presidente Avellaneda. « La completa impunidad — agrega — hubiera sido un mal mucho menor que los que « puede causar un juicio público sobre este hecho ». Según el dictamen, todos los militares rebeldes debían ser juzgados por los Tribunales Federales, no pudiendo admitirse, por carecer de base legal, el distingo que hacía el Juez entre los que tenían mando activo de fuerza y los que no lo tenían.

La Corte se aprovechó, — con toda razón desde el punto de vista procesal, por cierto, — de que, según informes producidos, el Consejo de Guerra no había entrado todavía a funcionar, para declarar « que siendo un principio de derecho que « no existiendo causa pendiente en otro Tribunal, no puede « haber conflicto de jurisdicción, ni contienda de competencia », no había lugar en el estado actual del asunto a decidir la cuestión planteada.

Así era, en efecto. La Corte pudo no entrar en el fondo de la cuestión, — que era, por lo demás, harto fácil según los términos de la sentencia y del dictamen del Procurador General, — esto es, que todos los militares debían ser juzgados por la Justicia Federal; y pudo no entrar debido a

que se había planteado la contienda como inhibitoria y no como simple cuestión de competencia susceptible de ir a la Corte y ser resuelta por ésta, con sólo existir disconformidad entre el petitorio particular y la resolución judicial, entre el Fiscal y el Juez; pero en el *sub-judice* este resolvió de conformidad con la tesis sustentada por el defensor de los acusados.

Cada vez que la oportunidad se presenta, las autoridades militares discuten, en principio, a los Jueces Federales la competencia para procesar a militares. De nada vale en el criterio de aquellas las causas del proceso; la sola condición de militar es bastante para que solo un tribunal de ese mismo carácter pueda juzgarlos. Un sentimiento innato en la gente de armas, que es como un resabio de antiguos y arraigados prejuicios, que tienen su origen en el sistema arcaico de los fueros personales, los mueve a sustraerse a los tribunales que no estén formados por sus iguales. La interpretación recta de nuestras leyes y el buen sentido se imponen siempre; pero los militares, cuando de nuevo la oportunidad se presenta, como una protesta, hacen una cuestión de competencia, poniendo en la contienda todo el ardor y la pasión inherentes a los casos en que se discute una cuestión de honor.

Así, cuando los Jueces Federales procesan a una persona por infracciones al enrolamiento o a la conscripción, aquella permanece detenida en un cuartel y el Jefe del cuerpo es el responsable en caso de evasión; pues bien, cuando la ocasión se ha presentado de hacer efectiva la responsabilidad en que el militar ha incurrido, como guardián negligente de un preso, y el mismo Juez de la causa ha procesado al militar, se han hecho cuestiones de competencia que los militares han perdido siempre, pues al descuidar al detenido incurrian en una infracción que la Ley Federal N° 49 castiga, sin distinción entre custodias-militares

y custodias-civiles (53). Naturalmente, no puede haber cuestión cuando el preso evadido, además de ser militar, estaba siendo procesado por un consejo de guerra.

Tal fué el caso ocurrido en febrero de 1875 cuando estando detenido el General José M. Arrendado en Mendoza, facilitaron su fuga don Francisco Cuitiño, don Francisco Calle y los coroneles Roca, Acevedo y Racodo y una mujer, cocinera que había sido del prófugo. El Procurador Fiscal pidió al Juez de Sección que instruyera un Sumario; pero el Juez, doctor Calixto de la Torre, con buenas razones declaró su incompetencia, las que sirvieron para que la Corte después de oír la opinión concordante del doctor Pico, confirmara la resolución.

Todos estos procesos originados por la revolución de septiembre de 1874 estaban todavía sin la sentencia definitiva en la cual se habría hecho recién el necesario análisis de los hechos y calificándose la crimosidad de los mismos, cuando en julio de 1875 el Congreso dictó una ley general de amnistía. ¿Que influencia tendría esta ley en los procesos aún en tramitación? No podía existir duda al respecto. Ya en 1872 la Corte en el caso de Crisólogo Andrade que se había rebelado con el *Chacho* unos años antes, sentó el único principio avenible con el concepto no solo del perdón, sino del olvido absoluto que la amnistía significa. Se dirá que es un avance contra las prerrogativas

(53) Ver especialmente el proceso seguido contra el Sub-Prefecto del Puerto de La Plata por infidelidad en la custodia de presos, en el que se registran las opiniones acordes, en el sentido de la competencia civil, del Juez Federal de Sección, del Fiscal de la Cámara Federal, de los tres miembros de esta, del Procurador General de la Nación y de todos los Ministros de la Corte Suprema (año 1916).

de un poder,—cual es el que tiene el Judicial para juzgar,—cometido por otro poder, el Congreso; pero siendo como es el de castigar un derecho inherente a la soberanía, es inalienable en la representación popular, sobre todo tratándose de cuestiones políticas. ¿Podría el Congreso dar una amnistía por delitos comunes? ¿Podría darla antes de falladas las causas?

En esta materia la interpretación que podría decirse liberal, avanza mucho. Hasta hace poco tiempo no habría sido posible sostener, v. gr., que se puede indultar por gracia presidencial a los procesados todavía sin condena dictada. En la actualidad se practica el sistema, que aparece sustentado por reputados hombres de ley.

CAPÍTULO VIII

1876-1880

El doctor CARLOS TEJEDOR es nombrado Procurador General en reemplazo del doctor FRANCISCO PICO. — Los Bancos de emisión. — Las leyes de provincia al respecto. — *Banco de Londres y Río de La Plata v. Provincia de Santa Fe*. — Muerte del ministro doctor DELGADO y nombramiento del doctor SATURNINO M. LASPIUR. — Los establecimientos nacionales en las provincias y la facultad impositiva de éstas. — Las relaciones entre los cónsules extranjeros y sus subditos. — Incompetencia de los Tribunales Federales para conocer en un conflicto sobre el particular. — La fundación del Banco Nacional. — Alcance del inciso 5º del artículo 67 de la Constitución Nacional. — Los pagos hechos con moneda proscripta de la circulación legal. — Concepto de las anti-guas «encomiendas». — *Provincia de Jujuy v. Fernando Campero*. — El impuesto provincial de guías. — Motivos de recusación de un Juez. — Los procesos contra Ricardo López Jordán. — La muerte del General Urquiza. — La facultad de las Cámaras del Congreso para arrestar. — Concepto del *habeas corpus* — ¿Qué se entiende por privación de la libertad? — Retiro del doctor del Carril y nombramiento del doctor ONÉSIMO LEGUIZAMÓN. — Con la muerte del doctor Barros Pazos y la designación del doctor ULADISLAO FRÍAS, la Corte resulta ya absolutamente renovada. — Consideraciones oportunas. — *El Obispo de Cuyo v. Gobierno de San Juan*. — Incompetencia de la Corte Suprema. — La influencia gubernativa en las elecciones. — ¿Es posible la tentativa en el delito de rebelión? — Nombramiento del doctor EDUARDO COSTA.

Después de trece años de un brillante desempeño, el Procurador General, doctor Pico, dejó de existir a mediados de 1875. En septiembre de ese mismo año fué nombrado para reemplazarlo el doctor Carlos Tejedor.

Era este un hombre genuinamente porteño, al extremo de que sus ideas, exaltadas en un momento dado por el ardor y la ofuscación de sus partidarios, fueron pendón de guerra civil. Había nacido en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1817; era otra víctima de la tiranía que llegaba, después de rudo peregrinaje, a las regiones serenas del pretorio con ese gran caudal de experiencia que solo se recoge en la adversidad. Había vivido en Chile y en el Brasil; estuvo asociado con el doctor Gabriel Ocampo y, posteriormente, en Copiapó, con el doctor Enrique Rodríguez. Sus entusiasmos juveniles llevaron a intervenir activamente en las luchas políticas de Chile, junto con Juan Carlos Gómez y Sarmiento.

Vuelto a la República, se inicia para Tejedor una época de permanente y destacada actuación pública. Legislador provincial y nacional, miembro de convenciones, diplomático, catedrático de derecho, magistrado judicial, Ministro de Estado, Gobernador de Buenos Aires, candidato a la Presidencia. . . . político siempre, de desmedida ambición, llegaban a veces a nublarse su gran espíritu y la clara inteligencia que poseía, cuyos mejores frutos son sus dictámenes como Procurador General y sus proyectos de código. Quizá él estimara más sus arengas políticas y sus actitudes de fogoso luchador.

En septiembre de 1865 la Legislatura de la Provincia de Santa Fe había dictado una ley autorizando al Banco de Londres y Río de la Plata para establecerse en el Rosario, con la facultad de emitir billetes de curso legal, además de las comunes de depósito y descuento. Por una ley posterior (junio de 1875) se reservó la facultad de emitir a

los bancos oficiales, en cuya virtud se ordenó el retiro de los demás billetes en circulación. Así lo hizo el Banco de Londres; pero accionó por los daños y perjuicios que se le causaban, presentándose, al efecto, a la Corte el gerente de la casa Central de Buenos Aires, por considerar que el establecimiento del Rosario era solo una sucursal. La competencia surgía por tratarse de la demanda contra una provincia hecha por un vecino de otra, como era la sociedad anónima, domiciliada en Buenos Aires; y en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley de 1875, que se alegaba, provenía de que siendo el de emitir billetes un acto de comercio común, regido por el Código respectivo, no podía ser coartado por una ley local.

Objetó, naturalmente, el representante de la Provincia el carácter de sucursal que se asignaba a la casa del Rosario, pues tenía capital y acción propios, en cuyo caso el gerente de Buenos Aires carecía de personería, no así el de Rosario, de lo que había de seguirse, por implicancia necesaria, que la Corte no era competente, ya que el demandante venía a ser un vecino de la misma provincia demandada. Respecto al fondo de la demanda, arguyó que las leyes de circulación monetaria eran de orden público y las provincias podían dictarlas y modificarlas.

El dictamen del doctor Tejedor establece que no se trata de un acto de comercio común, pues no refiriéndose, en realidad, a un privilegio, resultaba indispensable una ley especial; y la que se dictó para acordarlo pudo muy bien ser derogada por otra ley de la misma legislatura, todo ello con poderes emergentes de la soberanía provincial, que no oponiéndose a la Constitución Nacional, a las leyes, ni a los tratados, ninguna autoridad puede revisar. Todo esto aparte de que las sociedades anónimas, sea como casa principal o como sucursales, tienen su domicilio en las provincias donde se hallen establecidas. No había, pues,

la posibilidad de que surtiera el fuero federal, ni por razón de las personas, ni de la materia, ni de la constitucionalidad.

La Corte no agregó una palabra más a las tan claras razones del Procurador General, fundadas en principios in-
conmovibles que son los que rigen todavía.

En septiembre de 1875 falleció el doctor Francisco Delgado, siendo reemplazado por el Juez Federal de Córdoba, doctor Saturnino M. Laspiur.

Hijo de la provincia de San Juan, fué educado en Córdoba, de cuya Universidad recibió el título de abogado. Bien pronto se le designó para instalar el Juzgado Seccional de Córdoba, pudiendo decirse, así, no sólo por esta circunstancia, sino por el influjo que tuvieron sus fallos en esas horas todavía inciertas de la organización, que fué uno de los fundadores de la Justicia Nacional. Su rectitud era proverbial y se puso a prueba de manera singular, así como también la serenidad de su espíritu, en ocasión de haberse creído obligado a defender ante la Corte a su hermano, doctor Braulio Laspiur, Vicario del Obispado de Cuyo, que había sido condenado por el Juez Federal de San Juan por malversación de caudales públicos (54). No obstante su condición de Juez Federal de Córdoba, el doctor Laspiur fué autorizado por la Corte para tomar a su cargo la defensa de aquél, fundándose la medida en un texto de las Partidas que asimilaba el caso a la *causa propria*.

(54) El caso se registra en la Colección de Fallos. Sucedió que en vez de pagar un *chanfre* de la Catedral con la partida de 24 pesos que figuraba en el presupuesto, el Vicario Laspiur, considerando inútil ese puesto, dividía el sueldo entre los sacristanes!

El nombre del doctor Laspiur está incorporado con justo título a la vida institucional de la República. Fué diputado y senador al Congreso Nacional, Ministro del Interior durante la Presidencia de Avellaneda, y llegó en un momento dado a reunir las aspiraciones de muchos políticos del interior para ocupar la primera magistratura. Era bondadoso en su trato, pero inquebrantable y severo en el cumplimiento de sus deberes y estaba siempre—se ha dicho de él—fuera del alcance de las influencias y de las simpatías que pudieran extraviar su juicio.

El doctor Laspiur, después de dejar el Ministerio del Interior volvió a la Corte, falleciendo en 1885 en el desempeño de su alto cargo.

La sucursal del Banco Nacional en San Juan fué demandada por el Procurador Fiscal de la Provincia por cobro de impuestos, a cuyo pago el gerente de aquella se había resistido alegando que una ley del Congreso había exonerado al Banco del pago de toda contribución o impuesto nacional y provincial; formulada esa oposición por el Gerente, presentóse, a la vez, al Juzgado Federal demandando « la protección de su jurisdicción por ser la única y exclusiva que podía conocer del caso, especialmente regido « por la Constitución Nacional » desde que era en cumplimiento de una cláusula de ésta que el Banco se había establecido con la exoneración de impuestos mencionada. Pero el Juez, ante el hecho de figurar como parte el *Fisco Provincial*, se declaró incompetente en orden a lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución y la ley de competencia. Quien debía derimir la contienda era la Corte Suprema. Y lo hizo (marzo 2 de 1876) en el sentido de que

el Juez de Sección no tenía jurisdicción para conocer de cuestiones sobre impuestos provinciales; pero que siendo legítimo el derecho del Banco para alegar la inconstitucionalidad del impuesto, debía prepararse el recurso para ante la Corte, consintiendo los procedimientos de la justicia provincial hasta su última instancia, o demandando a la Provincia previo pago del impuesto con el protesto de estilo.

Si en esta ocasión, como se ve, no pudo la Corte resolver el fondo de la contienda, lo hizo poco tiempo después con motivo de plantearse por un escribano la cuestión relativa al sellado que debía tener una letra librada en Salta a la orden de la sucursal del Banco Nacional de esa ciudad, endosada a nombre de la Casa Matriz de Buenos Aires y que se pretendía debía caer bajo las prescripciones de la ley de sellos provincial. «Considerando que el Banco « Nacional ha sido creado —dijo la Corte— por ley del Congreso, en virtud de autorización expresa de la Constitución y para fines de administración pública y de prosperidad general; que por esta razón tiene el carácter de « una institución nacional, sujeta exclusivamente a la jurisdicción de las autoridades nacionales y fuera, por lo tanto, « del alcance de la jurisdicción de las provincias; que la « facultad que indudablemente tienen éstas para imponer « contribuciones se limita a todo aquello que existe bajo « su autoridad o que es de su propia creación; pero no « puede extenderse a los objetos o instituciones autorizadas « por el Congreso como medios a propósito para el ejercicio de los poderes conferidos al gobierno general; que « lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Banco Nacional eximiendo a este establecimiento de toda « contribución o impuesto nacional o provincial, no es más « que una consecuencia de los principios que preceden; « que el impuesto reclamado afecta y traba las operaciones « del Banco, desde que el acto del protesto tiene estrecha

« relación con esas operaciones y es indispensable para la « conservación de sus derechos. » Por todo esto, se estableció que las operaciones del Banco no estaban sujetas a la ley de sellos provincial.

Las mismas razones invocó la Corte para declarar, con igual fecha (5 de diciembre de 1876) que la Provincia de San Juan no tenía derecho para cobrar impuestos ni patente alguna a la sucursal del Banco Nacional, situada en esa provincia, asunto que había llegado nuevamente a la Corte, en la forma de una demanda contra la Provincia, promovida por el Gerente de la sucursal, de cuyas cajas el representante del Fisco Provincial, había conseguido sacar por la fuerza, como consecuencia de la ejecución seguida, un documento a la orden que se realizó en beneficio de las arcas provinciales.

El súbdito italiano don Pedro Tarabatto se presentó al Juez Federal de la Capital promoviendo demanda ordinaria contra el Cónsul de Italia por devolución de unos documentos dejados allí en custodia, y por daños y perjuicios ocasionados por la no entrega de los mismos. Corrido el traslado lo evacuó el Conde Marassi, gerente del Consulado, articulando una declinatoria de jurisdicción, por cuanto no se trataba de un asunto particular, sino de un negocio oficial, en cuyo caso la incompetencia era indudable en virtud del artículo 2º inciso 3º de la ley nacional de jurisdicciones.

El Juez, doctor Isidoro Albarracín, declaró la incompetencia de los Tribunales Nacionales, teniendo en cuenta que el certificado o recibo otorgado por el Consulado, al efectuar Tarabatto el depósito de los mismos, era por su fondo y por su forma un documento oficial, y que al poner bajo

el amparo de aquellos Tribunales los negocios *particulares*, de los cónsules, la ley no busca sino acordar mayores garantías de las que comúnmente se reconocen por el derecho de gentes a los representantes extranjeros; pero apenas se trate de actos inherentes al desempeño oficial del cargo, debe entenderse que el Soberano a quien sirven y de quien dependen, es el único habilitado para entender en el asunto por el órgano, naturalmente, de sus tribunales de justicia.

El Procurador General sostuvo la misma tesis y la Corte, al confirmar la resolución de primera instancia, concretó de este modo la cuestión: «Que los Tribunales argentinos—«dijo—no son competentes para declarar en qué casos «los cónsules y agentes consulares pueden obligar por sus «actos oficiales en país extranjero la responsabilidad de «sus gobiernos, respecto de sus nacionales.»

Con motivo de una demanda deducida por los doctores Emilio Castro y Norberto de la Riestra ante el Juez de Comercio de la Capital, contra el Banco Nacional, por cobro de una suma de pesos que sostenían se les adeudaba como directores que habían sido del mismo, tuvo ocasión la Corte de interpretar el verdadero alcance del inciso 5º del artículo 67 de la Constitución Nacional. La misma cuestión relativa a la facultad del Gobierno Nacional se discutió por esa misma época en los juicios promovidos contra don Francisco Villanueva y contra el doctor Juan A. García.

El representante del Banco planteó al Juez del fuero provincial una cuestión de incompetencia, por cuanto siendo el Banco demandado una persona jurídica de creación nacional, de acuerdo con el artículo 67 inciso 5º de la Constitu-

ción, sólo los Tribunales de la Nación eran competentes para conocer en las causas en que aquel fuera parte, toda vez que, por lo demás, su vida se desarrollaba y extendía en todo el territorio de la República, con una sucursal en cada provincia; que aún prescindiendo de esto, en el *sub-judice* el asunto correspondía al Juzgado Federal *ratione materiae*, desde que era un punto regido por una ley del Congreso; que, finalmente, por tratarse de un Banco por acciones, de las cuales el Gobierno Nacional tenía 20.000, resultaba de aplicación el inciso 6º del mencionado artículo 67, por cuanto se trataría de un juicio en que la Nación es parte. Sostuvieron, a su turno, los actores que el Banco Nacional no era una institución del Estado Nacional, pues para ello resultaba indispensable que la Nación misma lo hubiese fundado *con sus propios recursos*, en cuyo caso no habría una persona jurídica de creación nacional, sino que sería la misma Nación, en su carácter de persona jurídica, representada por el Banco. La institución creada por la Ley de 5 de noviembre de 1872, no respondía al concepto de lo que debe ser un Banco de Estado, sino que, por el contrario, tenía todas las características de un Banco particular, de una sociedad anónima en la que el Gobierno Nacional era uno de los accionistas; y que en cuanto a que la competencia federal surja del hecho de tratarse de un punto regido por una ley del Congreso, la teoría resultaba inadmisibles toda vez que, en ese caso, nada escaparía a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales, por ser también leyes del Congreso los Códigos Civil y de Comercio que los Tribunales Provinciales aplican a diario.

De acuerdo con esta teoría, el Juez provincial, doctor Areco, se declaró competente, siendo este pronunciamiento confirmado por el Tribunal de Justicia. También el doctor Tejedor dictaminó en el sentido de la incompetencia de la Justicia Federal cuando llevado el asunto en apelación ante

la Corte, esta le requirió su opinión como Procurador General.

La Corte produjo en la ocasión uno de los fallos más extensos y eruditos de esa época, con acopio de doctrina americana, estableciendo la jurisdicción federal para los asuntos en que el Banco Nacional fuese parte. Según referencias recogidas por el autor, fué el doctor Gorostiaga quien redactó la sentencia.

Destruye, en primer lugar, la Corte el argumento de que se trataba de un establecimiento particular, arguyendo que no fué esto lo que se propuso la Ley del 5 de noviembre de 1872, pues apenas se examinan sus términos puede verse que se tuvo en vista fines de mucha mayor trascendencia que la simple asociación de individuos para ocuparse de sus negocios particulares con propósitos exclusivos de lucro privado. Lo que se quiso realizar, mediante aquella ley, fué la creación de un Banco Nacional, usando de la facultad que confiere el artículo 67 inciso 5º de la Constitución, cuyo verdadero alcance ha sido puesto en cuestión. Siendo esto así, debe tenerse en cuenta primordialmente los antecedentes americanos aplicables al caso.

En Norte América fué motivo de una larga discusión la facultad del Congreso para crear el *Banco de los Estados Unidos*, por cuanto la Constitución no contenía cláusula alguna que lo autorizase. Se sancionó, sin embargo, en 1791 una ley creando aquella institución en vista de que el Preámbulo recomendaba esa creación como útil a la buena administración de las finanzas. La ley estuvo y subsistió hasta 1815 en que se creó el Banco Nacional; y si bien ese año el Presidente de la República vetó la ley, ella pudo entrar en vigencia al año siguiente a raíz de una nueva sanción legislativa. Fué así que, con estos antecedentes, los constituyentes argentinos para que no se presentaran entre nosotros los inconvenientes sobrevenidos en el Norte, expresa-

mente consignaron la facultad relativa a la creación del Banco de Estado (artículo 67 inciso 5°).

Respecto de la forma en que la ley ha interpretado el precepto constitucional, debía tenerse en cuenta que ella crea un *Banco Nacional*, con sucursales en las Provincias, dándole por domicilio la ciudad en que residiesen las autoridades de la Nación o la que fuese declarada Capital de la República, al par que se confiere a aquel la facultad de emitir billetes. Debían tenerse, además, en cuenta otras circunstancias emergentes de la ley. Así, se exime al Banco de la obligación de actuar en papel sellado y del pago de toda otra contribución o impuesto; se le constituye en depositario único y obligado de las cantidades de dinero afectadas a las contiendas judiciales; se le habilita para ser agente del Gobierno en todas sus operaciones financieras; los billetes del Banco llevan el escudo de la Nación etc., etc., de todo lo cual había de seguirse que no se trataba de un establecimiento privado, sino de una institución pública, creada *ex profeso* para fines de administración nacional; y si al mismo tiempo se le autorizaba para negociar con particulares y hacer toda clase de operaciones bancarias, no era sino como medio indispensable de dar vida a la institución.

Era un error pretender que el Congreso, para usar de la facultad constitucional a que viene haciéndose referencia, hubiese debido fundar un Banco rigurosamente *de Estado*, dirigido por los Poderes Públicos de la Nación; pues la constitución había dejado al prudente arbitrio del mismo elegir la forma de Banco más conveniente; y al decidirse por el sistema de una gran compañía por acciones no hizo sino seguir los consejos de la ciencia y los ejemplos más autorizados, tales como los de Inglaterra, Francia, Bélgica y sobre todo, de los Estados Unidos.

Desde otro punto de vista, arguye el fallo de la Corte,

según el artículo 100 de la Constitución, corresponde al conocimiento de los Tribunales Nacionales toda causa regida por aquella o por una ley del Congreso, y la excepción que con respecto a los Códigos Civil y Comercial resulta del inciso 11 del artículo 67 no hace más que confirmar la regla. Y si se demostraba, pues, que el Banco Nacional tiene su origen en una ley del Congreso, la competencia de los Tribunales Nacionales era indiscutible. Trae aquí a colación la Corte una opinión de Marshall en el caso *Osborne v. el Banco de los Estados Unidos*. «Pensamos—dice—que «cuando forma un elemento de la causa originaria una «cuestión a que se extiende por la Constitución el Poder «Judicial de la Unión, está en las facultades del Congreso «conferir jurisdicción sobre esa causa a las Cortes de circuito, aunque vayan envueltas en ellas otras cuestiones «de hecho o de derecho. Creemos que el Banco es un caso «calificado de este género. La carta de incorporación no «solo lo crea sino que le da todas las facultades que posee; «su carta le da facultad para adquirir derechos de toda «clase, para hacer negocios, para celebrar contratos de todo «género, para estar en juicio con motivo de esos contratos, «y esa carta es una ley de los Estados Unidos». La decisión de este caso fijó la jurisprudencia americana y desde entonces todas las cuestiones promovidas por o contra el *Banco de los Estados Unidos* fueron llevadas ante los Tribunales Federales.

Bien es verdad que,—agrega la Corte—la carta de aquel Banco contenía una cláusula que confería esa jurisdicción, mientras que nuestra ley no la contiene; pero ello nada significa, pues «sea por la prolijidad con que en «aquel país se redactan las leyes, sea a causa de la falta «de disposiciones generales suplementarias en todos los actos «en que se crea una corporación, es costumbre facultarla «por una cláusula para comparecer en juicio. Pero también

« es verdad que las razones aducidas conducen a establecer la jurisdicción federal, aún sin necesidad de la cláusula y que esta en nuestra ley habría sido una mera redundancia. »

Don José García González se presentó ante el Juzgado Federal del Rosario consignando una suma de dinero a la orden del Banco de Londres y Río de la Plata, el cual habíase negado a recibirla por haberse querido hacer el pago en billetes metálicos de los Bancos Nacional y Provincial de Buenos Aires. Notificado el Banco, su representante sostuvo,—a la vez que presentó dos letras protestadas por falta de pago—que este no se había efectuado en la moneda estipulada en las mismas letras, sino que se pretendía levantarlas con billetes fiduciarios no convertibles a la vista. Siendo esto así nada significaba que la aduana, de la cual procedían las letras, recibiese los billetes metálicos, pues contravenía de ese modo al artículo 2º de la ley de 12 de octubre de 1875. En este estado el consignante se presentó al Juzgado exponiendo que habiéndole sobrevenido dudas acerca de la validez de la moneda depositada, consignaba plata boliviana hasta cubrir el valor de las letras.

Naturalmente, el Juzgado declaró bien hecha la consignación de bolivianos; pero consideró necesario dejar establecido que toda letra o documento debe abonarse en la moneda que expresa o su equivalente en otra que sea de *curso legal* en el lugar del pago; que a ese respecto la ley de 1875 solo declara como moneda boliviana de *curso legal* los pesos de cuatrocientos y de quinientos gramos, quedando expresamente desmonetizados los *cuatros* y los *Melgarejos*.

Apelada esta resolución fué revocada por la Corte (noviem-

bre 30 de 1876) teniendo en cuenta «que las letras de aduana, giradas con fecha 15 de enero a cuatro meses de plazo, « por el Administrador de Rentas Nacionales del Rosario y « aceptadas de *mancomun et in solidum* por García González, Bazterrica y Rodríguez, las cuales fueron descontadas « al Banco de Londres y Río de la Plata, mediante el endoso « en blanco que llevan de dicho administrador, proceden de « derechos adeudados por liquidación de permisos, y designan que las cantidades que deben pagarse son en *pesos fuertes*; que aunque el Administrador de Rentas del Rosario se obligó, por aviso público al Comercio, e invocando orden superior, a recibir en pago de derechos de aduana « la moneda de *cuatros bolivianos* al tipo de treinta y seis « centavos fuertes por cada cuatro, sin embargo no resulta « probado en autos que el Gerente del Banco de Londres « hubiese contraído igual compromiso, ni con la aduana, ni « con persona alguna, pues del informe del Administrador « de Rentas no resulta que hubiese mediado convenio alguno « al respecto; además de que nadie podía ser obligado a « recibir *cuatros bolivianos* en pago de sus créditos, desde « que ellos habían sido desmonetizados y proscriptos de la « circulación legal en la República por decreto del P. E.»

Es, sin duda, un derecho perfecto de los que intervienen en un acto jurídico establecer la clase de moneda en que ha de efectuarse el pago. En estos últimos tiempos la cuestión ha sido debatida en una forma que, por momentos, cobraba mayor calor y trascendencia, dado el monto considerable de las sumas a que ascendían los numerosos litigios judiciales. Una compañía hipotecaria extranjera tenía dados en préstamo a particulares muchos millones de *francos*; producida con la guerra, en 1914, una depreciación considerable de esa moneda, los deudores, conforme iban siendo exigibles los pagos, consignaron la suma adeudada realizando una ganancia apreciable dado el poco desembolso de

moneda nacional que debían hacer para obtener los *francos* necesarios. La compañía sostuvo la validez de una cláusula contractual según la cual ella tenía la opción entre diversas formas de cancelación de la deuda, algunas de las cuales se habían vuelto imposibles, por razones inherentes a la guerra, tales como los giros sobre determinadas plazas de Europa; y estando clausurada por una ley de emergencia la Caja de Conversión, no quedaba a los deudores sino la posibilidad de pagar con billetes nacionales la cantidad equivalente a los francos adeudados. Oponíase a ello, tenazmente, el acreedor; pero los Tribunales ordinarios, en fallos que promovieron ardientes comentarios, resolvieron que la deuda se extinguía mediante la entrega de moneda nacional. Podía no ser estrictamente jurídica la decisión, ya que el deudor había aceptado la cláusula optativa y el acreedor ofrecía proveer de monedas de oro; pero campeaban en las sentencias conceptos tendientes a rehabilitar nuestra moneda degradada en los contratos, cosa que no podía tolerarse de parte de comerciantes que realizaban en el país su inmensa ganancia, bajo el amparo de leyes cuya interpretación no debía en ningún caso llegar a establecer que la legalidad de nuestro medio circulante estaba supeditado al designio de una compañía extranjera.

Llegó un momento en que no hubo un asunto de mayor trascendencia; y cuando la jurisprudencia, no unificada todavía de las Cámaras de Apelación, producía la confusión y la intranquilidad en el público, se imploró de la Corte Suprema su alta palabra autorizada y definitiva. Pero la Corte encontró razones estrictamente legales, desde el punto de vista procesal, para no decir esa palabra que habría tenido tanta importancia en ese momento.

En representación de la Provincia de Jujuy se presentó en 1877 don Francisco Uriburu reivindicando ante la Corte Suprema los territorios de Cochinoca y Casavindo, poseídos por don Fernando Campero, que se decía descendiente de los Marqueses del Valle del Tejo y como tal había heredado la *encomienda* que de esas tierras había hecho la Corona de España a los marqueses. Argüíase en la demanda que habiendo pertenecido aquellas a España, a raíz de la emancipación y nuevo régimen político implantado, la Provincia de Jujuy tenía por derecho de reversión el dominio de las mismas; que la posesión de los marqueses del Valle, a título de encomenderos, había cesado con la conclusión del sistema de *encomiendas*.

El demandado sostuvo su derecho fundándose en las cédulas reales de 1705 y 1708 con que fué favorecido su antepasado. Invocaba, a la vez, la prescripción inmemorial, además de la perpetuidad de la concesión otorgada por el Rey mediante aquellas cédulas. En efecto, se lee en la de 1705 que «quiero concederle como le concede a don Juan «Joseph Fernández Campero de Herrera, Caballero de la «orden de Calatrava, la merced *en propiedad y pleno dominio* de la susodicha encomienda de Casavindo y Cochinoca en la Provincia de Tucumán, *para él y sus sucesores*.» Es en virtud de estas cédulas que importaban un título de pleno dominio y propiedad—agregaba el demandado—que se consideraba dueño de las tierras de referencia, debiendo entenderse que la palabra *encomienda* se refiere al territorio en que está situada, por que si solo se tratara del beneficio o usufructo no se habría usado las palabras *en propiedad y pleno derecho*.

La Corte hizo lugar en toda su extensión a la demanda, rechazando la prescripción opuesta por Campero. Tuvo para ello en cuenta que el origen de las *encomiendas* «fué el «bien espiritual y temporal de las Indias y su doctrina y

« enseñanza en los artículos y preceptos de nuestra fe católica
« y que los encomenderos los tuviesen a su cargo y defendie-
« sen sus personas y haciendas procurando que no sufriesen
« algún agravio y con esta calidad inseparable les haremos
« merced de se los encomendar », según reza el Título IX de
la Recopilación de Indias; de modo que no se trataba sino
de una institución de régimen administrativo y orden pú-
blico destinada a asegurar la conversión de los indios y
fomentar su enseñanza, en cuyo caso nadie ha podido ad-
quirir por este medio un derecho de propiedad irrevocable;
pues no se puede hacerlo contra las leyes que tienen por
principal objeto el interés de la sociedad y el orden común.

Que en el lenguaje de las leyes de Indias se llamaba
dar *en pleno dominio y propiedad* una encomienda cuan-
do se daba con título directo y perpetuo, en la manera que
se dió al señor Campero la de Cochinoca y Casavindo « para
él y sus sucesores y todos los que lo representen », dero-
gando las leyes que limitaban el número de vidas que debía
durar la encomienda y las demás condiciones y cláusulas
con que debía concederse; por cuya razón dice el Rey en las
cédulas citadas que lo hace *sin embargo de lo que disponen
las leyes en contrario*; y que una prueba más de que el
Rey no cedió—agrega la Corte—por esas cédulas a Cam-
pero de Herrera la propiedad de las *tierras* sino de la *enco-
mienda*, es la cédula posterior de 1754 en la que claramente
lo clasifica de simple *encomendero* cuando se refiere a las
poblaciones de Casavindo y Cochinoca, al mismo tiempo que
le denomina dueño cuando se refiere a las demás haciendas
que allí nombra. Dice así esa cédula de 1754: « El Rey.—
« El Conde de Superunda, teniente general de mis reales
« ejércitos, mi virrey, gobernador y Capitán general de las
« Provincias del Perú y Presidente de mi Real Audiencia
« que reside en la ciudad de los reyes. Por parte del mar-
« ques del Valle del Tejo *encomendero* de Casavindo y

« Cochinoca y *dueño* de las haciendas de la Angostura, « Calamuchita y San Matheo en el Valle de Tarija etc. »

Respecto de la prescripción tenía en cuenta el fallo que no era exacto que el Gobierno de Jujuy hubiese reconocido como dueño a Campero, al cobrarle contribuciones, pues las boletas presentadas, aparte de que se refieren a otras propiedades del causante, aparecían otorgadas por autoridades muy subalternas de campaña; que el transcurso del tiempo no puede modificar el concepto de que las encomiendas no podían ser adquiridas en propiedad, en cuyo caso tampoco habrían de serlo por prescripción. Por otra parte, según las leyes de encomiendas, la posesión de la tierra en que ellas estaban situadas pertenecían a los indios encomenderos y el dominio a la Corona, siendo del encomendero únicamente la administración y el beneficio; de modo que el sucesor del encomendero no ha podido poseer la *tierra* sino seguir poseyendo la *encomienda*, pues ello significaría contrariar la regla de que «nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo la causa de su posesión.»

Finalmente, contempla el fallo la cuestión relativa a la perpetuidad de la encomienda, acerca de lo cual si bien en la cédula se declara expresamente que con ese carácter se la concedía, debe entenderse que esa perpetuidad no podía ir más allá del tiempo que durase el régimen de las encomiendas, el cual, como toda institución de derecho público, está sujeto a las variaciones que reclaman las necesidades de los tiempos y las nuevas exigencias de la sociedad.

No cabe objeción que hacer al argumento contenido en el fallo acerca de que el régimen de las encomiendas había caducado al emanciparse las colonias españolas, como así también que, en virtud de ese régimen, el encomendero no tenía la posesión de la tierra, sino de la encomienda, que la posesión de aquélla correspondía a los indios y el dominio a la Corona. Pero, cabe preguntar, si después de caducar el ré-

gimen de las encomiendas. Campero o sus antecesores, han seguido ocupando la tierra y esa ocupación se ha prolongado por más de treinta años ¿acaso no se ha operado la prescripción del artículo 4015 del Código Civil? Porque habiendo desaparecido la razón en virtud de la cual los antecesores de Campero sólo poseían la *encomienda*, sólo debe mirarse los años que aquéllos han *ocupado realmente la tierra*, salvo, naturalmente, que esta tierra sea considerada como propiedad privada del Estado Provincial (artículo 3951, C. Civil); pero la Corte no entró en este terreno.

Por una ley de la Legislatura de Santa Fe de 1864, se prohibía la extracción de cueros y otros frutos sin la guía que debían expedir los comisarios de campaña, bajo pena de la pérdida de los frutos y del pago de una multa de cien pesos bolivianos. Por una infracción semejante fueron secuestrados tres carros cargados con diversos efectos que don Miguel Elhorga conducía fuera de la provincia. Demandó Elhorga al Comisario por daños y perjuicios ante el Juzgado Federal, fundándose en que se había procedido en nombre de una ley provincial contraria a la Constitución Nacional.

El Juzgado resolvió en el sentido de que la Justicia Nacional es competente para conocer en todo lo referente a una ley provincial contraria a la Constitución; pero la ley *policial* de 1864, dictada por la Legislatura, no tenía por objeto gravar los frutos que salen de la provincia, sino simplemente evitar el robo que de ellos puede hacerse en los establecimientos de campo y garantizar la legítima adquisición y propiedad de los mismos; que el único gravamen es el reducidísimo costo del sellado de la guía, cualquiera que sea la cantidad de mercadería a que la anotación se refiera, en

cuyo caso solo ha de verse en semejante desembolso una equitativa remuneración de los gastos que se hacen para dar garantías de legalidad al comercio.

La Corte, previo dictámen del Procurador General, confirmó el pronunciamiento del Juez en el sentido de que no se trataba de una ley inconstitucional.

Andando el tiempo ha de verse la inusitada importancia que cobra, en un momento dado, esta cuestión de comercio interprovincial a propósito de un *impuesto* de guías sancionado por la Legislatura de Buenos Aires.

La intervención de la Justicia Nacional en los múltiples sucesos ocasionados por las rebeldías del General López Jordán se inicia a mediados de 1877, en que llega a la Corte Suprema el proceso instruido contra aquél por el Juzgado Federal de Entre Ríos, con motivo de haber deducido el defensor la recusación del magistrado actuante doctor Antonio Zarco.

Son conocidas las características de esa lucha intestina que venía prologándose en Entre Ríos, en la que una de las figuras más descollantes era López Jordán, encarnación del desorden y la anarquía en la forma más peligrosa que puede presentarse, esto es, con la etiqueta de la «organización institucional», designio real o fingido, pero que ha costado muchas vidas entre nosotros y retardado por largos años la pacificación política de la República. Con algunos puntos menos que el antiguo montonero en lo tocante a la crueldad y la devastación, era López Jordán un hombre altanero, de pasiones bravías, que se estimulaban a diario con las múltiples incidencias de la lucha.

López Jordán sufrió un rudo contraste en los campos de Alcaracito, a raíz del cual fué aprehendido y puesto a dis-

posición de la Justicia Nacional. Instruido el sumario, se recusó al Juez denunciándose al efecto apremios innecesarios a los que se había sometido al reo, tales como habérsele puesto grillos y limitádose el número de personas que podían verlo, no obstante haberse levantado la incomunicación. La recusación se fundaba en el odio y resentimiento existentes entre el Juez y el preso, puesto de manifiesto en el telegrama dirigido por el doctor Zarco al Gobernador Febre. «*Oficial*. Triunfo de Alcaracito—deciale—es la tumba del foragido del once de Abril. No volverá a inquietarnos más. Lo felicito, firmado, Antonio Zarco.—Juez «de Sección». Significaba, sin duda, este telegrama un prejuizgamiento, y el defensor hizo mérito de él alegando que equivalía a una sentencia de muerte, pronunciada de antemano. Aparecía indudable que el Juez tenía interés en las resultas de la causa (inciso 8°).

Naturalmente, el Juez, dada la situación de espíritu a que su ardimiento no disimulado lo había conducido, no hizo lugar a la recusación. Sostuvo que los errores de procedimiento, en caso de existir, no pueden ser motivo legal para aceptar aquella. Respecto al alcance de la palabra *foragido*, de cuyo empleo el reo se quejaba, argüía el doctor Zarco que se dice, según Escricho, de los que andan «vagando sin techo ni hogar»; y en cuanto al hecho mismo del telegrama, sostenía que había sido dirigido antes del proceso, sin otro espíritu que el de felicitar por un triunfo que significaba la paz y la tranquilidad de la provincia.

Al evacuar la vista que se le confirió, una vez el asunto en la Corte, sostuvo el doctor Tejedor que el telegrama de marras pudo ser una ligereza ocasionada por un sentimiento de patriotismo, como la explosión de un sentimiento enemistoso «y no ha podido hacer *daño grave en su persona, honor o bienes*, al que por tercera vez invadió el «Entre Ríos y alzaba una bandera de rebelión».

Pero la Corte tenía otro concepto de la cuestión. «Que
« en ese telegrama—dice el fallo—publicado en varios periódicos se imputa a don Ricardo López Jordán el asesinato
« del General Urquiza, llamándole *foragido del 11 de Abril*;
« que la imputación de este hecho criminal importa la difamación del procesado y una injuria que le causa grave
« daño en su honor; que cuando la injuria es grave y por escrito, no basta para que desaparezca que se pruebe la
« verdad del hecho imputado o que se haya responsabilizado de él la persona a quién se imputa.»

La Corte revocó, pues, la resolución del Juez de Sección.

El General Justo José de Urquiza, en efecto, había sido asesinado en su palacio de San José, cerca de la Concepción del Uruguay, el 11 de Abril de 1870. El Juez del Crimen de Entre Ríos, que instruía el sumario respectivo, pidió al Juez Federal de Santa Fe, ante quien se seguía un proceso por rebelión contra el General López Jordán, que le remitiera dicho procesado por resultar cómplice en la muerte del General Urquiza. Como no se aviniera el magistrado provincial a semejante procedimiento se suscitó una contienda que la Corte dirimió.

El Procurador General dijo en la ocasión. «Aparte de las
« consideraciones menos sustanciales, si bien muy atendibles, en que el Juez de Sección de Santa Fe sostiene su
« jurisdicción, es decir, el abandono o, si se quiere, la suspensión por largo tiempo del proceso (corría el año 1879
« y el asesinato de San José tuvo lugar en 1870) iniciado
« ante las Justicias de Entre Ríos por parte de la señora viuda del General Urquiza; la mayor o menor gravedad
« del delito; aparte de estas consideraciones, digo, hay razones fundamentales que aduce también el señor Juez, que
« abonan su resolución de una manera irrecusable: 1º) La
« circunstancia de haber sido aprehendido el reo por autoridades dependientes de la Nación y sometido a sus tribu-

« nales, en cuyo poder se encuentra; 2º) La jurisprudencia « establecida por esta Corte con respecto a delitos comunes « cometidos durante la rebelión ».

La Corte resolvió que el Juez Federal de Santa Fe comunicara oportunamente al del Crimen de Entre Ríos el resultado de la causa que ante él se seguía contra López Jordán, pues no era el caso de una contienda de competencia propiamente dicha, ya que no se trataba de una misma causa sobre la cual dos Jueces se creyeran con derecho a conocer. En efecto, ante el Juez Federal de Santa Fe se seguía contra López Jordán un proceso en el cual no estaba comprendido el asesinato del General Urquiza, ni pretendía aquel magistrado tener jurisdicción para conocer de este hecho, sobre el cual era indiscutible la competencia del Juez del Crimen de Entre Ríos. De modo que lo único a resolver era cual de las dos causas debía instruirse de preferencia, y en este sentido resultaba indudable que era el proceso por rebelión seguido en Santa Fe el que debía adelantarse.

Se acumuló aquí contra López Jordán una serie de hechos conexos todos con el principal, relativo a la rebelión producida a raíz de la muerte del General Urquiza. Ese alzamiento era contra las autoridades de la provincia y contra el Gobierno de la Nación, y la razón que lo justificaba en el ánimo de los rebeldes el despotismo que ejercía el vencedor de Caseros en toda la provincia. « Que este movimiento no fué « un motín—sostenía el defensor (55)—sino verdaderamente « revolucionario, es innegable; puesto que las fuerzas militares en servicio fueron sometidas desde el primer momento al pueblo armado, que desde entonces rodeó al « General López Jordán, hasta el número de catorce mil « ciudadanos, que se convirtieron en soldados durante diez

(55) Lo fué el doctor Nicanor González del Solar, actual Ministro de la Corte Suprema.

« meses, arrastrando las fatigas y privaciones de una guerra « cruel y desesperada. » Quizá haya en esto mucha parte de verdad y quizá, también, tuviera razón el defensor cuando proclamaba que « la revolución es, entonces, una ley suprema de los pueblos que gimen en la opresión, es la reivindicación del derecho escrito y del derecho natural en los « pueblos civilizados; es, si se quiere, un aluvión que pasa « para arrastrar el limo de corrupción que deposita el despotismo en las capas sociales. » Solo que no siempre es fácil apartar de estas cuestiones la pasión que enceguece, y lo que para los de un bando es opresión y corrupción, resulta, casi siempre, para el otro, plena libertad y corrección indiscutible.

Producida la muerte del General Urquiza, López Jordán fué nombrado por la Legislatura Gobernador Provisorio de Entre Ríos; y es curiosa coincidencia que la ley respectiva lleva la firma del doctor Antonio Zarco como presidente de aquélla. ¿Qué había ocurrido durante los años que corrieron desde 1870 hasta 1877 como para justificar el cambio operado en el ánimo del Presidente de la Legislatura de entonces y Juez Federal ahora, para llamar *foragido* al mismo que, en ocasión de comunicarle su nombramiento de Gobernador, felicitaba ardientemente por la distinción que acababa de merecer? La crónica de esa época dice bien claro cómo el ardor partidista, estimulado por, frecuentes episodios de una lucha sin cuartel, no se detenía en la puerta del pretorio y hacía presa aún de los que estaban obligados a conservar en todo momento su serenidad e independencia.

Era, pues, López Jordán Gobernador Constitucional de Entre Ríos y, como tal, no podía levantarse en armas contra sus autoridades, ni menos contra las de la Nación. Este fué el principal argumento de la defensa, que trajo a colación documentos emanados de las autoridades federales.

Pasaron muchos años sin que la palabra definitiva pudiera

pronunciarse acerca de la culpabilidad del reo, evadido de la prisión y refugiado en Buenos Aires, donde el pedido de captura, impetrado por la viuda del general, sufrió toda suerte de contratiempos, siendo motivo de una gran discusión judicial; sobre todo, la vista del entonces Agente Fiscal doctor López Cabanillas que se expidió en contra de la detención de López Jordán. Así lo resolvió también el Juez doctor Carlos Miguel Pérez, fundándose en que aquélla no era parte y no había mandado el Juez de Entre Ríos los recaudos indispensables.

Es que la situación se había modificado, seguramente. El foragido de 1877 aparecía en la época de este último pronunciamiento como un idolo popular, según se desprende de las crónicas periodísticas de entonces (56). Así ocurre con los prestigios políticos: la opinión, tornadiza y caprichosa, los da y los quita sin razones aparentes; pero ello estaría muy bien para justificar la paralización de un proceso por cuestiones puramente políticas; pero es que la muerte del General Urquiza quedó envuelta en este concepto e impunes sus autores.

En Agosto de 1877 la Cámara de Diputados de la Nación había dictado orden de prisión contra don Lino de la Torre, autor de unas publicaciones periodísticas dirigidas a revelar el secreto de una sesión legislativa. Desde su domicilio aquél dirigió a la Corte Suprema una petición para que se declarase inconstitucional la orden impartida por la Cámara.

(56) En el *Sud América* del 12 de Enero de 1839 se registran tres telegramas dirigidos al entonces diputado doctor Miguel Laurencena, comunicándole que López Jordán había llegado al Paraná recibiendo el homenaje entusiasta del público que lo ovacionó.

« No estando el ocurrente—dijo la Corte—detenido ni preso
« y no correspondiéndole, por lo tanto el recurso que acuerda
« el artículo 20 de la Ley sobre Jurisdicción y competencia
« de los Tribunales Nacionales, no ha lugar a la solicitud.»

Algunos días después de la Torre fué detenido y la Corte entró a conocer del recurso, al par que de la facultad del Congreso para ordenar detenciones.

Era para la Corte indispensable que una persona esté efectivamente detenida en una cárcel para que pueda recién solicitar el amparo a su libertad. De modo que siendo ésta la situación de de la Torre, solo quedaba por averiguarse si la orden de detención era legítima de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 mencionado. Encontraba el Tribunal que no se podía admitir que la Cámara pretendiera sustituirse al Poder Judicial; no se trataba de un caso ordinario de imposición de pena. « Se trata simplemente—agregaba—de la represión
« correccional de ofensas cometidas contra las mismas Cáma-
« ras y capaces de dañar o imposibilitar el libre y seguro
« ejercicio de sus funciones públicas. La misma independen-
« cia de los poderes exige, talvez, que no se obligue a una
« Cámara, cuya autoridad ha sido objeto de un desacato, a
« esperar reparación de otro poder. » Debe considerarse encerrado en este pasaje del fallo el *abstractum* de la buena teoría que rige el caso, la que mejor se aviene con una discreta interpretación del concepto de la división de poderes y la que consulta, a la vez, la necesidad del Congreso de tener en sus manos las facultades indispensables para corregir los desmanes que en su contra se cometan. Porque, conviene recordar, en la Ley Federal N° 49 de 14 de septiembre de 1863 se establecen penas para los autores de cualquier actitud ofensiva para las Cámaras; existen, entonces, establecidas dos jurisdicciones distintas para juzgar un mismo hecho. Así, los que perturben el orden de las sesiones son, a la vez que reos de delito común, procesables ante la Jus-

ticia Federal, pasibles de una corrección disciplinaria impuesta por el mismo cuerpo ofendido. En el caso que venimos analizando, y según lo hace notar la Corte en su fallo, la violación de las disposiciones reglamentarias relativas a las sesiones secretas escapan a la jurisdicción de los jueces, y autorizan a la Cámara a corregirla en ejercicio de poderes propios, inalienables, indiscutibles.

No se discute, en efecto, en Estados Unidos,—cuyas prácticas a este respecto son de las que más obligan cuando entre nosotros se presenta un caso de derecho parlamentario,—el poder de cada Cámara para corregir por desacato, puesto que ello es inherente a la autoridad que invisten y debe considerarse de vital importancia para la respetabilidad y dignidad de toda asamblea legislativa, al par que esencial para el cumplimiento de sus altos deberes con seguridad e independencia. Fué el Juez Johnson quien expuso por primera vez la cuestión y sus conclusiones informan el fallo de la Corte en el caso *Anderson v. Dunn*; y, desde entonces, la facultad del Congreso para castigar no ha sido puesta en duda. Comentando este fallo, expuso Kent: «Es un poder « inherente a toda asamblea legislativa, esencial para poner- « la en aptitud de desempeñar sus importantes funciones». A su vez Story dejó bien establecido que no se trataba de un privilegio de los individuos de cada Cámara, sino un privilegio de cada Cámara, esto es, del pueblo y para beneficio del pueblo.

Pero como quiera que ni en Estados Unidos ni entre nosotros existe disposición constitucional expresa sobre el particular, el fallo de la Corte en el caso de de la Torre que comentamos, trae a colación la teoría de los poderes implícitos, sin los cuales sería muy difícil, sino imposible, la marcha del Gobierno. «Una de esas facultades implícitas—dice « —es la de repeler el insulto y mantener incólume la propia « autoridad y dignidad; y sería inconcebible que mientras

« la tiene todo tribunal con ley o sin ella, se le negase a
« una asamblea que representa al pueblo, que tiene a su
« cargo los más altos intereses de la Nación *y cuya digni-*
« *dad no puede ser ofendida sin ofender la dignidad del*
« *pueblo mismo* ». ¿Y cuándo es el mismo pueblo el que
lleva la ofensa? (57)

No hizo, pues, lugar la Corte al recurso de *habeas corpus* interpuesto por de la Torre, por cuanto su prisión había sido ordenada por autoridad competente.

Se recordará que cuando por primera vez se presentó aquél ante la Corte, esta resolvió que el recurso no correspondía por cuanto aquel no estaba *detenido ni preso*. Recién cuando fué conducido de su casa a la cárcel su derecho pareció evidente. Surge de este distingo hecho por la Corte, una interesante cuestión no analizada, sin embargo, suficientemente por aquélla.

Desde luego, el recurso de *habeas corpus* se da contra todo aquel que está restringido en su libertad. Y cabe preguntar si el que permanece en su casa imposibilitado de salir porque sabe que será detenido apenas aparezca en la calle, no sufre realmente una restricción en su libertad. ¿Por qué exigir la efectiva permanencia en la cárcel para que el recurso pueda interponerse? Lo que se quiere amparar es el derecho de todo ciudadano a moverse libremente en el desempeño de su actividad cotidiana; y si un buen día se dicta contra él una orden a raíz de la cual juzga indispensable para su seguridad no salir de su casa ¿no ha de decirse, acaso, que esa persona sufre una disminución de su derecho, una restricción de su libertad? Evidentemente

(57) En las sesiones de la Cámara de Diputados correspondientes al mes de noviembre de 1919 los legisladores opositores al Gobierno fueron groseramente insultados de palabra, al par que se arrojaba sobre ellos desde la barra huevos y otros objetos, lo mismo que volantes difamatorios. Ni una sola persona fué detenida; la Cámara ni la Justicia castigaron a nadie.

que si; y la tendencia moderna relativa al *habeas corpus* se dirige a consagrar la teoría de la más amplia interpretación.

A mediados de 1877 el doctor del Carril, muy viejo ya y enfermo, se retiró de la Corte, siendo reemplazado por el doctor Onésimo Leguizamón. Había nacido este en Entre Ríos el 15 de febrero de 1839; recibido muy joven de abogado, tuvo su primera actuación pública como secretario de una legación en Europa, ocupando de vuelta una banca en la Legislatura de su provincia, de la que fué, también, Ministro de Gobierno. Radicado, después, en Buenos Aires, vinculóse con el elemento de mayor valía intelectual y política. Fué catedrático de la Universidad y Diputado Nacional, en cuyo desempeño reveló dotes excepcionales de orador. Su mejor actuación fué, sin duda, la de Juez, en la que más fácilmente pusiéronse de manifiesto la serenidad de su espíritu y la gran versación que poseía de la ciencia jurídica. Sirvióle esta no poco en el desempeño de la cartera de Justicia e Instrucción Pública, durante la presidencia Avellaneda en esa época como ateniense del pensamiento argentino, en que las dotes de la inteligencia y las gallardías del espíritu eran la base para la selección de los hombres. Y Leguizamón era de los primeros.

Muy poco tiempo después se produce otro cambio en la Corte. En noviembre de 1877 falleció el doctor Barros Pazos, a quien reemplazó el doctor Uladislao Frías, cuyo nombramiento es de fecha 14 de enero de 1878.

Ya de la Corte primitiva no queda uno solo de los Jueces en el desempeño de la alta magistratura. De las Carreras, Delgado y Barros Pazos han muerto y del Carril ha obtenido su retiro. El viejo elenco está ya totalmente renovado. Han transcurrido quince años, durante los cuales la Corte dijo su palabra definitiva y casi siempre acertada, en múltiples cuestiones cuya solución judicial iba afianzando día por día el imperio de las instituciones.

La necesidad de relacionar todo lo que se refiere a la vida de la Corte con los antecedentes y características de la de Estados Unidos, lleva naturalmente al autor a querer calificar este primer período de la nuestra con el nombre de su figura más destacada. « La época de Jay » se dice allí, o « el período de Marshall », « los días de Taney », como la manera más comprensiva de señalar un ciclo determinado de actividad judicial. Entre nosotros, durante esta primera época, ni en las que vinieron después, existe la posibilidad de calificarlas con el nombre de determinado Juez. Todos, anónimamente, conforme al sistema de fallar adoptado, son los autores de las sentencias; mientras que en los Estados Unidos las colecciones permiten aislar en todos los casos la opinión individual de cada Juez. Seguramente han habido entre nosotros algunos magistrados de la Corte de condiciones superiores a sus compañeros; pero los efectos de esa superioridad era cosa que solo se sentía en los acuerdos privados del Tribunal. El público no ha podido, ni puede hacer referencia sino al fallo mismo, ensalzar o criticar el conjunto de las firmas que lo suscriben. Solo por excepción trasciende, a veces, que determinada sentencia, en que se hace buen acopio de citas americanas, es de determinado Juez especializado en la materia.

El doctor Frías había nacido en Tucumán en 1823. Las exigencias de la lucha política, tan agitada y llena de sin-sabores, como era entonces, llevaronlo muy joven a Bolivia, empleándose allí en la administración bajo la presidencia del General Ballivian. Vuelto a la República, fué Diputado durante la Confederación, Gobernador de Tucumán poco después, Senador Nacional por la misma provincia y Ministro del Interior durante la presidencia de Sarmiento, con quién tenía una larga y afectuosa vinculación personal, que determinó alguna vez su designación para el desempeño de delicadas misiones en el interior. Ponia en todo esto el doctor Frías, aparte de sus vastos conocimientos, una gran firmeza de carácter que se avenía, sin embargo, con la suavidad de de su modo y el reposo de su espíritu. « En vano se busca-
« ría en sus actos — dice un contemporáneo (58) — uno solo
« que implique debilidad en presencia del deber, complacen-
« cia frente a la amistad personal, indecisión en momentos de
« prueba, fatiga en la tarea, falta de preparación o de aten-
« ción en los detalles ». Fué una característica de su vida la actividad en todos los momentos; no lo tentaban las posiciones oficiales por los goces fáciles que proporcionan, sino por la obra útil que en ellas podía hacerse en beneficio de la colectividad.

En la Corte su obra fué fecunda; sin asperezas ni estrépito, sabía sostener sus opiniones y pueden señalarse no pocos casos en que su tesón llegó a lograr la modificación de muchas interpretaciones legales.

(58) Raymundo Wilmart. (REVISTA JURÍDICA. Septiembre de 1899).

El obispo de Cuyo se presentó ante la Corte demandando al gobierno de la provincia de San Juan sobre devolución de los bienes llamados de San Clemente, de los cuales aquél se había apoderado, incluso el templo de ese nombre, cuyas dependencias ocupaban en la época de la demanda una escuela y un mercado. La jurisdicción de la Corte se hacía nacer de la inconstitucionalidad de las expropiaciones ordenadas por las autoridades provinciales, al par que del carácter autónomo del obispado, por lo que podía equipararse el caso al de una provincia contra otra.

El representante de la provincia objetó que debía ser considerado el obispo como un simple vecino de San Juan, en cuyo caso la incompetencia de la Corte Suprema Nacional era indiscutible. Concordante con esta teoría fué la del Procurador General, doctor Eduardo Costa, quién había sido nombrado para reemplazar al doctor Tejedor, en junio de 1878.

Encontraba desprovista de todo fundamento el doctor Costa la pretensión de que el obispo podía equipararse a los efectos de la demanda con una provincia, pues aquél no es sino una persona civil con capacidad para adquirir bienes como individuo particular. «Ni los bienes pertonecen a las iglesias « u obispados, ni aún los templos mismos están comprendidos « en los términos del artículo 67 de la Constitución, salvo el « caso de que hubiese mediado el requisito indispensable de « la cesión o compra. La conversión de un edificio particular « en una iglesia, la edificación de un templo, la adquisición « que haga la persona jurídica llamada iglesia, de fincas, terrenos, estancias, etc., no cambia la naturaleza de estos « bienes, ni los sujeta a la jurisdicción nacional, sino que si- « guen sujetos a la jurisdicción local».

El fallo de la Corte, en vista de que el obispo no puede considerarse sino un vecino de la Provincia, declaró la incompetencia del tribunal.

El doctor Eduardo Costa nació en Buenos Aires el 28 de abril de 1823. Tenía, pues cincuenta y cinco años cuando llegó al alto cargo de Procurador General. Dificilmente pudo hacerse una designación mejor; cabría reproducir en su caso lo que de Marshall se dijo en Estados Unidos cuando fué nombrado para la Corte; era el hombre indicado para la función y fué como si la providencia lo tuviera reservado para hacerlo aparecer en el instante preciso en que su país reclamaba el concurso de sus luces y de su austeridad. Así el doctor Costa. Sus vistas en numerosas oportunidades salvaron situaciones muy difíciles del Gobierno.

Había sido legislador en su juventud. Hombre de Buenos Aires, estuvo en contra de la Confederación, adicto siempre a la política del General Mitre, de quien fué Ministro en la Gobernación de la Provincia, formando también parte de su gabinete cuando aquél ocupó la Presidencia de la República. Aquí empezó su gran tarea de cimentador de las instituciones, pues colaboró en la organización de la Justicia Nacional, a cuyo desenvolvimiento estuvo siempre vinculado al par que contribuía al fomento de la instrucción pública como Director General de Escuelas de la Provincia. Fué convencional en 1870 y desempeñó múltiples comisiones oficiales.

El Jefe Político de San Javier (Córdoba) fué acusado ante el Juzgado Federal por haber ejercido presión, haciendo valer la influencia de su puesto, sobre el electorado del Departamento con motivo de las elecciones nacionales efectuadas en marzo de 1878. De la exposición de los antecedentes se desprende que el tal Jefe Político era hombre de avería, con un concepto muy claro de sus responsabi-

lidades de funcionario público puesto al servicio de una causa política. Jaime Montiel se llamaba y ha tenido a través de nuestra accidentada historia prolífica descendencia. Había aumentado por su cuenta las fuerzas policiales del Departamento y hecho ostentación de ellas situándolas en las proximidades del comicio, causando el desaliento y el temor en los partidarios de la fracción antigubernista, según anota el Juez en su sentencia. Mientras tanto, Montiel, situado a espaldas de los escrutadores, en pleno recinto comicial, infundía con su presencia un temor que tal vez no fuera menor para algunos que el que producían las bayonetas alineadas en la acera.

También se acusaba al Jefe Político de tener agentes a sus órdenes encargados del trabajo electoral, los cuales recorrían las casas haciendo propaganda y recogiendo las boletas de inscripción.

Montiel fué condenado al pago de una multa de doscientos pesos fuertes. El Juez, doctor Rafael García, produjo en la ocasión una extensísima sentencia en la que, junto con la gran erudición puesta de manifiesto por el acopio de citas que hace, americanas, francesas e inglesas, revela la sincera indignación del hombre honrado que se alarma por el porvenir de las instituciones republicanas.

La Corte confirmó la sentencia. Muchos años han transcurrido desde entonces; a veces se tiene la impresión de que la República ha progresado institucionalmente, de que las leyes han ido poco a poco haciéndose más claras y respetables... Sin embargo, con existir en la actualidad un cuerpo de legislación extenso sobre materia electoral, sería tarea difícil llevar a la cárcel a un Jefe Político que hiciera lo que Montiel en 1878.

Con motivo de un proceso incoado contra varias personas detenidas mientras deliberaban con fines tendientes a derrocar las autoridades nacionales y provinciales, la Corte tuvo oportunidad de sentar la teoría de que puede existir la tentativa del delito de rebelión, no aceptada generalmente por la legislación y la doctrina. Se hace mérito en el fallo de que para preparar la ejecución de su delito los procesados se hallaban reunidos cuando fueron descubiertos; con idénticos propósitos habían adquirido armas y redactado manifiestos y proclamas incitando al alzamiento.

La Ley Federal N° 49, tomada de la legislación española, no hace el distingo y establece una pena fija para los reos de delitos contra la seguridad interior de la Nación, uno de los cuales es la rebelión y que, según se la define (artículo 14) pareciera exigir que el alzamiento sea público. La Corte dijo que tratándose de un delito no consumado la pena a imponerse debe ser menor y, confirmando la sentencia de primera instancia, impuso una pena que no está en la ley (dos años de extrañamiento) para castigar una cosa imposible de existir, esto es, la tentativa del delito de rebelión.

Entiendo que cualquier exteriorización de voluntad, el más mínimo acto preliminar (compra de armas, redacción de proclamas incitando al alzamiento) importa ya el *alzamiento* de los que las firman. Nada más se necesita para el perfeccionamiento del delito, que lo mismo se comete de palabra que de obra, a condición de que en ambos casos exista el designio de desorganizar institucionalmente la República.

Quando el doctor del Carril se retiró de la Corte fué reemplazado en la presidencia por el doctor Barros Pazos, a quien substituyó el doctor Gorostiaga.



CAPÍTULO IX

1881-1890

La época de las expropiaciones. — Consecuencias de la capitalización de Buenos Aires. — El recurso extraordinario. — Concepto de la división de poderes. — Las cuestiones políticas han sido ajenas a la actividad de la Corte. — El impuesto a las sucesiones es inconstitucional. — Nombramiento del doctor MANUEL D. PIZARRO. — Los jueces provinciales en sus relaciones con la Justicia Nacional. — El doctor FEDERICO IBARGUREN es nombrado para reemplazar al doctor Laspiur. — El derecho de declinar la jurisdicción. — Las facultades judiciales del Senado Nacional. — La jurisdicción originaria de la Corte. — El caso *Acevedo* y el caso *Sojo*. — Los dos fallos de la mayoría y las disidencias de los doctores Ibarguren y de la Torre. — El Banco Nacional no era una dependencia del Gobierno. — Nombramiento del doctor CALIXTO S. DE LA TORRE. — La detención de ciudadanos en día de elecciones. — La prisión del Comandante *Acevedo* y su demanda por daños y perjuicios contra el Jefe de Policía que ejecutó la orden emanada de la Cámara de Diputados. — Retiro del doctor Gorostiaga y nombramiento del doctor BENJAMÍN VICTORICA. — El doctor SALUSTIANO J. ZAVALÍA reemplaza al doctor Domínguez. — Los fueros eclesiásticos. — Apertura de la Avenida de Mayo. — Concepto de la expropiación. — Alcance de la ley de 31 de octubre de 1884. — La disidencia del doctor Zavalia. — Nombramiento del doctor LUIS V. VARELA. — Las causas de menor cuantía y la jurisdicción federal. — El doctor ABEL HAZÁN es nombrado para reemplazar al doctor Frías.

La capitalización de la ciudad de Buenos Aires, esto es, la instalación definitiva de las autoridades federales en ella, creó, ante todo, problemas edilicios cuya solución debió afron-

tarse de inmediato. La incertidumbre en que por muchos años se vivió respecto de la forma en que aquel viejo litigio se resolvería, tuvo paralizada la acción oficial; y mientras la población crecía en número, los servicios públicos y las comodidades generales no seguían el mismo ritmo. Llegó, así, un momento en que resultó impostergable la apertura de una ancha vía entre las calles Rivadavia y Victoria. Es la Avenida de Mayo, cuya magnificencia actual constituye la primera revelación que los extranjeros tienen de la importancia de Buenos Aires. A ella está vinculado un nombre ilustre, el del famoso Intendente don Carlos Torcuato de Alvear, cuyas inquebrantables energías y decisión sin par, lograron realizar aquella hazaña, teniendo que vencer resistencias de todo género, que hoy podría decirse inconcebibles, si no fuera que las mismas o parecidas dificultades de entonces mantenían paralizada, con vistas a malograrse definitivamente, una iniciativa análoga del afanoso intendente doctor Joaquín S. de Anchorena.

Tuvo la Corte una participación fundamental en la tarea. Sus fallos, especialmente el del caso de la señora de Elortondo, lograron una gran repercusión. En la parte correspondiente de este capítulo nos ocuparemos de él, únicamente de él como caso judicial, pero con referencia a la permanente hermenéutica de la Corte sobre la materia.

Don Antonio González llevó ante la Corte un recurso de apelación en un juicio que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires había resuelto en forma desfavorable para el apelante; aducía para demostrar la procedencia del recurso, que se había señalado una resolución del Gobierno Provincial como violatoria del artículo 18 de la Constitución Nacional.

Era así, en efecto; pero como quiera que el Tribunal provincial no había tomado en cuenta aquella circunstancia, sino que había resuelto la contienda con raciocinios tendientes sólo a demostrar la inoportunidad de la demanda, la Suprema Corte resolvió en el sentido de que no cabía el caso en los términos del artículo 14 de la Ley de Jurisdicción y Competencia. Difícilmente habrá un artículo que haya sido invocado en más ocasiones que el ya famoso *catorce*, para querer llevar una cuestión ante la Corte. Y es de advertir que la misma disposición legal que sirve a los litigantes para presentar sus casos como de indiscutible competencia federal, sirve a la Corte para fundar sus ya incontables resoluciones en sentido contrario a aquella competencia.

Y cabe preguntar ¿acaso no es suficiente que el litigante articule ante el Tribunal provincial la inconstitucionalidad de una ley o de un decreto para que la Suprema Corte Nacional conozca sobre el fondo de la cuestión? De las múltiples resoluciones dictadas sobre la materia se desprende, salvo uno que otro fallo que son la excepción (59), que ese designio y esa acción del particular litigante no es suficiente; es indispensable que el Tribunal provincial haya hecho mérito de la argumentación y se haya pronunciado en la sentencia sobre la inconstitucionalidad, bastando que no lo haga para que quede cerrado el camino hacia el Tribunal definitivo, esto es, burlado un derecho legítimo.

Durante el estado de sitio decretado para la provincia de Buenos Aires, a mediados de 1880, el Ministro de Justicia ordenó se suspendiera la publicación del diario *La Tribuna*; el Comisario don Avelino Anzó fué el ejecutor de la orden. Don

(59) FALLOS DE LA C. S. N. Tomo 97, págs. 211 y 214.

Mariano Varela, redactor y propietario del diario, demandó al funcionario policial ante el Juez de Sección por los daños y perjuicios que con la clausura había sufrido.

El Juez, doctor Isidoro Albarracín, resolvió con buenas razones la incompetencia de los Tribunales Federales. En efecto, se trataba de la violación de derechos consagrados por el Código Civil que, aunque sancionado por el Congreso, debe ser aplicado, como el Comercial, Penal y de Minería, por las justicias locales, sin que este criterio pueda ser modificado por el carácter del funcionario demandado, dependiente del Gobierno provincial (era ya en 1880, pero la policía no tenía aún carácter federal).

A juicio del Procurador General doctor Costa, esta sola circunstancia bastaba para determinar la incompetencia de la Justicia Nacional, ya que el hecho de haber procedido Anzó por orden de un Ministro Nacional no podía tener el alcance de despojarlo de su carácter provincial. « Si su falta — agre-
« gaba — merecía algo más que una corrección administrati-
« va, es a los Tribunales de provincia y no a los de la Nación
« a quienes incumbe hacer la aplicación de las reglas que
« cada provincia tiene el derecho de darse para la adminis-
« tración de sus propios negocios ». En cuanto a que la com-
petencia surgiera *por razón de la materia*, toda vez que las garantías que el artículo 14 que la Constitución acuerda a todo habitante de la República para ejercer una industria lícita y *para publicar sus ideas libremente por la prensa*, habían sido violadas, — entendía el doctor Costa que « es un
« principio uníversalmente admitido por los comentadores de
« la Constitución Americana que las declaraciones generales
« que contiene no son fuentes de poderes ni de jurisdicción.
« Cuando nuestra Constitución declara *que la propiedad es*
« *inviolable, que todo habitante tiene el derecho de publicar*
« *sus ideas por la prensa*, no entiende por ello conferir fa-
« cultades especiales al poder encargado de hacer efectivas

« tales declaraciones. De otra manera, puesto que no hay
« acto alguno en perjuicio de tercero que no pueda entender-
« se como un ataque a la propiedad o a la libertad del indivi-
« duo, no hay ninguno que no cayera también bajo la juris-
« dicción de los Tribunales de la Nación. Esto importaría su-
« primir la jurisdicción de las provincias, y ello es notoria-
« mente contrario a la letra y al espíritu de la Constitución.
« *En ningún caso*, dice Story, (Sec. 3ª, Cap. VI, § 462) *puede*
« *ocurrirse al preámbulo* para extender los poderes conferi-
« dos *al gobierno general o a cualquiera de sus ramas*; no
« *puede conferir ningún poder por sí, jamás puede hacerse*
« *extensivo por implicancia a una ampliación de poder ex-*
« *presamente concedido*. La interpretación que se pretende
« dar a las garantías en cuestión es, por consiguiente, equi-
« vocada. Los actos de que el doctor Varela se queja no pue-
« den considerarse por el solo hecho de ser una violación de
« una garantía constitucional, sujetos a la jurisdicción de los
« Tribunales de la Nación ».

La Corte, aparte de estas consideraciones, tuvo en vista que el decreto de estado de sitio, como el que ordenó la traslación del asiento del Gobierno a Belgrano, habían sido aprobadas por leyes del Congreso, convirtiéndose así aquellas medidas en actos legislativos, en cuyo caso el argumento relativo a la ilegalidad con que funcionaba el Congreso no podía hacerse valer en una contienda judicial, pues los Tribunales carecen de jurisdicción para pronunciarse sobre ese punto.

Jamás se ha desviado la Corte de este principio, que en todas las épocas ha informado sus decisiones. Todo aquello en que la política puede ser la entraña de la cuestión, — una intervención federal en alguna provincia, la validez de una elección, — ha estado siempre fuera del alcance de un pronunciamiento judicial. Insegura y caprichosa como es, por definición, toda especulación política, que lanza a los

hombres a un desenfreno de ambiciones y hasta complica a los gobiernos en aventuras no siempre correctas, parece lógico y de gran conveniencia que la Corte no se complique en tales entreveros de la vida democrática. Empero, sin violar ningún precepto y dentro de su facultad permanente de declarar la inconstitucionalidad de toda resolución, — ley o decreto, — que esté en pugna con la Carta fundamental, podría la Corte v. gr. entrar a conocer sobre la procedencia o improcedencia de una intervención.

No se ha dicho la palabra definitiva acerca de si el P. E. puede intervenir una provincia durante el receso parlamentario, por causas relacionadas con un anómalo estado político que viniera prolongándose desde algún tiempo atrás, esto es, sin la presencia de un hecho nuevo, de gravedad inusitada, que hiciera impostergable el remedio federal, al extremo de no ser posible esperar la apertura del Congreso para obtener de él la necesaria sanción de una ley que definiera la alteración del sistema republicano. Para ser más explícitos y hacer más eficaz este razonamiento, he ahí el ejemplo de la intervención a la Provincia de Buenos Aires *decretada* en abril 24 de 1917. En los fundamentos de la resolución del P. E. se hace mérito del estado político de la provincia, de la falta de garantías individuales, de la carencia de libertad electoral, de la falta de municipalidades, todo esto en la extensión suficiente para determinar una subversión de la forma republicana de gobierno, que habría servido para lograr del Congreso, — que se abriría siete días después, — una ley autorizando la intervención. No esperó, sin embargo, el P. E. y la intervención se resolvió por decreto. Semejante actitud se habría justificado si un hecho nuevo hubiese venido a agravar aquella situación permanente, esto es, si producido un conflicto entre el Ejecutivo provincial y la Legislatura, por ejemplo, hubiese habido despliegue de fuerzas, ocupación

del recinto o detención de legisladores, es decir, graves acontecimientos que determinaban de por sí la urgencia de un remedio que sólo podía traer un interventor federal. No siendo este caso, y mientras la intervención no iba a tener otra razón que aquella subversión *permanente*, sólo el Congreso era el llamado a analizar la situación y pronunciarse.

Tal es una de las teorías que en la ocasión se formularon, frente a la que se basaba en la inalienabilidad de las facultades del Ejecutivo para intervenir durante el receso, conforme a precedentes que se expusieron en el debate de julio de 1917. Pues bien, quiere decir entonces que está de por medio la interpretación de un texto constitucional, el de los artículos 5º y 6º violados según unos, respetados según otros. Y cabe preguntar ¿no tiene, acaso, la Corte como función primordial declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los pronunciamientos de los otros poderes, llámense leyes o decretos? ¿No sería esto, por ventura, uno de los casos más típicos en que la Corte desempeñaría el rol de poder moderador, de necesario contrapeso en las jornadas de la vida republicana?

Se dirá que era indispensable que se le llevara un caso concreto, una contienda *entre partes*. Tal fué la demanda que interpuso el doctor Angel Sánchez Elía, despojado de su cargo de Juez en la Ciudad de La Plata, por el Gobierno elegido en abril de 1918 y como consecuencia de haber sido declarado *en comisión* por la intervención anterior. Bastaba que el titular de un derecho hubiese sido privado de él por actos de funcionarios cuyo origen podía discutirse desde el punto de vista constitucional—y tal podía ser el caso del interventor que declaró al Juez en comisión, facilitándole la tarea al Gobernador que lo destituyó,—para que la Corte hubiese entrado a conocer de la demanda. No lo hizo, fiel a la vieja interpretación que, en ocasiones, puede tener la virtud.

como en el caso del Juez Sánchez Elía, de dejar en el espíritu público la penosa sensación de que hay derechos, tan respetables y legítimos como los del Juez para conservar su investidura, que pueden ser lesionados sin que el más alto Tribunal de la República se considere habilitado para reparar la injusticia, para corregir el avance, si lo hubo. ¡Triste realidad, por cierto, esta de que un particular a quien se priva, v. gr., de su tierra, encuentre el remedio necesario acudiendo al Juez respectivo y que no lo encuentre el Juez que ha sido privado de su investidura, ni aún cuando lleve su pleito a la autoridad Judicial más alta, a aquella a quien la Constitución le ha otorgado la facultad y le ha impuesto, implícitamente, — como poder coadyuvante al bienestar general, — el deber de restablecer el equilibrio roto por alguna extralimitación de facultades!

Con motivo de sustanciarse el juicio sucesorio de doña Tomasa Vélez Sársfield, que había instituido heredera a doña Eusebia González, por carecer de herederos forzosos, la Corte, a raíz de haber solicitado el representante del Consejo de Educación que se abonara el impuesto de 10 por ciento creado por la ley provincial de educación común, declaró que esta ley era repugnante a la Constitución Nacional en cuanto altera y modifica las disposiciones del Código Civil sobre sucesión testamentaria.

Se hace mérito en el fallo de que uno de los derechos garantidos por la Constitución a todo habitante de la República es el de «usar y disponer de su propiedad conforme «a las leyes que reglamenten su ejercicio, las cuales en «ningún caso podrán alterar dichos derechos so pretexto «de reglamentarlos»; y que teniendo la propiedad, como

garantía constitucional, su grande y extensa organización en el Código Civil, la Constitución, por el artículo 67, ha autorizado *solamente al Congreso*, para dictar dicho código, prohibiendo expresamente a las provincias hacerlo después que aquél lo hubiese verificado; que el Código estableció que «toda persona moral o físicamente capaz de tener una « voluntad y de manifestarla puede disponer de sus bienes « por testamento, sea bajo el título de institución de here- « deros o bajo el título de legados o bajo cualquiera otra « denominación propia para expresar su voluntad». — En estas condiciones — agregaba la Corte — « cuando la ley de « la Provincia de Buenos Aires de 26 de septiembre de 1875, « dispone por el artículo 62 que la décima parte de toda « herencia o legado, por el hecho de ser dejado a extraños, « sea destinada al fondo de las escuelas comunes, crea, por « el hecho y bajo pretexto de una contribución o impuesto, « un verdadero derecho sucesorio a favor del fisco provincial, « una legítima forzosa que el Código Civil no ha esta- « blecido y que, por lo tanto, modifica y amplía sus disposi- « ciones ».

El doctor Gorostiaga se había excusado de entender en esta causa, y habiendo sido integrada la Corte por el doctor Carlos Tejedor, éste juntamente con el doctor Domínguez, votaron en disidencia por cuanto no existía en la Constitución una prohibición expresa a las provincias para someter a impuesto la transmisión de la propiedad por sucesión; que siendo concurrente la facultad de imponer, no puede despojarse a las provincias de ese derecho, que es necesario para su existencia.

Esta teoría es la que después se impuso y fué ampliamente expuesta en el fallo de la Cámara de Apelaciones de la Provincia, al confirmar el del Juez, doctor José María Rosa, que mandaba pagar el impuesto.

Se recordará que poco tiempo antes, al dictaminar el doc-

tor Costa sobre el caso de don Mariano Varela con el comisario Anzó, dió el verdadero alcance a la declaración de derechos y garantías consagradas por la Constitución, en el sentido de que deben estar sujetas a las leyes que reglamenten su ejercicio y que de ningún modo pueden servir por sí mismas para fundar una resolución judicial. Esa declaración de derechos y garantías no significa sino que la propiedad no ha de usarse de modo que se convierta en una arma dañina y peligrosa, sino por los medios honestos y permitidos, cuya enumeración y mecanismo deben forzosamente dejarse al cuidado de las leyes reglamentarias. Alberdi,—citado oportunamente en el fallo del Tribunal provincial,—dice: «Reglamentar la libertad no es encadenarla. Cuando «la Constitución ha sujetado su ejercicio a reglas, no ha «querido que estas reglas sean un medio de esclavizar su «vuelo y movimiento, pues en tal caso la libertad sería una «promesa mentirosa y la Constitución, libre en las palabras, «sería opresora en realidad. Todo reglamento que so pre- «texto de organizar la libertad económica en su ejercicio, «la restringe y embaraza, comete un doble atentado contra «la Constitución y contra la riqueza nacional, que en esa «libertad tiene su principio más fecundo » (60).

En 24 de octubre de 1882 fué nombrado Ministro de la Corte el doctor Manuel Didimo Pizarro, en reemplazo del doctor Laspiur. Nacido en Córdoba, donde su apellido está vinculado a más de un episodio de la agitada política de entonces, hizo sus estudios elementales en el Colegio de

(60) SISTEMA RENTÍSTICO Y ECONÓMICO DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA. Cap. II, art. 1º.

Loreto, poniéndose allí ya de manifiesto su espíritu inquieto y su fogoso carácter. Compartió después sus actividades de estudiante universitario con los afanes de un periodismo incipiente, de recia oposición, que a veces absorbíalo y ofuscaba. Mezclado, así, en la política, no sólo participó en la propaganda hablada sino que formó en las filas del general Paunero cuando la insurrección de Peñaloza. Al cabo de recibirse de abogado fué a establecerse a Santa Fe, donde vivió muchos años, desempeñando múltiples funciones públicas, — catedrático, magistrado, convencional, — que templaron su espíritu y dieron a su inteligencia la completa madurez.

En 1878 llegó por primera vez al Congreso, donde con el andar del tiempo habría de señalarse como uno de los oradores más notables. Senador luego, su actuación fué saliente en el gran debate sobre la capitalización de Buenos Aires; y afianzada con el triunfo de 1880 la tendencia política que había preconizado aquella iniciativa, fué llamado el doctor Pizarro a desempeñar el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en la primera presidencia del general Roca. Tocóle crear los servicios públicos que debían reemplazar a los similares de la provincia, y fué así como organizó los Tribunales ordinarios de la Capital, la Universidad, fomentó la edificación escolar, etc.

Después de permanecer sólo dos años en la Corte, volvió al Senado, donde en 1890 pronunció su célebre discurso sobre el estado de sitio. Fué en 1892 Gobernador de Córdoba y falleció en octubre de 1909.

— — —

Con motivo de haberse negado, en septiembre de 1883, el Juez de Primera Instancia de la Provincia de Santa Fe a

elevar a la Corte un expediente que le había sido solicitado para dirimir una contienda de competencia, alegando que tenía que resolver un incidente, *al par que negaba a la Corte el derecho de pedirle los autos*,—ésta resolvió que aquel magistrado procedía arbitrariamente, obstruyendo el curso regular de la administración de justicia nacional, por lo que se dirigió oficio al Ejecutivo Provincial pidiendo el auxilio de la fuerza pública a fin de sacar del Juzgado el expediente de referencia.

Puede afirmarse que se quedó corta en su resolución la Corte; pues la conducta del subalterno merecía el castigo que el artículo 19 de la Ley Federal de 14 de septiembre de 1863 establece para los que obstruyen el curso de la justicia, sin hacer distingo ni sobre la persona ni sobre la investidura que pueda tener. Pase que la necesidad de practicar diligencias determinase una demora en cumplir el mandato del Tribunal; pero negarle facultades, mediante una interpretación personal, desprovista de todo control, era ya cosa muy grave que la Corte debió corregir para ejemplarizar, para que quedara el antecedente de que todo debe ceder ante los mandatos de la Justicia Nacional.

Muy poco tiempo después, otro Juez provincial el doctor Honorio Quiroga y González, del Paraná, se negó a enviar al Juez Federal de la misma ciudad un expediente solicitado *ad effectum videndi*, alegando que las palabras empleadas en el oficio respectivo «se servirá V. S. mandar se remita etc.» no eran bastante respetuosas y comprometían la independencia de su jurisdicción. En una palabra, el magistrado provincial quería dejar a salvo que su categoría era igual a la del Juez de Sección, en cuyo caso éste no pudo ordenarle sino pedirle respetuosamente. El Juez Federal sostuvo, por el contrario, que los jueces nacionales tienen derecho de *expedir órdenes* a los de Provincia para el cumplimiento de actos y diligencias judiciales que sea

necesario practicar dentro de aquella. «Ni esta facultad — «agregaba — menoscaba, como se pretende, la jurisdicción «provincial, cuando ella se ejerce, como en el presente «caso, en un juicio del fuero federal y no de la jurisdicción provincial, ni afecta tampoco la soberanía de la provincia, desde que la ley del Congreso que inviste de «autoridad a los jueces de la Nación, dentro del territorio «de aquéllas, ha sido sancionada en conformidad a la Constitución General, que es la ley suprema del país ».

El Procurador General, a quien la Corte dió vista cuando el entredicho llegó a sus estrados, encontró que debía procederse en forma enérgica, con el concepto de que la Justicia de la Nación, último intérprete de la Constitución y de las leyes nacionales, debía estar en todo momento por encima de los Tribunales de provincia. Así lo resolvió la Corte, haciendo constar, a la vez, que el oficio de marras estaba librado en buena forma.

El doctor Federico Ibarguren, que había sido Juez Federal de Salta, reemplazó en la Corte al doctor Laspiur (agosto 28 de 1884).

Hijo de aquella provincia, se trasladó el doctor Ibarguren al histórico colegio del Uruguay, graduándose después de abogado en la Universidad de Montevideo, no sin antes haber seguido algunos cursos en Córdoba. De vuelta a Buenos Aires practicó en el estudio del doctor Vicente López; posteriormente fué miembro del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe. Durante el Gobierno del doctor Zorrilla desempeñó el Ministerio de Gobierno en Salta, y elegido poco después Senador nacional declinó esta investidura para aceptar el Juzgado Federal en la misma provincia.

Antes de ir a la Corte Suprema ocupó el cargo de vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil.

En la Corte desempeñó el doctor Ibarguren un papel prominente, quedando de su redacción un gran número de sentencias reveladoras de su gran capacidad jurídica, al par que de la gran rectitud de su juicio.

Don Tristán Malbrán, *argentino*, había demandado por cobro de pesos a don Antonio Marechal, *extranjero*, ante el Juez Federal de la Capital. El demandado declinó de jurisdicción, fundándose en que habiendo sido establecido el fuero federal como un privilegio en favor del extranjero, consideraba de su derecho renunciar a dicho privilegio. A primera vista parece de una indiscutible procedencia la pretensión de Marechal: — si, pues, el fuero federal es un derecho, la persona en favor de quien se lo ha establecido puede declinar de ese derecho; pero no lo entendió así el Juez ni la Corte, que confirmó por sus fundamentos la sentencia del *a quó*.

« La pretensión de Marechal — dice la sentencia — cons-
« tituiría un verdadero privilegio personal que felizmente
« ninguna ley acuerda ni a argentinos ni a extranjeros.
« porque en caso de existir, aparte del desorden que in-
« troduciría en el de los juicios, dejando a los que tienen
« acciones que ejercitar en la ignorancia o duda de saber
« cuales son jueces naturales, vendría a colocar a éstos
« en condiciones muy superior a aquéllos, pues como lo ha
« establecido la Suprema Corte en uno de sus fallos, mien-
« tras que el extranjero que tuviese necesidad de deman-
« dar a un argentino podría interponer su demanda ante
« cualquiera de las dos jurisdicciones, con la seguridad de

« que el demandado en ningún caso podría eludir ni re-
« tardar el juicio, el argentino en idéntico caso, no podría
« ocurrir a uno ni a otro, sin correr el peligro de una
« articulación dilatoria, quedando sometido, por consiguiente,
« a la necesidad de pedir previamente a su demandado
« su beneplácito para conocer el Juez ante quién ha de
« demandarlo ».

Muy poco tiempo después tuvo oportunidad la Corte de resolver, dentro del mismo criterio jurídico, un caso inverso al anterior. Se trataba esta vez de un argentino demandado por un extranjero ante la Justicia Federal, y de la incompetencia de jurisdicción alegada por el demandado. Fundaba éste su excepción en el hecho de ser él ciudadano argentino *y demandado*, pretendiendo que por esta razón estaba el actor obligado a seguir el fuero común; pero « la ley de 15 de diciembre de 1885 y de 14 de septiembre de 1863,—expresaba la sentencia del doctor Tedin—al « declarar que corresponde a la Justicia Nacional las causas civiles en que sean parte un ciudadano argentino y « un extranjero, no ha hecho distinción alguna, respecto al « rol de las partes en el juicio, ni cabe hacerlo desde que, « sea actor o demandado el argentino, subsisten siempre « las razones determinantes de la ley ».

Era explicable, con todo, la pretensión del demandado, pues seguramente venía del error de confundir el caso con el de ser demandado un argentino ante los Jueces comunes por un extranjero, en cuyo caso el demandado no podría declinar de jurisdicción.

En el capítulo anterior se ha contemplado la situación que puede originar un desacato cometido contra las Cámaras del Congreso, ya que bien podía aplicarse, según una interpre-

tación, la corrección disciplinaria que el reglamento autoriza, como someter al desacatante al Juez Federal bajo la imputación de uno de los delitos previstos y penados en la Ley N° 49 de 14 de septiembre de 1863.

Con motivo de un recurso de *habeas corpus* deducido en agosto de 1885 por el comandante Eliseo Acevedo, la Corte tuvo oportunidad de analizar la cuestión, proclamando la buena teoría de que el Congreso carece de facultades judiciales.

Era Acevedo un periodista movedizo y altanero, que trataba con inusitado ardimiento las cosas de la política en las columnas de su diario, *El Debate*. En la sesión del 14 de julio de 1885 el Senador Zapata planteó una cuestión de privilegio, denunciando como injurioso para su persona un artículo publicado en el diario de referencia, pues atribuíale un designio venal al presentar un proyecto relacionado con una prima para la introducción del salmón. El Senado consideró lesionados sus fueros, en la persona de uno de sus miembros y ordenó al Jefe de Policía que constituyera en arresto, a la disposición del Senado, al Director del diario *El Debate*. Pocos días después la Comisión Judicial de aquella rama legislativa emplazó a Acevedo para que compareciera a su seno, dentro de tercero día, para presentar los descargos sobre el desacato *porque se le juzga*.

Venía, pues, a ser patente que la causa de la detención era un hecho previsto y penado como desacato por la Ley Federal N° 49, en cuyo caso debía ser el Poder Judicial de la Nación quien conociese y juzgase al reo. De ello se seguía, por implicancia, que la orden de prisión de Acevedo no emanaba de autoridad competente, por lo que la Corte, por mayoría que formaron los doctores Domínguez e Ibariguren, ordenó la inmediata libertad de aquél.

Fundó en la ocasión su disidencia el Ministro doctor Uslaislao Frías, en lo que se refiere a la jurisdicción *origi-*

naria que la Corte se atribuía para conocer en una cuestión extraña a la enumeración de los artículos 100 y 101 de la Constitución. Acevedo había deducido, en efecto, *directamente*, su recurso de *habeas corpus* ante la Corte, por hallarse detenido en virtud de orden de autoridad incompetente, con violación de garantías que consagra el artículo 18 de la Constitución; «y es evidente—decía el doctor Frías—que «este asunto, bajo cualquier aspecto que se le considere, «no está comprendido en ninguno de los únicos casos en «que la ley fundamental acuerda a la Corte Suprema *jurisdicción originaria*. El artículo 20, que se invoca, de la «ley de 14 de septiembre, tampoco se la da expresamente. «y bien puede interpretarse que la facultad que le confiere «de investigar, a instancia del interesado, sus parientes o «amigos, sobre el origen de la prisión, *ha de ejercitarla «solamente en virtud de la jurisdicción por apelación.*»

Y se ponía en la hipótesis el doctor Frías de que la ley concediera jurisdicción originaria a la Corte en caso de *habeas corpus*; pero si eso sucedía, la ley, en esa parte, era inconstitucional. «Crear de ese modo—decía,—esto es, «por ley un nuevo caso de jurisdicción originaria en la Suprema Corte es reformar la Constitución por el Congreso, «sin los requisitos y no por la autoridad que ella determina,—una convención,—infringiéndola por lo mismo y «produciendo un acto legislativo, sin valor ni efecto, que «los Tribunales no pueden aplicar».

En Estados Unidos se ha establecido por la Corte que ella puede expedir mandamientos de *habeas corpus*, pero sólo en casos de apelación, pues, el Congreso no puede extender tampoco allí la jurisdicción *ordinaria* de la Corte.

Estuvo, sin duda, el doctor Frías en la buena teoría; y cuando, pocos meses después, la Corte tuvo que conocer en un caso análogo planteado por don Eduardo Sojo, resolvió, por los votos de los doctores Victorica, Frías y Zavala, que

la Corte carece de jurisdicción originaria en materia de *habeas corpus*.

Sojo era un periodista español, director de *Don Quijote*, que zahería a diario con dibujos caricaturescos a los hombres públicos de la época. En la actualidad no se comprende fácilmente, hojeando las revistas que ahora cultivan el género, cómo podía haberse llegado entonces a tales extremos de licencia. Fué así que, en ocasión en que la sátira iba dirigida contra un diputado nacional, que la Cámara, tal como el Senado lo hiciera pocos meses antes con el comandante Acevedo, ordenó la prisión de Sojo por todo el tiempo que durasen las sesiones legislativas.

Se dedujo por el reo un recurso de amparo de la libertad, directamente ante la Corte. Requerida la opinión del Procurador General, doctor Eduardo Costa, éste sostuvo que cuando una persona ocurre, como Sojo, ante la Corte, por haber sido preso por una autoridad a quien juzga incompetente, es en queja que ocurre, en apelación, en cuyo caso no puede sostenerse que el Tribunal procede con jurisdicción originaria. En el dictamen se citan precedentes de jurisprudencia americana en los que la opinión de Marshall y Story aparece acorde con aquella interpretación. Sostenía, además, el doctor Costa, que en ninguna parte de la Constitución se encuentra la prohibición de extender los casos de jurisdicción originaria.

El fallo de la Corte es muy extenso y erudito. Entra en materia con una rotunda afirmación de principios a los que, en todo tiempo, ha sido fiel el Tribunal. « La misión que « incumbe a la Suprema Corte — dice — de mantener a los « diversos poderes, tanto nacionales como provinciales, en « la esfera de las facultades trazadas por la Constitución, « la obliga a ella misma a absoluta estrictez para no ex- « tralimitar la suya, como la mayor garantía que puede « ofrecer a los derechos individuales. Por grande que sea

« el interés general, cuando un derecho de libertad se ha
« puesto en conflicto con atribuciones de una rama del poder
« público, *más grande y más respetable es el de que se*
« *rodee ese derecho individual de la formalidad estable-*
« *cida para su defensa* ». Después agrega que no es dado
a poder alguno ampliar o extender los casos en que la
Corte ejerce jurisdicción exclusiva, por mandato imperativo
de la Constitución; de modo que para que la Corte pudiese
conocer en un recurso de *habeas corpus*, originariamente,
es indispensable que el recurrente sea un embajador o mi-
nistro extranjero; y si bien pudiera parecer conveniente
que en los casos en que la orden de detención hubiese sido
dictada por una de las cámaras del Congreso, fuese la
Corte Suprema la que resolviese directamente, en única
instancia, sin la intervención de los Jueces Federales, es
evidente que para ello es necesario una reforma de la
Constitución.

Después de comparar los respectivos textos constitucio-
nales de Estados Unidos y de la República Argentina, en la
sentencia se expresa: « De ambos textos resulta, si bien
« con mayor claridad en el texto argentino, que el Congreso
« puede establecer excepciones y dictar reglamentos a la
« jurisdicción de apelación, lo que importa decir, distribuir la
« justicia entre los tribunales inferiores y la Corte que siempre
« es de apelación, con excepción de los casos en que la ley
« hubiese limitado el recurso o en que la jurisdicción es ori-
« ginaria y *exclusiva*, vocablo que no está en la Constitución
« Americana, y que hace más terminante el precepto, si aún
« pudiera serlo más ». « El *palladium* de la libertad — dice
« en seguida — no es una ley revocable según las convenien-
« cias públicas del momento, el *palladium* de la libertad es
« la Constitución, *esa es el arca sagrada de todas las li-*
« *bertades, de todas las garantías individuales*, cuya con-
« servación inviolable, cuya guarda severamente escrupu-

«losa debe ser el objeto primordial de las leyes, *la condición esencial de los fallos de la justicia federal*».

Esta sentencia que, como antes decimos, lleva la firma de los doctores Victorica, Zavala y Frias, encierra la buena doctrina constitucional, siendo de advertir que de los casos citados en contra de esta interpretación por el Procurador General, todos se refieren a personas detenidas por orden de autoridades judiciales; ninguno tiene origen en un mandato del Congreso. Por el contrario, la Corte de Estados Unidos ha dicho expresamente (*Kansey's Digest*, 30, 2710, 65) que «no tiene jurisdicción originaria en una solicitud de *habeas corpus* hecha por un extranjero, *que no es «un embajador, un ministro o un cónsul*». El Juez Story tuvo en la ocasión a su cargo redactar la opinión de la Corte, y al hacerlo pone de manifiesto que la Constitución Americana no ha conferido jurisdicción originaria a la Corte sino en los casos que afectan a embajadores o ministros diplomáticos y en aquellos en que un Estado sea parte. Es innecesario abundar en citas sobre el particular, —Kent y Marshall, sobre todo, proporcionarían un buen contingente,— para demostrar que aquí como en Estados Unidos, la Corte, en materia de *habeas corpus*, solo conoce en grado de apelación.

Estuvieron en disidencia, cuando la Corte resolvió el caso Sojo, los doctores Calixto de la Torre y Federico Ibarguren. El primero encontraba que de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Jurisdicción y Competencia, es indudable que la Corte tiene jurisdicción para conocer de la ilegalidad de una prisión decretada por una rama del Poder Legislativo, siendo, al par, de tenerse en cuenta que el artículo 101 de la Constitución en que se basa la sentencia de la mayoría, «son simplemente afirmativas de la jurisdicción originaria de la Suprema Corte, en los casos que «él enumera y no negatorios ni restrictivos de los poderes

«legislativos del Congreso para extender esa misma forma
«de conocer a casos distintos en el ejercicio de la facultad
«que la Constitución le confiere para reglar los procedi-
«mientos en los juicios, distribuir la jurisdicción, etc.».

El doctor Ibarguren fundó por separado su disidencia, pues quiso precisar aún más el concepto de si el recurso de *habeas corpus* creado por el artículo 20 de la Ley de 1863 es un caso de jurisdicción originaria o de jurisdicción apelada. Según la jurisprudencia americana aquel recurso es, por su naturaleza, de jurisdicción apelada, desde que se interpone contra un auto de prisión expedido por los jueces inferiores, en cuyo caso cabe preguntar si cambia de naturaleza el recurso según sea la clase de autoridad de que emana la resolución que lo motiva. Pensaba el doctor Ibarguren que este distingo no tenía importancia; pues sea que la orden proceda de un Juez o de una rama del Congreso, en ambos casos quien debe resolver en definitiva es la Corte.

Con motivo de haber pagado la sucursal del Banco Nacional en Tucumán un cheque con la firma falsificada de un depositante, éste hizo una denuncia que la policía pasó al Juez del Crimen local. Se excusó éste de entender por cuanto consideró al Banco una dependencia del Gobierno Nacional, en cuyo caso los delitos que en sus oficinas se cometieran no eran de la competencia del Juez provincial sino del de Sección, a quien remitió el expediente. Tampoco aceptó éste la jurisdicción, fundándose en que el Banco Nacional no era una dependencia de la Administración Nacional, como pudiera serlo una oficina de Correos y Telégrafos, directamente dependiente del gobierno, atendida por empleados que él nombra y paga y ante quien únicamente son res-

ponsables, caracteres todos estos de que carece una sucursal del Banco Nacional.

Sin mayor desarrollo de esta teoría, el Procurador General y la Corte Suprema concordaron implícitamente con ella y sólo agregaron que la falsificación del cheque se había realizado fuera del recinto del Banco, en cuyo caso no correspondía entrar a tratar la cuestión en que el Juez Federal basaba su incompetencia.

Es importante, sin duda, conocer el verdadero carácter de instituciones como el actual Banco de la Nación, la Dirección de Obras de Salubridad y la Administración de Ferrocarriles del Estado, desde el punto de vista de la competencia judicial, en los casos en que se haya cometido un delito común en sus oficinas.

Tal vez en lo que se refiere a la Capital Federal el distinguo no tiene mayor importancia, si se tiene en cuenta que para algunos desde la vigencia del Código de Procedimientos en lo Criminal es indiscutible que el conocimiento de hechos cometidos en oficinas nacionales corresponde a la justicia ordinaria, cuando se trata naturalmente de alguna repartición cuya actividad está circunscrita a la Capital Federal y Territorios Nacionales; pero en las provincias continúa la cuestión siendo de interés, como quiera que para que los jueces provinciales intervengan resulta indispensable establecer que el lugar del delito esté en absoluto excluido de la jurisdicción del Gobierno Nacional.

¿Es, v. gr., el Banco de la Nación una *dependencia* del Gobierno Nacional? Si la respuesta ha de resultar del origen del nombramiento de sus empleados no quedará duda de que no es una dependencia nacional. Además, el gobierno no interviene ni aprueba el presupuesto interno del Banco, ni sus ganancias ingresan al tesoro nacional; pero cuando se recuerda que sus directores son nombrados por el P. E., que sus empleados son jubilados por un decreto del P. E.

no se puede menos que convenir en que, no habiendo accionistas particulares en el capital del Banco, éste es en realidad una dependencia, una rama de la Administración Pública Nacional, que, al igual que la Dirección de Obras de Salubridad y la Administración de los Ferrocarriles del Estado, tienen cierta autarquía indispensable para el desenvolvimiento de sus actividades, sin perder, por ello, su carácter de repartición nacional.

La organización del Banco Nacional era diferente, pues el capital estaba formado por un aporte del gobierno y por acciones particulares, al par que no todos los directores tenían nombramiento oficial. De modo que sus oficinas no eran propiamente un sitio en el cual la Nación tuviera una jurisdicción exclusiva.

El Juez Federal del Rosario doctor Calixto S. de la Torre fué nombrado para reemplazar en la Corte al doctor Pizarro, a quien por su carácter, seducía más el azar de la lucha política que el ambiente apacible del pretorio.

Apenas graduado el doctor de la Torre en la Universidad de Córdoba, su ciudad natal, fué nombrado Juez Federal de Mendoza, en cuyo desempeño reveló ya las dotes características de su personalidad: gran rectitud, mucha ilustración, claridad indiscutible de juicio. Sus sentencias eran apreciadas en la Corte, cuyos miembros, más de una vez, exteriorizaron el deseo de que el doctor de la Torre llegase algún día a integrarla.

Era muy versado en derecho civil y comercial; pero su especialidad era el conocimiento de las leyes federales. Según cuenta el doctor Wilmart, tenía encuadernados en forma especial todos nuestros códigos y leyes a fin de poder hacer anotaciones a sus artículos, de acuerdo con las observa-

ciones que la práctica le sugería, dándose el caso que alguno de esos códigos tenían más hojas manuscritas que impresas. Poco lo sedujo la política; pero era de tal manera grande su prestigio, que se le eligió Senador nacional por Córdoba por obra exclusiva de la gravitación de su nombre en las esferas de la sociedad y de la política. De más está decir que en su desempeño legislativo puso a contribución el gran bagaje de sus conocimientos jurídicos, siendo raro el caso de que no interviniera en el debate de leyes cuya sanción exigía aquellas aptitudes, a la vez que el buen juicio de los verdaderos hombres de gobierno.

El Jefe de Policía de San Juan, don Nicolás Sandes, había hecho detener a varios individuos que permanecían reunidos en un local particular a la espera del momento en que debían concurrir a votar en una elección de diputado nacional (marzo de 1886). Treinta y tantas de aquellas personas fueron conducidas a la cárcel bajo la inculpación de haber hecho disparos de armas de fuego.

Se acusó al Jefe de Policía, ante el Juez de Sección, de haber violado la ley nacional de elecciones, pues había procedido con el designio de impedir que los detenidos votasen por una candidatura adversa (61). Sandes fué absuelto en primera instancia, por no haberse acreditado a juicio del Juez los hechos en que se basaba la acusación.

(61) Siquiera este Jefe de Policía que así procedía en 1886 fué sometido a la Justicia. Treinta y tres años después, en noviembre de 1919, con motivo de unas elecciones complementarias en Catamarca, la autoridad, con el pretexto de la existencia de peste bubónica, privó de su libertad a un centenar de ciudadanos, todos los cuales debían votar en una mesa donde el triunfo tenía gran importancia. Ninguna acción criminal se dedujo contra el Jefe de Policía.

Mas la Corte revocó esa sentencia imponiendo a Sandes la multa establecida por la ley.

Para el Procurador General no se trataba de saber si la policía tenía o no la facultad de prender a personas que infringían una ordenanza relativa a disparos de arma. (Del mismo modo, en el caso de las elecciones catamarqueñas de 1919 no se trataba de discutir las facultades de la autoridad sanitaria para aislar personas en época de epidemia). «La cuestión está reducida a determinar,—agregaba « el doctor Costa—si el Jefe de Policía, al proceder como lo « hizo, *despojó o no a numerosos ciudadanos del derecho « de votar.* Admitiendo la existencia de los tiros, debe « admitirse también que ellos no produjeron ni heridas, ni « desorden, ni escándalo. No era, pues, tanta la urgencia « del castigo. Bien pudo colocarse algunos empleados de « policía en el corralón para evitar se repitieran los tiros; « bien pudo dejar también que votara cada uno y remitirlo « preso en seguida. *El hecho de reducir a prisión a treinta « ciudadanos y conservarlos presos durante las horas hábiles del comicio, por el disparo de un tiro, si no importa « una complicidad marcada con una de las fracciones en « lucha, es, por lo menos, una falta de respeto por los derechos de un ciudadano, tan caracterizada y manifiesta, « que no puede pasar desapercibida y sin su justo castigo.* « De otra manera resultará que bastará que se dispare un « tiro o que se queme un cohete para que la policía reduzca a prisión y prive de sus derechos a los ciudadanos « nos congregados en los comicios».

La Corte hizo mérito de estos razonamientos y teniendo en cuenta, además, « que la prisión de los citados ciudadanos no pudo legalmente llevarse a cabo y cumplida, « como lo fué en momentos en que se hallaban reunidos y « preparados para asistir a un comicio, impidiéndoseles « ejercitar el derecho de votar, constituye una obstrucción

«al libre sufragio y un empleo ilegal de fuerza contra el «ejercicio de tal derecho,» condenó a Sandes al pago de una multa de doscientos pesos o en su defecto a un mes de prisión.

Ya hemos aludido en este mismo capítulo al Comandante Eliseo Acevedo. Fué con motivo de haber sido arrestado por orden del Senado Nacional; ahora es la Cámara de Diputados la autora de su nueva detención y el General Francisco Bosch, Jefe de Policía de la Capital, quien ejecutó la orden. Acevedo lo demandó, después, por daños y perjuicios ante el Juzgado Federal.

El Juez doctor Tedin se declaró incompetente por cuanto se trataba de una gestión puramente civil, regida por las leyes generales de la Nación; «y si bien — agregaba — el «hecho que la motiva afecta uno de los derechos garantizados por la Constitución Nacional, no constituye, sin embargo, un caso especialmente regido por ésta o por leyes «especiales del Congreso para que le sea aplicable el precepto del inciso 1º, artículo 104 de la ley orgánica de los «Tribunales de la Capital».

La Corte y el Procurador General contemplaron desde otro punto de vista la cuestión, y recordando el origen de la misma, esto es, la facultad con que la Cámara de Diputados, en defensa de sus privilegios, había ordenado la detención de Acevedo, llegaban a la conclusión de que la demanda por daños y perjuicios no era una mera acción civil, sino que estaba íntimamente ligada con la cuestión parlamentaria, de la que no era sino una emergencia; y siendo ésta de jurisdicción esencialmente federal debía serlo también la de daños y perjuicios a que ha dado origen.

Después de más de veinte años de una descollante actuación judicial, el doctor Gorostiaga se retiró de la Corte a mediados de 1887. Era el único que quedaba del primitivo tribunal organizado por Mitre. Habiendo sobrevivido muchos años a sus colegas Barros Pazos, Delgado y de las Carreras, los que por tras de éstos llegaron a ocupar los encumbrados sitios se habían acostumbrado a ver en el doctor Gorostiaga una como reliquia de los viejos tiempos, y atribuían a su consejo todo el inmenso valor inherente a los antecedentes preclaros del que había sido uno de los obreros más afanosos de la organización de la República.

No le iba en zaga quien entró a reemplazarle. El general doctor Benjamin Victorica fué nombrado el 10 de agosto de 1887 para desempeñar la presidencia de la Corte.

Excede a los estrechos límites de una semblanza, hecha al pasar, el relato de una vida tan azarosa, de una actuación tan dilatada en el tiempo y tan intensa, a la vez, como la del militar abogado cuyo nombre aparece en la historia refrendando uno ilustre, de imperecedera memoria por la magnitud de la obra que soñó realizar, en cuya tarea fué el doctor Victorica un factor de primera fila.

Había nacido el 24 de septiembre de 1831 en Buenos Aires. A los diez y ocho años recibió su título doctoral, más o menos al final de la tiranía; de modo que apenas había pasado los veinte años cuando se inicia su larguísima vida pública, a la que llevaba, como bagaje inapreciable, una gran capacidad de estudio, una innegable aptitud de perfeccionamiento y un profundo conocimiento de los hombres y de las cosas, logrado, según apunta uno de sus biógrafos, en el recogimiento de espíritu en que debió vivir sus primeros años al lado de su padre, el Jefe de Policía de Rosas.

El doctor Victorica fué Juez de Primera Instancia en el Paraná, Secretario del General Urquiza, Ministro del Presidente Derqui. Posteriormente tocóle negociar con el doc-

tor Vélez Sársfield el pacto de unión con Buenos Aires, desempeñándose con una penetración y lucimiento superiores a lo que era dable esperar de los veintinueve años que apenas tenía. Como convencional, en 1860, pronunció las célebres palabras que reflejaban la sinceridad de sus aspiraciones patrióticas: «La unidad nacional no se discute; se aclama».

Lograda la pacificación política de la República, ya no hubo escenario donde el doctor Victorica no actuara. Senador y Diputado al Congreso Nacional, Ministro de Estado, educacionista, militar, magistrado, diplomático, todo lo fué, y siempre con una dedicación y acierto que eran la característica de su personalidad.

Su permanencia en la Corte Suprema coincide con uno de los periodos más interesantes y de más labor que ha tenido el alto Tribunal.

También por este tiempo llegó a la Corte, después de una larga actuación judicial, el doctor Salustiano J. Zavalia. Fué nombrado el 10 de septiembre de 1887 en reemplazo del doctor Domínguez.

Había nacido el doctor Zavalia en Tucumán, el 8 de julio de 1837. Parece un común destino de los miembros de la Corte el haber pasado su infancia lejos de la patria, siguiendo la suerte de sus familias perseguidas por la tiranía. Fué así que el doctor Zavalia creció en Valparaíso, donde había fijado su residencia su padre, el constituyente de 1853, Gobernador de Tucumán después, doctor Salustiano Zavalia. Radicado en Córdoba, después de Caseros, el doctor Zavalia se dedicó al periodismo, siendo al poco tiempo elegido diputado al Congreso Nacional. Perteneció después a la Judicatura de la Provincia de Buenos Aires, destacándose con

brillante figuración. Después de haber desempeñado la Fiscalía Federal, la que renunció en 1874 para no verse en el caso de acusar a los revolucionarios de ese año, ingresó como redactor a «La Nación», para volver muy luego a las actividades judiciales más acordes con su ponderación intelectual y con la serenidad que su espíritu iba adquiriendo, conforme se aplacaban las pasiones que en días no lejanos lo habían llevado a los campos agitados de la política. Federalizada la Capital fué nombrado miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y poco tiempo después Ministro de la Suprema Corte Nacional. «En este periodo de su vida «jurídica, — dice un biógrafo, — reveló sus condiciones de «jurisconsulto eminente; recordamos que fué el único miembro de la Corte, que estuvo en disidencia con la sentencia «famosa sobre las expropiaciones para la Avenida de Mayo, «fijando una doctrina aceptada universalmente hoy en todas «las legislaciones más adelantadas.»

En 1889 volvió a la vida política, siendo elegido Senador nacional por la Capital, tocándole intervenir en los apasionados debates de la época en forma tan destacada que a poco andar tuvo un duelo con el Senador doctor Aristóbulo del Valle. Era Ministro del Interior cuando la revolución de julio de 1890 se produjo, a raíz de la cual se retiró definitivamente a la vida privada.

Tuvo oportunidad la Corte de interpretar en abril de 1888 el alcance de la Ley Penal Federal de 14 de septiembre de 1863 y su aplicabilidad por la Justicia Nacional en los casos en que hubiese sido infringida por un eclesiástico. Se recordará que en capítulos anteriores se hace mención de un proceso contra el doctor Laspiur, Vicario del obispado

de San Juan, por malversación de caudales públicos. Esta vez era también contra un Vicario, el del obispado de Salta, doctor Demetrio Cau, y la imputación, un delito contra la paz y la dignidad de la Nación.

Había recomendado el Vicario Cau, en documento público, a los padres de familia, retirar a sus hijos de las escuelas del Estado, amenazando con penas a los que no lo hicieren. Era la época en que fueron tan frecuentes estas reacciones de la fe católica contra el laicismo de la enseñanza que acababa de sancionar el Congreso. Procesado, pues, el doctor Cau por delitos enumerados en la Ley número 49, el Juez Federal se declaró competente, malgrado la pretensión del prevenido de que por su carácter eclesiástico debía considerársele excluido de la competencia de la Justicia Civil, por cuanto, además, había de por medio cuestiones de interpretación y de dogma que sólo la autoridad religiosa podía dirimir.

La pretensión era, sin duda, inusitada y desprovista de todo fundamento jurídico, al extremo de que tanto el Procurador General como la mayoría de la Corte no encontraron necesario decir sino cuatro palabras para desvanecer toda duda acerca de la competencia de la Justicia Federal. De modo que el interés del caso está, en realidad, en el voto disidente del Ministro doctor Uladislao Frías, cuyo espíritu creyente se sobrepone en esta emergencia a su reconocido buen juicio de jurista. Partiendo de la base de que uno de los más importantes objetos de la misión de la Iglesia Católica es la enseñanza de la verdadera doctrina cristiana, llega a la conclusión de que los prelados no deben tener cortapisas en su función de velar por la rectitud de esa enseñanza, dictando las disposiciones pertinentes y conminando y aún castigando, en su caso, con penas espirituales a los fieles que quebranten sus mandatos. En consecuencia, el procesado no ha hecho sino cumplir con un

deber que le imponen las leyes de la Iglesia y ejercer un derecho que la Constitución le acuerda, esto es, el de publicar sus ideas sin censura previa.

Concluye el doctor Frias, estableciendo que ningún delito se había cometido y, de no ser así, la Justicia Nacional no sería competente, dada la investidura del acusado.

En abril de 1888 produjo la Corte uno de los fallos más interesantes, no sólo por la erudición que pusieron de manifiesto sus autores, sino por la repercusión a que estuvo llamado en mira de los numerosos casos análogos, de los cuales el de la *Municipalidad v. Isabel A. de Elortondo* fué como la pauta en esa memorable contienda jurídica: las expropiaciones para la Avenida de Mayo, que afectaban intereses materiales muy valiosos.

Por ley de 31 de octubre de 1884 se autorizó la apertura de una avenida de treinta metros de ancho entre las calles Victoria y Rivadavia, desde la Plaza de Mayo hasta la calle Entre Ríos. La expropiación debía de comprender no sólo la faja de tierra que la nueva calle ocuparía, sino las adyacencias que la Municipalidad creyera indispensable adquirir, teniendo en cuenta circunstancias particulares determinantes de una ventaja de orden general o dirigidas a evitar perjuicios innecesarios a los propietarios. La Corte encontró que una autorización semejante concedida al poder administrador sobrepasaba el límite de lo que debía entenderse por utilidad pública, y al declarar inconstitucional la ley en la parte referida, rectificó en cierto modo su vieja interpretación de que no sólo ha de expropiarse la tierra necesaria para construir la obra a que la sanción legislativa se refiera. Únicamente el Ministro doctor Zavala sos-

tuvo la doctrina contraria,—coincidiendo así con el Juez Federal doctor Ugarriza y con el Procurador General doctor Costa,—produciendo un voto cuyo indiscutible valor jurídico ha de ser apreciado a su tiempo en este capítulo.

Iniciada la demanda contra la señora Isabel Armstrong de Elortondo, propietaria de la finca calle Peru N^{os}. 14, 16 y 18, se objetó la pretensión de la Municipalidad de expropiar íntegramente aquélla, aduciéndose que la ley de 1884 sólo autorizaba el apoderamiento de la tierra que la avenida habría de ocupar. El doctor Ugarriza no hizo lugar a la inconstitucionalidad alegada y falló autorizando la expropiación de todo el inmueble demandado.

El Procurador General sostuvo, al pedir la confirmación de la sentencia, que si la ley hubiese querido limitar la expropiación a la parte indispensable para la Avenida, lo habría establecido claramente y en términos precisos. Al decir aquélla « las fincas y terrenos que resulten *afectados* por la apertura » claramente expresa que va su designio más allá de lo que estrictamente se requiriese para el ancho de la vía a construirse. « Si la ley ha declarado— « agrega el doctor Costa—que es de utilidad pública la apertura de la Avenida de Mayo, y ha juzgado que ella no « podría llevarse a efecto sin la expropiación de las fincas « afectadas,—como no habría podido realizarse el Ferrocarril « Central de Córdoba sin las dos leguas laterales,—la ley « de la Avenida de Mayo no puede, pues, ser objetada, ni « discutida su constitucionalidad ». « *Afectar*—se dice en otra « parte del dictamen—no es tomar u ocupar en su totalidad una cosa. Si la Avenida toma una finca entera, a « nadie se le ocurriría decir que tal finca ha sido *afectada*; « si sólo toma una parte, a cualquiera se le ocurre que esa « finca está *afectada*, tocada, comprometida por la Avenida ». Difícilmente podía ser expuesta en menos palabras la ardua cuestión; no tan ardua por lo que realmente importara el

planteamiento de una dificultad efectiva, cuanto por lo que, a poco andar, se magnificó y degeneró, en concordancia con los intereses materiales que estuvieron en juego.

Continúa el Procurador General desarrollando su concepto acerca de lo que ha de entenderse por *utilidad pública*. « Las exigencias — dice — los gustos, las tendencias de la « sociedad, en nuestros días, son tan múltiples y variados, « que es imposible definirlos. En una población que carece « de escuelas, por ejemplo, la construcción de un teatro « sería fuera de propósito; pero dejaría de serlo en una « ciudad rica y populosa, que necesita distracciones y atrae « la concurrencia de extranjeros. Una plaza de toros sería « una abominación en Inglaterra y un motivo de felicitaciones en España. Por esto, ni los profesores de derecho, « ni las Cortes de Justicia han¹ acertado a encerrar en una « fórmula concreta qué es lo que deba entenderse por *utilidad pública* ». Es evidente, sin embargo, que las aspiraciones y tendencias de la sociedad moderna, que ha llegado a reemplazar la *necesidad* con la *utilidad*, se dirigen, en materia de expropiaciones, a lograr la interpretación más amplia.

El fallo de la mayoría de la Corte comienza dejando establecido que la ley de 1884 autoriza evidentemente a expropiar no sólo el terreno necesario para la apertura de la Avenida, sino también la totalidad de los inmuebles situados a uno y otro lado de dicha vía; de modo que no habiéndose puesto en duda la utilidad pública de la obra, la sola cuestión a resolver es la constitucionalidad de la ley en cuanto ella autoriza la expropiación de la totalidad de los inmuebles colindantes. Partiendo, luego, del precepto fundamental de la inviolabilidad de la propiedad, establece la Corte que la atribución del Congreso para dictar leyes de expropiación no puede entenderse ilimitada, ni con un alcance tal que lo autorice a disponer arbitrariamente de la propiedad de una persona.

De modo que la mayoría de la Corte no ponía en duda que la ley autorizaba la expropiación íntegra de los inmuebles afectados, sino que, reconociendo que tal era el alcance de la sanción del Congreso, encontrábala repugnante a los preceptos constitucionales. Consideraba nociva la tendencia de las expropiaciones amplias con propósitos meramente de especulación, a objeto solo de aumentar la renta pública, en cuyo caso no puede hablarse de *utilidad general*, sino del provecho particular del Estado. « Que tal doctrina — agrega — importaría no sólo desnaturalizar el derecho de expropiación, haciendo de él, en oposición a los fines con que la Constitución lo consagra, una fuente ordinaria de recursos y un medio financiero inusitado y anormal, sino también cambiar las reglas asignadas por la Constitución y las leyes para la formación del tesoro público, confundiendo todas las nociones legales y sustituyendo el ejercicio de tal derecho al poder ordinario de impuesto y de contribución. »

« Declarando la Constitución, — dice un fallo americano — no con que la Corte afianza el suyo — que la propiedad privada podrá ser tomada para usos públicos, implícitamente declara que no podrá serlo para usos privados. Supóngase el caso en que sólo unos cuantos pies, algunas pulgadas, fuesen únicamente necesarias del extremo de una propiedad para abrir una calle y que una valiosa construcción existiese en el otro extremo, ¿podría pretenderse que existe derecho para expropiar el todo de esa propiedad, consienta o no en ello su dueño? La poca o mucha extensión del sobrante no puede modificar los principios, ni influir en la solución legal, y la Legislatura debe ser reputada tan incompetente para disponer de unos pocos pies, como para hacerlo de muchos acres de la propiedad privada en un tal caso. »

Cooley, recordado por la Corte, expresa que « la expro-

« piación debe ser siempre limitada a la necesidad del caso
« y, por consiguiente, nada más puede ser expropiado que
« lo que se juzgue necesario al uso especial para el que
« la expropiación ha sido autorizada. Cuando sólo una par-
« te de los terrenos de un particular es requerida por las
« necesidades públicas, la expropiación de esta parte no
« justificará la del todo, aun cuando se acuerde debida
« compensación por ella y desde el momento en que
« se extienda más allá de la porción requerida por la ne-
« cesidad del caso, cesará de ser justificada ante los prin-
« cipios que rigen el ejercicio del derecho de dominio emi-
« nente».

Story es aún más categórico. «La expropiación de la pro-
« piedad privada,— dice — para objetos privados es un mero
« abuso de los poderes de legislación. Una resolución dic-
« tada con tales propósitos no tiene el carácter de una ley
« y está prohibida por las ideas generales que definen y
« limitan las funciones de la legislatura».

Véase, entretanto, los fundamentos de la tesis contraria,
sustentada, como ya se ha dicho, por el doctor Zavala.
« Las leyes que dicta el Congreso — comienza diciendo —
« tienen, en general, la presunción en su favor de ser con-
« formes a la Constitución, por el juramento de cumplirla
« que han prestado sus miembros, por la competencia que
« estos deben tener para el ejercicio de la misión soberana
« de legislar, por la larga tramitación, detenido estudio y
« discusión que precede a su sanción y por la ilustración
« de los miembros del P. E. que concurren a ella y que han
« prestado el mismo juramento. Pero si hay un caso espe-
« cial en que esa presunción adquiere doble fuerza y ex-
« cluye hasta la posibilidad del error, ese caso es el pre-
« sente, en que se trata de una ley de progreso y utilidad
« común, extraña a la política, en que las pasiones y los
« intereses de partido no han entrado para nada, que ha

« sido detenidamente estudiada. ¿Por ventura la Municipalidad, el Congreso, el Gobierno Nacional, todos, han estado ciegos o tan ofuscados por el error que no se han apercibido de que sancionaban una ley monstruosa que envuelve una violación del derecho de propiedad? »

Entrando al fondo de la cuestión agrega el doctor Zavallía: « Hay que observar que no se trata de privación de la propiedad y que, por consiguiente, no es necesaria la sentencia fundada en ley; se trata de expropiación por causa de utilidad pública y entonces basta que esta sea calificada por ley y previamente indemnizada. Ambas condiciones concurren en el presente caso; la expropiación de las fincas o terrenos que resulten afectados por la apertura de la avenida ha sido calificada como de utilidad pública por la ley y va a ser previamente indemnizada; pero se objeta que esa calificación es errónea por ser excesiva, que sólo el terreno comprendido en la extensión de la avenida es necesario y que no hay necesidad ni utilidad pública que justifique la expropiación de los sobrantes de las propiedades que resulten afectadas por su apertura. Esto es exigir un nuevo requisito para la expropiación que no ha establecido la Constitución. ¿Quién ha de juzgar si la calificación de utilidad pública hecha por la ley es errónea o excesiva? ». No es esta tarea judicial, por cierto, pues según la Constitución ello está exclusivamente librado al Congreso: *Calificada por ley*, dice la Constitución — agrega el disidente — y no *calificada por sentencia*. « La necesidad de apropiarse la propiedad privada — dice Cooley, también traído a colación por el doctor Zavallía, — para el uso del público o del gobierno no es una cuestión judicial; el poder reside en la legislación. Puede ser ejercido por medio de un estatuto que de una vez designe las propiedades a ser apropiadas y el objeto de la apropiación o puede ser delegado a ofi-

« ciales públicos o, como se ha hecho repetidas veces, a
« corporaciones privadas establecidas para llevar a cabo
« empresas en que el público está interesado. El ejercicio
« del derecho de dominio eminente descansa en el mismo
« terreno que el poder de hacer la ley; son los atributos de
« la soberanía política para cuyo ejercicio la legislatura
« no está en la necesidad de dirigirse a las Cortes. Al esta-
« blecer un impuesto, o al apropiarse la propiedad de un
« ciudadano o de una clase de ciudadanos para objetos públi-
« cos, con una provisión adecuada para compensación al acto
« legislativo es el debido proceso de ley. *La apropiación*
« *de la propiedad es un acto de administración pública*
« *y la forma y manera de ejercitarse es tal cual la le-*
« *gislatura en su discreción lo prescribe*».

Ahora bien, concretando, y aplicando los principios anteriormente enunciados, al caso de la ley de 1884, el doctor Zavala agrega: «La ley ha juzgado en el caso presente
« necesaria la apropiación de la totalidad de las fincas
« afectadas por la Avenida; ese juicio no puede ser revi-
« sado por los Tribunales, ni el criterio de éstos puede
« sobreponerse al criterio del Congreso y esto basta para
« dar por resuelta la cuestión de constitucionalidad. Pero
« quiero suponer que esté en las facultades de la Corte
« revisar la calificación de la ley y veamos a la luz de
« la razón y del buen sentido, puesto que no hay leyes
« que definan lo que deba entenderse por utilidad pú-
« blica, si esta ha sido o no consultada en esa cali-
« ficación. Desde luego, no puede desconocerse que hay
« utilidad y provecho evidente en apropiarse las fincas que
« van a quedar con frente a la Avenida, por el mayor valor
« que van a adquirir los fondos de las casas actuales trans-
« formados en frentes sobre la más central y más hermosa
« de las calles. Tampoco puede negarse que esa utilidad
« es de carácter público, porque es la Municipalidad y no

« un simple particular quien va a aprovechar de ella. Pero
« esto es una especulación, se dice, se busca ganancias
« con la propiedad privada y la utilidad pública a que se
« refiere la Constitución no puede convertirse en un ne-
« gocio, ni en un propósito de renta, sin desnaturalizarla.
« La objeción tendría fuerza y sería muy atendible, si la
« disposición de la ley tuviese efectivamente por objeto
« especular con el mayor valor que la tierra va a adquirir
« con la obra pública a ejecutarse, en beneficio del tesoro
« municipal. Pero no es así y es fácil demostrar que la ley
« ha sido inspirada por elevados propósitos de equidad, de
« justicia y de conveniencia pública. Dado el valor actual
« de la propiedad en Buenos Aires, la apertura de la Ave-
« nida no costará menos de doce millones de pesos al Mu-
« nicipio. El resultado inmediato de esa obra, talvez, será
« duplicar y triplicar el valor de los fondos de las casas
« actuales, convertidos en frentes a la Avenida; *ese mayor*
« *valor* creado por la Municipalidad, a costa de tan enorme
« gasto, no pertenece al propietario sino al Municipio; justo
« es entonces que el Municipio lo tome, y este es uno de
« los objetos de la expropiación total de las fincas afecta-
« das por la Avenida, para revender los sobrantes. ¿O se
« pretende, por ventura, que ese mayor valor pertenece
« de derecho al propietario? La ley general de expropia-
« ciones lo niega expresamente y en esto está de acuerdo
« con todas las leyes de la materia al disponer *que el valor*
« *de los bienes debe regularse por el que hubiesen tenido si*
« *la obra no hubiera sido ejecutada, ni aún autorizada.*
« Renunciar a ese mayor valor en favor del propietario es
« imponer al Municipio un enorme sacrificio, que nada
« justificaría y que sus recursos no se lo pormiten.»

Tales son las excelentes razones que tuvo el doctor Zalvalia para fundar su disidencia; difícilmente podría agregarse una palabra más a las tan precisas y lógicas empleadas

por aquél. Con el andar del tiempo han ido cobrando más autoridad, a medida que las exigencias de la vida moderna creaban la necesidad, sino del socialismo de estado que tanto alarmaba a la mayoría de la Corte, de afianzar, por lo menos, la tendencia de que el interés privado ceda cada vez más en favor de las necesidades colectivas. La tesis del vocal disidente ha servido para la financiación de las avenidas diagonales (62). Ya nadie duda ahora del derecho del Estado para practicar la expropiación sin restricciones; y a uno de los firmantes de la sentencia de la mayoría de la Corte oyó decir el autor, hace algunos años, que había variado radicalmente de ideas, al extremo de que no volvería a suscribir un fallo como el de 1898. Y es claro, apenas se penetra la cuestión puede verse fácilmente que no puede haber una lesión al derecho de propiedad garantido por la Constitución, allí donde al propietario se le paga el valor efectivo de la tierra más una indemnización. Lo contrario sería sostener que el mayor valor determinado por la obra—tarea a la cual es ajeno el propietario,—ha de beneficiar el patrimonio de éste; y al impedirlo la ley y propender a que sea el Estado o la Comuna la que se beneficie, no como persona jurídica sino como poder público, no hace sino privarlo al particular de una ganancia exorbitante, entregándola, más bien, a quien por la función que desempeña, está en aptitud de hacer participar de ese beneficio al mayor número.

El doctor Zavala fué reemplazado en la Corte por el doctor Luis V. Varela, cuyo nombramiento es de fecha 3 de

(62) En febrero de 1920 se sacaron a remate los lotes sobrantes de la expropiación efectuada en 1911.

abril de 1889. Pertenecía a la conocida familia que tanto buen servidor ha proporcionado en distintas épocas a la República. Fué hombre ilustrado y desempeñó múltiples funciones públicas.

Sabido es que cuando la Constitución atribuye a los Jueces Federales el conocimiento de las cuestiones que enumera el artículo 100, no hace distingo acerca de la mayor o menor cuantía de los litigios, en asuntos de derecho civil. De modo que cuando por ley del Congreso se organizó la Justicia de Paz de la Capital Federal atribuyéndole el conocimiento de las cuestiones cuyo monto no excede de quinientos pesos, sin distinguir entre nacionales y extranjeros, forzosamente tenía que plantearse la cuestión relacionada con la constitucionalidad de una ley semejante.

En 1889 don Juan Vignale demandó al doctor Ignacio Albarracín ante el Juzgado Federal de Buenos Aires por cobro de cien pesos. El demandado opuso una declinatoria de jurisdicción en virtud de la ley de agosto de 1878 que excluyó las causas de menor cuantía de la competencia de los Juzgados Federales. El demandante opuso la inconstitucionalidad de la ley, por contrariar el principio del artículo 100; que el extranjero tiene derecho de ir a la justicia local, cuando lo crea conveniente, pero ese derecho no podía ser convertido en obligación mientras la Constitución no fuera reformada. El Juez Federal no necesitó decir sino cuatro palabras para fundar su competencia. «Teniendo en «consideración — dice — que por el artículo 100 de la Constitución los Tribunales Federales ejercen la plenitud de «la jurisdicción en todas las causas determinadas por la «Constitución, sin que tenga facultad el Congreso para res- «tringirla, como en Estados Unidos; y que en el caso actual,

« estando prescripto expresamente que los Tribunales Federales entiendan en todas las causas entre un extranjero y un ciudadano, *no puede el Congreso limitarlas por la cuantía*, ni es conciliable, tampoco, con el espíritu que puso los derechos del extranjero al amparo de los Tribunales Nacionales.»

El Procurador General sostuvo que entraba en las atribuciones del Congreso limitar la jurisdicción de los Juzgados de Sección, pues la jurisdicción atribuida a éstos por el artículo 100 de la Constitución no es *exclusiva* « ni el texto, ni el espíritu de este artículo, — dice — autorizan tal interpretación. Por el contrario, el artículo siguiente, « al conferir al Congreso la facultad de prescribir las reglas y excepciones para el ejercicio de la jurisdicción que el anterior atribuía a los Tribunales de la Nación, sólo limita esta facultad *a todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y aquellos en que una provincia fuese parte*. En estos casos, « dice en seguida, la Corte Suprema ejercerá *jurisdicción originaria y exclusivamente* ». Mal argumento es éste (y hasta podría decirse malicioso si no estuviese allí la firma del doctor Eduardo Costa.) porque al emplear aquí la Constitución, refiriéndose a la Corte, las palabras *originaria y exclusivamente*, lo hace en oposición a aquellos casos en los cuales la Corte entiende en grado de apelación, es decir, *no originariamente, ni exclusivamente*.

Sin embargo, la Corte revocó el fallo de primera instancia, e invocando una ley, la de federalización de Buenos Aires, aniquiló de un plumazo el claro precepto del artículo 100 de la Constitución. Sin duda es atendible el argumento de que habiendo sólo en las capitales de provincia Jueces Federales significa un gran inconveniente obligar a los litigantes de la campaña, en asuntos de menor cuantía, que podían ventilar ante el Juez de Paz local, que se tras-

laden a la sede del Juez Nacional, cuando por razones de nacionalidad surte el fuero federal. Pero no hay otro remedio mientras la Constitución no se reforme.

Para reemplazar al doctor Uladislao Frías fué nombrado en enero 14 de 1890 el doctor Abel Bazán. Posteriormente, en junio de 1903. fué designado presidente del Tribunal, a la muerte del doctor Benjamin Paz. «En la Suprema Corte. «desempeñando el cargo más encumbrado de la administración judicial,—se dijo en ocasión de su muerte,— «estaba el doctor Bazán en su puesto. Era uno de esos «caracteres forjados de probidad y de rectitud en que la «justicia está segura siempre de encontrar un intérprete «fiel y desinteresado; era una de esas inteligencias penetrantes y fuertes que parecen templadas para consagrar «la sanción serena de la verdad en el choque de los intereses litigiosos». Había nacido en La Rioja en 23 de diciembre de 1833, graduándose a los veinte años en la Universidad de Córdoba. Participó desde entonces en las agitadas luchas políticas de la época; fué Diputado Nacional en 1860 y luego Senador durante dos periodos; en Córdoba y en Santa Fe desempeñó funciones judiciales. Su consagración definitiva logróla desde el alto sitio de la Corte en cuyo seno, durante muchos años, la palabra serena y erudita del doctor Bazán fué vehículo de la razón y de la justicia.

CAPÍTULO X

1891 - 1895.

Después de treinta años de existencia, la Corte no tiene en la vida institucional el rol preponderante de la Corte Americana. — El santo temor de la política. — Prisión del senador nacional General Rufino Ortega. — Extensión de la inmunidad parlamentaria. — El doctor LUIS SAENZ PENA reemplaza al doctor Ibarguren. — La revolución contra el Presidente de Chile doctor Balmaceda. — Sublevación de los tripulantes del *Pitcomayo* en aguas argentinas. — El derecho de asilo y la gestión del Ministro chileno para obtener la entrega de aquéllos. — La personería de un Ministro extranjero para litigar ante los tribunales argentinos en cuestiones de derecho comun. — El doctor ANTONIO E. MALAYER es nombrado Procurador General. — Dos años después es reemplazado por el doctor SABINIANO KIER. — Nombramiento del doctor BENJAMÍN PAZ. — Las facultades del P. E. durante el estado de sitio. — La jurisdicción ordinaria y la aplicación de las leyes del Congreso relativas al Gobierno Municipal de la Capital. — La validez del nombramiento del Juez Federal doctor Lalanne demandada ante la Corte. — Nombramiento de los doctores OCTAVIO BUNGE y JUAN E. TORRENT. — La jurisdicción para juzgar a un militar que dá muerte a un preso civil que intenta evadirse. — La constitucionalidad de la ley de matrimonio civil. — Enjuiciamiento del cura de la Punilla por celebrar matrimonios sin la intervención del oficial público. — La facultad de intervenir una provincia y la jurisdicción de la Corte. — Los casos de Santa Fe y San Luis. — Concepto del derecho de revolución. — El precedente de Pavón. — Demanda sobre nulidad de los actos de los interventores. — La notable disidencia del doctor Varela. — La seducción de tropas con fines revolucionarios. — Los sucesos de 1893. Sublevación de la Escuadra. — El proceso del coronel Espina. — Famosa cuestión de competencia entre la Justicia Nacional y los Tribunales Militares. — Prisión del senador nacional Leandro N. Alem en el Rosario. — Los interventores

res nacionales no representan a la provincia intervenida.—Verdadero carácter y alcance de sus funciones.—Las demandas contra el interventor en Buenos Aires.—Casos en que los Ministros extranjeros se someten a la jurisdicción de los tribunales argentinos.—Alcance de la palabra *vecinos* empleada en el artículo 100 de la Constitución.

No es una frase vana aquella de que la Corte de los Estados Unidos, con sus interpretaciones constitucionales, ha ido labrando en etapas luminosas la historia civil de la Nación, a tal punto logró afianzarse la tendencia de los otros poderes, con gran beneplácito público, de reducir a casos judiciales el mayor número de las múltiples cuestiones que forman el acervo de la vida democrática, sin hacer el distinguo entre las que son esencialmente políticas y las que no lo son (63). Está en esto, precisamente, la diferencia entre nuestra Corte y la norteamericana. No han sido nunca extraños a la actividad de esta los casos relacionados con cuestiones electorales y aun con el mismo mecanismo legislativo (64). Bastaba que estuviera de por medio la interpretación de un texto constitucional para que el tribunal se considerase habilitado para dirimir la contienda.

Entre nosotros ha sido de todas las épocas el prurito de dejar que los intereses políticos se debatan y resuelvan en

(63) Actualmente (febrero de 1920 una comisión judicial en el Estado de Albany, entiende en una contienda, cuyos abogados contrarios son Hughes y Root, promovida por cinco diputados socialistas, cuyos poderes fueron desconocidos por la Legislatura estadual, que los expulsó de su seno. Con ser inconcusa la verdad aquella de que cada cámara es el único Juez de la elección de sus miembros, se habrá encontrado ahora conveniente, por virtud de la forma en que se realiza la propaganda obrera, con vistas al desquicio institucional, reducir la cuestión a *caso judicial*.

(64) Con motivo de la azarosa tramitación de la ley que prohíbe el alcohol, se discutió en Estados Unidos, entre otras cosas, que ella no había sido sancionada por los dos tercios del total de los miembros de la Cámara de Diputados que se requería por el carácter de la ley; (es decir, estuvo e tela de juicio una cuestión de trámite parlamentario en los mismos términos

su propio y delimitado escenario. Con un santo temor de contaminarse, pareciera, la Corte se ha desentendido de todas aquellas cuestiones que pudiesen traer su origen de alguna rivalidad partidista, así el caso judicial se le planteara invocando la transgresión de un precepto constitucional, v. gr., la demanda contra los interventores nacionales en Santa Fe y San Luis de que hemos de ocuparnos en este capítulo. Si, pues, las autoridades de la Nación intervienen en una provincia, invocando los artículos 5º y 6º famosos, puede muy bien suceder que no se ajusten en todos los casos a sus términos estrictos, planteándose así la posibilidad de discutir el alcance de aquel acto de gobierno, esto es, de interpretar en forma contradictoria la letra y el espíritu de esos artículos; y cabe preguntar: ¿Acaso no es la Corte Suprema el tribunal encargado, por sobre toda otra tarea, de interpretar la Constitución? ¿Ha hecho ésta, por ventura, el distingo entre los casos que puede interpretar y los que han de estarle vedados por ser atinentes a la actividad política? Nada hay en la Constitución que pueda dar un fundamento serio a semejante interpretación. Sólo en una disidencia de los doctores Varela y Bazán se registra una opinión en el sentido de la amplitud con que la Corte debe llenar su función de intérprete de la Constitución (65).

en que se planteó entre nosotros, el año 1933, la inconstitucionalidad de la ley de intervención a Santa Fe, que la Corte resolvió no ser de su resorte). La Corte Americana se pronunció haciendo mérito de las exigencias constitucionales relativas al trámite parlamentario, mientras la nuestra resolvió ser ajena a su competencia el punto relativo a que, rechazado totalmente un proyecto por una de las cámaras, no puede ser revivido durante el mismo periodo, que era lo que había ocurrido con motivo de la intervención nombrada.

(65) «Habiéndose dado al Poder Judicial — dice el voto en disidencia — la misión de aplicar la ley, él debe, ante todo, examinar su constitucionalidad, cuando esta ha sido impugnada durante el proceso..... teniendo, por lo tanto, la Corte el deber de averiguar si la disposición especial..... es o no contraria a los derechos y garantías..... etc.»

Como del argumento más socorrido se hace mérito, con frecuencia, del concepto de la división de poderes, de la conveniencia de que cada uno de éstos tenga una órbita propia de actividad, sin que sea posible el control de una entidad extraña. Sin duda, tiene un fundamento real y efectivo esta tendencia. La doctrina enseña, y lo preceptúa expresamente la Constitución, que los tres poderes del Estado han de estar divididos en forma que la actividad del uno no dependa de los otros; pero esta concepción no puede ser absoluta y, como todas las declaraciones y derechos contenidos en aquélla, tiene forzosamente que someterse a la reglamentación inherente, a la necesaria limitación, a la atemperación sin la cual la urdimbre del sistema sería imposible, como difícil de lograr el equilibrio que es el desiderátum de todos los organismos institucionales. Es así que los jueces existen como tales por la designación combinada del P. E. y del Senado; es así como el Congreso no puede reunirse sin la convocatoria del Presidente de la Nación; es así como el Poder Judicial puede declarar sin valor una ley del Congreso; es así como la Nación puede ser demandada, etc., etc. De modo que si, dentro del sistema, puede la Corte declarar inconstitucional una sanción legislativa o un decreto gubernativo que no estuviesen de acuerdo con determinado artículo de la Constitución, ¿en qué puede fundarse para no conocer en una contienda judicial, *entre partes*, naturalmente, que tuviera su origen en los actos de un interventor, cuya validez se ataca atacando la ley o el decreto en virtud del cual actúa?

En el curso de este capítulo ha de verse extensamente expuesta la cuestión, la sin razón de la Corte y las buenas razones de la disidencia del doctor Varela, en el caso de Santa Fe.

Así han pasado los años para la Corte, acentuándose en ella la tendencia de caracterizar su actividad por la inter-

pretación del derecho común, en cuya materia, sin duda, sus producciones tienen el valor efectivo de las grandes piezas de jurisprudencia. El derecho público fué para ella siempre secundario; se ha sustraído a él, tanto como la Corte americana lo ha buscado siempre con el claro concepto de que reduciendo a casos judiciales la azarosa actividad de la vida republicana, se logra fácilmente estabilizar la paz pública y, lo que más, poner por encima de todo en la Nación el enorme influjo de aquel de los tres poderes más capaz, por la serenidad del ambiente en que vive, de tener las mejores inspiraciones, de contrapesar los ardimientos de la demagogia, de atemperar los excesos, así sean de la libertad como de la tiranía. Hay quien piensa, sin embargo, que si la Corte no hubiese procedido como hasta ahora lo ha hecho, no conservaría ya en la actualidad su independendencia, ni gozaría del prestigio de que, por huir de las interpretaciones atinentes con la política, está rodeada. Los gobiernos, se dice, habrían tratado de someterla, integrándola con personas capaces de ser influenciadas, llegado el caso.

En diciembre de 1890 fué detenido en Mendoza el Senador Nacional General don Rufino Ortega, después de allanarse violentamente su domicilio particular, donde permanecían refugiados el Mayor Amadeo Baldrich y don Miguel Mogrovejo, perseguidos por la policía en virtud de estar sindicados de haber amenazado de muerte al Gobernador de la Provincia. Naturalmente, en todo esto andaba la rivalidad partidista de por medio: el general Ortega era el jefe visible de la oposición local y en los días anteriores habían existido otras exteriorizaciones violentas del enardecimiento de los espíritus.

Un recurso de amparo de la libertad del General se interpuso ante el Juez de Sección, quien pidió los informes de rúbrica y al evacuarlos dijo el Jefe de Policía que aquel había sido tomado *infraganti*, pues desde la azotea de su casa se hacían disparos contra la autoridad, aparte de que el gobierno tenía informes acerca de un movimiento revolucionario que se preparaba por inspiración del legislador detenido. El Ministerio Fiscal se opuso al *habeas corpus* por cuanto existía contra aquél la imputación directa de delitos comunes, como ser rebelión, sedición y desacato a mano armada contra la autoridad, en cuyo caso de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución, debía darse aviso al Senado, remitiéndosele el sumario.

Al resolver el Juez expresaba la conveniencia de que las disposiciones legales que acuerdan inmunidades a los miembros del Congreso debían interpretarse en el sentido más amplio para evitar « el peligro de que tales privilegios fuesen frecuentemente burlados, frustrando la Constitución en una de sus más sustanciales disposiciones. » Analizaba después la sentencia el pormenor de los hechos imputados, encontrando que no existió la resistencia armada que podía constituir la rebelión, ni se había probado nada acerca del movimiento revolucionario. El recurso se resolvió favorablemente ordenando la libertad del detenido.

Apeló el Fiscal y apeló el Jefe de Policía para ante la Corte. Requirió ésta la opinión del Procurador General. Después de establecer el doctor Malaver que el Senador Ortega no había sido tomado *infraganti*, agregaba: « Si bien « la inmunidad de que goza un miembro del Congreso es « puramente personal, y tiene por único objeto garantizar « del modo más amplio su libertad en el ejercicio de la « función que desempeña y no constituye, por tanto, un « lugar de asilo su propio domicilio, ni tiene el derecho de « resistir que la justicia criminal cumpla su misión res-

« pecto de otras personas; con todo, creo que el hecho de
« negar la entrada a la autoridad para hacer efectiva la
« prisión de las dos personas indicadas no constituye el
« crimen que puede autorizar la prisión del Senador, se-
« gún los términos del artículo constitucional citado. Esa
« prisión de las dos personas mencionadas pudo tener lu-
« gar previo el allanamiento de la casa, como lo tuvo en
« efecto, sin necesidad de constituir en prisión al senador
« nacional, dueño de aquella. Si el Senador había cometido
« el delito de sedición resistiéndose a la entrega de tales
« personas, pudo formarse el proceso o sumario a que alude
« el artículo 62 de la Constitución, que es el camino que
« pudo seguirse por el Gobierno de Mendoza, enviando al
« H. Senado el sumario que se hubiese levantado judicial-
« mente y que comprobara los delitos atribuidos al Senador,
« pidiéndose el levantamiento de sus inmunidades.»

La Corte resolvió que cualquiera que hubiera sido el carácter y mérito de los hechos que habían dado lugar a la prisión, ella no podía ser mantenida después de abierto el período de sesiones extraordinarias, sin darse cuenta del procedimiento a la rama respectiva del Congreso, de acuerdo con el artículo 61 de la Constitución; y que como no se había cumplido con este requisito *se mantenía la libertad decretada por el auto apelado y no se hacía lugar a ninguno de los recursos interpuestos*. Fuera procedente o improcedente el recurso de *habeas corpus*, el hecho es que se había sustanciado en forma y a menos de ser anulado, la Corte no podía sino confirmarlo o revocarlo; y si bien el *mantenimiento de la libertad decretada* importaba confirmar la sentencia de primera instancia, el hecho es que, por virtud del fallo de la Corte, venía a quedar sin solución el fondo de la contienda traída a sus estrados, desarrollada primeramente por el Juez y luego por el Procurador General en forma que obligaba, podría decirse, al Tribunal a pronunciar

su palabra definitiva. No lo hizo; quedó con una solución provisoria e incierta el caso constitucional planteado y quedó el Jefe de Policía de Mendoza sin saber si había obrado bien o mal deteniendo a un Senador de la Nación, así como no supo éste si realmente sus fueros eran tan extensos como para convertir en asilo seguro su casa, ni supo el Juez Federal si había estado en lo cierto cuando resolvió favorablemente el recurso. Todo por virtud de no haber querido aprovechar la Corte la ocasión que se lo presentaba de interpretar un texto constitucional, dejando para el futuro la norma segura de su juicio autorizado. Eran años agitados los que por entonces corrían; los sucesos de julio de 1890 habían dejado un sedimento subversivo, un ambiente intranquilo y de revuelta, que fué el origen de casi todos los sucesos que, desde el punto de vista judicial, han de estudiarse en este Capítulo. Otros dos senadores nacionales, Alem en el Rosario y García en Santiago del Estero, fueron detenidos deduciéndose en ambos casos recursos que la Corte resolvió en la forma que ha de verse a su tiempo... No podía decirse, realmente, que, desde un punto de vista estrictamente legal, la Corte resolvió mal el caso del Senador Ortega; pero cuando en el país se llegaba a los extremos de encarcelar a los legisladores como consecuencia de la subversión que cundía, del desquiciamiento institucional que era la característica del momento y se tiene poderes tan extensos de interpretación como los de la Corte, su papel de poder moderador debió ponerse de manifiesto, segura de que al hacerlo dejaba un jalón en el campo agitado de la actividad democrática. La ventaja para las instituciones estaba en ello, más que en la necesidad de cuidar el cumplimiento de un mero detalle de carácter procesal.

El 13 de diciembre de 1890 fué nombrado Ministro de la Corte el doctor Luis Sáenz Peña, en reemplazo del doctor Ibarguren. Había nacido aquél en Buenos Aires en 1822 en el seno de una de las familias de más prosapia de la ciudad. Su primera actuación pública data de la famosa Convención Constituyente de 1860 en cuyo seno sostuvo la adhesión lisa y llana de Buenos Aires a la obra de los constituyentes del 53. Fué también convencional en 1873, habiendo antes desempeñado un mandato senatorial en la legislatura de la Provincia a la que representó después en el Congreso Nacional, desempeñando la presidencia de la Cámara de Diputados durante los sucesos de 1874; fué vice gobernador durante la administración de don Carlos Casares y con posterioridad fué miembro de la Suprema Corte de Justicia provincial.

Ocupaba en 1892 su alto puesto en la Suprema Corte Federal cuando aceptó la candidatura a la Presidencia de la República. «Su vida relativamente apacible durante sus « siete primeras décadas —se ha dicho con razón,— entró « con la ancianidad en un periodo tempestuoso, quizá el « más agitado que consignent nuestros anales políticos desde « la época de la organización nacional. Fué, pues, la suya una « existencia cronológicamente invertida.... Hombre de la « ley, tuvo que ponerse y poner al país fuera de la ley; « conservador por temperamento y convicción, vióse envuelto « en la vorágine revolucionaria; constituyente por mandato « electivo como había sido y constitucionalista por sus estudios predilectos, hubo de gobernar en el estado de sitio». Es que el doctor Sáenz Peña había nacido para las tareas apacibles y es por eso que fué en la actividad judicial donde se pusieron de manifiesto las reales calidades de su espíritu: hombre de orden y bueno en toda la acepción de la palabra, de clara mentalidad, sus interpretaciones legales resultaban siempre acordes con esos atributos.

A principio de 1891 se desarrollaron en Chile sucesos políticos que culminaron con la muerte trágica del Presidente Balmaceda. Por esos días estaba en el puerto de Buenos Aires el buque de guerra chileno *Pilcomayo*, cuya tripulación, haciendo causa común con los revolucionarios de su patria, se sublevaron contra sus jefes; pero dominados por éstos fueron entregados en calidad de presos a la Prefectura Marítima, con intervención del Ministro de Chile, y en virtud de no haber a bordo seguridades suficientes para su custodia. Los detenidos interpusieron ante el Juzgado Federal un recurso de *habeas corpus*, y estaba tramitándose, cuando el diplomático chileno recabó la entrega de aquéllos para ser reintegrados al buque. Se planteaba así una interesante cuestión relacionada con el carácter del delito imputado y con la inviolabilidad del asilo que habían encontrado en suelo argentino.

El Juez Tedin, al resolver favorablemente el recurso, hizo los siguientes razonamientos: « Que el señor Ministro de « Chile, por el hecho de haber sacado los presos del buque « poniéndolos en tierra bajo la custodia de las autoridades « nacionales, implícitamente ha renunciado o, mejor dicho, « ha perdido el derecho de sacarlos del país y juzgarlos « como pudo hacerlo si hubiesen permanecido a bordo o « estado detenidos en la casa de la legación, sin intervención « de las autoridades argentinas y en la forma que sus leyes « determinan, las cuales protegen la libertad individual de « todas las personas que pisen su territorio, mientras se « encuentren en él». Y como nadie puede ser detenido sino por orden de autoridad competente, sin que el hecho de haber pertenecido los recurrentes a un buque de guerra pueda modificar aquel precepto, la libertad de aquéllos debía ser declarada procedente.

El Procurador General hacía mérito, ante todo, en su dictamen de que se trataba de actos políticos con la parti-

cularidad de que, cuando los marineros chilenos fueron detenidos estaban suspendidas en la Capital Federal las garantías constitucionales, en cuyo caso fallaban por su base los argumentos del Juez Federal en cuanto hacia referencia a las garantías acordadas por la Constitución; y siendo esto así es incuestionable la facultad del Presidente de la República para arrestar a las personas sin que tenga la obligación de dar cuenta a los jueces. El recurso, en consecuencia, no era procedente.

La Corte confirmó, sin embargo, la resolución favorable del Juez. Después de dejar establecido que la sublevación a bordo del *Pilcomayo* había tenido un carácter político, pues se llevó a cabo haciendo causa común con los que en Chile se habían levantado en armas contra la autoridad constituida, sin que pueda ser parte a modificar este concepto el hecho de que haya de por medio infracciones de otro orden, indispensables para el logro del propósito, resolvió que se trataba ante la legislación positiva de personas inviolables mientras permanecieran en territorio argentino. Es claro que, conforme a la ficción de la extraterritorialidad, los sublevados pudieron ser juzgados a bordo, de acuerdo con las leyes chilenas; pero apenas pisaron tierra ya estuvieron protegidos por aquellos principios. «Que así es de «doctrina, — continúa diciendo la Corte, — aún con aplicación a guerras civiles; el Estado neutro que presta el apoyo «(según dice Kent en sus comentarios) de su fuerza pública «para mantener en estado de cautividad soldados de uno «de los beligerantes, durante su permanencia en su territorio, toma parte indirectamente en la guerra y comete una «violación flagrante de la neutralidad y el derecho que el «enemigo tiene sobre los prisioneros que han caído en su «poder no puede ser transferido a un neutral. Que en «el caso de actos de hostilidad o de guerra civil llevados «a cabo por insurgentes de un Estado extranjero en aguas

« territoriales de otro Estado, la regla consagrada en el derecho internacional es igualmente la de poner en libertad las personas de los últimos, *si no se han hecho justicia-bles por sus actos* ante los tribunales del país en que éstos se han perpetrado y sólo entregar al gobierno del Estado extranjero las naves o cosas tomadas a aquéllos ».— Después se refiere la Corte a que nadie en la República puede ser mantenido en prisión sin orden escrita de autoridad competente y por hechos que no estén previamente calificados de delitos, y que el que en tales condiciones se hallare tiene un recurso de amparo de su libertad deducible ante la autoridad judicial.

Muy poco tiempo después, el mismo diplomático chileno que interviene en el caso precedente, doctor Adolfo Guerrero, planteó ante la justicia otra cuestión interesante desde el punto de vista del Derecho Internacional, y relacionada también con la revolución contra Balmaceda. A raíz de ésta, las autoridades provisorias habían acreditado en Buenos Aires como Ministro Diplomático al nombrado señor Guerrero, quien solicitó la rescisión de un contrato de compra del vapor *Aquila* celebrado por el anterior representante diplomático, don Gabriel Vidal, a cuyo efecto se presentó ante el Juzgado Federal de Buenos Aires. La personería que invocaba el doctor Guerrero nacía de una comunicación de la cancillería argentina haciéndole saber que el Ministro Argentino en Santiago había sido notificado en la « Moneda » del cese de don Gabriel Vidal como representante chileno a la vez que de la designación de Guerrero. Esto no era bastante a juicio del Juez para acreditar la personería del actor y « bajo ningún concepto valía aquella comunicación como título le-

« gal, ni del punto de vista del derecho público internacio-
« nal, ni del derecho civil de esta República que habilite al
« nombrado señor Guerrero para actos de representación de
« su gobierno como organismo político, *ni del Estado de*
« *Chile como persona jurídica en relaciones contractuales*
« *con tercero*. Que es perfectamente sabido que bajo el pri-
« mer aspecto, esto es, como representante del gobierno chi-
« leno, sea éste ejercido por el señor General Baquedano,
« o por cualquier otro que de hecho posea y tenga en sus
« manos el poder público en aquel país para ejercer las fun-
« ciones de tal, debe presentar las credenciales o sean ple-
« nos poderes escritos y formales emanados de ese gobierno,
« pues es regla de derecho de gentes que solamente después
« de la presentación de aquéllas se adquieren los derechos
« inherentes. . . . no pudiendo los jueces de la Nación ad-
« mitir una representación que aún no ha sido reconocida
« por el poder a quien incumbe ese acto. . . . que no en-
« contrándose aún en ese caso el señor Guerrero, su perso-
« nería para estar en juicio en representación de Chile, sólo
« podría admitirse en virtud de poder general o especial
« otorgado en la forma que prescribe el Código Civil ».

En un auto posterior el Juez expresaba, que si bien el go-
bierno de Chile puede nombrar por decreto los funcionarios
que lo representen, los poderes de éstos no pueden exten-
derse fuera de su territorio ni aplicarse a los casos en que
aquel gobierno litigue, como entidad jurídica, ante tribunales
extranjeros, para lo cual se requeriría un poder especial con
las formalidades de ley. Fué así que no se admitió en juicio
la representación invocada por el Ministro Guerrero.

La Corte resolvió lo contrario y encaró la cuestión en otra
forma. Desde luego, encontraba que la documentación pre-
sentada era suficiente para acreditar la personería del actor:
« pues, prescindiendo de averiguar cuáles sean las dispo-
« siciones del derecho común interno de Chile, sobre la

« forma de los poderes para pleito, lo cual constituye una
« cuestión de hecho, que como todas las de este género,
« deben alegarse y probarse en juicio, es evidente que los
« actos de soberanía y gobierno de un estado independiente,
« en lo que se refiere a la designación de sus agentes o
« empleados, no pueden razonablemente entenderse sujetos
« a las formas rigurosas que el derecho civil prescribe para
« los actos privados entre particulares Por estos fun-
« damentos y prescindiendo de apreciar si los documentos
« citados atribuyen o no carácter diplomático a don Adolfo
« Guerrero, *lo que no importa a los efectos de este juicio*,
« y sobre lo cual no corresponde tampoco a esta Suprema
« Corte juzgar, se revoca el auto apelado y se declara que
« aquél tiene suficiente personería. »

El doctor Costa fué reemplazado en el cargo de Procurador General por el doctor Antonio E. Malaver. Nacido en Buenos Aires el año 1835 hizo sus primeros estudios en el convento de San Francisco, donde, además, estudió con dedicación el latín; una vez terminados sus preparatorios, ingresó a la Escuela de Medicina, pero sólo permaneció en ella un año, pasando a estudiar matemáticas hasta recibirse de agrimensor en 1853. Desempeñó durante muchos años un puesto en el Departamento Topográfico. Recién en 1861 inició sus estudios de Jurisprudencia, logrando tres años después el título doctoral. Publicó diversos trabajos, algunos en colaboración, revelándose en ellos la gran capacidad de estudio del doctor Malaver y la preparación tan vasta que constituiría con el tiempo la característica de su personalidad. Durante el Gobierno de don Emilio Castro fué Ministro de Gobierno y desempeñó, entre otros cargos relacio-

nados con la enseñanza, la Cátedra de Procedimientos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, logrando entonces la consagración definitiva de su prestigio como práctico del derecho.

Sólo dos años desempeñó el doctor Malaver la procuración de la Corte. A principio de 1892 fué nombrado para reemplazarle el doctor Sabiniano Kier, que estuvo en el cargo más de diez años.

Hasta entonces el doctor Kier no había desempeñado ningún cargo en la magistratura nacional; pero su designación no pareció a nadie intempestiva ni inmerecida, pues gozaba de un general prestigio por las relevantes dotes de su espíritu ecuánime y sereno, al par que por su gran bagaje jurídico.

Nacido en Buenos Aires, se graduó en su Universidad, logrando desde joven destacarse por su dedicación al estudio. Sus dictámenes revelan siempre una gran penetración.

Para reemplazar al doctor Sáenz Peña, que renunció, como se ha dicho, para aceptar su candidatura presidencial, fué designado en marzo de 1892 el doctor Benjamin Paz; posteriormente fué nombrado Presidente de la Corte en lugar del doctor Victorica.

Venía el doctor Paz de las actividades agitadas de la política. Desde legislador provincial hasta Gobernador de Tucumán, Senador Nacional después y Ministro del Interior durante la primera presidencia del General Roca, durante muchos años estuvo al servicio de la cosa pública con singu-

lar dedicación y acierto, sin que nunca llegara a alterarse la llaneza franca y abierta, la bondad ingénita de su espíritu que no excluían en él energías de vigoroso temple unidos a un alto y austero concepto de sus deberes. «Es-
« tamos seguros—se dice en una nota biográfica—que el
« doctor Paz, después de haberse movido durante treinta
« años en las esferas donde se excitan más enconos, no deja
« tras de sí la sombra de una sola enemistad. Por su propia
« idiosincrasia era inaccesible a todas las acritudes y sólo
« podía inspirar la simpatía afectuosa que desarma las pre-
« venciones y conquista las voluntades.»

Fué un jurista de profunda ilustración y un Juez de invariable rectitud. Había llegado de esa manera, por títulos propios, al puesto más encumbrado de la magistratura argentina y supo hacerle honor en muchos años de ejercicio, conquistando en el respeto del público una jerarquía moral tan alta como lo era la del cargo que desempeñaba.

Había nacido en Tucumán, donde su familia ocupaba rango prominente; se graduó de abogado en Córdoba hacia el año 1858; hizo en su provincia toda la carrera judicial, desde Fiscal hasta Presidente del Superior Tribunal.

En los últimos años de su vida fué académico de la Facultad de Derecho de Buenos Aires.

Bajo la presidencia del doctor Pellegrini, en abril de 1892, y estando suspendidas las garantías constitucionales, como consecuencia de las actitudes de la oposición parlamentaria, con vistas a la revuelta armada, fueron detenidos en Buenos Aires y conducidos a bordo de un barco de guerra, el Coronel Julio Figueroa, don Marcelo T. de Alvear, don Joaquín Castellanos, don Martín Torino, don Antonio Arraga

y otros. Se dedujo en su favor, ante el Juzgado Federal, un recurso de *habeas corpus*.

Del informe del Jefe de Policía resultaba que se había procedido por orden directa del Presidente de la República, a favor del estado de sitio, decretado para conjurar un estallido revolucionario preparado en todo el país. Encontraba el doctor Tedin, al resolver negativamente el recurso, que el Presidente «había entendido obrar como medida puramente preventiva, para preservar la paz pública amenazada por la conmoción interior a que se refiere el decreto «declarativo de estado de sitio.»

Para el Procurador General, doctor Kier, era indudable que la Constitución había querido empeñosamente salvaguardar los privilegios individuales, tales como el de no poder ser juzgado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni arrestado sino en virtud de orden escrita, etc.; pero «ha querido también defender y guardar «el conjunto de todas esas individualidades que constituyen la asociación política contra las perturbaciones del «orden público, ya se produzcan por una conmoción interior «o por un ataque exterior. «*Y para este caso anormal, «que crea una situación fuera del orden de la Constitución, ha armado a uno de los poderes de la misma, según su artículo 23, de la facultad de declarar el estado «de sitio, sin que ello importe la facultad de aplicar «penas y sólo si la de arrestar personas y trasladarlas «de un punto a otro de la Nación si ellas no prefiriesen «salir fuera del territorio argentino.»*

La Corte requirió un informe directo al P. E. pues se hizo mérito ante ella de que los detenidos habían manifestado su intención de trasladarse a la República Oriental, no obstante lo cual permanecían a bordo, privados de su libertad. «Debo manifestar a V. E.—dice el Presidente «Pellegrini—que dichos ciudadanos fueron arrestados por

« mi orden en uso de la facultad que me acuerda el artículo 23 de la Constitución Nacional. Habiendo resuelto trasladarlos a un punto en los territorios nacionales, se me hizo saber por personas encargadas de obtener de ellos ciertas declaraciones, que optaban por salir del país, con cuyo motivo se les dió pasaje para la vecina República del Uruguay. Si hubiera habido error en esa información y si dichos ciudadanos han autorizado al señor Rodríguez para manifestar que prefieren ser trasladados a algún punto del territorio nacional, les bastará para conseguirlo regresar al país y presentarse al Estado Mayor General de Marina para ser enviados a su destino.»

La Corte, al resolver, encontraba innecesario referirse a la legitimidad de la orden presidencial en virtud de la cual los recurrentes habían sido detenidos; y en cuanto a la incidencia antes mencionada consideraba, en vista de la discrepancia existente entre la manifestación de aquéllos y el informe del Ejecutivo, que las personas que no estaban detenidas en el país podían regresar a él, entendiéndose que al hacerlo optaban por someterse al designio del gobierno relativo al punto del territorio al cual debían ser trasladadas.

Ante el Juez de 1ª Instancia en lo Civil de la Capital se presentó el apoderado de la Municipalidad iniciando un procedimiento de apremio contra la sociedad propietaria de la *Plaza Euskara* para el pago de la patente anual con multa. La sentencia del Juzgado es favorable al ejecutante y fué confirmada por la Cámara de Apelaciones teniendo en cuenta que eran improcedentes las excepciones opuestas de pago y de inhabilidad de título, proveniente ésta de ser ilegítima la sanción de la Ordenanza en virtud de la cual se cobraba la patente, por haberse sancionado sin *quorum*.

A este respecto, el Procurador General manifestó, — cuando la contienda fué llevada en apelación ante la Corte, — que tratándose de un juicio ejecutivo no cabía la discusión y decisión del valor legal de una Ordenanza Municipal; que sólo cuando se iniciase el juicio ordinario podía la Corte entrar a conocer de la cuestión en virtud del recurso concedido por el artículo 14 de la Ley de Jurisdicción y Competencia. Era así, entonces, que, por ahora, debía declararse improcedente el recurso concedido de la sentencia de trance y remate.

A juicio de la Corte la única cuestión que debía resolver era el alcance del artículo 65 de la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Capital; y esta cuestión «no se halla
«comprendida en la disposición del artículo 90 de la ley
«de 12 de noviembre de 1886, que atribuye a esta Suprema
«Corte jurisdicción de revisión de los fallos de última ins-
«tancia de los Tribunales de la Capital en los mismos ca-
«sos en que ella puede ejercitarse respecto a las resolu-
«ciones definitivas de los Tribunales Superiores de
«Provincia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 14 de
«la Ley de Jurisdicción y Competencia de los Tribunales
«Federales, *pues que siendo la ley de Municipalidad de
«carácter puramente local y estando organizado el Go-
«bierno de la Capital en lo judicial como un gobierno
«propio e independiente y de jurisdicción amplia y com-
«pleta en todo lo que es de régimen local, su interpre-
«tación y aplicación como todas las demás leyes que
«conciernen sólo a la administración local debe enten-
«derse deferida solamente a los Tribunales de este orden
«en tanto cuanto no afecten cuestiones especialmente
«regidas por la Constitución, tratados, leyes nacionales
«u otros de carácter igualmente federal.»*

En las postrimerías de la presidencia del doctor Pellegrini fué nombrado Juez Federal de la capital el doctor Juan V. Lalanne. Ante el Senado, primero, en ocasión de prestarse el acuerdo, y ante la Corte, después, se presentó el ciudadano Juan Coronado objetando aquel nombramiento por cuanto,—y tal era el fundamento concreto de la demanda judicial que instauraba,—no reunía el candidato los requisitos exigidos por la ley de 16 de octubre de 1862, según la cual, entre otros, se exigía el de tener tres años de servicio profesional. « El doctor Lalanne — se decía en « la demanda — no ha ejercido jamás la profesión de abogado, no conoce las prácticas del foro porque nunca se « ha ocupado de ellas y en consecuencia no se encuentra « dentro de las condiciones exigidas para desempeñar el « cargo de Juez, de lo que resulta que en vez de ser un « elemento útil para la administración será, por el contrario, una rémora ».

En otro párrafo se agrega — « La teoría del derecho no « basta por si sola para administrar la justicia y es esta « la razón que la ley ha tenido para exigir que los Jueces « de Sección no sólo deben ser abogados, argentinos, sino « tener por lo menos tres años de ejercicio en la profesión, « que es donde se adquiere el conocimiento práctico del « mecanismo de las leyes, sin cuyo conocimiento no hay suficiencia para dirigir y sustanciar correctamente ninguna « clase de juicios. *Creyendo como creo que dentro de unos « días más quedará cerrada la era oprobiosa de los favoritismos de partido y de las complacencias con el « oficialismo etc. ».*

Era esto, sin duda, lo más interesante y digno de atención que Coronado decía en su escrito; pues, como se verá más adelante, desde el punto de vista estrictamente jurídico no tenía ninguna razón, esto es, no tenía la Corte facultad para intervenir en el nombramiento dentro del sistema

actual de las designaciones judiciales. Debiera tenerla, sin embargo; pero en la forma amplia que algunos preconizan de que sea aquel tribunal, sin acuerdo del Senado, el que nombre los jueces de la jurisdicción nacional. No habrá así el peligro de los nombramientos de favor que han sido frecuentes, entre nosotros, al finalizar cada presidencia, mediante los cuales se aseguraba una pingüe ubicación a los más adictos del círculo oficial expirante. No siempre, por más alto que sea el concepto que tenga un Presidente de la administración de justicia, puede sustraerse a las presiones, de todo género, que lo llevan a hacer un mal nombramiento de Juez, presiones, en todos los casos, relacionadas con la política, la cual puede determinar también, otras veces, la negativa del acuerdo por el Senado, con desmedro evidente para la reputación del candidato, ajeno, casi siempre, a las rencillas determinantes de la hostilidad del Congreso al Ejecutivo.

Demás está decir que la Corte no necesitó sino cuatro palabras para rechazar la demanda, toda vez que no se trataba de ninguno de los casos de jurisdicción originaria enumerados en los artículos 100 y 101 de la Constitución.

El General Victorica se retiró de la Corte a mediados de 1892 nombrándose para reemplazarlo al doctor Octavio Bunge. Nacido éste en Buenos Aires, en el año 1844, hizo en la Universidad de dicha ciudad sus estudios, graduándose de abogado en 1869; de inmediato inició su carrera judicial como relator del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia; Fiscal después y Juez de primera instancia, en 1875 ingresó a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal. Federalizado el territorio de la capital ocupó una vocalía en el

Tribunal Nacional del mismo fuero. En todos estos cargos dió muestras el doctor Bunge de una gran claridad de juicio, y de indeclinable rectitud.

Al mismo tiempo fué nombrado para integrar la Corte el doctor Juan B. Torrent, en reemplazo del doctor de la Torre. Aunque nacido en Corrientes, hizo sus primeros estudios en Buenos Aires, cuya Facultad de Derecho le otorgó después el título de abogado; regresó entonces a su provincia participando en la política en forma tan descollante y eficaz, que llegó a ocupar la jefatura del Partido Liberal; estuvo en el Congreso Nacional como Senador y Diputado y fué candidato a la Vice-Presidencia de la República.

Era el doctor Torrent hombre de una gran ilustración y tenía a la vez un espíritu sereno que permitiéronle en el desempeño judicial dirimir con acierto las cuestiones en que le tocó intervenir.

En octubre de 1883 ocurrió una evasión de presos en la Penitenciaría de Mendoza; el oficial del ejército José Fernández Castro, que mandaba la guardia, ordenó disparar y él mismo disparó su arma contra los fugitivos, hiriendo de muerte a dos de los mismos, por lo que se le procesó ante el Juzgado del Crimen por homicidio y lesiones corporales, poniéndose de manifiesto en el sumario excesos de crueldad imputables al reo.

Se hizo la cuestión de competencia argumentándose que el carácter militar del acusado impedía su juzgamiento por otra autoridad que no fuese un Tribunal Militar, por cuanto

además había procedido aquél en desempeño de una comisión del servicio militar. En la resolución del Juez del Crimen y en el dictamen fiscal se desarrolla la teoría de que habiendo desaparecido los fueros eclesiástico y militar, en los casos de delito común un oficial del ejército debía ser procesado por la Justicia Civil sin tener para nada en cuenta aquella calidad, ni el sitio del delito. La resolución favorable a la competencia del Juez del Crimen fué confirmada por la Cámara de Apelaciones teniendo en cuenta, según se asienta en uno de sus considerandos, que la jurisdicción militar, como de excepción, sólo puede conocer de los delitos propiamente militares y de los comunes sólo cuando han sido cometidos por un militar desempeñando una comisión del servicio *dentro del cuartel, en marcha, y en presencia de la tropa*, esto es, que afecten directamente a la disciplina, orden y organización del Ejército.

En el concepto del Procurador General era indispensable estudiar la misión que desempeñaba en su servicio el Mayor Fernández Castro. El batallón 12 de línea, estaba de guardia en Mendoza; Fernández Castro, sub-teniente entonces, mandaba la guardia, dada con soldados de ese batallón, en la penitenciaría local. «Estando al frente de esa «guardia, como jefe inmediato y responsable de la custodia y seguridad del establecimiento, estalla, súbitamente, «un movimiento de evasión de presos. Los centinelas dan «la voz de alarma, los tiros se suceden; la persecución de «los evadidos se activa; nuevos tiros los rinden, apaciguando el tumulto; dos muertos y un herido, dan testimonio de actos de violencia, tal vez de ensañamiento culpable, atribuidos al Jefe de la guardia. Si existe violencia, «abuso de fuerza, ensañamiento criminal ¿a qué autoridad «corresponde su juzgamiento y castigo? No trepido en «afirmar que al fuero militar; porque a este fuero están «sujetos los actos de los militares en servicio.»

La Corte resolvió sin mayor extensión la contienda teniendo en cuenta « que según el artículo 7º de la Ley de « Jurisdicción y Competencia de los Tribunales Federales « y 26 del Código de Procedimientos en lo Criminal, la jurisdicción militar es excluyente de toda otra, *cuando se trata de delitos de fuero militar.* » Pero es que, según la sentencia del Juez del Crimen y de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, no se trataba de un delito de fuero militar; era eso precisamente lo que la Corte debía analizar y resolver, máxime cuando en la forma en que lo hizo, declarando incompetente a la Justicia Civil, estaba en contradicción con sus resoluciones anteriores, una de las cuales es tan categórica que sólo dice: « Aunque el delincente sea militar, no habiéndose cometido el delito dentro « del cuartel, ni en campamento, cae bajo la jurisdicción « ordinaria. » Esta es la buena teoría, la más acorde con los principios sustentados en épocas diversas por tratadistas como Gutiérrez, Juan Carlos Gómez, Quintana, etc. Y esa era la jurisprudencia de la Corte y lo es actualmente.

Otra cuestión relacionada con el fuero personal es la que da interés al siguiente caso, relativo al enjuiciamiento del Cura de la Punilla (Córdoba) por violación de la Ley de Matrimonio Civil, aparte del interés que surge también de la inconstitucionalidad planteada del artículo 110 de la misma.

Se imputaba al párroco nombrado el hecho de celebrar matrimonios religiosos con prescindencia de la ley civil, comprobándose en el sumario la verdad de la imputación por lo que el fiscal pidió, de acuerdo con el artículo 147 del Código Penal, que el reo fuese condenado a un año de

arresto. La defensa reconocía los hechos imputados pero opuso como excepciones la falta de jurisdicción y la falta de personería y acción en el acusador; la primera, fundada en resoluciones del Concilio de Trento y del *Syllabus*, hacía mérito del carácter sacerdotal del acusado y fué fácilmente rechazada por el Juez dado que no hay ley alguna en la República que consagre el principio del fuero para los clérigos cuando cometen una infracción de las leyes nacionales. Sobre esta cuestión debe recordarse el fallo recaído en el caso del Vicario Cau de Saita, en el cual la Corte la trató extensamente. No está de por medio en estos casos un acto puramente espiritual inherente a la responsabilidad dogmática del sacerdote, sino la contravención de una ley; y, como hace notar Pacheco, poniéndose en el caso de que un religioso violara un domicilio con el grande y misericordioso objeto de confesar un moribundo, sería responsable del delito de violación de domicilio por haber infringido en esta parte la ley, y no por haber confesado al moribundo. Del mismo modo, el sacerdote que celebra un matrimonio, con prescindencia de la ley civil, cumple una obligación de su ministerio, pero como habitante de la República es pasible de pena por haber infringido una de sus leyes.

A lo que parece, el caso del cura Correa de la Punilla tuvo excepcional gravedad, a juzgar por este párrafo de la sentencia, después de dejar establecido que aquél estaba convicto y confeso del delito. «Estos hechos — dice — y «estas declaraciones ponen de manifiesto que no es el «celo mesurado y juicioso, del sacerdote honrado, por el «ejercicio de su Ministerio, el que lo lleva a violar la ley. «pues que hace venir personas hasta su prisión, para ca- «sarlas, sin necesidad que justifique ese proceder, por el «sólo placer de violar la ley, con una indole perversa y «una corrupción tal de la dignidad personal que son la

« única explicación de la reiteración de las infracciones, « de las amenazas a sus feligreses, de las declaraciones « irrespetuosas para el Tribunal, y de la falta de obediencia a las instrucciones del obispo. » El cura Correa fué condenado al máximo de la pena y la sentencia fué confirmada en segunda instancia.

Llevado el caso a la Corte se planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Matrimonio Civil por ser contraria a las Leyes de la Iglesia, que es un poder constitucional, de existencia necesaria, como lo son los otros poderes del Estado, correspondiéndole legislar exclusivamente sobre el matrimonio; y al declarar la ley fundamental que la Nación sostiene el culto Católico, Apostólico, Romano, obliga a los poderes públicos a respetar sus dogmas y sus leyes, en lo referente a la celebración del matrimonio, que es puramente de institución canónica.

La Corte encontró inadmisibile, como es natural, la teoría de que la Iglesia constituye un poder político, con potestad de dictar leyes de carácter civil, bastando para ello tener en cuenta, por una parte, que la Constitución, al enumerar los tres altos poderes del Estado, no designa a la Iglesia y por otra parte, que al conferir al Congreso la facultad de dictar los Códigos, no consigna ninguna excepción en favor de las leyes eclesiásticas. Por otra parte, el artículo cuya inconstitucionalidad se demanda se reduce a exigir a los ministros de las diversas religiones o sectas que no celebren ningún matrimonio entre personas de su respectiva comunión, sin que les sea previamente presentada el acta del contrato de matrimonio celebrado ante el oficial público; de modo que en nada puede afectar ni vulnerar el dogma católico, ni los principios de cualquier otra religión, pues en la misma ley se permite expresamente el subsiguiente matrimonio religioso.

Esta sentencia de la Corte firmada por los doctores Paz,

Bunge y Torrent, al declarar improcedente el recurso dejaba firme el fallo condenatorio de los Tribunales de Córdoba.

Los doctores Varela y Bazán declararon procedente el recurso y entrando al fondo de la cuestión resolvieron en disidencia que el artículo de la Ley de Matrimonio Civil, cuya infracción fundamentaba la condena del cura Correa, era contrario a la Constitución Nacional.

Para declarar procedente el recurso tuvieron en cuenta que « habiéndose dado por nuestras instituciones al Poder « Judicial la misión de aplicar la ley, él debe, ante todo examinar su constitucionalidad, cuando ésta ha sido impugnada nada durante el proceso como sucede en el caso ocurrente; « teniendo, por tanto, esta Suprema Corte el deber de averiguar si la disposición especial que le ha sido aplicada al « cura Correa es o no contraria a los derechos y garantías « que, como a ciudadano y a sacerdote católico le ha acordado la Constitución Nacional ». Tal debía ser siempre el criterio con que la Corte afrontara las cuestiones sobre constitucionalidad que se le presentan con tanta frecuencia y que desecha siempre, sin penetrarlas, por razones simplemente de procedimiento.

Entrando ya al examen del punto fundamental de la contienda, los doctores Varela y Bazán, plantearon esta cuestión: ¿ Pueden los Ministros de la Iglesia Católica administrar libremente el sacramento del matrimonio con arreglo a las leyes canónicas, sin incurrir en las penas de la ley civil, cuando lo hacen sin que se les presente el certificado de haberse efectuado previamente el matrimonio civil? O en otros términos, ¿ ampara la Constitución ese derecho? No es posible sostener, con arreglo a la Constitución, la prohibición de las prácticas del culto católico bajo una sanción penal; basta enunciar el artículo 2º de la Constitución que hace obligatorio el sostenimiento del culto católico por el Gobierno Federal, para poder afirmar que ante la latitud

de esa declaración « no puede pretenderse que el ejercicio
« del culto católico, puede ser reglamentado, limitado o pro-
« hibido en sus prácticas dogmáticas o sacramentales, por
« disposición de la ley civil, porque la Iglesia Católica, en
« su culto y en sus doctrinas, tiene sus leyes y sus ritos
« propios independientes de toda potestad política ». Después
de analizar diversos textos constitucionales relacionados con
el interés religioso y de recordar algunas palabras de los
constituyentes al respecto, se concluye afirmando que « es
« forzoso dar por establecido que cualquier disposición legis-
« lativa que importe prohibir, estorbar o castigar una prác-
« tica del culto católico es contraria a las recordadas pres-
« cripciones de la Constitución. El Gobierno Federal no
« sostendría el culto católico si penase la práctica de sus
« sacramentos que son la base de su doctrina; ni se explica-
« ria esta preferencia dada por la Constitución a la Iglesia
« Católica, sobre todos los demás cultos, si pudiese la ley
« venir a prohibir y penar algunos de esos actos religiosos
« que el catolicismo coloca entre las prácticas sacramentales
« de su credo. La ley que tal pena establece es, entonces,
« contraria a la Constitución. . . . »

Difícilmente podría encontrarse una interpretación jurídica, como esta de los doctores Bazán y Varela, más deleznable y tendenciosa. Cuando existe la certidumbre de que sólo necesidades imperiosas relacionadas con el régimen patrimonial y con el porvenir material de los hijos, determinaron la creación del Registro Civil, no se concibe que pueda interpretarse ello como un designio irreligioso; y precisamente fué el convencimiento que se tenía de que la inscripción civil sería resistida, que se estableció la obligación de hacerlo previamente al acto religioso, pero nunca con la idea de suprimir éste, obstaculizarlo o limitarlo, únicos casos en que habría resultado la ley contraria a la letra y al espíritu de la Constitución.

La agitación política en que por esta época vivía el país iba a concretarse, otra vez, en un caso judicial, planteado a resolución de la Corte Suprema. La Provincia de Santa Fe fué intervenida, por ley del Congreso, a mediados de 1893. El *gobierno revolucionario*, por medio del doctor Joaquín M. Cullen, se presentó ante la Corte demandando en la persona del interventor, doctor Baldomero Llerena, la inconstitucionalidad de la ley de intervención. La competencia se hacía nacer del hecho de que *una provincia era parte* en la contienda (artículos 100 y 101 de la Constitución); de modo que fué la primera tarea del Procurador General examinar la legitimidad de los poderes de ese gobierno provisorio o junta revolucionaria para litigar en nombre de la Provincia. « Para ello — dice el doctor Kier — no es indispensable « estudiar en su fondo si la antigua fórmula internacional « *última ratio regis* es de aplicación al supremo esfuerzo « de los pueblos que viven dentro del régimen de la Constitución en la Nación Argentina. Porque aún admitiendo « ese supremo esfuerzo, como un hecho conducente a la consecución de aspiraciones y tendencias restauradoras del « libre sufragio y del más amplio imperio de las instituciones provinciales, siempre resulta un hecho, un hecho de « fuerza, ineficaz para demostrar el triunfo de una colectividad de voluntades, capaz de constituir una mayoría de « votos afirmativos de sus propósitos. « *Una revolución puede proclamar los más grandes ideales; puede llegar a « realizarlos también. Pero, mientras preceda sólo de hecho, aún con el esfuerzo de sus armas, aún con el prestigio de sus victorias, dentro de la Constitución no es « más que un hecho sin consecuencias inmediatas en cuanto al régimen constitutivo del gobierno republicano. . . .* « Una revolución no puede, entonces, representar esa mayoría. El número de sus afiliados, cualquiera que fuere, es « inferior al de las fuerzas inactivas respecto de la evolu-

«ción armada, pero activas por el derecho de voz y voto, «en los comicios, que únicamente pueden crear la representación de la persona jurídica, cuyo conjunto de derechos «constituye la Provincia o Estado». Estas sólidas razones llevaban a la certidumbre de que el gobierno revolucionario no era el representante legítimo de la provincia. Y como quiera que se hacía mérito en la demanda de un fallo de la Corte en que se reconocía como legítimo el gobierno de Buenos Aires surgido de la batalla de Pavón, *con el derecho de la revolución triunfante y sentida por los pueblos y en virtud de los grandes deberes que la victoria le imponía*, conviene recordar, para destruir el argumento, que no se discutió entonces ante la Corte si la revolución representaba a la Provincia sino simplemente una cuestión *entre partes*, de carácter esencialmente privado, sobre cobro ejecutivo de pesos, procedentes de una letra de aduana que había sido pagada por disposición administrativa del gobernador de Buenos Aires y en cuyo pago el ejecutado opuso la excepción de inhabilidad de título; siendo a la vez de tenerse en cuenta, como en el fallo se hace notar, que el General Mitre era jefe de un ejército en la guerra que el Estado de Buenos Aires, *no incorporado todavía a la Nación*, hizo a la Confederación Argentina.

La demanda deducida por el doctor Cullen versaba sobre inconstitucionalidad de la ley del Congreso y del decreto del P. E. que investió con el cargo de interventor al doctor Llerena, a quien debía la Corte compeler «a restablecer la «situación y al pago de los daños y perjuicios causados por «ejercer el cargo». La inconstitucionalidad de la ley se fundaba en el hecho de haber sido sancionada por el proyecto respectivo, que tuvo su origen en la Cámara de Diputados, después de rechazado en general anteriormente otro proyecto de intervención en Santa Fe que había iniciado y sancionado el Senado. Como se ve, existía la posibilidad de que

un precepto constitucional hubiese sido infringido, viciándose así la ley en virtud de la cual la Provincia de Santa Fe estaba intervenida; en estas condiciones sólo la Corte podía decir si la Constitución se había cumplido o no en el trámite y sanción de la ley, esto es, si era o no constitucional. En cuanto al caso judicial, a la contienda *entre partes*, indispensable para que el Tribunal pudiese conocer, existía trabada entre los doctores Mariano Candiotti y Baldomero Llerena, gobernador provisorio el primero e interventor el segundo; y la única razón en virtud de la cual la Corte podía dejar de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la ley mencionada era la referente a la personería del actor, es decir en caso de resolverse que el gobernador provisorio no era un representante legítimo de la Provincia.

La Corte, empero, declaró que carecía de jurisdicción para dirimir este caso típico de interpretación constitucional, *por razón de la materia sobre que versa*. «Es innecesario — dice — un pronunciamiento sobre el título invocado por « el doctor Mariano Candiotti, como Gobernador Provisorio « y el alcance de sus facultades para requerir judicialmente la protección a su investidura política ». Repito, era esto lo único, lo que imprescindiblemente debía resolver la Corte como cuestión previa, y si encontraba que la revolución triunfante había dado poderes a aquél, y que tenía, por lo tanto, personería para litigar, quedábale expedito el camino para entrar a estudiar si la ley de intervención se ajustaba, o no, a los preceptos constitucionales. Es esta la tarea primordial de la Corte, la más noble y trascendental. ¡Pero estaba la política de por medio! «La intervención nacional en las provincias — se dice en el fallo « — en todos los casos en que la Constitución la permite « o prescribe, es, como queda dicho, un acto político por su « naturaleza, cuya verificación corresponde, exclusivamente, « a los poderes políticos de la Nación. » ¿En qué parte de

la Constitución se establece que el Poder Judicial no ha de intervenir en las transgresiones de la misma, cuando esas transgresiones se cometen en nombre de la política? El famoso argumento del caso americano, *Leither v. Bruther*, no alcanza a explicar cómo la Corte argentina pudo dejar de pronunciarse en una contienda entre partes en la que se le decía: *Una ley ha sido sancionada por el Congreso violándose las reglas establecidas por la Constitución para su trámite y sanción*; porque ni siquiera pudo decir la Corte, que en la demanda del doctor Cullen se discutiera las facultades del Congreso para intervenir en Santa Fe.

El doctor Varela fundó una extensa disidencia, que es un trabajo de altísimo mérito jurídico, donde se sostiene la buena doctrina de que la Corte era competente para entender en la demanda. «Entre otras atribuciones—dice—acordadas a la jurisdicción especial y limitada de «los tribunales federales, la Constitución les ha dado *el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación*. Si la Constitución ha empleado los «términos, *todas las causas*, no puede, racionalmente, hacerse exclusión, de *algunas causas*, para declarar sobre «ellas la incompetencia de los tribunales federales... Allí «donde la Constitución no ha hecho distinciones, *no puede de nadie hacerlas*, y esta jurisdicción, que la Constitución «acuerda a los tribunales federales, nace de la materia en «litigio *y no de las condiciones de las partes que estén en el pleito*. Pero, se objeta, que, no todas las causas «que versan sobre puntos regidos por la Constitución, pueden producir casos judiciales. La objeción es perfectamente pertinente y exacta. Las funciones políticas, privativas, de los departamentos políticos del Estado, no son «susceptibles de un juicio ante los tribunales, *cuando el*

«ejercicio de esas funciones, no han puesto la ley o el acto ejecutado en conflicto con la Constitución. Pero cuando una ley o un acto del Poder Ejecutivo estén en conflicto con las disposiciones, derechos y garantías que la Constitución consagra, siempre surgirá un caso judicial que podrá ser llevado ante los tribunales por la parte agraviada... Se ha interpretado mal la jurisprudencia de la Suprema Corte Americana, cuando se afirma que ha declarado, que las «leyes políticas» escapan al juicio de los tribunales federales. No se ha dicho esto en fallo alguno, ni ha podido decirse, porque no hay ley que pueda dejar de ser aplicada o juzgada por los jueces de la Nación, si ocurre un caso judicial que lo traiga ante el tribunal».

En efecto, lo que se ha dicho en Estados Unidos es que los Tribunales de Justicia no tienen jurisdicción para resolver *cuestiones políticas*, es decir aquellas que no importan controversias de derechos, sino únicamente intereses extralegales relacionados con el trajín de los partidos. Fácil es ver, recorriendo los fallos de la Corte americana, que las únicas cuestiones políticas que ésta ha declarado ajenas a su juicio son aquellas en que los poderes políticos del Estado han procedido como representantes absolutos de la soberanía nacional; es decir, aquellos en que, como lo concreta el doctor Varela «la ley internacional, que es lo que en el *jus gentium* se llama «ley política» puede estar afectada a aquellas que, por analogía, se aplican a los Estados independientes reunidos en confederación.» En efecto, todos los casos en que los Tribunales Federales se han excusado de conocer, fundándose en que se trataba sólo de una cuestión política, la materia en discusión ha sido la existencia o inexistencia de un Gobierno extranjero o de Estado, las condiciones de las tribus indias dentro del territorio de la Unión, las cuestio-

nes de neutralidad y beligerancia. Porque, como se ve, es distinto el alcance que se da en los Estados Unidos a las palabras «cuestión política». Entre nosotros implican siempre antagonismo de partido, predominio personal, probabilidad de una candidatura, derrocamiento de un gobierno de provincia; mientras que en el Norte, cuando se discute un caso como el de la validez de una concesión de tierra hecha por el Rey de España anexa al tratado por el cual fué cedida la Florida a los Estados Unidos, se puede decir, como lo dijo realmente en la ocasión el Juez Taney: «Es-
«tas son cuestiones políticas y no judiciales; pertenecen
«exclusivamente al departamento político del Gobierno.»

Muy poco tiempo después el debate de la ardua cuestión se reabre en la Corte, con motivo de una demanda igual a la anterior deducida por el Gobernador provisorio de San Luis contra el interventor nacional doctor Daniel Dónovan por inconstitucionalidad de la ley y nulidad de los actos de la intervención.

El 14 de septiembre de 1893 estalló en Tucumán una revolución armada contra el Gobernador doctor Próspero García. Sofocada, no sin algún derramamiento de sangre, fueron reducidos a prisión los miembros de la junta revolucionaria señores Augusto Alurralde, Eugenio A. Méndez, Martín S. Berho, Ezequiel Padilla y otros. Para el logro de sus designios habían éstos conseguido la cooperación del batallón 11 de Infantería, por lo que debió analizarse el verdadero carácter y gravedad del delito de *seducción de*

tropa, cometido también en Buenos Aires, por los mismos días, por don Antonio Lamarque, don Olayo Torino, don David Grierson y otros, a bordo de la torpedera *Murature*.

En el caso de Tucumán el Juez Federal consideraba « que habiendo tenido efecto la rebelión anunciada, el delito de seducción del batallón 11 de Infantería queda así previsto por el artículo 27 de la ley número 49 que impone la pena de dos a cuatro años de trabajos forzados. » Sostenían los procesados que la incorporación del batallón había sido espontánea; pero resultaba del sumario que habían existido múltiples conferencias en las que se estimuló la aversión de los oficiales por su jefe, el que fué encarcelado al estallar el movimiento; resultaba, además, que todo respondía a un plan general de alteración del orden en todo el país y no, como aquellos pretendían, que se propusieran únicamente intimidar, mediante el auxilio del Batallón, al Gobernador García y apresurar su renuncia. De cualquier modo que fuera, la seducción de la tropa no era sino el vehículo de otro delito más concreto, el medio empleado para lograr con mayor facilidad el designio subversivo de apoderarse del Gobierno de la Provincia; eran la sedición y la rebelión como fin, la seducción del Batallón como medio.

Se trataba de saber si los presos eran excarcelables bajo fianza, y la Corte encontró que « si llegase a tener efecto la rebelión o la sedición, los seductores se reputarán promovedores de la rebelión o sedición » (artículo 28 de la ley 49). De modo que como la pena para estos delitos era la de extrañamiento la excarcelación era procedente. Esto significa aceptar que el destierro no es una pena corporal, de pérdida de la libertad; y si bien era lógico que así lo resolvieran los primeros miembros de la Corte a fuer de autores de las leyes de 1863, treinta años después los jueces de 1893 no tuvieron otro argumento que decir

« que así lo entendieron los Ministros de esta Suprema
« Corte que dictaron los primeros fallos en que se estable-
« ció esa jurisprudencia (la de que el destierro no es pena
« corporal) y que al aplicar la ley de 1863 interpretaban
« de una manera genuina, ya que no auténtica (?), la na-
« turaleza de la pena de extrañamiento, interpretación que
« tenía tanta mayor importancia cuanto que la daban los
« autores mismos de la ley, que el Congreso sancionó en
« la forma en que ellos la proyectaron.» Los tratadistas,
sin embargo, consideran, con buenos fundamentos, que el
destierro es una pena corporal. Sería pueril abundar aquí
sobre las evidentes razones de una interpretación semejante.
Basta leer el voto en disidencia del Ministro doctor Bunge
por el que se confirmaba la sentencia del Juez Federal de
Tucumán denegatoria de la excarcelación.

En el caso de los seductores de tropa de Buenos Aires,
el Juez doctor Lalanne acordó aquella y la Corte, al con-
firmar la resolución, desarrolló con más amplitud los argu-
mentos del primer fallo. Son tan inseguras y poco convin-
centes las razones de ambas sentencias, que bien puede
afirmarse que lo que las informaba era el deseo de pro-
pender a la normalización del orden, no extremando el rigor
contra los que habíalo perturbado en un momento de
ofuscado patriotismo.

Data de los mismos días y trae su origen del mismo plan
general de derrocar las autoridades constituidas en toda
la República, el proceso al Coronel Mariano Espina, una
de los más emocionantes episodios de nuestros anales fo-
renses, que tuvo conmovido el espíritu público durante algu-
nos días de septiembre de 1893.

A bordo del *Almirante Brown*, surto en la Rada Exterior.

fechaba el 26 de septiembre el Almirante Daniel de Solier una comunicación al Ministro de Guerra y Marina en la que hacía saber que «siendo las 6 y 30 a. m. fueron avisadas al Norte las torpederas sublevadas, que se dirigían a toda fuerza de máquina sobre la escuadra surta en esta rada, entre cuyos buques se encontraba la barca *Ushuaia*, depósito de los presos políticos, llevando aquéllas al tope una bandera roja y más abajo otra blanca. Inmediatamente ordené al crucero *9 de Julio*, les hiciera varios disparos altos, como señal, ordenándoles detuvieran su marcha. Como las torpederas no hicieran caso de la señal y continuaran su marcha en actitud de ataque y encontrándose ya a 800 metros de distancia, mandé romper el fuego, lo que contuvo inmediatamente a las torpederas, dando fondo la *Murature* y fugando la número 7, sin haber contestado el fuego ninguna de ellas. Conducido a mi presencia el comandante de la torpedera, Alférez de Navío Carlos Montaña, declaró que ayer se presentó en el establecimiento de la División de Torpederos del Tigre el Coronel Mariano Espina y le aseguró que la Escuadra se encontraba toda sublevada, y le invitó a incorporarse a ella, con el material y personal de la división; que habiendo aceptado él y sus compañeros, levantaron vapor a las 4.30 p. m. e hicieron rumbo a ésta.»

A bordo de la *Murature* estaba el Coronel Espina, el Teniente Augusto Sarmiento y muchos particulares, quienes fueron incomunicados. Tres muertos habían resultado de la refriega.

El mismo día el Presidente Sáenz Peña firmó un decreto mandando juzgar por un Consejo de Guerra a Espina «toma-do *infraganti* delito de rebelión contra los poderes públicos de la Nación». En el mismo decreto se designaban las personas que compondrían el Tribunal; presidíalo el Teniente General Emilio Mitre. Al día siguiente se hizo comparecer al

reo quien manifestó que estando en el Tigre, en casa del doctor Pizarro Lastra, llegó un teniente de Marina y le comunicó que esa noche se sublevaría la Escuadra, lo que no dudó, pues seguía de cerca los acontecimientos; pero queriendo evitar, — pues el Ejército no se había levantado todavía, — una catástrofe nacional, buscó un vaporcito y se trasladó a la División de Torpederos manifestando al oficial Ibarra que los acompañaría, pero no para atacar la Escuadra, sino para evitarlo y que sólo una equivocación de señales dadas por el teniente Carlos Montaña originó el fuego de la escuadra; que él no hizo fuego contra la Nación; que no estaba en condiciones de producir la sublevación de aquella, pues no conocía a los jefes ni a los oficiales.

El mismo día, por unanimidad de votos, Espina fué condenado a ser pasado por las armas. Al día siguiente, previa vista del auditor de Guerra, el Presidente puso el «cúmplase» a la sentencia.

La pena de muerte fué conmutada por la de presidio durante veinte años, con fecha 29; pero, mientras tanto, desde dos días antes, se estaba sustanciando una contienda de competencia iniciada por el defensor doctor Aristóbulo del Valle, ante el Juzgado Federal, a raíz de la requisitoria en que el Fiscal solicitó la pena de muerte. «En este momento, dos y « media p. m. — decía el doctor del Valle — el Consejo se encuentra reunido para pronunciar sentencia y dados los procedimientos que se han seguido hasta este momento, tengo « que admitir hasta la posibilidad de una condenación cuya « severidad puede llegar a la crueldad. Básteme decir que « todo el juicio se ha sustanciado en cuatro horas y que no « ha sido llamado a declarar testigo alguno». Se invocaba en el escrito disposiciones de la ley de 14 de septiembre de 1863 para sostener que debía ser la Justicia Federal la que juzgase a Espina, por el delito de sedición, que era un delito político. « No puedo disponer sino de minutos, y por eso ter-

«mino aquí este escrito ». No había, en efecto, tiempo que perder; se procedía a tambor batiente.

El Fiscal doctor Bustillo, el día 28, dictaminó en el sentido de que el Juzgado Federal era competente. «Para excluir del «conocimiento de los Tribunales Federales — decía — los «actos de sedición y rebelión cometidos por militares sería «necesario introducir un distingo donde la ley no distingue, «violando así el Juez un principio fundamental de interpretación». Fué también esta la doctrina sostenida por el Procurador General en 1874 cuando el proceso a los autores de la revolución.

El Juez Federal doctor Lalanne se declaró competente y ofició al P. E. a fin de que dispusiera que el Tribunal Militar se inhibiera de seguir conociendo en la causa.

El tono de la contestación del Ministro revela el grado de ofuscación que reinaba en todas las esferas. «El señor Presidente de la República, a cuyo conocimiento elevé la nota «de V. E., fecha de hoy, acerca del juicio seguido contra el «coronel Mariano Espina, *desconoce en absoluto la jurisdicción que V. S. pretende atribuirse sobre ese asunto*», y desarrolla el Ministro una argumentación tendiente a probar la competencia militar. Además se hacía mérito de que el doctor del Valle había reconocido la jurisdicción del Consejo de Guerra al avenirse a hacer ante él la defensa del procesado. La cuestión, por otra parte, era tardía, pues la sentencia se había dictado ya.

Mientras tanto, la conmutación de pena no se había dictado todavía y todo hacía suponer que Espina sería pasado por las armas. El día 29 el doctor Lalanne refutaba las consideraciones del gobierno, e insistiendo en su competencia, mandó elevar los autos a la Suprema Corte, debiendo solicitar del Ejecutivo la remisión del expediente militar. La Corte habilitó horas y se dirigió al Ministro de Guerra para que suspendiera todo procedimiento. El Procurador General se expidió

inmediatamente sosteniendo que la contienda de competencia era prácticamente imposible, pues se trataba de una causa ya sentenciada, contra la cual no existía ningún recurso legal.

La Corte dictó su resolución el 7 de diciembre, más de dos meses después de iniciado el incidente, estableciendo que la contienda había sido planteada a tiempo por lo que resolvía oír de nuevo al Procurador General a fin de que se expidiera sobre la competencia, ya que anteriormente no lo había hecho por encontrar que se trataba de una causa fallada. El doctor Kier opinó que la competencia era del Tribunal Militar, pues, decía: «el Coronel Espina, introduciéndose a un buque « de guerra de la Marina Nacional, para producir un motín « militar contra la autoridad del comandante en jefe de todas « las fuerzas de mar y tierra de la Nación, ha cometido un « delito esencialmente militar ». El argumento impresiona, sin duda; pero es más aparente que real.

La mayoría de la Corte, compuesta por los doctores Bazán, Bunge y Torrent, declararon, sin embargo la incompetencia de la Justicia Federal. La buena doctrina es la que sustentaron en su disidencia el doctor Paz y el doctor José María Gutiérrez que habían integrado el tribunal.

Las principales razones de la mayoría eran: que el delito militar puede consumarse conjuntamente con otros delitos de fuero extraño, en cuyo caso ha de examinarse la naturaleza y conexión de las infracciones cometidas para poder determinar la jurisdicción. Admitiendo que el propósito de Espina fuese el puramente político de derrocar los poderes públicos, siempre sería preciso demostrar que para ello no se ha infringido ninguna ley militar a fin de dejar establecido que no existe delito de esta naturaleza; y Espina, al sublevar dos torpederas contra la autoridad del Presidente de la República, no sólo cometía una infracción de las leyes militares, sino que se trataba de una de las más graves, penadas con

mayor severidad. «La conexión con delitos de otro orden, « considerados bajo el aspecto de sus móviles íntimos o de « su propósito de carácter político, puede motivar un examen « y un juicio bajo ese doble carácter, pero no despojarlo de « su naturaleza militar, no llegar hasta la conclusión de que « las leyes militares no han sido violadas y que no lo han « sido gravemente». La jurisdicción de los consejos de guerra, dice además, en todos los delitos que importen una sublevación de tropas, no ha sido establecida por una razón puramente personal, derivada del carácter militar del delincuente, sino por razón de la ley que resulta infringida.

Véase ahora la sólida argumentación de la disidencia. El procesado, desde luego, se encontraba a bordo de la torpedera sin autoridad militar, sin personas que le estuviesen subordinadas como militares, ni en acto alguno de servicio en relación con el delito de rebelión que se le imputa. La Ley N° 49 de 1863 define el delito de rebelión como el alzamiento público en abierta hostilidad contra las autoridades constituidas, para derrocarlas. ¿Quién debe juzgar a los rebeldes? Pues los Jueces de Sección, según lo dispone expresamente el artículo 2° de la ley de jurisdicción y competencia y por ser la rebelión uno de los «crímenes que ofenden « la soberanía y seguridad de la Nación»; pero esta regla no es absoluta; es decir, no todos los delitos federales competen a los Jueces de Sección. Precisamente la excepción está establecida a favor de la jurisdicción militar, pero para los casos de tratarse de un *delito militar*. ¿Qué es delito militar, entonces? « Todo delito —dice la sentencia— que « pueda cometerse por otra persona que un militar, *no es « delito militar*. En el caso de rebelión, p. ej., que consiste « en alzamiento público, que no presupone la acción o el « concurso popular, es cuestión de un delito que puede cometerse por particulares y que, por lo tanto, no constituye « un delito militar.» (La desertión p. ej., la insubordina-

ción, el abandono de puesto por el centinela son delitos puramente militares.) «Bajo este concepto, un militar que «sin usar de su autoridad, ni de los medios militares de «que dispone, ni del mando o comisión que se le confió, «comete delito — el de rebelión, p. ej., —no incurre en «delito militar, desde que el hecho que realiza lo pudo «producir en completa igualdad de condiciones cualquier «otro ciudadano.»

Tal es la sustancia del fallo de la minoría de la Corte, que es de una extensión considerable, y que encierra todos los antecedentes posibles sobre la materia.

De modo que la sentencia del Consejo de Guerra quedó firme y con ella la conmutación de la pena resuelta por el Presidente de la República. Algún tiempo después una ley de amnistía borró todo el rastro de los acontecimientos que pueden también, relativamente, dentro de nuestros fastos, denominarse del «noventa y tres.»

Pero no han terminado todavía dentro de la cronología de la Historia de la Corte. En noviembre de 1893 fué detenido en el Rosario de Santa Fe el Senador Nacional doctor Leandro N. Alem, jefe e inspirador de la tendencia política a cuyo favor procedió el Coronel Espina. El caudillo radical estaba detenido bajo la imputación del delito de sedición y una primera solicitud para excarcelarse bajo fianza había sido denegada; pero a raíz de haber resuelto la Corte de una manera favorable el pedido análogo de los presos políticos de Tucumán, el doctor Alem requirió nuevamente del Juzgado su soltura.

Conviene consignar aquí los sucesos que habían tenido lugar en Santa Fe por septiembre de 1893. Se trataba de

derrocar el Gobierno Federal; particulares y soldados sobornados «hicieron fuego contra la bandera nacional», según lo expresa el Fiscal en su dictamen contrario a la excarcelación. El barco de guerra *Los Andes* llegó sublevado al puerto del Rosario y para ser sometido tuvo que librarse un combate con peligro inminente para la vida e intereses de los habitantes de la ciudad; se habían destruido vías férreas, sustraído armas de los arsenales, volado puentes y apropiándose los jefes insurrectos del servicio de Ferro-Carriles y de la Oficina de Correos y Telégrafos, previo asalto que se llevó contra ella a mano armada. De modo que aparte del designio político que puede haber en todo esto, aisladamente, el solo hecho del asalto a la Oficina de Correos tiene por la ley una pena corporal que hace imposible la excarcelación. No había, pues, ninguna similitud con el caso de Tucumán.

El Juez Federal hizo lugar a la excarcelación fundándose en la jurisprudencia de la Corte, según la cual todos los delitos conexos con los de sedición o rebelión, relativos a hechos indispensables o inevitables, tales como la destrucción de vías o la destrucción de correspondencia, no alteraban la penalidad fijada para la sedición, esto es, el extrañamiento, que no es una pena corporal. Ni tiene fundamento racional una interpretación que lleva a hacer desaparecer delitos tan graves como la destrucción de vías, la sustracción de armas y el asalto a una Oficina de Correos en aras de una calificación legal dirigida a dar carácter político a todo un conjunto de actividades perniciosas, ni es cierto que el extrañamiento no sea una pena corporal.

La orden de libertad impartida por el Juez no fué cumplida por la autoridad policial invocando órdenes superiores. Presentóse entonces, de nuevo, Alem ante aquél con un escrito tonante en el que, después de señalar los peligros que entrañaba para las instituciones la prepotencia del Eje-

cutivo Nacional sobre el Poder Judicial, terminaba invocando su carácter de Senador de la Nación «con un diploma puro y limpio como ninguno.» De modo que «una vez «que el Tribunal de Justicia—decía—ordena mi libertad, «no hay poder en la tierra argentina que pueda coartar «mi libertad, sin violar de la manera más irritante nuestro «estatuto político.» Había, sin embargo, en la tierra argentina un poder inmenso conferido por el estatuto político: el del Presidente de la República bajo el estado de sitio. Estaban suspendidas las garantías constitucionales y la Policía procedió correctamente notificando al preso que desde ese momento quedaba en libertad por los hechos cuya averiguación tenía a su cargo el Juzgado Federal; pero de inmediato, quedaba nuevamente detenido, por otros conceptos y en virtud de la facultad discrecional del Presidente para detener a cualquier ciudadano. ¿A cualquier ciudadano? ¿No influía en nada la investidura legislativa del doctor Alem? Absolutamente en nada, porque viniendo su inmunidad de una garantía expresa de la Constitución, al suspenderse todas ellas por ley del Congreso, desaparecía también el privilegio de no poder ser detenido sino en caso de *infraganti* delito.

Cuando la cuestión fué llevada a la Corte, por haber apelado el Fiscal contra el auto que concedía la excarcelación bajo fianza, el Procurador General pidió la revocatoria coincidiendo con aquél en la calificación legal aislada de cada uno de los hechos delictuosos imputados.

La Corte dijo: «Las excarcelaciones bajo fianza decreta-
«das por los jueces en un proceso dado, *refiriéndose sólo*
«*a la materia judicial*, no pueden afectar las facultades
«políticas que durante el estado de sitio corresponden al
«P. E.» Estudia a continuación el fallo las características
del estado de sitio; «es una arma de defensa extraordi-
«naria — dice — que la Constitución ha puesto en manos

« de los poderes políticos de la Nación, para que en épocas también extraordinarias, puedan defenderse de los peligros... » Lo interesante en el caso resultaba averiguar si la suspensión de garantías es tan extensa como para comprender también las emergentes de la inmunidad legislativa. La Corte resolvió que, de acuerdo con el artículo 61 que dice que ningún Senador puede ser arrestado si no se le sorprende *infraganti*, no puede suspenderse esta garantía cuando todas las garantías constitucionales se suspenden bajo el estado de sitio. La Corte creía que « la suspensión de garantías durante el estado de sitio, es sólo respecto a las personas y no a las autoridades creadas por la Constitución. » ¿De dónde sale este distingo? ¿Habrá de repetirse una vez más que donde la ley no distingue, *nadie* puede distinguir? Frente a la disposición *particular* de que ningún legislador puede ser arrestado, está la disposición *general* de que *todas* las garantías constitucionales se suspenden bajo el estado de sitio.

La Constitución americana es en este terreno más explícita que la nuestra. «Gozarán—dice—(los Diputados y Senadores) en todos los casos, excepto en los de traición, felonía, y *perturbación de la paz*, del privilegio de no ser arrestados.» De modo que es necesario que los legisladores no perturben la paz pública; y cabe preguntar, ¿no la perturbó, acaso, el Senador Alem?

Hace notar la Corte en su fallo, que es extenso y erudito, que mientras entre nosotros la inmunidad es permanente, en Estados Unidos está circunscrita a la duración del periodo de sesiones. Así es, en efecto, y ello demuestra que el interés general está únicamente en que los legisladores tengan una situación privilegiada sólo cuando son tales legisladores, es decir, en la época de sesiones y no cuando en el receso vuelven a su distrito electoral a participar en las luchas electorales, en una situación ven-

tajosa sobre sus adversarios de lucha. ¿Qué decir cuando se escuda un legislador en sus fueros para perturbar la paz pública y cometer otros delitos comunes?

En resumen: la excarcelación fué confirmada, al par que se resolvió que el Presidente de la República no pudo, so color de estar suspendidas las garantías constitucionales, ordenar la detención del Senador Alem.

En noviembre de 1893 la Provincia de Buenos Aires estaba intervenida. El Coronel Carlos Sarmiento había adquirido en remate público, del Banco Hipotecario Provincial un inmueble en Chacabuco. El interventor doctor Lucio V. López, «arrogándose—dice la demanda presentada ante la « Corte — la suma de los poderes correspondientes a un « Estado Federal, *en cuyo territorio sólo ejerce transitoria-mente facultades limitadísimas*, se hace Juez y parte. « declara la nulidad del contrato, manda pasar ciertos ante-« cedentes a la Justicia Criminal, dispone que el Fiscal de « Estado inicie acciones reivindicatorias, ordena el allanamiento de la propiedad particular etc. . . » (66). La demanda tenía por fin obtener judicialmente del interventor una declaración de si eran o no ciertos los hechos narrados a fin de que el actor pudiera gestionar oportunamente lo conveniente a su derecho.

Tanto el Procurador General como la Corte expresaron que la intervención federal en una provincia no puede tener otro objeto que restablecer los poderes, cuando no sea el caso de una invasión exterior; en el caso particular de

(66) Fué una desviación de carácter personal de este asunto administrativo, lo que originó el duelo en que perdió la vida el doctor López

Buenos Aires, la ley en virtud de la cual estaba intervenida, disponía que era al solo objeto de reorganizar sus poderes públicos. «El interventor nacional—dice el Tribunal—encargado de llevar a cabo esa organización, *no tiene ninguno de los caracteres que, dentro de las instituciones locales tienen y deben tener los funcionarios encargados de representar a las provincias*. Ese interventor es sólo un representante directo del Presidente de la República, que obra en una función nacional, en representación de él, a efecto de cumplir una ley del Congreso, sujetándose a las instrucciones que de aquél reciba.»

Este concepto tiene más interés y trascendencia ahora que lo que entonces tuvo. No lo formuló en 1893 la Corte sino para llegar a la conclusión de que no podía ser demandado el doctor López como consecuencia de sus actos al frente de la administración pública de la Provincia, pues no era el representante de ella en manera alguna. Era evidente que en estas condiciones no se trataba de un caso de jurisdicción originaria de la Corte, desde que no podía decirse con propiedad *que una provincia era parte*.

El doctor Bazán estuvo en disidencia, sosteniendo que el interventor era el representante de la Provincia a los efectos de justificar la jurisdicción originaria de la Corte.

Una demanda igual presentó el ingeniero Rodolfo Moreno, dictándose en ella la misma resolución, con idéntica disidencia del doctor Bazán. Sostenía éste que bastaba que la demanda se entienda con la persona que legalmente ejerza las funciones de gobernador y que ella nombre el apoderado que ha de representar a la Provincia en el juicio.

En la actualidad sería un desliz constitucional levisimo el del interventor de Buenos Aires al dictar providencias dirigidas a salvaguardar los bienes del Estado. Los interventores del último período institucional se sustituyen en absoluto a los gobernadores electivos, perciben del presu-

puesto provincial emolumentos como tales; los secretarios se dicen « ministros » y se entregan a la confección de vastos planes de obras públicas, de sistemas rentísticos y de reorganizaciones de todo orden.

Se recordará que el Ministro chileno Guerrero acudió a la Justicia Federal para demandar la rescisión de un contrato firmado por su antecesor en la legación, obteniendo entonces resolución favorable en las medidas precautorias solicitadas en defensa de los intereses que representaba. Al poco tiempo el Ministro fué demandado por don Tomás B. Fowler por cuestiones emergentes del cumplimiento de aquel contrato. El señor Guerrero invocó entonces su calidad diplomática para sustraerse a la jurisdicción de los Tribunales argentinos. Pero la Corte resolvió en contra de esta pretensión pues « es regla admitida en el derecho internacional « que la exención de los ministros extranjeros de la jurisdicción del país en el cual están acreditados, cede en el caso de demandas reconconvencionales o que participen del carácter de una tercera en los procesos intentados previamente por ellos ».

Cuando en el artículo 100 de la Constitución se dice que corresponde a la Justicia Federal el conocimiento de las causas entre *vecinos* de diferentes provincias, debe entenderse, ha dicho la Corte, que se refiere a nacionales y no a extranjeros.

A primera vista no se advierte la razón de semejante distinguo. Si, pues, la Justicia Federal se ha establecido con

mira de protección al extranjero, esa protección se logra dándole derecho para acudir a ella cuando la parte contraria reside en la misma jurisdicción judicial, por haberse considerado que la justicia local estaría más vinculada con el nativo; pero cuando va a litigar con otro extranjero que vive en otra provincia resultan estar en igualdad de condiciones y no existe la necesidad de acudir a la protección del fuero de excepción. Del mismo modo se piensa — y siempre dentro de una falsa creencia, — que cuando un nativo de Salta v. gr. va a demandar a un nativo de Mendoza éste va a encontrar en los jueces de Mendoza una protección que determina una desigualdad manifiesta en la contienda, y sólo existiendo el Juez Federal, a quien la ficción considera desvinculado en el medio en que actúa, están las partes a cubierto de esas preferencias.



CAPÍTULO XI

1896 - 1902

La Corte adquiere su perfil definitivo. — La facultad del Congreso para eximir a las empresas ferroviarias del pago de impuestos provinciales. — Alcance del inciso 16 del artículo 67 de la Constitución. — El caso *F. C. Central Argentino v. Prov. de Santa Fe*, antecedente precioso del arduo debate jurídico posterior. — La constitucionalidad de los artículos 187 y 188 del Código de Comercio. — La fijación de plazo para el transporte no compromete la garantía constitucional relativa al ejercicio de la industria. — La competencia federal y los *negocios particulares* de los cónsules extranjeros. — Alcance del artículo 2º inciso 3º de la Ley Nº 48. — La primacía de la Justicia Federal para conocer del proceso en caso de la comisión de dos delitos de fuero distinto. — El asesinato del diputado nacional Pedro García. — Incompetencia de la Justicia Federal para entender en el proceso. — Nombramiento del doctor ENRIQUE H. MARTÍNEZ. — La inamovilidad de los jueces y la jurisdicción originaria de la Corte. — El Procurador General insinúa su opinión contraria a la jurisprudencia relativa a los «delitos de imprenta». — Improcedencia de un embargo trabado por un Juez de Paz a requerimiento directo de un Juez extranjero. — Alcance de la venia legislativa para demandar a la Nación. — Nombramiento del doctor NICANOR GONZÁLEZ DEL SOLAR. — El doctor MAURICIO P. DARACT reemplaza al doctor Torrent. — Incompetencia de la Justicia Federal para entender en una cuestión proveniente de una resolución del Presidente de la República en su carácter de funcionario local. — La ciudadanía de una persona nacida en el extranjero de padre naturalizado argentino.

Llegamos a la época en que la Corte adquiere su perfil definitivo. Su composición es homogénea como nunca lo había sido hasta entonces. Durante diez años el elenco no sufre ninguna modificación; y puede decirse que el tribu-

nal compuesto por los doctores Paz, Bazán, Bunge, Varela, y Torrent señala la culminación en nuestros anales forenses. Esos nombres están al pie del mayor número de fallos y también de algunos muy interesantes y trascendentales por la significación jurídica de las cuestiones que los provocan. Sobre todo los doctores Paz, Torrent y Bazán llegan a tener en el concepto público un rango prominente en armonía con las sobresalientes condiciones que hacen de cada uno de ellos el Juez por excelencia.

Ya en esta época se ha perdido, sin embargo, definitivamente, la esperanza de ver a la Corte jugando el rol preponderante que la Constitución le asigna. Se afana en ser un tribunal de tercera instancia; ¡poco papel, por cierto, para quien tiene derecho a participar de una manera efectiva en la alta dirección del Estado! Porque quisieron los constituyentes que tuviera la Corte, en la tarea del aprendizaje institucional, la de ir marcando las sendas mejores y más firmes; y que cada vez que se presentase el caso de la exégesis de textos no interpretados aún, había de dar su pauta bajo la forma de una sentencia que recayera en la indispensable contienda entre partes. No se habrían desnaturalizado, así, los artículos 5º y 6º, que sirven actualmente para enviar todo linaje de intervenciones, si hubiera cuidado la Corte, como en Estados Unidos se ha hecho, de restringir el empleo del supremo remedio federal solo a casos muy contados, v. gr. cuando podía resultar que un Estado se había dado sus instituciones propias sin absoluta sujeción a las normas fundamentales y permanentes de la Constitución Federal. No se concebiría en la República del Norte una intervención que no llevara en sí, como único designio, corregir un entredicho puramente institucional. Allí la reelección presidencial es permitida, y presidentes han habido que demostraron no tener reparos en la adopción de los medios para conseguir un triunfo electoral;

ninguno, sin embargo, pensó en intervenir los Estados des-afectos a su política. El temor al desahucio de la Corte detiene allí al borde de todos los abismos; desde el mismo Presidente, en trance de aventura política, hasta el ciudadano más modesto que tuviese designios contrarios a la Constitución, piensan dos veces antes de obrar. La Corte fulmina como anatemas sus pronunciamientos de todo orden, y va de esa manera diciendo a la Nación cuales son los caminos buenos y cuales las sendas perniciosas que llevan al desquicio de las instituciones y al relajamiento de las costumbres políticas y al abuso de los derechos colectivos. De esa manera la Corte está por sobre todo, y los magistrados judiciales de cualquier rango tienen un poder inmenso, en forma que entre nosotros apenas se concibe.

En el mes de noviembre de 1919 los mineros de la Unión anunciaron para un día determinado el paro general del gremio. Corrió por todo el país una sensación pavorosa ante la perspectiva de un hecho semejante; pero un buen día se pudo leer en las noticias telegráficas de los diarios que el Juez Federal de Albany había notificado al comité directivo de los mineros que debía cancelar, dentro de un plazo perentorio de cuarenta y ocho horas, la orden de producir el paro. Dos días después el telégrafo anunció también que la orden de no suspender el trabajo había sido impartida, al par que uno de los directores expresaba « que el procedimiento era arbitrario e injusto, *pero lo acataban porque antes que nada eran ciudadanos de la Unión y, como tales, no querían que quedara el antecedente de que un mandato de la justicia no había sido obedecido* » (67). Todo esto es el resultado de la

(67) La *injunction* es el remedio legal de que se ha echado mano para prevenir la huelga. Es un procedimiento de equidad, de alcances muy amplios y que funciona en todos aquellos casos en que el *common law* no acuerda una acción determinada. Story la define como « un procedimiento

forma en que la Corte ha procedido siempre, es decir, no solamente no desperdiciando sino buscando las oportunidades de hacer sentir al pueblo que por sobre todas las cosas en la Nación está el Poder encargado de interpretar la ley.

En julio de 1897 resolvió la Corte una de las cuestiones que más ampliamente se ha discutido después, hasta llegar, en un momento dado, a ser en las esferas del gobierno y del capitalismo europeo, el punto constitucional de mayor trascendencia que haya sido necesario interpretar, con relación a la prosperidad del país, a base de una mayor amplitud de la explotación ferroviaria.

La empresa del Ferrocarril Central Argentino había sido obligada, por el Gobierno de Santa Fe, a pagar una gruesa suma de dinero, en concepto de contribución directa por las propiedades y dependencias de aquélla, existentes en el territorio de la Provincia. El pago se hizo bajo protesta, y se acudió ante la Corte demandando la devolución de lo pagado, por cuanto la ley de mayo de 1863, sobre construcción del ferrocarril, declaraba libre de toda contribución e impuesto los bienes y dependencias de la empresa. El Gobierno de Santa Fe sostuvo que el Congreso no tiene facultad sino para eximir de impuestos nacionales y la Corte, al resolver acerca del estricto alcance del inciso 17. del artículo 67 de la Constitución, expresó las siguientes razones:

Comienza analizando el verdadero carácter y estructura del sistema constitucional argentino, y después de recor-

« judicial por el cual se ordena a una persona que haga o se abstenga de hacer una cosa determinada. » Tiene, sobre todo, una función restrictiva y preventiva muy importante y se la considera como el arma más poderosa de los tribunales de equidad. Ordinariamente, el único propósito para emplearla es detener el daño, mientras se prosigue la acción hasta obtener la instancia definitiva.

dar que en la Constitución Americana,—modelo indiscutible y antecedente obligado,— no existe ninguna prescripción que se refiera, de una manera concreta, al deber de proveer lo conducente a la prosperidad del país, agrega: «La « Constitución al imponer este deber al Congreso y al acordarle la facultad de hacer concesiones no ha establecido « más limitación que la de que ellas sean temporales, pero « nada ha dicho respecto de la naturaleza o del carácter « de esas concesiones. Sí, pues, para los fines de gobierno, « no, de política, de reglamentación del gobierno interprovincial, y simplemente como medio de estímulo para « promover la construcción de un ferrocarril, el Congreso « cree conveniente acordar un privilegio de la exención del « pago de impuestos locales, *esta disposición sería perfectamente constitucional*, porque ella no importará sino el « ejercicio de una facultad del Congreso, cuyas leyes priman « sobre cualquiera disposición contraria que pudieran tener las constituciones o leyes de provincia.... Las « provincias, haciendo uso de la facultad de imponer podrían « llegar con sus contribuciones a hacer imposible la realización de las concesiones y privilegios que el Congreso « acordase. »

Después recuerda el fallo que el encargo de promover el adelanto y bienestar general está dado al Congreso « porque « nuestros constituyentes comprendieron que tratándose de « un país con tan vasta extensión territorial, los elementos « aislados de cada provincia no podían bastar al desarrollo « de sus propias riquezas y *quisieron que fuera la Nación « la que por medio de estímulos a la industria, a la inmigración, a la construcción de ferrocarriles y canales, « a la introducción de capitales extranjeros, fomentase « el desarrollo de la riqueza y del progreso de todas las « provincias*, sin perjuicio de las facultades concurrentes « que a ellas reconoce el artículo 107 de la Constitución ».

Con referencia al caso concreto de la demanda, expresa el fallo que debe necesariamente reconocerse que la ley de 1863 quiso exonerar y exoneró a la empresa no solamente de los impuestos nacionales, sino también de los provinciales; y al declarar que aquello no es inconstitucional, condenó la Corte a la provincia de Santa Fe a devolver la suma cobrada.

Cuando se recuerda que la citada ley de 1863 concedía a la empresa del Central Argentino la propiedad de una legua de tierra a cada lado de la vía, como una compensación racional al esfuerzo que entonces significaba la inversión de un gran capital en una obra de beneficios tan indiscutibles para la República, y cuando se ve la sencillez de la argumentación de la Corte para dejar sentada la facultad del Congreso en materia de exención de impuestos provinciales, no se alcanza a comprender, — cuando la obra civilizadora del riel sigue siendo indispensable para un mayor desarrollo material de la Nación, — cómo puede la hermenéutica judicial haber dado un vuelco completo, y llegado a afianzarse durante muchos años la teoría de que el Congreso no puede exonerar de impuestos provinciales y municipales a las empresas ferroviarias. A su tiempo daremos a esta cuestión la amplitud que requiere, a la luz de la pretérita ley 5315, comprensiva de todos los aspectos de la cuestión relacionada con el negocio ferroviario y alrededor de la cual se ha consolidado la jurisprudencia, tomando de ella, no como pudiera creerse sus términos expresos o el pensamiento expuesto por su autor en el debate legislativo, sino una afirmación incidental del diputado informante del despacho.

Bellocq y Durañona se presentaron ante el Juez de Comercio de Buenos Aires demandando al Ferrocarril del Sud por devolución de fletes fundados en que el transporte se había efectuado con retardo. La empresa, al contestar la demanda, dijo que efectivamente se había empleado más tiempo que el señalado en el artículo 187 del C. de Comercio; y que este artículo y el 188 al establecer condiciones que las empresas de transporte no pueden cumplir, contrarían a la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 28 que consagran el derecho de ejercer la industria. Que los citados artículos del C. de Comercio crean inconvenientes y le quitan facilidades a la explotación ferroviaria, pudiendo llegar hasta arruinarla.

El Juez de Comercio desechó la excepción de inconstitucionalidad por cuanto si bien la Constitución consagra el derecho de ejercer toda industria lícita, no lo hace de una manera absoluta, sino con sujeción a las leyes que reglamenten su ejercicio. La Cámara de Apelaciones, por simple mayoría, declaró la inconstitucionalidad de los artículos de referencia; y al llevarse la cuestión a la Corte el Procurador General tuvo oportunidad de decir que « la fijación de « un término prudencial para el cumplimiento de los con- « tratos de transporte no viola el principio general del am- « paro del ejercicio del comercio e industrias. Si de una « parte se interesan en el tráfico las empresas ferrocarril- « leras, no son menos atendibles de la otra los cargadores, « que representan un interés vital para la prosperidad de « las industrias y comercio privado, de cuyo conjunto se « forma la economía y finanzas nacionales. » Pedía en consecuencia se revocara la sentencia de la Cámara y se declarase que los artículos 187 y 188 del Código de Comercio no son inconstitucionales.

La Corte así lo resolvió. « Que las constancias de autos « — dice la sentencia — demuestran que el Ferrocarril del

« Sud ha realizado a menudo los transportes dentro de los
« plazos establecidos en el artículo 187 del Código de Co-
« mercio, demostrando, además, que no le sería imposible
« efectuarlos en menos tiempo; que si no es imposible en
« absoluto la observancia del precepto del citado artículo.
« no puede pretenderse con éxito que éste suprime la in-
« dustria ferroviaria y sea, por tanto, incompatible con las
« prescripciones constitucionales que la permiten y la en-
« comiendan; que la imposibilidad accidental de cumplir con
« una obligación legal puede dar motivo para discutir el
« hecho y sus consecuencias en el caso ocurrente; pero sin
« que la circunstancia de acreditarse su imposibilidad en
« el caso pueda afectar la existencia de la ley misma. »

Nada más necesitó decir la Corte para destruir los artificiosos argumentos de la Cámara.

Tuvo oportunidad la Corte por esta época de establecer el verdadero alcance de la disposición constitucional relativa al fuero de los Cónsules extranjeros, con motivo de dos contiendas judiciales, motivada la primera por una demanda de la Municipalidad de la Capital contra el Cónsul de Guatemala por cobro de impuestos y consistente la segunda en el juicio de divorcio del Cónsul uruguayo en el Rosario de Santa Fe.

El Cónsul de Guatemala fué demandado por cobro del impuesto general ante el Juzgado de Paz; dedujo una excepción de incompetencia fundándose en que su carácter consular determina la procedencia del fuero federal y a la Corte le correspondió así declararlo conforme a lo que dispone el artículo 2.º inciso 3.º de la Ley N.º 48. También se consideró *negocio particular* del Cónsul uruguayo en

el Rosario la demanda que le promovió su esposa sobre divorcio. Al contemplar el Fiscal los términos de aquella disposición legal expresó: « Dicha disposición, en efecto, « establece un privilegio en favor de los Cónsules, acordándoles el derecho de ocurrir a la Justicia Nacional en « las causas que versen sobre negocios particulares de ellos, « *pero la ley* no se ha referido a las cuestiones sobre el « estado civil, o de divorcio, sino simplemente a los de orden « comercial o pecuniarios. » ¿De dónde sale este distingo? ¿Qué fundamentos tiene? Tanto el Fiscal como el Juez Federal encontraban que al haber empleado la ley la palabra *negocio* excluye los que no sean de carácter comercial o pecuniario.

El Procurador General dijo que el artículo 100 de la Constitución consigna expresamente que corresponde a la Corte y a los Tribunales inferiores de la Nación el conocimiento de las causas concernientes a los Cónsules extranjeros, y tratándose de una garantía constitucional la ley no ha podido modificarla y no tiene razón el distingo que se hace entre la clase de negocios que pueden concernir al Cónsul.

La Corte resolvió en favor de la competencia de los Tribunales Federales por cuanto hallándose la disposición contenida en el artículo 2.º inciso 3.º de la Ley N.º 48 concebida en términos generales y absolutos así debía ser entendida y aplicada. En el artículo deben entenderse comprendidos todos los negocios particulares, « ya que los que versen sobre los privilegios o exenciones de los Cónsules y Vice- « cónsules extranjeros *en su carácter público*, son de la « competencia originaria de la Suprema Corte. »

Mientras las leyes federales de carácter penal no se deroguen (68), habrá que aceptarse la incomprensible situación de una persona sujeta al procesamiento sucesivo por dos jueces y a la aplicación de dos penas por un solo hecho, si resulta ser éste susceptible de una calificación de acuerdo con la ley federal y de otra calificación conforme a algún artículo del Código Penal.

Supóngase que una persona que ha cometido un hurto en una oficina de correos, al ser conducido preso se desacata en la calle contra el agente de la autoridad que lo conduce. Dentro del régimen actual su suerte es esta: primero proceso y condena por el Juez Federal en mérito de haberse cometido el delito en una oficina nacional, y después proceso y condena ante el Juez ordinario por el delito de desacato. Y cabe preguntar: ¿A qué queda reducido el precepto de que el delito menor se ha de computar como agravante del mayor, pero siempre sobre la base de un solo proceso, por un mismo juez, de una sola sentencia y de una sola y única condenación?

Ante el Juzgado Federal de Salta se seguía un proceso contra una persona que había defraudado las rentas fiscales y que en jurisdicción de la Provincia de Tucumán había cometido un delito de fuero común. Con motivo de la primacía para juzgarle se suscitó una cuestión ante la Corte, teniendo ocasión de consagrar una vez más el incuestionable precepto de nuestras leyes vigentes, que son tan claras en ese sentido y tan incontrovertibles, que los Tribunales no tienen la posibilidad de interpretarlas en forma que consulte los principios de la ciencia penal.

(68) En el proyecto de Código Penal, pendiente en la actualidad de la sanción del Senado, se resuelve esa derogación.

En septiembre de 1898 fué alevosamente asesinado en Santiago del Estero el Diputado Nacional Pedro García. Fuerzas armadas de la policía provincial, en las primeras horas de la madrugada, echando abajo las puertas, llegaron hasta el propio dormitorio de la víctima y lo acribillaron a balazos en presencia de su esposa y de su hijo. Naturalmente, se quiso explicar el hecho diciendo que el Gobierno tenía conocimiento de que se preparaba un movimiento revolucionario, del que García era jefe, y se había dado orden de prenderlo; que se resistió, etc. . . . la historia de siempre.

El Juez Federal se declaró incompetente para entender en el proceso, en el que aparecían acusados el Jefe de Policía de Santiago y dos o tres sujetos más al servicio de la situación. En el auto se hace mención del atentado contra el Presidente Roca en 1886, por Monges, del asesinato del Senador Gómez en San Juan y habría correspondido recordar la agresión de que fué víctima Sarmiento. En todos estos casos fué la Justicia ordinaria la que intervino; pues no habiendo ocurrido los hechos en lugar de exclusiva jurisdicción nacional, la sola investidura de las víctimas no era suficiente para determinar la competencia federal.

Cuando la cuestión se llevó a la Corte, por apelación del Procurador Fiscal de Sección, tuvo ocasión de expresar el doctor Kier, refiriéndose al caso del Diputado García, que el homicidio por sí mismo no constituye un delito de carácter nacional, aún cuando fuese perpetrado en persona investida con el cargo de legislador; la ley de 1863 entro los crímenes contra la Nación no incluye a aquél. Pero, si se tiene en cuenta que del proceso resultaban hechos y circunstancias que ponían en presencia de un atentado violatorio de la Constitución, tales como la intención manifestada por el Jefe de Policía, procesado, de haber ido a tomar preso a García, lo que era un atentado a la garantía que los artículos 61 y 62 le acordaban de no poder ser detenido sino en caso de *infra-*

ganti delito, se comprenderá cómo el Procurador General concluía sosteniendo la competencia de los Tribunales Federales. « Presentados así los hechos — dice — por el jefe de la « autoridad ejecutora del acto homicida, el homicidio podría « no haber sido el objetivo de la invasión a la casa del señor « diputado García, pero siempre resultaría por declaración « oficial de aquella autoridad, que sus fueros de diputado « nacional fueron también violados, y el diputado García « sacrificado criminalmente aunque hubiera defendido realmente, en ese acto, los privilegios y los fueros de su cargo « constitucional, y estos son delitos de carácter nacional « sujetos por ello al fuero federal. El domicilio es inviolable y en él no es dado penetrar, en modo alguno, « sin orden escrita de Juez o autoridad competente según « prescripción explícita del artículo 18 de la Constitución « Nacional. Hay más, el señor Pedro García era diputado « al Congreso y como tal estaba revestido de las inmunidades que atribuye a ese cargo la garantía de su libre « ejercicio el Código Fundamental. Sus artículos 61 y 62 lo « han declarado solemnemente. Ningún senador o diputado « desde el día de su elección hasta su cese, *puede ser arrestado*, excepto el caso de ser sorprendido *infraganti*, prescribe el primero, y aún cuando se fundara querrela criminal « contra un diputado o senador, solo podría someterse a « juicio, previa autorización sancionada por dos tercios de « votos de la Cámara respectiva Apenas se conciben « las graves perturbaciones que podría ocasionar a la integridad, a la independencia y al respecto que deben garantizar « las decisiones del Congreso Nacional, si fuese declarada « la incapacidad de sus autoridades para juzgar las violaciones de su ley orgánica que es la Constitución Nacional. Establecido que se ha consumado la violación del « domicilio de un diputado para prenderlo sin autorización « competente, que con tal proceder se han violado manifies-

« tamente cláusulas expresas de la Constitución y leyes del
« Congreso, su juzgamiento es de fuero federal por la natu-
« raleza misma de la materia de orden público nacional, y
« lo dispuesto en la primera parte del inciso 3º artículo 3º de
« la ley de competencia. Si el homicidio es un resultado
« de aquella violación de fueros, el Juez competente deberá
« tomarle en cuenta como un accidente inseparable de la
« causa, pues los delitos comunes se involucran en los del
« fuero federal de que procedan, y si faltara la designación
« de pena en el orden nacional, el artículo 93 de la ley
« de 1863 llena ese vacío cuando prescribe: « que los delitos
« contra la nación no previstos en esta ley, serán castiga-
« dos con arreglo a los códigos que forman el derecho común
« de las provincias . . . »

A su vez la Corte, al resolver, sostuvo los siguientes prin-
cípios: « Que las circunstancias todas del suceso, abstrac-
« ción hecha de las personales al occiso, revelan la comi-
« sión de un delito de carácter común, previsto y penado
« por el código respectivo. Que la jurisdicción para el cono-
« cimiento de delitos de ese género perpetrados en el territo-
« rio de las provincias, corresponde a los jueces de las
« mismas, cuando no se han realizado excepcionalmente en
« lugares sometidos a la absoluta y exclusiva jurisdicción
« del gobierno nacional, según lo establece el artículo
« tercero de la ley de jurisdicción y competencia de los
« tribunales federales y lo repite el artículo veinte y
« tres inciso cuarto del Código de Procedimientos en lo
« Criminal. »

« Que la mencionada circunstancia no ha sido tomada en
« cuenta por la Constitución para hacer de la persona
« de los diputados y senadores una especialidad de perso-
« nas de derecho público, sustrayéndola de la jurisdicción
« local cuando, por razón de ellas o de sus bienes, hubie-
« ran de estar en juicio como demandantes o como deman-

« dados o cuando se tratase de hechos comunes que les
« afecten como víctimas. »

« Que lejos de haberse colocado a las personas de los
« diputados bajo el amparo de las autoridades federales en
« lo que al *derecho común* se refiere, no se ha puesto en
« duda por los poderes y por nuestra jurisprudencia, etc.,
« que sus causas están comprendidas en las reglas corres-
« pondientes al ejercicio de la jurisdicción común; y eso
« hacen en materia criminal después que se hayan cum-
« plido las prescripciones de los artículos 61 y 62 de la
« Constitución. »

El doctor Enrique H. Martínez, nombrado en junio de 1899, reemplazó en la Corte al doctor Varela. Había nacido aquél en Buenos Aires y luego de graduarse de abogado desempeñó varios cargos en la magistratura; por muchos años fué catedrático titular de procedimientos en la Facultad de Derecho, logrando una sólida reputación como conocedor de la ciencia jurídica. Sobre todo, era hombre de una gran actividad e incansable para el trabajo; llegó muy joven al alto sitial de la Corte, y cuando podía esperarse de su competencia y rectitud la eficaz colaboración que todos, con razón, se prometieron, la muerte lo sorprendió al año escaso de su nombramiento.

El doctor Martínez murió en París, donde se había trasladado por enfermedad de un hermano. Estaba para entrar ese día la Corte a una audiencia en que debían informar *in voce*, los doctores Pueyrredón y Zeballos, cuando llegó la noticia; la crónica consigna que el doctor Zeballos pidió permiso al Tribunal para, siguiendo la costumbre americana, hacer el elogio del Juez fallecido y presentar en su nombre

y en el del foro la expresión del dolor que causaba el sillón vacante. Los Ministros y demás asistentes se pusieron de pie, iniciándose después la audiencia.

El doctor Eugenio Breard era Jue~~le~~trado de Misiones, y al ser trasladado, por decreto del P. E. a Formosa, se presentó ante la Corte solicitando amparo a su derecho, a la vez que podía se dejara sin efecto la resolución administrativa.

El Procurador General en su dictamen sostuvo que no aparecía en el caso violada ni la Constitución ni ley especial alguna; pues la primera sólo garantiza la conservación del empleo y la inalterabilidad de la compensación y no puede deducirse, respecto de los jueces de territorio, obligación imperiosa de mantenerlos en la misma jurisdicción. «Los jueces de los territorios no son los jueces permanentes de la Constitución... y en las condiciones de «la ley especial que los creó, es exacto también que el «P. E. ha podido determinar o modificar la zona de ejercicio de la jurisdicción sin menoscabar, como en el caso, «ni el término, ni las prerrogativas, ni el sueldo del empleado.»

La Corte dijo que no era un caso de jurisdicción originaria, y que, por lo tanto, no cabía pronunciarse acerca de la validez del decreto del Ejecutivo sino cuando se produjese una contienda judicial, esto es, cuando un particular objetara alguna resolución del doctor Breard o de su reemplazante en Misiones. Sin duda alguna, la Corte no podía resolver en otra forma. La gestión de aquél no debía dirigirse sino al Ministerio de Justicia, ya que su condición de Jue~~le~~trado de territorio no lo habilitaba para hacer su

presentación derechamente al Senado manifestando que no deseaba el traslado dispuesto por el Ejecutivo; lo que habria podido hacer un Juez Federal, si se tiene en cuenta que el acuerdo legislativo lo inmoviliza en el cargo determinado para que se le nombrara. Así, el Juez Federal de Jujuy, si un buen día recibiera la noticia de que se había resuelto su traslado a otra ciudad, con la intención el Gobierno de mejorarlo de situación, puede negarse a aceptarlo y le bastaría manifestarlo así al Senado a fin de que se abstuviera de prestar acuerdo a su nuevo nombramiento. Porque hay que tener en cuenta que ha sido nombrado *Juez Federal de Jujuy* y mientras sea su designio permanecer en ese puesto, sólo mediante juicio político puede ser removido. No han ocurrido casos concretos, y fuera del del doctor Breard, a que se ha hecho referencia, sólo puede citarse el del Juez en lo Civil de La Plata, doctor Emilio Molina Carranza, a quién el Ejecutivo determinó trasladarlo a San Nicolás, a cuyo fin envió el respectivo pedido de acuerdo a la Legislatura. Bastó una lacónica exposición de aquél dirigida al Senado, en la que ponía de manifiesto la arbitrariedad que se iba a cometer, para que el Gobierno provincial, dándose cuenta de la legitimidad del derecho invocado, dejara sin efecto el traslado.

En un capítulo anterior se registra el caso de una demanda del obispo de San Juan contra el Gobierno de esa Provincia, en la que la Corte resolvió que no era de competencia federal. Contrariamente a la argumentación que se hacía en el escrito de demanda, sólo se consideraba al obispo como un vecino de San Juan, en cuyo caso su pleito con el Gobierno solo podría ser dirimido por la Justicia

local; de modo que cuando en 1900 el Arzobispo de Buenos Aires demandó por cobro de pesos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la Corte se declaró competente, pues Monseñor Castellanos era un particular domiciliado *fuera* de la provincia.

En un diario de Córdoba don Ignacio N. Correa publicó un artículo injurioso contra el Juez de Sección doctor Moyano Gacitúa, quien se excusó, naturalmente, de entender en el proceso que se siguió contra aquél. El Juez suplente, después de citar todos los casos en los cuales la Corte declaró que los «delitos de imprenta» son ajenos a la jurisdicción federal — los cuales han sido analizados en capítulos anteriores de este libro, — se declaró incompetente. En el siguiente párrafo de la defensa del acusado está sintetizada la teoría que informa la constante jurisprudencia de la Corte, citada por el Juez, y que continúa invariada. «Que siendo la libertad de la «prensa — dice — una institución de orden político (aún «cuando se use para injuriar!) consagrada por la Constitución Nacional, no había hecho más que ejercitar un derecho «(al insultar al Juez) y aún cumplir con un deber de alto «civismo, etc. etc.».

La Corte confirmó la incompetencia federal declarada por el Juez; pero ya esta vez la buena teoría encuentra un defensor en el Procurador General, quien dijo: «... si la libertad de emisión del pensamiento no puede ser limitada ni «restringida ni por ley nacional, ni por jurisdicción federal, «el atentado contra el derecho de terceros, la vida, el honor, «la propiedad, delitos especialmente calificados de tales, podrían ser perseguidos aún ante los Tribunales Federales, «con sujeción al régimen de las leyes penales de la nación».

(Esto es, que si se injuria a una persona, y tal acción está penada por la ley, el hecho de usarse la prensa como vehículo del delito, no puede determinar la incompetencia de la justicia nacional cuando por otros conceptos resulta ser la llamada a juzgar). «Pero contra esta opinión—continúa diciendo el doctor Kier—que apenas me atrevo a insinuar «para salvar responsabilidades personales, pesa el elevado «criterio que ha predominado en los repetidos fallos que «invoca la sentencia recurrida. Esos fallos constituyen una «jurisprudencia que no es posible desconocer, ni me permite «tirar impugnar, debiendo, al contrario, inclinarme respetuoso etc.». Pero bien puede advertirse en las palabras transcritas un punto de vista diametralmente opuesto al de la Corte.

Con motivo de haber procedido un Juez de Paz del Territorio de Formosa, a exhortación directa de un Juez de la República del Paraguay, a trabar un embargo en un bien situado en suelo argentino, tuvo oportunidad la Corte de resolver que ese embargo no había podido efectuarse por estar ello en pugna con conceptos relacionados con la soberanía. «El «principio internacional que surge de la soberanía territorial «—dice el fallo—se opone al ejercicio de la jurisdicción de «los jueces fuera de los límites del territorio del país, en «cuyo nombre y autoridad ejercen sus funciones». Si bien es cierto que en el Tratado de Montevideo nada se dice respecto a la facultad de decretar embargos fuera de la jurisdicción del Juez, en el extranjero, contiene aquel una disposición que virtualmente significa la falta de esa atribución; pero es que aparte de todo esto, como insistentemente lo hace notar la Corte, es la inalienabilidad de la soberanía lo

que fundamenta la improcedencia del embargo trabado por el Juez de Formosa, de la soberanía que es fuente de la jurisdicción. La legislación general descansa en este fundamento, y las propias leyes son las que gobiernan y protegen los bienes con la misma autoridad privativa y excluyente de toda extraña ingerencia. Y todo esto se salva dirigiéndose el Juez extranjero a su igual en la República, para que sea este quien ordene al Juez de Paz la diligencia del embargo.

Para el doctor Bazán el embargo estaba bien trabado. « Que « estando revestido el exhorto — dice — de la legalización requerida por el artículo 4º del Tratado. . . es evidente que el « Juez de Paz exhortado ha debido cumplirlo. . . que para demostrarlo basta observar que la disposición que contiene el « artículo 10 del Tratado es imperativa y claramente establece que *cuando los exhortos o cartas rogatorias se refieran a embargos o diligencias preventivas, el Juez exhortado proveerá lo que fuere necesario respecto de todo aquello que sea conducente al mejor cumplimiento de la comisión.* Que, en consecuencia, y siendo cierto que el « exhorto se refiere a un embargo que por su naturaleza no « es más que una medida preventiva que se decreta ordinariamente antes de pronunciarse las sentencias definitivas, « con el plausible objeto de que no queden burlados los derechos del acreedor, si mientras se ventila en juicio el deudor « enajenase los bienes con que debe responder a sus obligaciones, es claro que para el cumplimiento del exhorto « en cuestión no puede ni debe exigirse que él sea el resultado de una sentencia definitiva.» Por otra parte, y para el doctor Bazán tenía mucha importancia el antecedente, el exhorto había sido primeramente librado al Juez letrado de Formosa, pero como estaba ausente por ser el mes de feria, el magistrado paraguayo lo reiteró directamente al Juez de Paz del lugar donde el embargo debía trabarse.

La empresa *Depósitos y Muelle de las Catalinas* había obtenido venia del Congreso para demandar á la Nación por pago de una indemnización, logrando sentencia favorable. Posteriormente, cuando se presentó reclamando la liquidación, el representante del Fisco sostuvo que, tratándose de una nueva acción, era indispensable nueva venia legislativa. El Procurador General fué de la misma opinión; pero la Corte resolvió que se trataba de un solo y mismo juicio.

Como puede suponerse, correspondía en el caso resolver solo una cuestión de hecho, es decir, establecer si la nueva presentación de la empresa podía considerarse una consecuencia del juicio fallado en su favor; de ser así, resultaba indudable que la objeción de defecto legal era inconsistente, porque dentro del concepto jurídico de que el Gobierno Nacional no puede ser llamado a juicio sin su previa autorización, la exigencia podía considerarse cumplida. Sí, pues, la empresa actora tenía diferencias que dilucidar con el Fisco, sujetas por su índole compleja a múltiples tramitaciones, no resultaba serio obligarla a un trámite innecesario y moroso en cada caso, pues que lo importante era el reconocimiento por el Congreso de la necesidad que aquella tenía de llevar ante la Justicia al Gobierno; esto aparte de lo elemental que resulta una interpretación según la cual la liquidación por que se demandaba no venía a ser otra cosa que una consecuencia necesaria del derecho reconocido en la sentencia para cobrar los perjuicios.

Varios meses estuvo sin llenar la vacante dejada en la Corte por el doctor Martínez, muerto en septiembre de 1900. El 22 de mayo de 1901 fué nombrado el doctor Nicanor

González del Solar, que desempeñaba a la sazón el cargo de vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital.

Había hecho sus estudios en el Colegio del Uruguay, pasando después a Córdoba en cuya Universidad se graduó cuando aún no había cumplido veintidós años. Casi inmediatamente se inició su larga carrera de magistrado, pues en 1868 fué nombrado Juez de lo Civil y Comercial de la Capital. Se trasladó después a Corrientes donde sufrió persecuciones del gobierno por la propaganda periodística en que el joven abogado estaba empeñado. En el Rosario de Santa Fe fué Juez, renunciando bien pronto para dedicarse a la profesión, en cuyo ejercicio logró sonados triunfos que hicieron del estudio del doctor González del Solar uno de los más reputados de aquella ciudad. Hacia 1887 entró a desempeñar el Juzgado de Comercio de la Capital Federal, hasta 1890 en que fué ascendido a camarista.

Treinta y tres años lleva, pues, el doctor González del Solar de absoluta dedicación a la magistratura. Fácil es comprender, entonces, hasta qué punto su nombre está ligado a los anales forenses. Su sola permanencia de veinte años en la Suprema Corte,—nadie estuvo más que él,—hace que haya colaborado en la solución de un número considerable de cuestiones en que se pusieron a prueba sus dotes relevantes de hombre de ley.

El doctor Mauricio P. Daraet fué nombrado el 23 de agosto de 1901 para reemplazar al doctor Torrent. Pocos hombres han habido entre nosotros mejor dotados para la alta función judicial. La austeridad y sencillez de su vida modestísima no eran sino el complemento de sus grandes dotes intelectuales y de su ejemplar contracción al estudio. Veía-

sele algunas veces en las calles céntricas de la ciudad, en el torbellino de la actividad cotidiana, deslizarse con su exigua figura, sin un solo rasgo que llamara sobre él la atención de los transeuntes, y nadie que no le conociera habría podido sospechar que era la más alta reputación judicial de la República. Salía del Tribunal, a menudo después de haber puesto su firma en algún fallo que representaba cuantiosos intereses, para volver a su casa, compartiendo el asiento del tranvía habitual, con el obrero o el empleado modesto que regresaban también de su trabajo.

Había nacido el doctor Daract en San Luis. Graduóse en la Facultad de Buenos Aires y regresó a su provincia a la que representó en el Congreso Nacional, después de haber ocupado progresivos cargos en la judicatura local. Todas estas actividades sirviéronle para ir formando el bagaje que haría de él con el tiempo uno de los hombres de mayor ilustración jurídica y más conocedor de la ciencia política. Cuando llegó a la Corte estaba ya en la época de su madurez intelectual y del perfecto equilibrio. Su destreza en el manejo de la Jurisprudencia Americana hizo inapreciable su colaboración en los fallos, dejando con ello marcado un nuevo rumbo en la tarea, que sus colegas han continuado. A este respecto hace notar el doctor Wilmart que « los fallos de « la Suprema Corte de Estados Unidos se publican no solo « con regularidad, sino anticipando unas hojas para tenerlo « a uno al día mientras se confecciona cada tomo; pues bien, « durante los catorce años y meses que estuvo Daract en « la Corte, se puede asegurar que ningún asunto de los que « aquellos fallos son antecedentes para nosotros, se ha « resuelto sin que la Corte tuviera por delante todos esos « antecedentes, viejos unos y de casi la víspera otros, traídos « por Daract, sin que esto signifique que solo él los con- « sultaba. »

Los directores de la Sociedad Anónima *El Grano de Oro* fueron acusados, en virtud de un decreto del Ejecutivo Nacional, por falsedad y otras irregularidades cometidas en el manejo de la sociedad. Según el Agente Fiscal de la Capital, doctor Tomás R. Cullen, bastaba el hecho de haberse cometido aquellos delitos en un documento presentado al Ministerio de Justicia de la Nación, engañando con sus enunciaciones embusteras al Gobierno, para convencerse de que el conocimiento correspondía a la Justicia Federal. En el delito de falsedad denunciado se afectaba directamente al Gobierno Nacional, cuya confianza y buena fe había sido burlada y fué el P. E., en su entidad jurídica, quien, por el decreto mencionado inicia la acción penal; no hay de por medio ningún interés particular afectado—agregaba el Fiscal—y la falsedad ha sido practicada al solo efecto de obtener la personería jurídica. De acuerdo, pues, con el artículo 100 de la Constitución, es la Justicia Federal quien debe juzgar, desde que se trata de un asunto *en que la Nación es parte*. Así lo resolvió el Juez de Instrucción y remitió los autos al Juez Federal; pero este, a su turno, se declaró también incompetente, por lo que fué la Corte quien resolvió la contienda en el sentido de que correspondía conocer a la Justicia ordinaria.

Establece el fallo que el Presidente de la República había obrado en el caso como funcionario de carácter local «y «cualquiera que fuese la verdad de los hechos expuestos «y la responsabilidad penal de las personas autoras de esos «hechos, su juzgamiento no corresponde a la jurisdicción «federal con arreglo al inciso 4º *in fine* del artículo 23 del «C. de Proc. e incisos 1º y 3º del artículo 25 del mismo.»

No es una situación fácil de establecer la del Presidente de la República desde el punto de vista de su doble carácter de funcionario general o federal y local o metropolitano. La Corte en el fallo de que nos ocupamos no adelanta elemento

alguno de juicio para hacer el distingo y en la resolución anterior a que se refiere, contenida en el Tomo 77, relativa a un asunto igual al del *Grano de Oro*, solo se hace mérito de que el hecho está regido por leyes especiales y no por ley nacional alguna, y en cuanto a que la competencia podía nacer del sitio en que el delito se cometió, era de tenerse en cuenta el carácter de administración local de la Capital de la República que en este caso tenía el P. E. En efecto, la Inspección de Sociedades Anónimas es una repartición cuyas actividades no alcanzan a las provincias, sino que son exclusivamente para la Capital y Territorios nacionales. Con todo, pareciera que la autoridad de carácter local correspondiente al Presidente de la República es la que ha delegado en la Intendencia Municipal, haciendo quedar para su desempeño efectivo únicamente lo que se refiere al gobierno de todo el país; pero no es así, y el caso de la Inspección de Sociedades Anónimas es típico de ese dualismo.

Poco tiempo después se trató de saber si el Juez Federal de Concepción del Uruguay era competente para juzgar a una persona que había cometido una falsedad en una solicitud presentada al Ministro de Marina (la anterior fué al de Justicia); pero en este caso el Ministro de Marina resultaba un funcionario de indiscutible carácter federal y no local, pues la solicitud se refería a la remoción de un Sub-Prefecto, dependiente de aquel Ministerio.

La Corte declaró que el Juez Federal era el competente.

El Cónsul Argentino en Bayona era un ciudadano argentino *por naturalización*, don Miguel Bidart. De vuelta al país se presentó al Juez Federal para que se le otorgara a su hijo, nacido en el consulado, carta de naturalización,

en atención a que en la época del nacimiento estaba el padre al servicio de la República en el extranjero. Se invocaba al efecto una disposición legal que habría hecho viable, sin discusión, la solicitud si hubiera sido Bidart un argentino *nativo*.

El Juez y la Cámara Federal resolvieron en contra de lo peticionado; pero el Procurador General de la Nación sostuvo la opinión contraria. Argumentaba en el sentido de que la ley ha querido que los hijos menores de un ciudadano pueden incorporarse a la nacionalidad de su padre desde el instante mismo en que este obtuvo su carta de ciudadanía, siempre que estando en edad de enrolarse, hayan cumplido con esta obligación. «De estos móviles liberales «se desprende — agrega el dictamen — que al menor nacido «en el extranjero al tiempo de la naturalización del padre, «si su edad no le permite enrolarse y sin embargo quiere nacionalizarse y así lo manifiesta con el consentimiento paterno, le asiste el mismo derecho a naturalizarse.»

El fallo de la Corte no admite estos distingos. «Que la «ley de ciudadanía — dice — coloca al menor Marcelo Bidart «en calidad de extranjero, no obstante la naturalización de «su padre, por haber nacido fuera del territorio de la República y por no encontrarse en ninguna de las otras condiciones que se contienen en el artículo 1º de la citada «ley de ciudadanía. Que no habiendo la naturalización del «padre podido producir por sí misma la ciudadanía natural del hijo, este solo llegaría a ser ciudadano argentino «por naturalización personal.»

1

CAPÍTULO XII

1903 - 1910

Con la creación de las Camaras Federales disminuye considerablemente la tarea de la Corte. — Nombramiento del doctor ANTONIO BERMEJO. — Cuestiones relacionadas con la facultad de las provincias para crear impuestos que gravan el comercio interprovincial absorben una gran parte de la actividad de la Corte. — La ley de la Provincia de Tucumán de 14 de junio de 1902 creando un impuesto adicional sobre la producción de azúcar a base de un prorrateo, es contraria a la Constitución. — No es repugnante a la Constitución la Ley N° 4097 represiva de los juegos de azar. — Alcance de las disposiciones penales de la Ley Electoral. — Los procesos a los «notables» de 1904. — El impuesto a las herencias. — Modificación de la jurisprudencia de la Corte. — El impuesto de guías de la Provincia de Buenos Aires. — La Corte declara que es inconstitucional. — Otros casos análogos de leyes de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. — Nombramiento del doctor CORNELIO MOYANO GACITUA. — El precepto de la Constitución de Santiago del Estero que niega la excarcelación bajo fianza a los reos del delito de rebelión, es contrario al artículo 18 de la Constitución Nacional. — En una nueva demanda sobre la facultad del Congreso para exonerar de impuestos municipales a las empresas ferroviarias, la Corte concreta su interpretación constitucional en palabras que, por lo claras e interversables, pudieron creerse definitivas. — Concepto con que se dictó la *Ley Mitre* N° 5315. — El régimen de la misma. — Afianzamiento de una política francamente orientada en el sentido de fomentar la industria ferroviaria. — Cuando percibe impuestos ¿obra el Gobierno Nacional como persona jurídica o como poder público? — El doctor JULIO BOTET es nombrado Procurador General. — Verdadera situación de los militares en retiro. — El caso del Teniente de Navío Lauro Lagos. — Todo lo que concierne a un cónsul extranjero es de la competencia

federal: pero si injuria por la prensa es la justicia local la competente para juzgarlo. — Alcance de la disposición legal que exceptúa del servicio militar a los hijos de madre viuda. — El impuesto de sellos y la exoneración que consagra la ley 5315. — Fundamentos que tuvo la Corte para interpretar el artículo 8º de la Ley Mitre en contra de sus constantes pronunciamientos anteriores.

En enero de 1902 se dictó la Ley N° 4055 que creaba cuatro Cámaras Federales (69). A partir de entonces la tarea de la Suprema Corte disminuyó considerablemente, pues no debería conocer, en lo sucesivo, fuera de las causas enumeradas en el artículo 101 de la Constitución, sino en las demandas contra la Nación, en acciones fiscales contra particulares, en procesos por defraudación de rentas nacionales, en apresamientos marítimos bajo estado de guerra, en la extradición de criminales, en las causas criminales cometidas en alta mar a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros, en las referentes a crímenes contra la seguridad interior de la Nación y, en general, en todo proceso cuya pena impuesta exceda de diez años de presidio o penitenciaria. Naturalmente queda subsistente la disposición de la Ley N° 48 relativa a los fallos de los Tribunales de Provincia en que se haya puesto en cuestión la validez de un tratado o de una ley del Congreso o se haya demandado una ley provincial o decreto como repugnantes a la Constitución Nacional.

Como se ve, iba a terminar para la Corte la enorme tarea que significaba la obligación de conocer en todos los juicios, civiles y comerciales, fallados por los jueces federales de la República. Vino en buena hora la reforma, a

(69) Fueron las de la Capital Federal, La Plata, Paraná y Córdoba. Algunos años después se creó la Cámara Federal del Rosario de Santa Fe (septiembre 20 de 1900).

hacer efectivo el pensamiento del Gobierno de la Confederación que, como se recordará, creó Cámaras Federales de Distrito, que la reforma constitucional de 1860 hizo desaparecer; y vino en buena hora porque descongestionaba los repletos casilleros cuando ya el alto tribunal había tenido ocasión, durante cuarenta años, de interpretar el derecho común, que iba a serle ya ajeno, dejando en la colección de sus fallos piezas valiosísimas que constituyen inapreciables modelos para jueces y letrados.

El doctor Antonio Bermejo ingresó a la Corte al morir en 1903 el doctor Paz; pero no fué nombrado Presidente de la misma sino en 10 de mayo de 1905, en reemplazo del doctor Bazán.

Desde muy joven el doctor Bermejo se consagró al servicio de la República, haciéndolo con eficacia y plausible desinterés desde todos los múltiples y difíciles cargos que ha desempeñado en su larga actuación. Apenas contaba veintidós años cuando fué electo diputado a la Legislatura de Buenos Aires; senador más tarde, reveló ya entonces la ecuanimidad de criterio y el reposo espiritual que han hecho, después, de él uno de los hombres más ponderados que haya tenido el país. Su afición al estudio destacólo entre sus compañeros, al extremo de ser designado profesor de filosofía y matemáticas en el mismo colegio en que se educaba; su actividad docente culmina en la cátedra de Derecho Internacional Público que, por muchos años, desempeñó en la Facultad de Buenos Aires.

En dos épocas distintas estuvo en la Cámara de Diputados de la Nación y tuvo a su cargo, durante la Presidencia del doctor Uriburu, el Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública, en cuyo desempeño, así como en el de legislador, se esforzó por hacer obra útil y duradera. En 1901 fué a México como Presidente de la delegación argentina al Congreso Pan Americano; y cuando éste se reunió en Buenos Aires, por mayo de 1910, el doctor Bermejo lo presidió.

El doctor Bermejo continúa la serie de los grandes presidentes de la Corte. « Sus vastos y profundos conocimientos « en las ciencias políticas, como en las jurídicas y sociales. « su claro talento, su ponderación y su ecuanimidad, han « hecho de él ya un personaje consular; el pueblo, sin distinción de ideas ni de partido se descubre a su paso, saludándolo con respeto. » Está identificado con el Tribunal que, desde hace quince años, preside. Todo lo que el público supone en la Corte, como atributos de su alta jerarquía, — sabiduría, rectitud, reposo — lo personifica en sí el doctor Bermejo, cuyo nombre no es posible ya separar de la idea de justicia, a tal punto se ha acostumbrado el país a esperarla y lograrla de él en forma tan amplia y cumplida. No es extraño, pues, que a menudo se vuelvan los ojos al Presidente de la Corte cuando la confusión se produce en el campo político y se piensa serenamente que la alta dirección del Estado exige hombres de las condiciones del doctor Bermejo.

Son innumerables las cuestiones resueltas en este período por la Corte relativas a la facultad de las provincias para dictar leyes creando impuestos al comercio interprovincial. Como si un recrudecimiento de la vieja idea autonomista se hubiese producido, como si soplase un viento que llevaba el contagio por doquier, algunas provincias coincidieron en el designio de buscar fuentes de recursos en conceptos

que les estaban vedados por expresas disposiciones constitucionales. La Corte tuvo, así, por algún tiempo, como principal actividad, la de estar estudiando aquellas leyes locales y pronunciando su desahucio con las consiguientes órdenes de devolver las sumas cobradas. Procuraremos, en el estudio de los diversos fallos, aislar los conceptos fundamentales de los mismos, con referencia únicamente al punto constitucional debatido, ya que las otras cuestiones resueltas al mismo tiempo, relativas al derecho civil, escapan a la orientación y propósitos de este libro.

Igualmente fueron numerosas las cuestiones resueltas por la Corte sobre infracciones a la ley electoral, como así mismo a la ley prohibitiva de los juegos de azar. En estas materias, también, destacaremos de las múltiples resoluciones las ideas centrales que contienen, a fin de poner de manifiesto el *substractum* de la jurisprudencia que, hasta el presente, no ha habido oportunidad de modificar.

La Legislatura de Tucumán había dictado en julio de 1902 una ley creando un impuesto adicional de medio centavo y cuarenta centavos, respectivamente, según el prorratio que en la misma se establecía sobre la producción de azúcar correspondiente a la cosecha de ese año. Los industriales pagaron las sumas exigidas por el Gobierno, pero trajeron la cuestión a la Corte, planteando la inconstitucionalidad del gravamen sancionado.

Según la presentación hecha por los dueños del Ingenio Santa Ana, la ley era contraria a los artículos 10, 14, 28 y 16 de la Constitución Nacional, no sólo porque gravaba la libre circulación en todo el territorio de la República de los productos nacionales, sino porque limitaba y prohibía

de hecho el ejercicio de una industria lícita y quebrantaba el principio de igualdad en el impuesto. En efecto, el impuesto creado con el nombre de adicional sobre la totalidad de la cosecha de azúcar de 1902, hacía un prorrateo de 71.500 toneladas entre determinadas fábricas, las cuales debían pagar por cada kilo de azúcar *elaborada* medio centavo y cuarenta centavos por cada kilo que *expendiesen*, sobre la cantidad que se les había señalado; a los ingenios no comprendidos en el prorrateo, paralizados desde hacía años, que trabajasen en la cosecha de 1902, se les asignaba para el pago de medio centavo por cada kilo, la cuarta parte de la que fabricasen.

Ahora bien, en el caso concreto de los dueños del Ingenio Santa Ana, resultaba que habían fabricado en 1902 15.650 toneladas de las que habían vendido antes de la promulgación de la ley 1.061.312 kilos que les fueron contados entre los 8250 toneladas que se les acordó en el prorrateo, obligándoseles así a pagar la suma de 5306 pesos en concepto del impuesto adicional de medio centavo, con violación del principio de la retroactividad de las leyes.

Al contestar la demanda, la Provincia sostuvo que la ley impugnada no tenía por fin proporcionar recursos al fisco, sino que se inspiraba en propósitos de bienestar común, orden, seguridad y progreso social, lo que se lograría evitando la superproducción de azúcar.

Al resolver la Corte manifestó, ante todo, que no le correspondía apreciar las ventajas económicas que se perseguían con la ley, sino únicamente declarar si contrariaba o no algún texto constitucional. Sin embargo, dado que se había insistido tanto sobre ello en el debate promovido ante el Tribunal, se hacen en la sentencia consideraciones sobre el particular.

Entrando al terreno constitucional, la Corte declara francamente que la ley es contraria a los artículos 14 y 16

de la Constitución que consagran el derecho de ejercer toda industria lícita y el de la igualdad ante la ley como base del impuesto y de las cargas públicas. «Ahora bien — « dice la sentencia—siendo cierto que el impuesto de 40 « centavos por kilo con que se ha gravado toda la producción de azúcar excedente de la cantidad de toneladas « prorrateadas en la ley, ha hecho imposible, en condiciones comerciales, el ejercicio en Tucumán de la industria « azucarera, así como el expendio del producto de la misma « en toda la República, fuera del límite del prorrateo establecido, desde que el precio del kilo de azúcar no ha « llegado, antes ni después de la sanción de la ley, al « valor de la tasa de cuarenta centavos del impuesto, como « lo ha reconocido el apoderado de la Provincia y desde « que ningún industrial puede razonablemente atreverse a « fabricar azúcar y expendirla dentro de la Nación para « pagar al Gobierno de Tucumán mucho más del valor que « tiene en el mercado, que, por lo tanto, es de toda evidencia que la ley en la parte que prohíbe, con el impuesto de 40 centavos por kilo, el expendio dentro de la « República, del azúcar que se fabrica en los ingenios de « la provincia, fuera del límite de toneladas que ella prescribe, es claramente inconstitucional, como contraria a la « franquicia acordada a todos los habitantes de la República. « por el artículo 14 de la Constitución, de trabajar y ejercer toda industria lícita, como de comerciar.» Y no podía en el caso hacerse el socorrido argumento de que las garantías constitucionales están sujetas a las leyes que reglamentan su ejercicio, porque la ley de Tucumán llevaba la reglamentación hasta el extremo de extinguir el derecho, poniéndose de esa manera en contra de otra regla constitucional que dice que los principios, garantías y derechos no podrán ser alterados por las leyes reglamentarias (artículo 28).

La Provincia había hecho valer en juicio el argumento de que no existe ley alguna que limite su facultad impositiva desde el punto de vista del monto del gravamen, que es cosa que sólo puede estar librada a la sabiduría y prudencia del legislador. «Que es de observar,—arguye « la Corte a este respecto,—que la verdad de esta doctrina « no es absoluta en el sentido en que se la expone, pre- « tendiendo consagrar por su medio la soberanía ilimitada « de las autonomías provinciales en materia de impuestos, « porque con tal alcance ella es una doctrina falsa..... « Que estas prescripciones sirven indudablemente para de- « mostrar que las autonomías económicas no autorizan a dar « a sus leyes de impuestos, ni de otra cualquier clase, la « virtud de sustraerlas del legítimo control del Poder Ju- « dicial de la Nación.»

Por la misma época los industriales Nougues Hermanos se presentaron ante la Corte, con motivo de la misma ley, solicitando un pronunciamiento en virtud del cual el Gobierno de Tucumán se abstuviese de seguir cobrando el impuesto adicional. Como se comprende, una demanda semejante no podía prosperar y fué rechazada.

La ley número 4097 fué dictada en 1902 para reprimir los juegos de azar en la Capital y Territorios Nacionales. El 15 de noviembre de ese año la autoridad policial se constituyó por la noche en un club de la calle Alsina 636, sorprendiendo a varias personas que jugaban al *baccarat* y a la *guitarrita*; se secuestraron fichas, dinero y otros efectos, al par que aquellas fueron detenidas. Instruido el proceso, el Juez Correccional dictó sentencia absolutoria; pero la Cámara de Apelaciones condenó a los procesados a la

pena de ley. Se dedujo, entonces, un recurso de inconstitucionalidad para ante la Corte, improcedente a juicio del Procurador General, por cuanto el Congreso, como legislatura local, pudo dictar la ley.

«Que no es necesario examinar,—dijo la Corte al resolver,—la cuestión de lo que debe entenderse materia « propia de un Código Penal, para los fines de delegación de « poderes hecha al respecto en el Congreso, toda vez que « éste, al sancionar el Código Civil, ha reconocido a las « autoridades locales el derecho de reglamentar el juego « (artículos 2055 y 2069); que esta reglamentación, ya se considere un derecho reservado por las provincias, como el « de legislar sobre abusos de la libertad de imprenta y otras, « ya el de un derecho que el Congreso las autorice a ejercer, « implica necesariamente la facultad de penar las « infracciones a aquella, *en tanto no se produzca conflicto « con el Código Penal* o con otras leyes propiamente nacionales por su fuente y efectos, lo que no sucede en el « *sub-judice*.»

El mismo principio fué sustentado en otro fallo recaído en un caso resuelto por la justicia criminal de La Plata, en que se había aplicado la ley provincial de juegos de azar de 28 de mayo de 1902. Una persona imputada de consentir que en su casa se practicaran juegos prohibidos fué condenada por el Tribunal de segunda instancia, de cuyo pronunciamiento se articuló un recurso de inconstitucionalidad para ante la Suprema Corte de la Provincia, fundado en que la ley era contraria a la Constitución de la misma y a la de la Nación. El Tribunal resolvió en el sentido de que la ley no contrariaba ningún precepto del Código fundamental del Estado. En cuanto a la Corte Federal, no hizo sino reproducir la argumentación hecha en el caso primeramente relacionado.

Como se ha visto, el argumento que se hacía en contra

de ambas leyes era el de que ni el Congreso Nacional como legislatura local, ni la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, podían dictar leyes destinadas a castigar infracciones, pues esta función es de índole general; debe considerarse parte integrante del Código Penal, que sólo puede ser dictado por el Congreso Nacional. Así presentada la cuestión, indudablemente, pareciera que el recurso era viable; pero si se tiene en cuenta que el juego no es un acto ilícito por motivos de justicia absoluta, ni lo es en todo tiempo y en todos los lugares, y que su prohibición obedece a razones de utilidad o de moralidad, si se quiere, pero no a la necesidad de garantizar el derecho de la sociedad o del individuo, no reuniendo, por consecuencia, los caracteres propios del delito, se comprenderá entonces la razón por la cual la penalidad del juego ha quedado fuera del Código Penal y librada a la legislación local, como quiera que el problema varía de una provincia a otra, en forma, como en intensidad. Y no resultando que las leyes represivas a que se ha hecho referencia invadían el campo de acción del Código Penal, debe desecharse, como se desechó, la inconstitucionalidad de las mismas.

Estaba recién sancionada la Ley N° 4161 sobre elecciones nacionales, cuando a fines de 1903 se reunió en Buenos Aires una «convención de notables» que proclamó al doctor Manuel Quintana candidato a la Presidencia de la República. Muchos de los concurrentes a la convención, —cuya *notabilidad* emanaba de los cargos que habían ocupado, —desempeñaban en ese momento funciones públicas, tales como ministerios provinciales, jefaturas de grandes reparticiones, etc. De esta manera fueron llevados ante la justicia el

Ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, señor Juan Manuel Ortiz de Rozas, el Prefecto General de Puertos, Luis García y otros, a quienes se imputaba haber infringido el artículo 110 de la ley electoral, por cuanto su asistencia a la convención significaba *recomendar candidaturas al electorado*, lo que les estaba prohibido hacer a los funcionarios públicos (70). Los tribunales inferiores condenaron en algunos casos y absolvieron en otros; la apelación a la Corte se fundó en el hecho de que se había puesto en discusión la integridad de una ley del Congreso.

Don Luis García, Prefecto General de Puertos, fué absuelto en ambas instancias. Ante la Suprema Corte se plantearon varias cuestiones atinentes a otros tantos preceptos de la ley electoral, las que fueron resueltas en la forma que ha de verse en seguida.⁴

Disponía la ley que las infracciones de la misma serían sustanciadas en primera instancia ante los jueces del fuero ordinario de la Capital y sería la Cámara Federal la que conociera en grado de apelación; y la cuestión planteada ante la Corte se refería a que la ley electoral, al disponer semejante cosa, contrariaba los preceptos constitucionales con-

(70) En la Convención Republicana de Chicago, reunida en junio de 1920 para recomendar candidato a Presidente de los Estados Unidos, había gobernadores y hasta jueces; y fué, precisamente, el gobernador Allen el que recomendó a la asamblea la candidatura del general Wood. Y a la Convención del Partido Demócrata, que debe reunirse en San Francisco, se anuncia desde ya que asistirán cuatro de los ministros actuales del presidente Wilson.

No se concebirla, sin embargo, que por esa intromisión en las actividades del partido a que pertenecen, aquellos funcionarios fuesen perseguidos judicialmente. Las instituciones han llegado allí a afianzarse en una forma tan definitiva, existe de tal manera arraigado el sentimiento de respeto que inspiran a todos, ciudadanos y gobernantes, que a nadie se le ocurriría pensar que esas instituciones corren peligro por el hecho de que un gobernador o un ministro *recomienden* a sus partidarios una candidatura. Otra cosa sería si se atreviesen a poner al servicio de esa candidatura el peso de la función pública que desempeñan.

tenidos en los artículos 94 y 100 que disponen que las leyes nacionales, no siendo códigos, habrán de ser aplicadas por la Corte o por los tribunales inferiores de carácter federal. Pero la Corte entendía que al darles el Congreso jurisdicción en materia electoral a los jueces ordinarios no había extendido la jurisdicción federal a tribunales que traen su origen de un poder extraño, sino del mismo poder legislativo de la Nación. Era así, en efecto; no se había extendido la jurisdicción federal, pero habían sido cercenadas atribuciones expresas de la Constitución, en forma tan flagrante, que los jueces federales de la Capital quedaban en inferioridad de condiciones a los del resto de la República. ¿Cómo explicar la contradicción que resulta de la aplicación de una ley eminentemente nacional por jueces que no son los de la Nación? Porque si el Congreso hubiera obrado como legislatura local, — tal como lo habría hecho si en vez de ley nacional de elecciones hubiese dictado la ley electoral municipal, — entonces sí que habría podido atribuir a los jueces ordinarios locales el conocimiento de las infracciones que se cometieran; y la prueba de que las cosas son así y no de otra manera, está en que la ley vigente en materia de elecciones atribuye a los Jueces Federales el conocimiento de esos asuntos.

Entrando al fondo de la cuestión, esto es, a la averiguación de si García había cometido o no el delito imputado, la Corte dice: « Que si bien el acusado pretende haber concurrido a la Convención electoral en su carácter personal y privado, y no como funcionario público, la ley no ha marcado esta dualidad, penando a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas que recomiendan a los electores el dar o negar su voto a personas determinadas, por el solo hecho de hacer la recomendación, sin distinguir si lo hicieron en el carácter de tales autoridades o como simples particulares. » La Corte condenó, pues, al Prefecto

General de Puertos a la pena de nueve meses de arresto, pérdida del empleo, y privación del derecho de sufragio durante cinco años.

Fué una sentencia justa; porque es pueril la afirmación de que no asistió el procesado a la Convención como funcionario público sino como simple particular. El desdoblamiento es imposible cuando está de por medio una actividad política como era la de convencional. Para los varios cientos de empleados de la Prefectura General, que veían a su jefe recomendando que se votara por determinada candidatura presidencial, no era el particular Luis García quien lo hacía, sino el superior jerárquico de quien dependían aquellos y a quien deseaban todos agradar. Los tiempos han cambiado, sin embargo. Con haberse adelantado electoralmente, en el sentido de que no se compran votos, ni hay incorrecciones en los escrutinios, no se ha perpetuado el designio de castigar a los empleados públicos que concurren a las convenciones electorales de partido. Será, tal vez, porque como ahora el voto es secreto no está en aptitud el elector de probarle al jefe de la repartición en que está empleado, que votó por las candidaturas que aquél, como convencional, recomendara.

Mucho se discutió entonces acerca de si los procesos electorales a que nos hemos referido podían ir a la Suprema Corte en tercera instancia. La Ley N° 4055 dispone que de los fallos de las Cámaras Federales se podrá recurrir ante aquélla en todos los casos previstos por el artículo 14 de la ley de 1863 sobre jurisdicción y competencia. Como se sabe, es este un recurso *sui géneris* en virtud del cual el alto Tribunal Federal revisa un fallo dictado por la justicia local. El doctor Wilmart hace notar que « hay cierta « *gaucherie* en aplicar ese recurso a las Cámaras Federales, porque lo razonable habría sido fijar los casos en que de esa segunda instancia federal se puede pasar a

« una tercera igualmente federal. » En efecto, porque en la práctica resulta posible a las partes plantear desde el principio la cuestión en forma de dejar expedito el camino a la tercera instancia. . . . Sólo que la Corte tiene defensas formidables contra estos avances.

Lo que más apasionó, empero, el comentario público en esos días, fué el saber si realmente los funcionarios asistentes a la Convención habían infringido o no la ley electoral. Algunos, se sabe, consultaron con abogados a quienes consideraron libres del apasionamiento político del momento. « He aquí un alto funcionario, — dijo el doctor Wilmart — « casi un ministro; de él y de su buena o mala voluntad « depende la tranquilidad de muchos vecinos; si él llama « a algunos de estos (o les escribe o envía mensajes) para « que voten por fulano o contra zutano, está patente que « infringe el artículo citado y que, aún sin existir este, « incurre en acto desdoroso, indigno de la delicadeza con « que debe desempeñar su puesto. Pero ¿qué de común « tiene con esa intervención anacrónica el que ese funcionario, en un momento histórico, en el que hay partidos « capaces de dar lugar a una lucha electoral digna de ese « nombre, acuda con otros a una cita patriótica. . . . con « el objeto de buscar en común y con prescindencia de « partidos el medio de proclamar el nombre que resulte « con mayoría? ¿Cómo puede suponerse que esa recomendación, en conjunto, *al país*, de una persona que talvez « no ha sido de la simpatía personal del funcionario, producirá sobre los individuos, en cuya tranquilidad puede « influir su buena o mala voluntad, el mismo efecto que « una recomendación que dicho funcionario hiciera *a tales individuos?* » (71). Sin duda está dada vuelta y planteada con habilidad insuperable la cuestión; pero en el fondo

(71) REVISTA JURÍDICA Y DE CIENCIAS SOCIALES, año 1904.

de las cosas sigue siendo el jefe de una vasta repartición que, de un modo o de otro, recomienda que se vote por determinada candidatura.

Se recordará que la Corte había declarado inconstitucional una ley de la Provincia de Buenos Aires sobre impuesto a las herencias, fundándose en que esta creaba una legítima forzosa extraña a la legislación civil, compendiada en el Código sobre la materia, que sólo el Congreso Nacional puede dictar. De nuevo se presenta la cuestión ante la Corte. Se trataba de una ley de la Provincia de Santa Fe que fijaba un impuesto hasta de diez por ciento cuando la transmisión hereditaria era entre extraños.

La Corte declaró que la ley demandada no podía considerarse inconstitucional por cuanto no era a título de heredero que la Provincia de Santa Fe se había cobrado en la ocasión el diez por ciento del haber hereditario, en cuyo caso no podía decirse que se había modificado por virtud de la ley el régimen hereditario establecido en el Código Civil. « Que no puede decirse,—agrega,— que la ley citada « acuerda a la Provincia de Santa Fe los diversos derechos « en la sucesión, propios y constitutivos de la calidad de « heredero, ni las obligaciones correspondientes a la misma; « ni ha venido a quedar dicha provincia, en virtud de esa « ley, sometida a otras disposiciones legales que rigen con « relación a los verdaderos herederos o que se pretenden « tales. » También encontraba la Corte que un impuesto provincial sobre las herencias no puede clasificarse dentro de ninguno de los expresamente prohibidos a las provincias como contrarios a grandes propósitos nacionales; « que menos « puede sostenerse que él se halle implícitamente prohibido

« por su incompatibilidad con determinados derechos y garantías consagrados en la Constitución, como no lo están otros impuestos, en tanto no se consideren una confiscación de bienes o graviten sobre los medios empleados por la Nación para poner en práctica sus poderes. »

El doctor Bunge estuvo en disidencia con esta interpretación y sostuvo la de la mayoría de la Corte en el caso recordado de doña Tomasa Vélez Sársfield. Es de hacer notar que también entonces hubo dos votos en disidencia, los de los doctores Domínguez y Tejedor; pero en la sentencia de ahora, favorable a la constitucionalidad de la ley, no se hacen los mismos argumentos que entonces se hicieron para llegar al mismo resultado. Los doctores Domínguez y Tejedor se detuvieron más en el terreno de la facultad de las provincias para procurarse recursos.

Poco tiempo después, la Corte declaró constitucional una ley análoga de la Provincia de Mendoza.

Fué en la demanda promovida por *Las Palmas Produce Company Limited* contra la Provincia de Buenos Aires, donde la Suprema Corte acumuló el mayor número de fundamentos relativos a la facultad de las provincias para gravar con impuestos el comercio interprovincial. Bien es cierto que en los primeros tiempos de la existencia del Tribunal algún caso se ventiló vinculado con tan árduo punto constitucional; y aún poco tiempo antes del caso de *Las Palmas*, en una demanda de don Faustino Alsina, la Corte dejó planteadas las cuestiones que luego habría de desarrollar con mayor amplitud, en consonancia con el enorme interés que llegó a despertar en el público la contienda jurídica en que estaba empeñada de un lado la Provincia de Buenos Aires

y del otro los particulares que desconocían el derecho para cobrar el impuesto.

Correspondía pagar éste, según la ley impugnada, antes de mover el producto del lugar de producción o depósito para entregarlo a la circulación comercial. La empresa actora debió así abonar una muy fuerte suma para poder enviar al exterior sus productos y sub-productos elaborados en Zárate.

Encontraba la Corte al fallar, que la ley de la Provincia de Buenos Aires era aplicable a actos de comercio interno e internacional o interprovincial, desde que su artículo 2º disponía que el pago del impuesto a la producción se afectaría antes de mover el producto, *cualquiera que fuese el lugar del destino*, sin que estuviesen eximidos de él las extracciones para puntos fuera de la Provincia (art. 5º). El representante de esta había hecho notar que el impuesto no recaía sobre el acto de la exportación, habiéndose tomado esta oportunidad por razones de equidad y para evitar cálculos difíciles y complicaciones en la percepción; pero para el Tribunal esta no fué una razón valedera; « pues « para que un impuesto se diga establecido con motivo de « la extracción de productos de una provincia, basta, a los « fines de la prohibición constitucional, que él se exija en « el acto de la extracción, cualquiera que sea la clase y « ubicación de las oficinas recaudadoras, porque en tales « condiciones el gravamen afecta al comercio internacional « o interprovincial, escogiéndose de todos los periodos de « producción y distribución de la riqueza pública local, el « que está fuera de los poderes de imposición de las provincias. » Menos cabía sostener en el presente caso que el impuesto no era a la exportación o con motivo de ella sino a la producción misma, desde que se afirmaba por el representante de la Provincia que aquél no era cobrado si los productos no se enajenaban o se inutilizaban, no obs-

tante que ni la falta de venta, ni la destrucción de los valores dejan sin efecto, en ambos supuestos, el hecho calificado como generador de la contribución.

Por lo demás, había también que tener en cuenta que los Frigoríficos contribuían a la formación de la renta provincial, no por lo que producen dentro del territorio de la Provincia, al amparo de sus leyes e instituciones locales, sino en la medida que mueven sus productos con destino dentro o fuera de aquélla; «de manera que, en realidad, es « la circulación territorial y económica la causa inmediata y « determinante del pago de derechos al Fisco Provincial. »

En la demanda de *Freitas y Gurgio* contra la Provincia de Corrientes sobre inconstitucionalidad de una ley análoga a la de Buenos Aires, la Corte abundó en estas otras consideraciones: «Que la protección federal al comercio y la « navegación interior (artículos 10 y 108 de la Constitu- « ción) sería incompleta y en muchos casos ilusoria si « estuviera limitada, en operaciones inequívocas de ese « carácter, equiparadas en un todo a las internacionales, a « uno solo de los elementos indicados, que en el orden natu- « ral de las cosas, no se llevan a cabo en el mismo tiempo, « pues la venta debe preceder a la entrega y ésta al tras- « lado; lo que ciertamente no implica la prohibición de « gravar esos actos en otros casos, es decir, cuando no « constituyen en su conjunto, la circulación cuya libertad « consagra el Congreso..... Que un impuesto exigido « al salir de una provincia los valores sobre que recae « no deja de ser a la extracción o exportación o con mo- « tivo u ocasión de ella, simplemente porque su funda- « mento se haga consistir, y lo esté efectivamente, en « compra-ventas internas anteriores, en la producción o en « cualquier otro que pudiera invocarse; *porque admitido « esto, quedaria de hecho suprimido todo el sistema de la « Constitución en la materia....* »

En la demanda del Ferrocarril Central Argentino contra la Provincia de Santa Fe sobre la misma materia, agregó la Corte este otro razonamiento: «En cuanto al segundo, que es una inmunidad con la que la Constitución ha querido garantizar la libre circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, prohíbe a la Nación establecer todo gravamen sobre ellos, cualquiera que sea el punto de la República a que se dirijan, quedando *a fortiori*, prohibido a las provincias todo impuesto, aún cuando circulen transportándolos de un punto a otro dentro de su territorio y en tanto no estén definitivamente incorporados a su riqueza general.»

También el doctor Bernardo de Irigoyen promovió demanda contra la Provincia de Buenos Aires, dando ocasión a la Corte para reforzar su interpretación restrictiva del derecho de las provincias para gravar el libre tránsito de efectos de la producción nacional; «y para que un impuesto se diga establecido con motivo de la extracción de esos productos, basta que él se exija en el acto de la extracción, sin que sea necesario que el legislador local exonerare de dicho impuesto los productos restantes de la misma naturaleza.»

En todos estos casos la Corte ordenó la devolución de todas las sumas que se habían cobrado.

Contemporáneamente se presentaron a la solución de la Corte otros casos relacionados con la facultad impositiva de las provincias, en la solución de las cuales, al reafirmarse en su tesis relativa a la inconstitucionalidad de todo impuesto destinado a gravar el comercio interprovincial, proclamó la inalienabilidad del derecho de aquéllas para imponer contribuciones al comercio interno. El Frigorífico «Las Palmas» había hecho una compra de haciendas, y al ser transportadas éstas del Partido del Pilar al de Zárate, el vendedor fué obligado a pagar el impuesto provincial

a la producción. Ya se ha visto como, a pesar de este nombre, lo que en realidad se gravaba era el tránsito interprovincial; pero en el caso el representante de Buenos Aires sostuvo que la hacienda no había salido de su territorio, dentro del cual, obraba en ejercicio de atribuciones propias.

La Corte no necesitó mayores fundamentos para declarar que la ley, en esa parte, no era repugnante a la Constitución.

El doctor Cornelio Moyano Gacitúa fué nombrado para integrar la Corte, en 18 de mayo de 1905, a raíz de la muerte del doctor Bazán.

El doctor Moyano Gacitúa, nacido en Córdoba y recibido en su Universidad, había hecho allí toda su actuación pública de magistrado y catedrático. Durante muchos años fué Juez Federal acreditándose como hombre de ley. Pero fué, sin duda, su enseñanza del Derecho Penal lo que más contribuyó a consagrar la fama del futuro Ministro de la Corte, a la que llegó consagrado por el consenso público.

Con motivo de unos sucesos políticos que se desarrollaron en Santiago del Estero, a mediados de 1905, fueron detenidas varias personas acusadas de rebelión. Los tribunales locales habían negado la excarcelación bajo fianza, fundándose en que una disposición expresa de la Constitución de la Provincia (artículo 26) así lo disponía.

Se dedujo ante la Suprema Corte Nacional un recurso de inconstitucionalidad, respecto de la cual, el Procurador

General dijo que el artículo de la Constitución de Santiago no atacaba ninguna garantía acordada a los habitantes de la República por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que se invocaba en el recurso.

La Corte expresaba en su fallo que la Constitución Nacional no contiene disposición expresa sobre excarcelación provisoria y, por otra parte, implícitamente, muchos textos de ella la consagran como una garantía. Pero lo primordial para el Tribunal era el carácter de la pena atribuida a la rebelión. Se recordará, en efecto, que había resuelto, en un caso que se registra en capítulos anteriores, que el destierro no era una pena corporal y, por lo tanto, « constituye una « sanción cuya aplicación puede asegurarse eficazmente por « medio de fianza, pues esta hace imposible que se eluda « la segunda. » Todos los argumentos del fallo se dirigen a poner de manifiesto las características del delito, la seguridad que importa la fianza, etc., pero nada se dice en qué puede la prohibición contenida en la Constitución de Santiago relativa a excarcelación en caso de rebelión, contrariar el artículo 18 de la Constitución, que se refiere a la necesidad de juicio previo, a los jueces naturales, a la declaración contra sí mismo, a la necesidad de orden escrita para el arresto, a la inviolabilidad de la defensa, etc.

La Municipalidad del Rosario de Santa Fe había cobrado en 1902 al Ferrocarril Central Argentino diversas sumas de dinero por concepto de impuestos, cuya improcedencia alegó la empresa fundándose en que estaba exonerada de ese pago por su ley de concesión. El representante de la Municipalidad dijo que el impuesto cobrado se refería a dependencias de la demandada en el centro de la ciudad y no en la zona de sus instalaciones propiamente ferroviarias.

Al resolver la Corte, consigna las palabras que van a transcribirse a continuación, comprensivas de un intergi-versable pensamiento, definitivo, categórico, que fué modificado después, sin embargo, dando lugar al cambio fundamental que se operó en la jurisprudencia de la Corte, en materia ferroviaria. « Que la redacción del artículo citado (de « la ley de concesión a Mr. Wheelwright, en 1863) comprendiendo la amplia expresión de « toda contribución o impuesto » interpretada a la luz del artículo 67 inciso 16 de « la Constitución Nacional, produce el convencimiento (la « redacción) de que la ley no sólo ha querido exonerar de « cargas o impuestos nacionales, *sino también provincia-les y municipales; porque si así no fuera no habría concedido nada*, ni sido posible llenar los fines de la ley « una vez que tratándose de un ferrocarril que debía at-« vesar provincias y municipios, tendría que pagar toda clase « de impuestos locales, y de que la concesión se fundaba « en la conveniencia de promover el bienestar general de « la industria, la inmigración, la construcción de ferroca-« rriles por medio de leyes protectoras de esos fines y por « concesiones temporales de privilegios y recompensas de « estímulo. *Que aún cuando la ley contrato de 1863 nada haya dicho sobre impuestos municipales, estos están co-« mo implicancia necesaria* en los propósitos de la ley (sin « embargo, en la ley 5315 *expresamente* se habla de im-« puestos municipales, de modo que ya no era necesario « hablar de implicancia; lo cual, en vez de contribuir al « afianzamiento de aquella interpretación, la modificó, más « bien!!) y de la cláusula constitucional citada, *pues según la doctrina y la jurisprudencia, dado un poder por la Constitución, los medios necesarios para llevarlo a cabo se juzgan siempre implícitos y el alcance de los mismos es que el Congreso tenga todas las atribuciones que sean necesarias y convenientes para hacer efecti-*

« vos los poderes que le han sido conferidos de una manera expresa. »

Difícilmente podía concretarse mejor una interpretación jurídica, que era a la vez alto pensamiento de gobierno, en armonía con reales exigencias del progreso de la República. Pudo creerse que iban esas palabras a quedar como piedra angular de una jurisprudencia que, de modo tan claro, interpretaba las conveniencias generales. Pues bien, cuando la ley 5315 se dictó, las empresas que se acogieron al régimen que creaba, lo hicieron seguras de que era más ventajosa para sus intereses que las respectivas leyes particulares de concesión. ¿Y cómo no iban a creerlo si lo que en éstas era *implicito*, estaba en aquella *expresamente* acordado! Los impuestos municipales que en las leyes anteriores no se enumeraban, y que la Corte los declaró comprendidos en la exoneración por implicancia, en la ley 5315 están enumerados y expresamente exonerados.

Pero, volviendo a la demanda contra la Municipalidad del Rosario, sólo queda decir que la Corte encontró que las oficinas de telégrafos que la empresa tenía establecidas fuera del perímetro de la línea férrea, aun cuando relacionadas con la explotación, no podían considerarse como indispensables para ésta y no estaban, por lo tanto, comprendidas en la exoneración del impuesto municipal.

En una demanda promovida pocos días después, entre las mismas partes, se planteó la inconstitucionalidad de la ley de 1863 que otorgó la concesión a Mr. Wheelwright. El recurso se planteó ante la Corte basado en que una ley federal no podía, sin violar el artículo 104 y siguientes de la Constitución, obstaculizar, mediante una exoneración expresa, el derecho de las provincias y municipalidades para crear impuestos. Sin duda, esta facultad provincial venía a estar en conflicto con la otra disposición constitucional

que otorga al Congreso Nacional la facultad de dictar leyes destinadas a fomentar, entre otras cosas, la construcción de ferrocarriles, mediante concesiones temporarias de privilegios y estímulos, siendo una de estas concesiones la que se había otorgado al Ferrocarril Central Argentino. En estas condiciones era improcedente la alegación de inconstitucionalidad. « Que por lo tanto, *los impuestos de limpieza, alumbrado, barrido y macadanizado, que ha establecido y cobrado la Municipalidad son contrarios a las disposiciones de la ley y de la Constitución Nacional.* » Y, cabe preguntar: ¿Cómo es que después resultaron no ser contrarios a la Constitución Nacional, precisamente cuando la ley, de una manera expresa (antes era por implicancia) los exoneró?

La ley 5315 se dictó por esta época; y si bien fué su autor visible el diputado Emilio Mitre, puede considerarse que no traduce la idea aislada de un hombre solo; « sino que — como lo ha dicho el Juez Padilla — consagra todo un « pensamiento de gobierno, a cuya elaboración han concurrido con sus medios propios de información, ilustración « y fiscalización, los dos poderes políticos de la República ». ¿Cuál era ese pensamiento de gobierno? ¿Era malo y venía la ley a rectificarlo, o era bueno y ésta se dictó para afianzarlo?

Alberdi había dicho, recordando que en Lima se diera un convento y noventa y nueve años de privilegio al primer ferrocarril que se construyó, « que los caminos de « hierro son en este siglo lo que los conventos eran en la « Edad Media; cada época tiene sus agentes de cultura ». Y si estas palabras pueden ser consideradas el punto de partida de una política, hay que convenir que el desarrollo de esa política no había traicionado hasta entonces un principio que demostraba hasta qué punto se juzgaba necesario entre nosotros el auxilio del riel para lograr los pro-

gresos materiales y morales que habían sido el norte de los organizadores de la República.

Sobre la base, pues, de un designio evidente de otorgar privilegios y estímulos al capital europeo, se dictaron leyes, que la Corte interpretó después en la forma que dejamos analizada, tendientes, a la vez, a centralizar las facultades relacionadas con el progreso y bienestar general. Es de esta manera que se consiguió consolidar el gobierno, fundar el crédito nacional y crear una fuerza económica colectiva, sin que en ningún momento hayan estado en peligro las instituciones, no obstante haber el Congreso legislado frecuentemente en el orden interno de las provincias; casi ha sido su tarea principal. De modo que, cuando con el propósito de uniformar las concesiones particularmente otorgadas a las empresas, se dictó en 1906 la ley 5315.—cuando seguía necesitando todavía la República de la expansión de los sistemas ferroviarios,—no podía creerse que la ley se basara en una modificación de esa política; y debieron ser tan claros los fundamentos, como que lo fueron en realidad en boca del diputado Mitre, que las empresas no trepidaron en acogerse a la nueva ley, lo que no habrían hecho, pues la opción existía, apenas hubieran tenido la duda de que al hacerlo traicionaban sus intereses.

En su oportunidad veremos hasta qué punto las empresas estuvieron engañadas.

Cuando un particular gestiona del Gobierno de la Nación la devolución de sumas provenientes de impuestos indebidamente cobrados, ¿es necesaria la venia del Congreso para iniciar la demanda judicial? La respuesta depende de la forma en que se resuelve esta otra cuestión: — cuando per-

cibe impuestos ¿obra el Gobierno Nacional como persona jurídica o como poder público?— La respuesta a ambos interrogantes está en el siguiente fallo de la Corte motivado por una demanda del Ferrocarril de Entre Ríos, a quién se había cobrado impuestos que después se declararon improcedentes. En la sentencia de la Cámara Federal de la Capital se sentaba la teoría de que la Nación, al exigir el pago de un impuesto, procede como entidad soberana, en su calidad de poder público. A juicio del Procurador General, existiendo de por medio un contrato, en virtud del cual, por una improcedente interpretación, el impuesto se había cobrado, debía considerarse que la Nación había procedido como persona jurídica; de modo que no era necesaria la venia del Congreso para que la empresa particular pudiese interponer la demanda, puesto que no se discutía la facultad de imponer, ni se atacaba en lo más mínimo las facultades que para ello tiene la entidad soberana del Gobierno.

La Corte, después de analizar los alcances del contrato, expresaba: «Queda fuera de duda, que por voluntad misma « del poder administrador, había salido de su esfera de acción « independiente, entrando en la categoría de las obligaciones jurídicas comunes. »

Para reemplazar al doctor Kier fué nombrado Procurador General el doctor Julio Botet, Procurador Fiscal a la sazón de la Cámara Federal de la Capital.

Pertenece el doctor Botet a una familia de gran arraigo social. Se graduó en 1882, época en que desempeñaba un alto cargo en la Secretaría del Senado Nacional. Fué diputado a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la época de la fundación de La Plata, a la realización de

cuya obra contribuyó también desde las columnas de la prensa. Ocupó la secretaría de varias intervenciones. En 1894 fué nombrado Procurador Fiscal en la Federal, cargo del que pasó en 1902 a Fiscal de la Cámara Federal: de modo que al jubilarse en 1917 como Procurador General, resultaba que había permanecido veintitrés años en el desempeño del ministerio público, en el orden federal, pasando sucesivamente por sus tres categorías.

Ha dejado el doctor Botet, concretado en su larga colección de dictámenes, todo un cuerpo de doctrina, de uniforme orientación y claramente expuesta, sobre casi todas las cuestiones que se refieren al derecho público y administrativo, en el cual, puede asegurarse, nadie le aventaja.

El Ministro de Marina impuso, como medida disciplinaria, varios días de arresto al teniente de navío Lauro Lagos, arresto que este quebrantó, por lo que se resolvió enjuiciarlo, iniciando al efecto los procedimientos un Juez militar *ad-hoc*. Se interpuso, entonces, a favor de aquél un recurso de *habeas corpus* ante la Justicia Federal, trabándose, así, una contienda de competencia que la Corte debió resolver. Lo interesante del fallo habría sido la solución que en él se diera al punto relativo a la verdadera condición de un militar retirado, esto es, saber si puede, no obstante ese retiro, seguir dependiendo de la autoridad militar y, por lo tanto, sometido a la jurisdicción de sus tribunales.

La Cámara Federal había resuelto que Lagos no conservaba su estado militar, para seguir de ahí que el recurso de *habeas corpus* debía prosperar: de modo que aquella cuestión no podía separarse de dicho recurso para llevarla aisladamente a resolución de la Corte « porque ella no está

« llamada a fijar los límites de sus respectivas esferas de
« jurisdicción a los diversos tribunales de la República, ni
« a enmendar los errores posibles en la interpretación y apli-
« cación de las leyes nacionales.»

Por deficiencias de procedimiento en la forma de trabar la contienda entre el Juez militar y la Justicia Federal, quedó sin solución un grave punto jurídico. Porque si el teniente Lagos seguía sometido a la autoridad militar, el recurso de *habeas corpus* resultaba a todas luces improcedente, desde que resultaba que quería detenerse e iba a ser procesado por un Juez competente, el de instrucción militar. Puede inferirse, sin embargo, de las piezas del expediente, que la Justicia Federal se inclinaba a considerar que aquél conservaba todavía su estado militar.

La tendencia de la Corte a llamar *delitos de imprenta* a toda actividad criminal periodística y a sustraer su conocimiento de la Justicia Federal, llega en el caso que vamos a analizar, a extremos realmente sorprendentes.

Sabido es que todos los asuntos concernientes a cónsules extranjeros son de competencia federal; el precepto constitucional que lo establece parecía no dar lugar a duda. Se encontró, sin embargo, una manera de demostrar que no era absoluto, como se creía.

Ante el Juez Federal de Córdoba se presentó don David Carreras demandando por calumnias al cónsul del Perú en esa ciudad, don Vicente Sánchez, que había resultado autor de unas publicaciones hechas contra aquél, en el diario *La Libertad*. El tal cónsul había dicho, nada menos, que Carreras se había apoderado incorrectamente de gran parte de las rentas que le habían producido a doña Maria Clara

las acciones de una sociedad que aquél manejaba; proclamaba el demandado su derecho a expresarse en esa forma invocando el artículo 14 de la Constitución.

El Juez Federal se declaró competente y condenó a Sánchez, argumentando en el sentido de que, por sobre la disposición constitucional que excluye de la competencia federal los delitos de imprenta, está la disposición del artículo 100 que dispone que los tribunales nacionales conocerán de *todas las causas* concernientes a los cónsules extranjeros; «pues—agrega—aquel artículo (el 32) « lo que ha querido evitar es que de manera permanente « se establezca la jurisdicción de los tribunales de la Na- « ción sobre los llamados delitos de imprenta, pero de nin- « guna manera llega esa prohibición hasta el punto de ex- « cluir a las personas favorecidas por el privilegio del « fuero.» Porque, -- y parece pueril tener que decirlo, -- lo que con más empeño ha querido la Constitución proteger, son los intereses de los representantes extranjeros *sin excepción de ninguna clase*. Esta sentencia fué revocada, empero, por la Cámara Federal de Córdoba fundándose en la serie de fallos de la Corte, sobre la materia, que han sido analizados en capítulos anteriores de este libro.

La Corte, naturalmente, confirmó esta última resolución haciendo mérito de los fundamentos expuestos en el caso del vice-cónsul español. En esa oportunidad el Procurador General había expuesto en estos términos la cuestión: «Si « la regla común del artículo 3º de la Constitución, fué que « el fuero federal no procede respecto de los delitos llama- « dos de imprenta, *aún así aquella regla tendría por « excepción lo dispuesto en el artículo 100 del mismo « código fundamental*. Porque la Constitución como todo « Código, ha establecido una regla general en su artículo « 32 y una excepción especial en el artículo 100 para los « embajadores, ministros y cónsules extranjeros.»

No lo entendió así la Corte, para quien los términos del artículo 32 son absolutos. ¿Acaso no son absolutos también los del artículo 100? Y sería el caso de averiguar si cual de los dos privilegios, el de los que injurian por los diarios para ser juzgados por la justicia local o el de los representantes extranjeros para no ser juzgados sino por la justicia nacional, es más digno de ser salvaguardado por una interpretación judicial. Pero lo curioso es que la misma Corte, en el caso del vice-cónsul español, expresa como punto de partida de su sentencia, que los fundamentos que se tuvieron en vista para sancionar el artículo 32 « *no permiten hacer distinciones entre los casos enumerados en el artículo 100 de la misma Constitución* » como « de fuero federal, en lo que a procesos criminales se refiere. » Y, entonces ¿cómo es que la Corte ha hecho el distinguo, de entre los casos enumerados en el artículo 100, resolviendo que en los casos en que el delito cometido por el cónsul extranjero lo haya sido por la prensa no ha de ser la Justicia Federal quien lo juzgue?

Una vez más hemos de anotar aquí un error de concepto en que comúnmente se incurre. Dice la Corte que los *abusos* de la libertad de imprenta fueron excluidos de la jurisdicción federal por considerarse que no eran ellos verdaderos delitos, sino actos dañosos a la sociedad, del resorte privativo de la soberanía provincial, por lo que la prensa debía estar sujeta a las leyes del pueblo en que se usa de ella. La doctrina es exacta para los casos en que solo se trata de *abusos*; pero siendo la calumnia y la injuria delitos que, en determinados casos, pueden ser juzgados por la Justicia Federal ¿han de resultar excluidos de ella porque se usó un diario para cometerlos? Porque si el cónsul hubiese injuriado por carta, no habría existido duda acerca de la competencia!

Respecto de la facultad de los tribunales nacionales para juzgar personas afectadas a la representación diplomática, la Corte resolvió que tiene jurisdicción originaria para hacerlo en los casos en que el jefe de la misión no reclame al inculpado para remitirlo a su país a los efectos de su juzgamiento, todo esto en nombre del principio de la extraterritorialidad.

Está exceptuado del servicio militar el hijo que con su trabajo contribuya al sostenimiento de su madre viuda. Quiere la ley que en ningún momento, a partir del día en que se quedó sin marido, carezca de la ayuda que el hijo pueda llevarle del producto de su trabajo. «Madre *viuda*» ha dicho el artículo; pero, y la madre abandonada por el marido ¿no es, acaso, también una mujer que se ha quedado sola, sin el hombre que trabajaba para el sustento de ambos? Pues bien, según la Corte, esta madre abandonada no está protegida por la ley; el hijo que con su trabajo le daba el sustento tiene que ir a las filas. «Que el « servicio militar en el ejército de la Nación es un deber « impuesto por la Constitución y la ley, constituyendo la regla « general, limitada en sus efectos *únicamente* en cuanto « se trate de las excepciones que la referida ley haya establecido, *sin que pueda por derecho extenderse a casos « no previstos.*» Porque no es más que una imprevisión de la ley; y si entre nosotros estuviese bien organizada la tarea legislativa, en este caso como en otros en que los defectos de una ley se advierten recién al ponerse en práctica, ya se habrían adoptado las providencias tendientes a subsanarlos.

Después de la vigencia de la ley 5315, uno de los primeros casos judiciales que se plantearan sobre la extensión de sus franquicias, fué en una demanda de la Compañía General de Ferrocarriles contra la Municipalidad del Rosario sobre expropiación, en la cual la empresa pretendió actuar en papel simple.

Indudablemente resultaba una pretensión exagerada la de querer hacer extensivo a ese desembolso la exoneración de *todo impuesto* contenido en la ley. Aunque desde un estricto punto de vista podía sostenerse que la cuestión motivo del pleito estaba íntimamente vinculada con la explotación ferroviaria, resultaba haber una relación muy lejana entre la obligación de actuar en papel sellado y el designio del legislador de no obstaculizar con cargas exageradas el desarrollo de aquella industria. Con todo, el Juez Federal del Rosario encontró que « era evidente que el espíritu de la *Ley Mitre*, en cuanto acuerda el privilegio material de esta petición, no es ni puede haber sido otro que « imponer un sacrificio a las rentas del Estado; debe « entenderse que este privilegio tiene que ser libérrimo, vale « decir, abarcar toda clase de impuestos; que es un « punto fuera de discusión que el papel sellado es un verdadero impuesto, etc. »

La Corte dijo: « Que ni en los términos ni en los propósitos de la Ley N° 5315 aparece comprendida la exoneración del papel sellado para las empresas ferroviarias que « se presenten en juicio, ni se encuentran precedentes de « tal alcance en la jurisprudencia. »

Así era, en efecto. Ninguna de las viejas leyes de concesión habían comprendido el pago del sellado de actuación entre las franquicias que consagraban.

Fué, así, en realidad, la demanda de la Municipalidad de Tucumán contra el Ferrocarril Central Argentino, el primer caso en el cual le fué dado a la Corte resolver sobre la facultad del Congreso para exonerar de impuestos municipales a las empresas ferroviarias, *bajo el régimen de la nueva ley N° 5315*.

La empresa, que tenía una concesión otorgada en 1863 y cuyas cláusulas fueron siempre interpretadas por la Corte en el sentido de que no estaba obligada a pagar impuestos municipales, se acogió en 1907 a la Ley N° 5315 que consagraba esa exoneración de una manera expresa, en su artículo 8°, cuando dice que las empresas pagarían « una « contribución *única*, quedando exoneradas de *todo otro impuesto nacional provincial y municipal.* » El diputado Mitre había dicho, a mayor abundamiento, en el debate legislativo: « En el artículo 8° está consagrada la reforma principal y « es la referente a la creación de un impuesto de tres por « ciento sobre las utilidades de cada empresa, *eximiéndolas de toda otra contribución.* » En otro pasaje de su discurso dijo: « representa una carga muy moderada (el « 3 ⁰/₀) dado que *será la única que pesará sobre las empresas.* »

En resumen: la exoneración que la Corte reiteradamente había pronunciado, *por implicancia*, dado que el encargo atribuido al Congreso de fomentar la construcción de ferrocarriles solo podía cumplirse de esa manera, venía ahora, por virtud de la Ley N° 5315, a estar *expresamente* declarada. Sin embargo, es cuando la Corte encontró manera de resolver que las empresas debían pagar esos impuestos.

Veamos de que manera.

« Habiéndose preguntado por uno de los señores diputados — dice — (durante la discusión de la ley) cuales eran « los impuestos municipales mencionados en aquella, de que « se eximía a las empresas, y si entraban en ellos el ser-

« vicio de alumbrado, afirmado, etc., *el miembro informante*
« *de la Comisión* que había despachado el proyecto, mani-
« festó sin observaciones de los otros miembros de ella, ni
« de otros diputados: « Los antecedentes administrativos e
« interpretativos de la Constitución establecen lo que es
« un servicio y lo que es un impuesto: el impuesto tiene
« un carácter general, mientras que el servicio tiene un
« carácter particular; lo paga el que lo recibe. El impuesto
« es general y lo paga todo aquel que recibe o no sus bene-
« ficios. Por consiguiente lo que se ha consignado en este
« artículo son los impuestos de la Constitución, aquellos que
« tienen que ser pagados por todos y también por los ferro-
« carriles, si no fuesen exonerados por la ley. De ahí, enton-
« ces, que los servicios de carácter comunal, que beneficien a
« los ferrocarriles, por lo mismo que tienen un carácter parti-
« cular, los ferrocarriles particulares tendrán que pagarlos. »

Desde luego, en el supuesto de que haya *impuestos de la Constitución*, y otros que no lo sean, ellos existían por fuerza en la época en que la Corte consideraba justo y legal que las empresas particulares no los pagaran. ¿Cómo es, entonces, que la Corte aceptaba que el informante de la Comisión fuese el inesperado autor de un descubrimiento tan portentoso y de efectos tan decisivos que venía a echar por tierra todo un sistema de interpretación? Y cuenta que el diputado informante dijo las palabras transcritas y que han seguido siendo el fundamento de la nueva jurisprudencia, en una incidencia producida en tal forma que debió verse obligado a improvisar una respuesta. Mientras tanto el diputado Mitre, autor del proyecto, reiteradamente había expresado que el 3 % sería la *única carga* que pesaría sobre las empresas, siendo de advertir que en el concepto genérico *carga* está comprendido el concepto específico de *impuesto*.

CAPÍTULO XIII

1911 - 1919

Nombramiento de los doctores DÁMASO E. PALACIO y LUCAS LÓPEZ CABANILLAS. — La Ley Nº 7029, no es contraria a la Constitución. — La jurisdicción del Paraguay sobre los territorios del Sur del Pilcomayo. — La reclamación de *Madame Lynch*. — La inmunidad legislativa y las facultades disciplinarias de un tribunal de justicia. — Los privilegios de un legislador provincial no se extienden fuera de la provincia. — El proceso contra el senador mendocino Ezequiel Tabanera. — Se acentúa la interpretación de la ley 5315 en contra de la exoneración a las empresas de los impuestos municipales. — La Corte recoge y refuta los argumentos hechos en contra de su nueva jurisprudencia. — Nombramiento del doctor JOSÉ FIGUEROA ALCORTA. — El doctor JOSÉ NICOLÁS MATIENZO es nombrado Procurador General. — Otro aspecto de la cuestión relacionada con los «delitos de imprenta». — El caso *Saborido v. Kaiser*. — El proceso de *La Bandera Roja*. — El Procurador General sostiene la competencia federal en los casos en que se incita *por la prensa* a la destrucción de las instituciones. — Su interpretación del artículo 32 de la Constitución. — Los poderes de policía de las autoridades de la Nación y los derechos que confiere la ley civil a los propietarios ribereños. — Nombramiento del doctor RAMÓN MÉNDEZ.

A la muerte del doctor Bunge fué nombrado el doctor Dámaso E. Palacio, que llegaba a la Corte después de una destacada actuación en el escenario político. Nacido en Santiago del Estero el 13 de octubre de 1855 y graduado

en Córdoba, ejerció aquí por muchos años la profesión, logrando acreditar su estudio entre los de mayor prestigio, al par que desempeñaba una cátedra en la Universidad Nacional.

Sus comprovincianos lo llevaron al gobierno en 1898, cargo que volvió a ocupar pocos años después. Al final de este segundo período gubernativo el doctor Palacio fué elegido Senador Nacional, renovándose en la ocasión la crítica habitual a esta costumbre, que muchos consideran perniciosa (72). Nadie más habilitado, sin embargo, para representar en el Senado los intereses de una provincia que aquel que, por venir recién de gobernarla, conoce en sus

(72) Durante este último tiempo se han presentado al Congreso dos iniciativas tendientes a reformar la Constitución en lo que se refiere a la manera de elegir los senadores. Se quiere establecer la elección popular de primer grado, en sustitución del sistema indirecto, sin tener en cuenta antecedentes históricos y conceptos científicos que lo justifican.

Con ser muy grande la previsión de los constituyentes de 1853, no es posible exagerarla hasta el punto de poder afirmar que sospecharon que podría llegar para la república un momento en que el carácter moderador del Senado sería un eficaz contrapeso frente al avance de las tendencias populares, ocasionadas siempre a degenerar en todos los inconvenientes de la demagogia y del desorden. Me apresuro a agregar que no encuentro objeetable que las clases populares, en su afán de mejoramiento, orienten sus actividades colectivas hacia la conquista del mayor número de bancas legislativas como el modo más eficaz de lograr sus designios. ¡Bienvenidos los diputados obreros! Pero que exista el contrapeso del Senado conservador, no sólo por la forma de elegirlo, sino también por la categoría social de sus miembros. Sólo así ha de poderse mantener el equilibrio. La Constitución, expresamente, ha creado un Senado moderador de los fáciles entusiasmos, de las posibles y lógicas exageraciones de la cámara baja, llamada, por su origen, a acoger la primera las nuevas ideas que la transformación social engendra. Por eso ha substraído la elección de los senadores de las contingencias del sufragio universal de primer grado, dispuesto, en la mayoría de los casos, a ungir con el triunfo al que con más aplomo dice lo que no siempre piensa que al que, por ser moderado, no sabe halagar a las muchedumbres.

Por otra parte, no se concibe la existencia de dos cámaras de origen popular. El sistema bicameralista resulta de la combinación de un cuerpo que trae su mandato directamente de la masa ciudadana con otro formado por

menores detalles, los problemas cuya solución mayormente le interesan. Y es claro que resulta más fácilmente defendible esta teoría cuando está de por un medio un hombre como el doctor Palacio, de quien no pudo decirse con fundamento que había asegurado su elección senatorial manteniendo con dádivas y prebendas la adhesión de los miembros de la legislatura. mientras fué gobernador, que es, precisamente, el argumento de mayor efecto que se hace por los que consideran pernicioso para las instituciones, y contrario a la moral política, ese trance del Gobierno al Senado.

los representantes de las autonomías provinciales. Y si en Norte América, en no pocos Estados, se eligen ya en comicios de primer grado los senadores, ello se debe a que la venalidad más desenfrenada llegó a desnaturalizar en tal forma la función electiva de las legislaturas, que se impuso de manera perentoria la necesidad de entregar directamente al pueblo el derecho de elegir los senadores. Es posible que se generalice allí la reforma; pero no será sino para precipitar la adopción del sistema unicameralista, pues, como digo, no tiene razón de ser la existencia de dos cuerpos del mismo origen popular.

Debe acentuarse, más bien, el carácter conservador que la Constitución ha querido dar al Senado. No sólo tiene que quedar subsistente el sistema de elección indirecta, —que ha de purificarse de sus inconvenientes actuales apenas se viva con más decoro la democracia, según puede prometerse la república conforme al visible progreso que se nota en las prácticas electorales,— sino que habría conveniencia, dentro de una teoría estricta, de que los ex presidentes y ex vicepresidentes fueran senadores natos de la república. Porque, hay que convencerse, es la voz de esos consulares la que debe oírse siempre en el Senado; es el consejo y la experiencia de los que encanecen al servicio del país lo que debe informar sus sanciones.

En el afán de desnaturalizar la institución se argumenta, a menudo, sobre la excesiva duración del mandato senatorial, sin parar mientes en que no ha sido de una manera arbitraria que la constitución fijó aquél en nueve años, después de haber limitado a seis la duración del periodo presidencial. Tuvieron, sin duda, en vista los autores de la Constitución, que convenía a la salud de la república que el Senado no llegara a modificarse totalmente dentro de los seis años de una presidencia, porque es un necesario contrapeso en los periodos de transición, en momentos en que un nuevo estado de cosas nace, ávido de predominio.

En la Corte el doctor Palacio es un elemento de real valía por la ponderación de su espíritu, recto y ecuánime, y por la clara percepción de su juicio.

El doctor Moyano Gacitúa fué reemplazado por el doctor Lucas López Cabanillas, también cordobés. Ocupaba entonces, — diciembre de 1910 — el cargo de vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y solo estuvo en la Corte el tiempo estricto que necesitaba para lograr la jubilación.

Ya la Corte había tenido antes de ahora oportunidad de estudiar en su origen y alcance la ley N° 7029 llamada de Defensa Social. Dictada a raíz de sucesos que conmovieron al país entero y que daban la medida de los extremos a que podía llegar la exaltación proletaria, en trance de provocar el desquiciamiento social, puede talvez aquella contener disposiciones erróneas, hijas de la improvisación, así como exageraciones, producto lógico de la reacción conservadora en presencia de aquellos desmanes; pero lo interesante, a los fines de su eficacia para el logro de los designios sociales que se tuvieron en vista, es que había sido dictada sin vulnerar ninguna de las garantías consagradas por la Constitución. Así lo resolvió la Corte. Una de las deficiencias de carácter jurídico era, por ejemplo, la de haber atribuido el Congreso a la Justicia Federal la aplicación de la ley. Apenas se produjo un caso y llevada la cuestión de competencia ante la Corte, esta resolvió, por motivos obvios, que, en general, solo la justicia local ordi-

naria debía aplicar aquella, salvo las veces en que, por razones del lugar donde la infracción se cometa, sean los jueces federales quienes juzguen a los infractores.

En 1911 el doctor Mario Bravo se presentó ante la Justicia Federal de la Capital articulando una cuestión abstracta de inconstitucionalidad de la ley N° 7029; y habiendo el Juez y la Cámara Federal declarádose incompetentes, debió la Corte contemplar la incidencia desde un punto de vista que no atañe a la eficacia constitucional de la ley misma, ya juzgada, por lo demás, sino en cuanto a que el pronunciamiento que se exigía no era procedente en razón de no estar planteado caso alguno judicial; se verá, sin embargo, que esta solución no fué acordada sino por simple mayoría del tribunal.

«Que según el artículo 100 de la Constitución,—dijeron « los doctores Bermejo, del Solar y López Cabanillas,—y « la jurisprudencia uniformemente establecida, los puntos « regidos por la Constitución, la ley o los tratados, sólo « pueden dar jurisdicción al poder judicial cuando son llevados ante este en la forma de causas, es decir, de controversia entre partes. Que no corresponde a ese poder « hacer declaraciones generales o en abstracto respecto a « la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes « que dicte el Honorable Congreso, sino únicamente con « relación a la aplicación de estas al hecho o caso contenido producido.» Es tan irrefutable este principio, tanto dentro de nuestro sistema y antecedentes, como del sistema y antecedentes americanos, que, como oportunamente lo recuerda la mayoría de la Corte, no puede él ser alterado ni por expresa disposición de una ley, tal como puede verse en el caso *Muskart v. United States*, de 1911, que se registra en Miller pág. 315.

Esta circunstancia, pues, hace doblemente interesante conocer las razones de la disidencia de los doctores Daract

y Palacio. Naturalmente, como es fácil comprender, la disidencia no se funda en una interpretación contraria al principio jurídico que informa el fallo de la mayoría.

El doctor Bravo, sin invocar el artículo 11 de la ley 7029, había solicitado que se declararan inconstitucionales los artículos 8, 9 y 10 de la misma, por ser contrarios a los artículos 14, 28, 29, 33 y concordantes de la carta fundamental, — que garanten la libertad de reunión, entre otras, — *y se hiciera saber a la autoridad local a fin de que no impidiera el libre ejercicio de los derechos de reunión, libertad de palabra y de petición.* «Que en tales condiciones—agrega la disidencia—no es dudoso que se trata «de una causa regida por la Constitución, cuyo conocimiento corresponde a la justicia federal, desde que los «artículos 14, 28 y demás invocados, tienen *prima facie* «relación directa con los hechos del caso, y la solución de «él depende de la manera como sean interpretados dichos «artículos. Que no se opone a lo anterior la sentencia de «esta Corte en la causa seguida contra Simón Radowsky, «porque en ella y otras no se ha establecido que todas «las cuestiones relacionadas con la ley 7029 son extrañas «a la justicia federal, sino simplemente que lo son los delitos de carácter común definidos y reprimidos en esa «ley, admitiéndose implícitamente la competencia para los «de carácter federal y con mayor razón para las causas «civiles regidas por la ley fundamental. Que si la petición «de fs. 4 es inadmisibile como demanda, o como recurso «distinto del previsto en el artículo 11 de la ley 7029, por «razones de forma o por no estimarse autorizado el segundo «por las leyes procesales, ello no afectaría propiamente «a la jurisdicción que comporta el poder de resolver sobre «esos extremos, así como sobre el mérito de las gestiones «que se promuevan.»

En resumen, se resolvía que la Corte no podía decidir qué juez debía conocer de la demanda.

¿Cómo podía plantearse sobre el particular un caso judicial? Los artículos impugnados como inconstitucionales de la ley 7029, contienen exigencias relacionadas con el derecho de reunión, libre expresión del pensamiento, primordiales todos para un partido que, como el que representaba el doctor Bravo, necesita hacer su propaganda en la calle, aprovechando todas las ocasiones. Respecto de la necesidad de pedir permiso con días de anticipación para celebrar reuniones públicas, a los efectos de demandar la inconstitucionalidad de la ley, debía bastar la presentación al Juez de la solicitud para celebrar aquella y la negativa policial para hacerlo en el día. ¿Qué otra manera habría de hacer un caso judicial? ¿Cómo se trabaría una contienda entre partes? ¿Quiénes serían las partes?

Sabido es que hasta antes de 1876 permanecían en confusión los límites de las provincias con los territorios nacionales vecinos, algunos de los cuales, a su vez, como el del Chaco, no tenían una línea fija de demarcación con la República del Paraguay. El Gobierno de la Confederación en 1855 planteó la cuestión a la cancillería de la Asunción, pero, de mutuo acuerdo, en 1856 se aplazó, renovándose incidentalmente en 1865, y en 1870 con motivo del acuerdo preliminar de la paz, hasta que, por fin en 1876, fué resuelto el pleito en forma que venían a pertenecer a la República Argentina tierras al Sud del Río Pilcomayo, que hasta entonces habían sido consideradas como parte integrante del Paraguay. Precisamente estaba en esta zona una ex-

tensión considerable de tierra que el Gobierno del Mariscal López había escriturado en 1865 a Madame Elisa Alicia Linch, y cuyos títulos de propiedad creyeron conveniente bonificar los herederos de aquella, obteniendo del Gobierno Argentino en 1888 un decreto que consolidaba el dominio del inmueble.

Se invoca en ese decreto la ley N° 1552 de 27 de octubre de 1884 según la cual los únicos títulos que podían legitimar la posesión en los territorios nacionales y constituir propiedad privada en favor de los poseedores, eran los otorgados por los gobiernos provinciales con anterioridad al arreglo definitivo de límites. Posteriormente, en 1896, el decreto de 1888 fué declarado nulo y sin ningún valor, a raíz de lo cual el representante del Fisco se presentó ante el Juzgado Federal requiriendo que esa nulidad fuese declarada judicialmente, a fin de poder traer nuevamente al dominio de la Nación la tierra de referencia.

Los particulares que en ese momento poseían el inmueble, al contestar la demanda, entre otras cosas, sostuvieron la validez del decreto de 1888, por lo que entre las cuestiones que tuvo que resolver la Corte está la de si el P. E. tiene facultad para derogar un decreto de la naturaleza y alcances del mencionado.

El Juez Federal y la Cámara de Apelaciones fallaron en favor de los intereses fiscales, pronunciando que la Corte confirmó después.

Comienza recordando el fallo que el decreto de 1888 se dictó en contra de los dictámenes de los Procuradores de la Nación y del Tesoro, doctores Costa y Marengo. Sin embargo, cuando posteriormente el P. E. pensó en la anulación de aquél, el doctor Malaver que había reemplazado al primero, fué de opinión que ella no podía dictarse, pues la revalidación de títulos era ya irrevocable, cualquiera sea la justicia o injusticia de la misma. El procurador del Tesoro,

que lo era ya el doctor García Mérou, aconsejó lo contrario y el decreto se dictó.

Consigna después el fallo que el Ejecutivo de 1888, al llevar a cabo la revalidación del título de Madame Lynch « por aplicación de lo preceptuado en la ley N° 1552 de « 27 de octubre de 1884, había extralimitado las facultades « que le competen como ejecutor de las leyes del Congreso, « pues lejos de cumplirlas fielmente, la ha adulterado, intro- « duciendo una aplicación contraria a su texto y a su in- « tención y fines manifestados. »

Entrando al origen histórico del litigio, recuerda la Corte que el Gobierno argentino no había reconocido nunca la jurisdicción ejercida por el Paraguay sobre el territorio del Chaco, entre el Bermejo y el Pilcomayo, pues el Congreso de la Confederación, como se sabe, no aprobó el tratado de 1852 al respecto, debido a que había encontrado ambigüedad en ciertas cláusulas, que herían derechos de la Confederación, respecto de esa zona geográfica. Posteriormente, el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Juan M. Gutiérrez, al fechar en el Paraná, el 21 de marzo de 1856, las instrucciones a que debía sujetarse el plenipotenciario argentino en la Asunción, dijo expresamente, que debía sostener el derecho argentino a la posesión y soberanía del Gran Chaco, hasta la margen derecha del río Paraguay y hasta los confines meridionales de Bolivia. Después de muchas otras incidencias y tratativas, en 1876 se llegó al convenio definitivo, por el cual, se marcó el límite efectivo entre los dos países. Que en virtud de estas razones y de otras, muy extensas, que el fallo contiene, la afirmación del decreto de 1888, de que la tierra en litigio había estado bajo la jurisdicción paraguaya, es contraria, en absoluto, a la verdad; « que esta política firme de la Nación, — dice « la Corte, refiriéndose a la larga tramitación mencionada, « — sustentada persistentemente en las declaraciones y actos

« internacionales del Poder Ejecutivo..... debe preva-
« lecer, por su autoridad histórica y su eficacia jurídica,
« sobre aisladas afirmaciones hechas *ad libitum* en libros
« de propaganda comercial y política; y esta autoridad de
« las declaraciones solemnes del Gobierno argentino formu-
« ladas en aquella oportunidad acerca de la indiscutida y
« evidente jurisdicción y dominio nacional, sobre el territo-
« rio del Chaco, no puede en manera alguna ser descono-
« cida, ni puesta en duda por los tribunales de justicia de
« la República, sin mengua de la dignidad misma de la
« Nación. Que si así no fuera, si las declaraciones, dere-
« chos y privilegios sustentados por la Nación en sus debates
« del fuero internacional, por el orden de los poderes que
« creó y autorizó plenamente para ello con su ley funda-
« mental, pudieran ser traídos a juicio, discutidos y desna-
« turalizados ante otro de sus poderes internos, a instancia
« del interés privado y en pugna con los altos intereses
« del Estado, concibese, desde luego, cuanto inconveniente
« de trascendental importancia no traería un conflicto se-
« mejante, para la respetabilidad y el decoro del país.»

En cuanto a la objeción fundada en la irrevocabilidad del decreto de 1888 por tratarse de una resolución administrativa, de carácter definitivo, encontraba la Corte, que no tenía la importancia que en el juicio se le había atribuido, pues aún en la hipótesis de que el Poder Ejecutivo no hubiera podido en 1896 dejar sin efecto el decreto anterior, debe tenerse en cuenta que aquél se aplicó con sujeción siempre a lo que resultara de la demanda judicial que debía intentar el Procurador Fiscal.

Al doctor Manuel Gascón (hijo), miembro a la sazón de la legislatura provincial de Buenos Aires, le fué impuesto

un arresto, como corrección disciplinaria, por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal, en virtud de haber cometido demasías de lenguaje en un escrito que había presentado como defensor en un proceso. Para pedir la revocatoria de una medida semejante invocó el doctor Gazcón sus fueros de legislador; pero la Cámara, resolvió que ellos no podían ser reconocidos fuera del territorio en que rige la Constitución que concede aquel privilegio.

No era del caso, pues, juzgar si aquél merecía o no la corrección impuesta, y el recurso llevado ante la Corte pudo prosperar, únicamente, porque estaba en discusión la extensión del privilegio invocado por el recurrente y respecto del cual, aquélla dijo:— « A su privilegio o inmunidad de arresto, el Tribunal opone otro privilegio, el de « arrestar por menosprecio, autorizado en su ley orgánica, « respecto de los que intervienen en los juicios, como me- « dio de asegurar la consideración y el decoro correspon- « diente a su investidura, pues sin esa facultad, no sería « posible, en muchos casos, el cumplimiento de su alto « ministerio. » La facultad de corregir con multas o prisión las faltas de respecto contra los tribunales, está consagrada, expresamente, en muchas de nuestras leyes y se la conceptúa tan necesaria, que universalmente se considera que debe estar por encima del privilegio parlamentario de exención de arresto. La Corte recuerda al efecto, que en todos los tiempos los miembros del parlamento inglés, puestos en prisión por menosprecio a los tribunales de justicia, no lograron la libertad, invocando su privilegio.

Por otra parte, un legislador abogado que se somete a la jurisdicción de un tribunal, ya sea para defender sus derechos o para patrocinar los ajenos, acepta las reglas que gobiernan el funcionamiento de aquél y que son la garantía de la justicia misma. La inmunidad de arresto

del legislador cede ante las facultades disciplinarias del Tribunal, facultades que, a la luz de nuestros antecedentes constitucionales, no se encuentran restringidas por la circunstancia de que el litigante goce de inmunidad para estar en juicio; porque si es esencial para la independencia y funcionamiento del poder legislativo la exención general de arresto, lo es también que el poder judicial sea respetado por sobre todas las cosas y perdería su dignidad y autoridad si los legisladores pudieran desacatarlo en las audiencias o por escrito, sin exponerse a una corrección inmediata; y esta solución se impone.—agrega la Corte—con mayor motivo, si es una autoridad nacional la desacatada, desde que debe su origen a una ley del Congreso y las autoridades de provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Todo esto aparte de que, si los miembros de una asamblea legislativa que ejercen ante los tribunales su profesión de abogados no estuvieran sujetos, al igual de los otros abogados, a la superintendencia de los tribunales, ni aquella asamblea podría autorizarlos a abogar, ni los tribunales se lo permitirían, porque de lo contrario, se quebrantaría la regla fundamental de procedimiento que requiere absoluta igualdad de condiciones en los litigantes, sus apoderados y defensores.

Como se ve, no puede ser más absoluto el concepto que tiene la Corte acerca de que es esencial para la existencia misma del Poder Judicial la facultad de castigar a los que le faltan el respeto. Se diría una cuestión cerrada, insusceptible de la más mínima excepción; sin embargo, hay una: es un simplísimo procedimiento al cual los letrados pueden apelar para faltar el respeto a los Jueces sin que a éstos les sea posible aplicarles corrección alguna disciplinaria. Basta que el letrado imprima un folleto contien-

do injurias a la Administración de Justicia, o a determinado magistrado, para que se esté en presencia de un «delito de imprenta» *ajeno a la competencia federal*.

Así lo declaró la Corte en un caso en que el defensor en el ruidoso «asunto de las marcas» publicó en un folleto conceptos depresivos para el Juez Federal que entendía en el asunto y que le habrían valido un arresto inmediato si los pronuncia en la audiencia o los consigna en algún escrito.

En 1913 se siguió ante la Justicia de Instrucción de la Capital Federal un proceso por defraudación contra D. Ezequiel Tabanera (hijo). En la estación oportuna se dictó contra este auto de prisión preventiva, deduciéndose entonces la improcedencia de la medida en razón de ser el inculpado Senador a la Legislatura provincial de Mendoza. El Juez encontró atendible el reparo; pero la Cámara de Apelaciones en lo Criminal revocó el pronunciamiento. Se elevó, entonces, el asunto a la Corte; el Procurador General fué de opinión que no podían llevarse adelante los procedimientos hasta tanto no hubiesen sido allanados los fueros de Tabanera.

Para la Corte resultaba indudable que los privilegios que las constituciones provinciales acuerdan a los miembros de sus legislaturas no pueden tener la misma eficacia y alcance que la exención de arresto y el previo desafuero en el procesamiento criminal consagrados en la Constitución Nacional en favor de los miembros del Congreso. Y es natural, porque un proceso criminal seguido ante los tribunales de la capital contra un legislador provincial, por lo excepcional del caso, no puede decirse que perturbe necesariamente el funcionamiento de ese poder público provin-

cial; y el privilegio parlamentario, por lo demás, no es inherente al sistema representativo republicano, ni indispensable para su regular funcionamiento, como se prueba con el ejemplo que ofrece el Congreso de Estados Unidos, cuyos miembros no disfrutaban de aquella prerrogativa en materia criminal, al igual que en Inglaterra. Y si entre nosotros, en el orden nacional, los constituyentes se separaran del modelo americano, fué, según alguna vez lo dijo la Corte. « por razones peculiares a nuestra propia socialidad y por motivos de alta política » y no porque fuera inherente al sistema de gobierno. « Que si el miembro de « una legislatura provincial -- continúa diciendo la Corte -- « llevara por todas las demás o a la Capital, equiparada a « una provincia, la salvaguardia de sus inmunidades locales contra los procedimientos criminales de que se hiciera « pasible en las últimas, se crearía en algunos casos una « situación más privilegiada que la de los mismos legisladores del lugar del proceso, pues que varían en las diversas constituciones las circunstancias y la duración de las « inmunidades, así como la de su allanamiento. »

La Corte resolvió que Tabanera podía ser detenido sin previo desaforo.

En el caso *Mórtola v. Ferrocarril Central Argentino*, resuelto por el Juez doctor Arturo Seeber con sólidos fundamentos favorables al derecho de la empresa, es en el que la Corte Suprema dió el máximo de desarrollo a su tesis relativa al alcance de la exoneración consagrada por el artículo 8 de la ley 5315. Comienza haciéndose cargo de las observaciones hechas a la interpretación de sus recientes fallos que, de manera tan radical, habían venido a modificar su vieja jurisprudencia:

1º) *Que ella es inconciliable con el texto y propósitos de la ley.* A este respecto arguye que es regla de interpretación de las leyes la de que los jueces deben atenerse al texto de las mismas, cuando es claro y no da lugar a dudas; que esa regla no es aplicable al artículo 8º, pues él habla únicamente de *impuestos*, palabra que no tiene un significado bien definido, uniformemente aceptado, y, antes al contrario, son conocidas las dificultades que con motivo de la aplicación de aquel se han suscitado. Cita, al efecto, un decreto de diciembre de 1908, por el que se dispone que las empresas pagarán eslingaje, porque ello significa *usar un servicio fiscal*. « Que los votos discordantes de los jueces que han intervenido en esta causa y en la anterior « de P. Tardito y Cia, son una prueba más — agrega la « Corte — de que el punto no está concluyentemente decidido por la ley; y lo es finalmente el proyecto aclaratorio de que se hace mérito, en el que se establece que la « exoneración de impuestos a las empresas ferroviarias comprende todas las contribuciones y *todos los servicios de carácter público*, con la sola excepción del servicio de « provisión de aguas corrientes y cloacas. » Y al consignar aquí que la aclaración de la ley, en los términos expresados, se sancionó en septiembre de 1919, creemos del caso preguntar si ello demuestra que la interpretación que la Corte daba al artículo 8º era la buena. Porque si se consideró necesario aclarar la ley era sencillamente porque una deficiencia de lenguaje oscurecía el verdadero pensamiento que no podía ser otro que el de la exoneración de *todos los servicios públicos*, ya que en esta forma se ha sancionado la ley de 1919. Y si aquella deficiencia de lenguaje, — poco cuidado en el empleo indebido de *impuesto*, cuando lo que se quiso decir fué *retribución de servicio*, — podía plantear una duda en el ánimo de la Corte, ante esa duda, lo que habría correspondido era no alterar la inter-

pretación favorable a la exoneración que venía dándose a las leyes particulares de concesión.

Quiere aprovechar aquí el autor, autor también, como Juez, de varias sentencias contrarias a la jurisprudencia de la Corte, para poner de manifiesto hasta qué punto era arraigada en su ánimo la interpretación favorable a la exoneración, que no pudo en ningún momento conformarse con aquel dictado del superior, para lo cual tenía, felizmente, la excusa, dada por la Corte misma, de que la jurisprudencia no obliga sino de una manera relativa a los magistrados inferiores.

2º) *Que se han interpretado mal las palabras del informante del despacho y que no fueron pronunciadas al discutirse el artículo 8º sino el 19º.* Recuerda a este respecto la Corte que nadie hizo observación en la oportunidad en que se preguntó al miembro informante de la Comisión el alcance de la exoneración acordada por el artículo 8º, ya votado con mucha anterioridad; pero que era evidente que de las palabras de aquél se desprende que el pago de afirmados debía conceptuarse una retribución de servicios, desde que, como el del alumbrado, barrido y aguas corrientes, no se exige en general a todos los habitantes, estén o no beneficiados con esos servicios.

No daremos ya a esta cuestión del artículo 8º de la ley 5315, toda la extensión que habíamos pensado al iniciar este trabajo, desde que la reciente modificación de los términos de la ley quita el interés que tenía aquella, como punto de interpretación jurídica, con fervorosos y convencidos sostenedores de uno y de otro lado; sólo hemos de recordar para dejar cerrado el debate, junto con la sentencia del Juez Repetto, trabajo de gran aliento y refuerzo apreciable a la interpretación de la Corte, el nombre de los magistrados que sostuvieron la tesis contraria: Camaristas doctores Baltasar S. Beltrán, Aureliano Gigena, Tomás Arias; jueces

doctores Uladislao F. Padilla, Arturo Seeber, Alejandro Moyano y Clodomiro Zavalia.

El cambio operado con motivo de la aclaración de 1919. en materia de política ferroviaria, será de beneficios inmediatos para la República. Si los capitales no llegan ya, no es porque no ofrezca alicientes su colocación aquí, sino porque la situación europea no se despeja.

Parecía destinado el sillón que ocupara el doctor Moyano Gacitúa a los hijos de la docta Córdoba. Habíalo ya tenido el doctor López Cabanillas, y a su retiro, después de una prolongada vacancia, se sentó en él el doctor José Figueroa Alcorta. Es el segundo ex Presidente de la República que llega a la Corte Suprema. Fué nombrado en 1915.

Muy joven se recibió de abogado el doctor Figueroa Alcorta. Después de desempeñar diversos cargos en la administración provincial, ocupó el Ministerio de Gobierno poco antes de 1890. Desde entonces ha hecho toda la trayectoria a que puede aspirar un hombre público entre nosotros: gobernador de Córdoba, Senador nacional, Vice Presidente de la República, Presidente después, a la muerte del doctor Quintana, en 1906.

Epoca de transición como fué aquella en que le tocó gobernar, situada entre el ocaso de una escuela política,—no juzgada sin pasión todavía,—y las primeras luces de una era nueva preñada de promesas, debió luchar el doctor Figueroa Alcorta entre la hosca irritación de los que se sentían desplazados y la impaciencia agresiva de los que iban llegando. Fueron años tormentosos aquellos, apenas sosegados durante el paréntesis de las fiestas grandiosas del Centenario; años de un progreso material muy grande y

de derroche, naturalmente. Junto con el gobierno que se preparaba pródigo para la magna celebración, el pueblo hacía sus aprestos también, sin medida; y quedó bien pronto, cuando los efectos de la exageración en todos los órdenes se hicieron patentes, un saldo desfavorable que modificó la situación económica de la República. Razones emergentes de algunos afanes personalistas habían determinado, mientras tanto, actos políticos del Gobierno que se apreciaron en su hora como desmanes institucionales. Seguramente, a la vuelta ya de diez años, los más exaltados no caracterizarían por ellos la Presidencia del doctor Figueroa Alcorta. A la distancia, se pierden ya los pequeños detalles de su acción en el gobierno y sólo se perciben los grandes hechos, las obras efectivas: el Puerto doblado en su capacidad; aumentada con grandes unidades la Escuadra; ampliada en muchos miles de kilómetros la red ferroviaria; construidos muchos edificios públicos.

El doctor Figueroa Alcorta, desde su ejercicio profesional en Córdoba, permanecía alejado de la disciplina judicial; pero, hombre como es de gran precisión mental y de una efectiva capacidad de trabajo, ha conseguido ya identificarse con la alta misión de juez, al extremo de que el consenso público lo señala como uno de los miembros más ponderados y eficaces de la Corte.

Tiene una larguísima actuación pública el doctor José Nicolás Matienzo, nombrado Procurador General cuando el doctor Botet se acogió a la jubilación. Ha nacido en Tucumán. Desde muy joven se inició en la vida pública, teniendo en su haber un lejano y fugaz ministerio en Santiago del Estero, donde acreditó ya sus indiscutibles dotes de hombre

de gobierno. Venido poco después al litoral y aclimatado en su ambiente, mientras desempeñaba cargos en la magistratura provincial y de la Nación, y ejercía el profesorado, iba nutriéndose con un caudal tal de conocimientos sobre todo en materia constitucional y administrativa, que, cuando fué llamado al alto puesto que hoy ocupa, se juzgó por todos que difícilmente se habría podido hacer una designación mejor. *The right man in the right place.*

En efecto, puede asegurarse que en la actualidad no existe un hombre más consagrado que el doctor Matienzo al estudio de las cuestiones que son del resorte de su alto ministerio. Sus vistas revelan, aparte de la indiscutible capacidad mental, un dominio absoluto de la ciencia jurídica.

En una demanda por injurias promovida por don Diego Saborido contra don Juan G. Kaiser, los tribunales ordinarios de la Provincia de Buenos Aires dictaron sentencia condenatoria, basada en disposiciones del Código Penal, por la que, y dado que las injurias habían sido vertidas por medio de la prensa, se articuló la consabida cuestión ante la Corte, sobre el alcance del artículo 32 de la Constitución Nacional.

En la sentencia de la Cámara de Apelaciones de La Plata se registran las siguientes buenas razones: «La ley « 4189 en la parte que reprime la calumnia y la injuria, *pro-ferida por medio de la prensa*, no es violatoria de los « artículos 18 y 32 de la Constitución Nacional, puesto que « no restringe la libertad de la prensa, sino que pena a los « que se valen de ella para cometer un delito común; ni « establece sobre ella la jurisdicción federal, desde que es « una ley de fondo, dictada de acuerdo con el artículo 67

« inciso 11 de la Constitución Nacional y cuya aplicación
« corresponde a los jueces provinciales, de acuerdo con el
« procedimiento que rige en cada provincia. »

La tesis de la Corte fué: *una sentencia de un tribunal de provincia fundada en disposiciones del Código Penal de la Nación, y dictada para reprimir «delitos de imprenta», sin invocar disposición alguna de carácter provincial por la que las sanciones de aquel Código hayan sido incorporadas a la legislación local sobre la materia, es contraria al artículo 32 de la Constitución Nacional y al 18 de la misma, por el que «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en «ley anterior al hecho del proceso. »*

Recuerda el fallo que el Redactor de la Comisión Examinadora de la Constitución hace constar «que si se añadía « que la prensa no había de caer bajo la jurisdicción federal, era porque la Constitución Argentina encargaba al « Congreso la codificación de las leyes y podía por lo tanto « dictarlas sobre libertad de imprenta; » y después de citar como antecedentes de la reforma una carta del Presidente de la Confederación conminando a un gobernador de provincia porque no reprimía el espíritu de crítica de un diario, agregaba «que la historia contemporánea había justificado « plenamente la previsión de los pueblos que impusieron a « fines del siglo pasado al Congreso Federal esta limitación de facultades » lo que significaba que en la de dictar los Códigos no estaba comprendida la de reglamentar los delitos de imprenta. Además en el informe escrito de la Comisión, claramente se consigna que la reglamentación y la represión, en materia de abusos, *es privativa de la soberanía provincial*, porque es a ella a quien el abuso puede dañar. «La reforma importa — dijo el miembro informante — « que la imprenta debe estar sujeta a las leyes del pueblo en que se use de ella. Un abuso de la libertad

« de imprenta nunca puede ser un delito, diré así, nacional. »

Una vez sentados estos precedentes, la Corte encuentra que no se puede hacer la distinción entre abusos de la libertad de imprenta y delitos de injuria y calumnia cometidos por medio de élla, para sostener que solamente los primeros fueron excluidos de la legislación general del Congreso. Se funda para ello la Corte en los antecedentes constitucionales anteriores a 1860 y en las Constituciones provinciales que se dictaron después, así como también en el rechazo que sufrió en 1863 un proyecto sobre nombramiento de una comisión encargada de redactar una ley federal reglamentando la libertad de la prensa.

Anteriormente al caso que venimos examinando la Corte había tenido ya oportunidad de estudiar la cuestión, con motivo de un caso análogo resuelto por la Justicia Ordinaria de Catamarca, cuya legislación había incorporado disposiciones del Código Penal. Sostuvo entonces el Procurador General doctor Matienzo que al haberse condenado a Gregorio Orellana Herrera por calumnias e injurias vertidas por la prensa, no podía decirse que los jueces ordinarios habían aplicado una ley federal; y al aconsejar la admisión del recurso, expresa: « conservando al Poder Judicial de la « Nación el papel de supremo protector de las libertades « individuales, se consulta la evidente necesidad de no abandonar al arbitrio de las autoridades de provincia una libertad tan indispensable a la vida republicana, como es la « de imprenta. » Y recuerda oportunamente que el artículo 32 fué agregado en 1860 a la Constitución a propuesta de políticos recelosos de la autoridad nacional de esa época; « pero ese móvil — agrega — que no está consignado en el « texto y que no fué compartido por la convención nacional, que aceptó junto con esa enmienda, todas las demás « propuestas por la Provincia de Buenos Aires, para no

« retardar la reconciliación de los argentinos, ese móvil, digo, « *no puede seguir produciendo efecto*, a través de los años « y de los siglos, cuando las circunstancias han cambiado « fundamentalmente, y cuando las nuevas generaciones tienen más fe en los jueces nacionales que en los de provincia, para todo lo que atañe a la protección de las libertades constitucionales. »

No fué extraña a una sugestión tan autorizada, como la que contienen las palabras transcritas, del doctor Matienzo, la actitud del autor de este libro, en su carácter de Juez Federal de la Provincia de Buenos Aires, al declararse competente, en junio de 1919, para entender en un proceso que se instruía contra los redactores del diario anarquista, *La Bandera Roja*, detenidos en la ciudad de Avellaneda, por cuanto dirigiéndose la prédica de aquél a difundir ideas contrarias a la seguridad institucional de la República en forma que encuadraba dentro de las calificaciones y sanciones de la Ley Federal número 49, debían ser los jueces de la Nación los que intervinieran, pues era un caso típico de *protección de las libertades constitucionales*, según la expresión del doctor Matienzo. Pero habiéndose planteado una cuestión de competencia con el Juez ordinario de la ciudad de La Plata, le tocó a la Corte decidirla. Requerido el dictamen del Procurador General, éste recordó que la opinión de que la incitación a la rebelión cae bajo la jurisdicción federal, *aunque se haga por medio de la prensa*, no es nueva. La sostuvo enérgicamente el Presidente Sarmiento, uno de los autores del citado artículo 32. « Mi opinión, dijo aquél, es que los « Tribunales Federales son jueces naturales de los abusos « y delitos de imprenta; y puesto que la Ley de Justicia « Federal define claramente lo que es sedición o insurrección y designa las penas en que incurrén los criminales, « *su deber es aplicarla en los casos en que la palabra*

« *impresa provoque o aconseje la insurrección o la sedición.* » Precisamente era el caso del Juez Federal de La Plata frente a los redactores de *La Bandera Roja*. « Otra jurisprudencia — termina diciendo Sarmiento — traería por resultado quitar al crimen su requisito legal y esencial, *que es la intención del que lo comete* y colocar solamente en el brazo que ejecuta, la responsabilidad que corresponde en su mayor parte al que inspira y provoca el crimen. »

Con todo, el Procurador General terminó aconsejando a la Corte que resolviera en el sentido de que el Juez Federal no era competente para entender en la causa, fundándose en que « el Juez del Crimen de La Plata niega que de las publicaciones de que se trata resulte la existencia de los delitos contra la Nación previstos por la ley N° 49 de 14 de septiembre de 1863 y cree que sólo puede presumirse una infracción de disposiciones de la ley 7029 relativas a la propaganda del anarquismo y observa que el hecho ha sido cometido en territorio provincial. » Es una simple cuestión de hecho, como se ve. Es difícil marcar la línea separatoria entre lo que es *delito contra la seguridad interior de la Nación* (Ley 49) y *propaganda de ideas anarquistas* (Ley 7029); esta propaganda conspira, indudablemente, contra la seguridad de las instituciones. Pero lo interesante y fundamental es que, desde el punto de vista doctrinario, el Procurador General sostuvo, en principio, la competencia del Juez Federal. « Considero — dice — que los poderes públicos de la Nación deben tener en sus manos los medios necesarios para evitar toda agresión que tienda a destruirlos o a obstaculizar sus funciones y estoy convencido de que el artículo 32 no se opone a esta doctrina. Si, pues, las publicaciones que motivan la actual cuestión de competencia contienen efectivamente una incitación a la rebe-

«lión contra el Gobierno Nacional o preconizan el desconocimiento de la Constitución Nacional, *no serían los jueces provinciales, sino los federales quienes tendrían competencia para juzgar a los delincuentes.*»

La Corte no varió tampoco esta vez su criterio. «No corresponde a los tribunales federales —dijo— entender en acusaciones por abusos o delitos de imprenta, ya se trate de publicaciones contra la Nación o de propaganda contra la subsistencia de las instituciones y la incitación a desobedecerlas.»

Y ahora una última observación para concretar las objeciones que durante todo el desarrollo de este libro ha hecho el autor, con todos los respetos debidos, a la hermenéutica de la Corte en materia de *delitos de imprenta*. Sabido es que el fundamento capital de la doctrina de aquélla es que como el abuso de la libertad de imprenta sólo perturba e interesa a la localidad donde se usa de ella, no puede ser sino la autoridad local quien juzgue y castigue a sus autores; de modo que, por implicancia necesaria, cuando el abuso de la libertad de imprenta tienda a perturbar en un escenario más vasto, debe ser no ya la autoridad local sino la autoridad general la que esté interesada en reprimir, por sus órganos judiciales propios, a los delincuentes. Cuando se propaga la idea anarquista, que lleva en sí la destrucción de las instituciones *nacionales*, para proteger las cuales la ley de 1863 ha dictado reglas y fijado penas, no puede haber duda acerca de que es la Nación la interesada y no la Provincia donde el diario, *vehículo del delito*, se publica. Luego son jueces de la Nación los llamados a castigar a los que, por la prensa, predicán la destrucción de las instituciones y el desconocimiento de la Constitución.

Los propietarios de unos galpones construidos sobre la ribera sud del Riachuelo,—que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación habia hecho derribar porque amenazaban derrumbarse sobre el agua en forma que podría interrumpir la libre navegación,—demandaron al Gobierno Nacional, articulando un interdicto de despojo, dirigido a recuperar la posesión de una parte de tierra comprendida entre la ribera y la línea sobre la cual se construyeron los nuevos depósitos, obedeciendo a órdenes de la autoridad, empeñada en que se cumpla la prescripción del Código Civil relativa a la zona de treinta y cinco metros que deben dejar los propietarios ribereños.

El Juez Federal de La Plata rechazó la demanda teniendo en cuenta que debía estar fuera de discusión que el Gobierno Nacional no tuvo ánimo de poseer la tierra de los demandados y si sólo evitar las consecuencias del derrumbe de los galpones, además del propósito de hacer efectiva la prescripción del artículo 1639 del Código Civil relativa a la calle de treinta y cinco metros sobre la ribera, que los propietarios deben dejar sin derecho a indemnización alguna. Y si bien los actores habian sostenido que primitivamente los galpones fueron construidos respetando la distancia legal, y que la acción de las aguas, al llevarse paulativamente la tierra, los acercó a la ribera, no es menos cierto, que de acuerdo con el artículo 2643, debieran aquéllos haber construido obras defensivas para evitar trastornos emergentes de la acción de las aguas. « Que el único reparo fundamental que hacen los actores, a la facultad del gobierno « para hacer cumplir la disposición del artículo 2639, consiste « en su afirmación de que estando el Riachuelo en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, no la tiene el « Gobierno Nacional sobre la ribera Sud. Indudablemente « el argumento habría sido decisivo si no existiera la circunstancia de que por tratarse de un río navegable la juris-

« dicción nacional sobre ambas riberas es incuestionable en
« mérito de lo que dispone el artículo 67 inciso 9 de la
« Constitución Nacional A nada conduce el dominio
« que han probado tener los actores sobre el inmueble, por
« la sencilla razón de que *el Gobierno no los ha despojado*
« *con ánimo de poseer*, y porque además de las razones
« de policía que lo indujeron, tuvo el propósito inatacable
« de que existiera la calle ribereña que prescribe la ley,
« función esta que debe considerarse privativa de la auto-
« ridad administrativa. »

Esta sentencia fué revocada por la Cámara Federal de La Plata, la cual juzgó el caso en el terreno de la legislación civil en el cual basta probar el despojo para que el actor sea restituido en su posesión. Equipara la sentencia la acción del Ministerio de Obras Públicas, destruyendo los galpones y fijando una línea nueva para su construcción, « al acto violento o clandestino por el cual uno es privado « de una cosa que poseía o del ejercicio de un derecho « que gozaba. »

La Corte, al revocar esta sentencia, confirmó la del Juez Federal. Acepta el fallo que la violencia, que es una de las formas del despojo, está definida como la fuerza que se usa contra alguno para obligarle a hacer lo que no quiere, por medios a que no puede resistir; pero el uso de la fuerza no basta para que exista violencia. Debe ser usada sin facultad potestativa; porque todo funcionario público puede requerir la fuerza armada para asegurar la ejecución de la ley en la parte que le está confiada, y en tal caso el uso de la fuerza no puede calificarse como violencia. Tal el caso del Ministerio de Obras Públicas.

« Que la navegación del Riachuelo — agrega — como la de « los demás ríos interiores de la República, se efectúa con « sujeción a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Según lo ha declarado esta Corte la navegación que

« se relaciona con el comercio marítimo, es la que se hace
« de un puerto de la República a otro extranjero, o entre
« dos provincias por los ríos interiores declarados libres
« para todas las banderas por el artículo 26 de la Consti-
« tución, y *sujeto a las autoridades que emanan de ella*,
« y a quienes incumbe también la reglamentación del co-
« mercio entre diferentes provincias; y es desde luego evi-
« dente que la Nación no podría asegurar esta libre na-
« vegación si el Poder Ejecutivo Nacional no estuviese
« investido de las facultades necesarias para hacer cumplir
« por medio de resortes propios los reglamentos respectivos. »

El Gobierno Nacional no había desconocido el derecho de posesión ni el de propiedad de los actores; sostuvo haber hecho uso de una facultad jurisdiccional que no modifica el carácter legal de la posesión ni del dominio. « No se
« ha atribuido el derecho de poseer; y sólo ha adoptado
« medidas de policía que a su juicio correspondían para
« remover el obstáculo. *El Gobierno Nacional no ha pro-*
« *ducido, pues, un acto del que se pueda derivar rela-*
« *ciones civiles de derecho privado*, sino un acto de sobe-
« ranía, un acto jurisdiccional, de autoridad y de gobierno.
« como poder público, como entidad política, como soberano. »

Casi cuatro años estuvo sin llenarse la vacante que dejara el doctor Daract. A fines de 1919 fué nombrado el camarista en lo Comercial doctor Ramón Méndez. Fué unánime la opinión de que el Gobierno había realizado un verdadero acierto al designarlo. Desde tiempo atrás se lo señalaba para el alto puesto con el buen sentido que acredita siempre el juicio público en lo que se refiere a la persona indicada para determinada función. Sabíase al

doctor Méndez hombre inteligente y laborioso, recto y ecuanime, al par que poseedor de un espíritu amplio, abierto a las solicitudes de las ideas y tendencias que están elaborando el mundo moderno.

Con esos títulos ha llegado al sitio más encumbrado de su carrera judicial, iniciada como Juez de Comercio de la Capital. Hasta entonces participó activamente en las contiendas políticas de la Provincia de Buenos Aires.

ÍNDICE

PRIMERA PARTE

PREFACIO

CAPÍTULO I

Antecedentes Americanos

El origen de la Suprema Corte Americana. — Rápido afianzamiento de su institución. — El enorme influjo de sus fallos en el perfeccionamiento institucional de la república. — El prestigio de sus grandes jueces. — Características del funcionamiento de la Corte. 23

CAPÍTULO II

La Justicia pre-constitucional

El periodo colonial. — La audiencia de Buenos Aires hasta 1810. — Su continuación con funcionarios criollos hasta la reglamentación de 1812. — Las constituciones subsiguientes y la organización del Poder Judicial..... 37

CAPÍTULO III

El interregno de la Confederación

El organismo judicial creado por la Constitución de 1853 — Composición de la Corte — Nombramiento de los primeros titulares — Dificultades para instalar el tribunal — Su caducidad al producirse la reforma de 1860..... 47

CAPÍTULO IV

La organización definitiva

Reforma constitucional de 1860.—Discusión en la Convención preliminar de Buenos Aires acerca del carácter de la Corte.—Sarmiento propicia el sistema ambulante de los Estados Unidos.—La Convención nacional no acepta la innovación.—Ley orgánica de la Justicia Federal.—Nombramiento de los primeros ministros.—La facultad del Ejecutivo para nombrar directamente Presidente de la Corte.—Los doctores FRANCISCO DE LAS CARRERAS, SALVADOR MARÍA DEL CARRIL, JOSÉ BARROS PAZOS, FRANCISCO DELGADO Y FRANCISCO PICO.—Antecedentes y prestigios de los nombrados.—El Presidente Mitre y la organización judicial.....

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO V

1862 - 1865

La Corte inicia sus tareas.—Su primitiva instalación.—Las leyes de 14 de septiembre de 1863.—Reglamento para el orden interno.—El primer fallo: un caso de recurso extraordinario.—La Corte no puede hacer declaraciones generales.—Una denuncia de plagio.—Las facultades judiciales del P. E.—Causas de almirantazgo.—Los poderes nacionales y la jurisdicción en materia de imprenta.—*Jefe de Policía v. Manuel G. Argerich*.—Procedimiento para el pase de bulas pontificias.—Las facultades de los delegados apostólicos.—La inmunidad de los congresales.—*Senador Martín Piñero v. Coronel Calvete*.—Demandas contra la Nación.—Nombramiento del doctor JOSÉ BENJAMÍN GOROSTIAGA.—Incompetencia de la Corte en materia de elecciones.—Las Aduanas interiores.—Características de los fallos de esta primera época.....

CAPÍTULO VI

1866 - 1870

Los abusos cometidos por las autoridades de una provincia contra un extranjero pueden determinar la intervención de los poderes nacionales.—*Manuel Aguilar v. Provincia de Corrientes*.—La Jus-

400282



61060 1

ticia Federal no es competente en materia criminal por razón de la nacionalidad de los interesados.—De nuevo los «delitos de imprenta».—*Procurador fiscal v. D. W. Laforest*.—La libertad individual y las facultades del P. E. bajo el estado de sitio.—El ejercicio de la acción pública.—La rebelión de Cuyo en 1867.—Los sucesos de Córdoba en el mismo año.—Prisión del juez federal.—El doctor BENITO CARRASCO es nombrado Ministro de la Corte.—Los derechos garantidos por la Constitución.—El respeto a los jueces.—Entra en vigencia el Código Civil.—Los delitos electorales.—Nombramiento del doctor MARCELINO UGARTE.—La Corte y el doctor Rawson.....

115

CAPÍTULO VII

1871 - 1875

Las instituciones expuestas todavía a las contingencias de la política—Jurisdicción de la Corte cuando una provincia es demandada por un particular—*Chanfreau v. Prov. de Corrientes*—Primer caso de disidencia entre los miembros del Tribunal—Facultades concurrentes en materia impositiva—Alcance de los artículos 10 y 11 de la Constitución Nacional—*Anzotegui v. Tedín*—De nuevo el doctor JOSÉ BENJAMÍN GOROSTIAGA en la Corte—Otra vez los «delitos de imprenta».—Nueva faz de la cuestión—El ejercicio del sub-patronato eclesiástico—Los bienes de las corporaciones religiosas—Facultad de las Legislaturas Provinciales para declarar el estado de sitio—La «ley de sospechosos» dictada en San Juan—*Zavalla v. Astorga*—Nombramiento del doctor JOSÉ DOMINGUEZ—Falta de jurisdicción de los Tribunales Federales para juzgar un caso de atentado contra el Presidente de la República—Los privilegios parlamentarios; sus límites y los poderes de la Justicia Federal para procesar a un legislador—El caso del Senador Oroño—La actuación del Presidente Sarmiento—Participación de los Jueces Federales en política—Recusación del Juez Molina de la Rioja—Las autoridades de provincia no pueden ser juzgadas por los Jueces de Sección—*Rodríguez v. Gallino*—La revolución de 1874 ante la Justicia—El carácter militar de sus autores y la competencia de los Tribunales Federales para juzgarlos—Concepto de la ley marcial—La fuga del General Arredondo—Efectos de una ley de amnistia sobre un proceso en tramitación.....

149

CAPÍTULO VIII

1876 - 1880

El doctor CARLOS TEJEDOR es nombrado Procurador General en reemplazo del doctor Francisco Pico.—Los Bancos de emisión.—Las leyes de provincia al respecto.—*Banco de Londres y Río de La Plata v. Provincia de Santa Fe*.—Muerte del ministro doctor

Delgado y nombramiento del doctor SATURNINO M. LASPIUR.— Los establecimientos nacionales en las provincias y la facultad impositiva de éstas.— Las relaciones entre los cónsules extranjeros y sus súbditos.— Incompetencia de los Tribunales Federales para conocer en un conflicto sobre el particular.— La fundación del Banco Nacional.— Alcance del inciso 5º del artículo 67 de la Constitución Nacional.— Los pagos hechos con moneda proscripta de la circulación legal.— Concepto de las antiguas «encomiendas».— *Provincia de Jujuy v. Fernando Campero*.— El impuesto provincial de guías.— Motivos de recusación de un Juez.— Los procesos contra Ricardo López Jordán.— La muerte del General Urquiza.— La facultad de las Cámaras del Congreso para arrestar.— Concepto del *habeas corpus*.— ¿Qué se entiende por privación de la libertad?— Retiro del doctor del Carril y nombramiento del doctor ONÉSIMO LEGUIZAMÓN.— Con la muerte del doctor Barros Pazos y la designación del doctor ULADISLAO FRIAS, la Corte resulta ya absolutamente renovada.— Consideraciones oportunas.— *El Obispo de Cuyo v. Gobierno de San Juan*.— Incompetencia de la Corte Suprema.— La influencia gubernativa en las elecciones.— ¿Es posible la tentativa en el delito de rebelión?— Nombramiento del doctor EDUARDO COSTA... 198

CAPÍTULO IX

1881 - 1890

La época de las expropiaciones.— Consecuencias de la capitalización de Buenos Aires.— El recurso extraordinario.— Concepto de la división de poderes.— Las cuestiones políticas han sido ajenas a la actividad de la Corte.— El impuesto a las sucesiones es inconstitucional.— Nombramiento del doctor MANUEL D. PIZARRO.— Los jueces provinciales en sus relaciones con la Justicia Nacional.— El doctor FEDERICO IBARGUREN es nombrado para reemplazar al doctor Laspiur.— El derecho de declinar la jurisdicción.— Las facultades judiciales del Senado Nacional.— La jurisdicción originaria de la Corte.— El caso *Acevedo* y el caso *Sojo*.— Los dos fallos de la mayoría y las disidencias de los doctores Ibarguren y de la Torre.— El Banco Nacional no era una dependencia del Gobierno.— Nombramiento del doctor CALIXTO S. DE LA TORRE.— La detención de ciudadanos en día de elecciones.— La prisión del Comandante *Acevedo* y su demanda por daños y perjuicios contra el Jefe de Policía que ejecutó la orden emanada de la Cámara de Diputados.— Retiro del doctor Gorostiaga y nombramiento del doctor BENJAMÍN VICTORICA.— El doctor SALUSTIANO J. ZAVALÍA reemplaza al doctor Domínguez.— Los fueros eclesiásticos.— Apertura de la Avenida de Mayo.— Concepto de la expropiación.— Alcance de la ley de 31 de octubre de 1884.— La disidencia del doctor Zavalia.— Nombramiento del doctor LUIS V. VARELA.— Las causas de menor cuantía y la jurisdicción federal.— El doctor ABEL BAZÁN es nombrado para reemplazar al doctor Frias..... 223

CAPÍTULO X

1891 - 1895

Después de treinta años de existencia, la Corte no tiene en la vida institucional el rol preponderante de la Corte Americana. — El santo temor de la política. — Prisión del senador nacional General Rufino Ortega. — Extensión de la inmunidad parlamentaria. — El doctor LUIS SAENZ PEÑA reemplaza al doctor Ibarguren. — La revolución contra el Presidente de Chile doctor Balmaceda. — Sublevación de los tripulantes del *Pilcomayo* en aguas argentinas. — El derecho de asilo y la gestión del Ministro chileno para obtener la entrega de aquéllos. — La personería de un Ministro extranjero para litigar ante los tribunales argentinos en cuestiones de derecho común. — El doctor ANTONIO E. MALAVER es nombrado Procurador General. — Dos años después es reemplazado por el doctor SABINIANO KIER. — Nombramiento del doctor BENJAMÍN PAZ. — Las facultades del P. E. durante el estado de sitio. — La jurisdicción ordinaria y la aplicación de las leyes del Congreso relativas al Gobierno Municipal de la Capital. — La validez del nombramiento del Juez Federal doctor Lalanne demandada ante la Corte. — Nombramiento de los doctores OCTAVIO BUNGE y JUAN E. TORRENT. — La jurisdicción para juzgar a un militar que da muerte a un preso civil que intenta evadirse. — La constitucionalidad de la ley de matrimonio civil. — Enjuiciamiento del cura de la Punilla por celebrar matrimonios sin la intervención del oficial público. — La facultad de intervenir una provincia y la jurisdicción de la Corte. — Los casos de Santa Fe y San Luis. — Concepto del derecho de revolución. — El precedente de Pavón. — Demanda sobre nulidad de los actos de los interventores. — La notable disidencia del doctor Varela. — La seducción de tropas con fines revolucionarios. — Los sucesos de 1893, Sublevación de la Escuadra. — El proceso del coronel Espina. — Famosa cuestión de competencia entre la Justicia Nacional y los Tribunales Militares. — Prisión del senador nacional Leandro N. Alem en el Rosario. — Los interventores nacionales no representan a la provincia intervenida. — Verdadero carácter y alcance de sus funciones. — Las demandas contra el interventor en Buenos Aires. — Casos en que los Ministros extranjeros se someten a la jurisdicción de los tribunales argentinos. — Alcance de la palabra *vecinos* empleada en el artículo 100 de la Constitución.....

271

CAPÍTULO XI

1896 - 1902

La Corte adquiere su perfil definitivo. — La facultad del Congreso para eximir a las empresas ferroviarias del pago de impuestos provinciales. — Alcance del inciso 16 del artículo 67 de la Consti-

tución. — El caso *F. C. Central Argentino v. Prov. de Santa Fe*, antecedente precioso del arduo debate jurídico posterior. — La constitucionalidad de los artículos 187 y 188 del Código de Comercio. — La fijación de plazo para el transporte no compromete la garantía constitucional relativa al ejercicio de la industria. — La competencia federal y los *negocios particulares* de los cónsules extranjeros. — Alcance del artículo 2º inciso 3º de la Ley Nº 48. — La primacía de la Justicia Federal para conocer del proceso en caso de la comisión de dos delitos de fuero distinto. — El asesinato del diputado nacional Pedro García. — Incompetencia de la Justicia Federal para entender en el proceso. — Nombramiento del doctor ENRIQUE H. MARTÍNEZ. — La inamovilidad de los jueces y la jurisdicción originaria de la Corte. — El Procurador General insinúa su opinión contraria a la jurisprudencia relativa a los «delitos de imprenta». — Improcedencia de un embargo trabado por un Juez de Paz a requerimiento directo de un Juez extranjero. — Alcance de la venia legislativa para demandar a la Nación. — Nombramiento del doctor NICANOR GONZÁLEZ DEL SOLAR. — El doctor MAURICIO P. DARACT reemplaza al doctor Torrent. — Incompetencia de la Justicia Federal para entender en una cuestión proveniente de una resolución del Presidente de la República en su carácter de funcionario local. — La ciudadanía de una persona nacida en el extranjero de padre naturalizado argentino..... 321

CAPÍTULO XII

1903 - 1910

Con la creación de las Camaras Federales disminuye considerablemente la tarea de la Corte. — Nombramiento del doctor ANTONIO BERMEJO. — Cuestiones relacionadas con la facultad de las provincias para crear impuestos que gravan el comercio interprovincial absorben una gran parte de la actividad de la Corte. — La ley de la Provincia de Tucumán de 14 de junio de 1902 creando un impuesto adicional sobre la producción de azúcar a base de un prorrato, es contraria a la Constitución. — No es repugnante a la Constitución la Ley Nº 4097 represiva de los juegos de azar. — Alcance de las disposiciones penales de la Ley Electoral. — Los procesos a los «notables» de 1904. — El impuesto a las herencias. — Modificación de la jurisprudencia de la Corte. — El impuesto de guías de la Provincia de Buenos Aires. — La Corte declara que es inconstitucional. — Otros casos análogos de leyes de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. — Nombramiento del doctor CORNELIO MOYANO GACITUA. — El precepto de la Constitución de Santiago del Estero que niega la excarcelación bajo fianza a los reos del delito de rebelión, es contrario al artículo 18 de la Constitución Nacional. — En una nueva demanda sobre la facultad del Congreso para exonerar de impuestos municipales a las empresas ferroviarias, la Corte

concreta su interpretación constitucional en palabras que, por lo claras e interversables, pudieron creerse definitivas. -- Concepto con que se dictó la *Ley Mitre* N° 5315. -- El régimen de la misma. -- Afianzamiento de una política francamente orientada en el sentido de fomentar la industria ferroviaria. -- Cuando percibe impuestos ¿obra el Gobierno Nacional como persona jurídica o como poder público? -- El doctor JULIO BOTET es nombrado Procurador General. -- Verdadera situación de los militares en retiro. -- El caso del Teniente de Navío Lauro Lagos. -- Todo lo que concierne a un cónsul extranjero es de la competencia federal; pero si injuria por la prensa es la justicia local la competente para juzgarlo. -- Alcance de la disposición legal que exceptúa del servicio militar a los hijos de madre viuda. -- El impuesto de sellos y la exoneración que consagra la ley 5315. -- Fundamentos que tuvo la Corte para interpretar el artículo 8° de la Ley Mitre en contra de sus constantes pronunciamientos anteriores.....

347

CAPÍTULO XIII

1911 - 1919

Nombramiento de los doctores DÁMASO E. PALACIO y LUCAS LÓPEZ CABANILLAS. -- La Ley N° 7029; no es contraria a la Constitución. -- La jurisdicción del Paraguay sobre los territorios del Sur del Pilcomayo. -- La reclamación de *Madame Lynch*. -- La inmunidad legislativa y las facultades disciplinarias de un tribunal de justicia. -- Los privilegios de un legislador provincial no se extienden fuera de la provincia. -- El proceso contra el senador mendocino Ezequiel Tabanera. -- Se acentúa la interpretación de la ley 5315 en contra de la exoneración a las empresas de los impuestos municipales. -- La Corte recoge y refuta los argumentos hechos en contra de su nueva jurisprudencia. -- Nombramiento del doctor JOSÉ FIGUEROA ALCORTA. -- El doctor JOSÉ NICOLÁS MATIENZO es nombrado Procurador General. -- Otro aspecto de la cuestión relacionada con los delitos de imprenta. -- El caso *Suborido v. Kaiser*. -- El proceso de *La Bandera Roja*. -- El Procurador General sostiene la competencia federal en los casos en que se incita por la prensa a la destrucción de las instituciones. -- Su interpretación del artículo 32 de la Constitución. -- Los poderes de policía de las autoridades de la Nación y los derechos que confiere la ley civil a los propietarios ribereños. -- Nombramiento del doctor RAMÓN MENDEZ...

381